



CÁMARA DE DIPUTADOS  
LXIII LEGISLATURA



DIRECCIÓN GENERAL  
DE SERVICIOS DE  
DOCUMENTACIÓN,  
INFORMACIÓN  
Y ANÁLISIS

## **ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS REFORMAS DE LAS CONSTITUCIONES LOCALES**

*De Morelos a Zacatecas*

*Noviembre de 2016 a Noviembre 2017*

*(Segunda parte)*

## **COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS**

Sen. Oscar Román Rosas González

Presidente

Dip. María Esther Guadalupe Camargo Félix

Dip. Luz Argelia Paniagua Figueroa

Sen. Juan Carlos Romero Hicks

Sen. Adolfo Romero Lainas

Integrantes

## **SECRETARÍA GENERAL**

Mtro. Mauricio Farah Gebara

Secretario General

## **SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS**

Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas

Secretario

## **DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS**

Lic. José María Hernández Vallejo

Director

## **DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS**

Mtra. Avelina Morales Robles

Directora

## **SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE POLÍTICA INTERIOR**

Mtra. Claudia Gamboa Montejano

Subdirectora

Coautora / Responsable

Lic. Arturo Ayala Cordero

Asistente de Investigación

Coautor

Lic. Fidias Viveros Gascón

Auxiliar de Investigación

Coautor

**SAPI-ISS-09-18**

**Mayo, 2018**

**ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS REFORMAS DE LAS CONSTITUCIONES LOCALES**  
*De Morelos a Zacatecas*  
*Noviembre de 2016 a Noviembre 2017*  
*(Segunda parte)*

**ÍNDICE**

	Pág.
<b>INTRODUCCIÓN</b>	2
<b>RESUMEN EJECUTIVO</b>	3
<b>1.- Cuadros de los aspectos más relevantes reformados artículo por artículo de las Constituciones Estatales.</b>	5
Morelos	5
Estado de México	8
Nayarit	10
Nuevo León	11
Oaxaca	14
Puebla	15
Querétaro	18
Quintana Roo	19
San Luís Potosí	24
Sinaloa	26
Sonora	28
Tabasco	31
Tamaulipas	34
Veracruz	36
Yucatán	37
Zacatecas	38
<b>2.- Cuadros comparativos con el texto anterior y el texto vigente de las Constituciones locales.</b>	41
<b>3.- Materias relevantes abordadas en las Reformas de las Constituciones locales.</b>	372
<b>3.1</b> Temas más recurrentes abordados por las Reformas constitucionales a nivel local.	
<b>3.2</b> Temas destacados abordados por algunas Constituciones locales.	
<b>FUENTES DE INFORMACIÓN</b>	374

## **INTRODUCCIÓN**

Este instrumento de apoyo legislativo se integra con las principales reformas introducidas en las Constituciones locales durante el periodo de un año, indicando comparativamente las materias en las que incidieron las transformaciones de sus preceptos constitucionales y destacando aquellas que resultan de especial interés por su particularidad.

Debido a la amplitud de la información el documento se divide en dos partes, esta corresponde a la segunda parte, se presentan los cambios a los preceptos constitucionales de los Estados de Morelos a Zacatecas (Morelos, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) particularmente cabe señalar que la Constitución de Tlaxcala, no fue incluida en este instrumento, debido a que no se llevaron a cabo reformas en el periodo de noviembre de 2016 a noviembre de 2017.

En las secciones de este estudio se pueden identificar cuáles han sido las materias introducidas y/o reformadas en los textos Constitucionales de las entidades federativas y diversos rubros de especial relevancia dentro del ámbito local que constituyen preceptos propios que enriquecen sus respectivos textos.

## RESUMEN EJECUTIVO

En este estudio se presentan las principales adiciones y reformas introducidas por los legisladores locales, en los respectivos textos constitucionales de los Estados de: Morelos, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, a través de las siguientes secciones:

- Resumen y datos más relevantes abordados en cada artículo reformado de las Constituciones locales.
- Cuadros comparativos del texto anterior y el texto vigente, de los ordenamientos señalados.
- Ubicación de los temas más recurrentes en las reformas analizadas, así como los más relevantes.

Por medio de este instrumento se muestra un panorama general de los cambios constitucionales a nivel local generados en el tiempo aproximado de año, noviembre de 2016 a noviembre 2017, respondiendo con ello tanto a los cambios de la Constitución Federal, como a las necesidades propias de cada entidad.

Las materias más recurrentes en las reformas constitucionales corresponden a diversas materias, entre ellas destacan: la paridad de género en diversos ámbitos; el derecho de acceso a la información pública; la adición de preceptos relativos a la vigilancia de la actuación de servidores públicos y particulares que tengan bajo su responsabilidad el manejo de recursos públicos; la institucionalización de fiscalías especializadas en materia de combate a la corrupción; la creación de instancias destinadas a dirimir conflictos de carácter administrativo; y la obligatoriedad de los servidores públicos de presentar ante las instancias competentes las correspondientes declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés.

**COMPARATIVE ANALYSIS OF THE AMENDMENTS MADE TO THE LOCAL  
CONSTITUTIONS IN ALPHABETIC ORDER FROM MORELOS TO ZACATECAS**

***(November 2016 through November 2017) (Second part)***

Contents:

This comparative study offers the main amendments and additions made by local legislators to their respective constitutional texts. The States here considered are: Morelos, Estate of Mexico, Nayarit, Nuevo Leon, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatan and Zacatecas. The study is divided into the following sections:

- Abstract and relevant data of each amended article of local Constitutions.
- Comparative frameworks with the previous texts and the actual texts, of the mentioned laws.
- The most frequent topics in the analyzed amendments can be found, as well as the most relevant.

This instrument allows us to have a general view –of approximately one year, from November 2016 through November 2017– of the local constitutions’ amendments which are the answer to the changes the Federal Constitution has had, as well as to the own needs of each entity.

The most recurrent matters approached in the constitutional amendments correspond to several topics; from these some of the outstanding ones are: gender parity in various fields; right to public information; the addition of precepts related to the monitoring public servants and individuals who manage public resources; institutionalizing the special prosecutors’ offices related to the fight against corruption matter; creation of instances meant to resolve administrative conflicts; and the obligation of public servants to submit before competent authorities their corresponding patrimonial, fiscal and interest declarations.

## 1. CUADROS DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES REFORMADOS ARTÍCULO POR ARTÍCULO DE LAS CONSTITUCIONES ESTATALES.

Los siguientes cuadros contienen la referencia general de las materias reformadas, en los respectivos textos de los artículos constitucionales de los estados de: Morelos, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, llevadas a cabo en el periodo de noviembre de 2016 a noviembre de 2017.

<b>REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE MORELOS</b>	
<b>UBICACIÓN DE LAS REFORMAS</b>	<b>ASPECTOS REFORMADOS</b>
<b>ARTÍCULO 1</b>	- Adición del precepto constitucional que señala que todo poder público dimana del Pueblo y se instituye para su beneficio.
<b>ARTÍCULO 1 BIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Derecho a la protección jurídica de la vida desde la concepción.</li> <li>- Protección de los derechos humanos de todos los habitantes.</li> <li>- Prohibición de toda forma de discriminación, que atente en contra de la dignidad humana, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.</li> <li>- Manifestación libre de las ideas y derecho de réplica.</li> <li>- Garantía de acceso de toda persona a una alimentación suficiente y de calidad.</li> <li>- Derecho humano de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua, para consumo personal y doméstico.</li> <li>- Derecho de toda persona a la cultura física y a la práctica del deporte.</li> <li>- Derecho humano a la protección, conservación, restauración y sustentabilidad de los recursos naturales en el Estado.</li> <li>- Derecho de acceder a la sociedad de la información y conocimiento.</li> <li>- Derecho a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios culturales.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 2</b>	- Principios y bases para el ejercicio del derecho de acceso a la información.
<b>ARTÍCULO 2 BIS</b>	- Reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas en el Estado.

	- Garantía de que cualquier forma de registro civil, pueda ser redactada y expedida en lenguas indígenas.
<b>ARTICULO 2 TER</b>	- Garantía de políticas y programas para el desarrollo rural integral. - Reconocimiento del turismo como base fundamental y prioritaria del desarrollo estatal.
<b>ARTICULO 14</b>	- Derecho de los ciudadanos de ser votados en los procesos electorales y de participación ciudadana.
<b>ARTICULO 18</b>	- Rehabilitación de la calidad de ciudadano del estado.
<b>ARTÍCULO 19</b>	- Igualdad de derechos en relación al género masculino y al femenino. - Protección de la organización y desarrollo armónico de la familia.
<b>ARTICULO 19 BIS</b>	- Derogación de las disposiciones relativas a los medios de participación ciudadana y del Consejo Estatal de Participación Ciudadana.
<b>ARTICULO 22</b>	- Residencia y cambio de residencia de los poderes públicos del Estado.
<b>ARTICULO 23</b>	- Deber de los partidos políticos y de los candidatos independientes de postular planillas con candidaturas, alternando los géneros. - Actualización de la medida para el financiamiento público de los partidos políticos con la Unidad de Medida y Actualización. - Actualización constitucional de Organismos Público Electoral de Morelos por Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
<b>ARTICULO 24</b>	- Actualización constitucional de “votación valida emitida” por “votación válida emitida para diputados”.
<b>ARTICULO 25</b>	- Requisitos constitucionales para poder ser electo Diputado propietario o suplente.
<b>ARTICULO 26</b>	- Servidores públicos inelegibles para poder ser Diputados.
<b>ARTICULO 32</b>	- Fecha límite para la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de egresos del Estado y los Municipios.
<b>ARTICULO 40</b>	- Disposiciones constitucionales relativas a la creación de nuevos municipios. - Facultad del Congreso de legislar en lo relativo a la Mejora Regulatoria y de la creación del Sistema de Mejora Regulatoria. - Facultad del Congreso de examinar los informes sobre la Cuenta Pública. - Actualización constitucional de “Organismo Público Electoral de Morelos” por “Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana”.
<b>ARTICULO 42</b>	- Deber de incluir la estimación del impacto presupuestario de las iniciativas presentadas en el



	Congreso.
<b>ARTICULO 43</b>	- Deber de incluir la estimación del impacto presupuestario en la elaboración de dictámenes por las Comisiones encargadas del estudio de iniciativas.
<b>ARTICULO 58</b>	- Requisitos para poder ser electo Gobernador del Estado.
<b>ARTICULO 60</b>	- Servidores públicos inelegibles para poder ser electos como Gobernador del Estado.
<b>ARTICULO 70</b>	- Facultad del Gobernador de nombrar al Secretario de la Contraloría, con la ratificación del Congreso. - Obligación del Gobernador de remitir al Congreso la Cuenta Pública Anual. - Actualización constitucional de “Organismo Público Electoral” por “Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana”.
<b>ARTICULO 75</b>	- Requisitos constitucionales para poder Secretario de la Contraloría del Estado.
<b>ARTICULO 79-B</b>	- Integración de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
<b>ARTICULO 81</b>	- Principios constitucionales para llevar a cabo el ejercicio de la administración de los ingresos y egresos del Estado.
<b>ARTICULO 82</b>	- Consideración de la Unidad de Medida y Actualización para el pago de obligaciones.
<b>ARTICULO 84</b>	- Competencia de la Entidad Superior de la Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado.
<b>ARTICULO 89</b>	- Ampliación del periodo del cargo de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
<b>ARTÍCULO 109-BIS</b>	- Ampliación del periodo del cargo de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
<b>ARTÍCULO 109-TER</b>	- Ampliación del periodo del cargo del Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes.
<b>ARTICULO 112</b>	- Modificación de las fechas de inicio y conclusión de los periodos de los cargos de los Ayuntamientos.
<b>ARTÍCULO 114-BIS</b>	- Incorporación dentro de las competencias de los servicios públicos a cargo de los Ayuntamientos, el relativo al Cuerpo de Bomberos.
<b>ARTICULO 115</b>	- Principios constitucionales para la administración de la Hacienda Municipal.
<b>ARTICULO 117</b>	- Requisitos de elegibilidad para poder ser Presidente Municipal, síndico o ayudante municipal.
<b>ARTICULO 119</b>	- Deber de realizar en escenarios presenciales de las discusiones para la formulación de la política pública de participación democrática.
<b>ARTICULO 120</b>	- Disposiciones constitucionales relativas al Matrimonio. - Competencia exclusiva del Registro Civil, respecto de la celebración, registro y certificación de hechos y actos constitutivos, modificativos o extintivos del estado civil de las personas.

	- Derecho a la identidad de las personas.
<b>ARTICULO 121</b>	- Garantía del Estado de educación de carácter inclusiva impartida en la entidad.
<b>ARTICULO 132 BIS</b>	- Garantía de acceso a la inscripción de las propiedades privadas en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales de Morelos.
<b>ARTICULO 134</b>	- Integración del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
<b>ARTICULO 136</b>	- Actualización constitucional de “Organismo Público Electoral de Morelos” por “Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana”.

<b>REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE MÉXICO</b>	
<b>UBICACIÓN DE LAS REFORMAS</b>	<b>ASPECTOS REFORMADOS</b>
<b>ARTÍCULO 5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Derecho al libre acceso a la información plural y oportuna.</li> <li>- Derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.</li> <li>- Inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio.</li> <li>- Prohibición de establecer a través de la Ley o autoridad, la censura o coartar la libertad de difusión.</li> <li>- Organización del Sistema Penitenciario por el Poder Ejecutivo del Estado.</li> <li>- Disposiciones constitucionales relativas al Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 51</b>	- Derecho de iniciar leyes y decretos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
<b>ARTÍCULO 52</b>	- Comparecencia en el Congreso de representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para tratar iniciativas en el ámbito de su competencia.
<b>ARTÍCULO 59</b>	- Participación del Gobernador del Estado, en el Proceso Legislativo a través de la formulación de observaciones a las leyes o decretos.

<b>ARTÍCULO 61</b>	<p>Facultad del Congreso de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprobar los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa.</li> <li>- Expedir la Ley que instituya el Tribunal de Justicia Administrativa.</li> <li>- Recibir la protesta de ley de los Magistrados de Justicia Administrativa.</li> <li>- Resolver sobre las licencias y solicitudes de destitución de los Magistrados de Justicia Administrativa.</li> <li>- Fiscalizar las acciones del Estado y Municipios en materia de fondos, recursos estatales y deuda públicas.</li> <li>- Revisar, por conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, las cuentas y actos relativos a la aplicación de fondos públicos del Estado y de los Municipios.</li> <li>- Designar a los titulares de los órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos.</li> <li>- Objetar el nombramiento del Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 77</b>	<p>Facultad del Gobernador de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formular observaciones a leyes o decretos aprobados por la Legislatura.</li> <li>- Nombrar y solicitar la destitución de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.</li> <li>- Conceder indulto necesario y por gracia.</li> <li>- Fecha límite para la presentación de la Cuenta Pública por el Gobernador del Estado.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 79</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento para los secretarios de despacho del Poder Ejecutivo.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 80</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Refrendo de los reglamentos, decretos, circulares y acuerdos expedidos por el Gobernador.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 87</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Competencia y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 106</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Competencia del órgano interno de control del Consejo de la Judicatura.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 123</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facultad normativa de los Ayuntamientos en lo relacionado al Sistema Municipal Anticorrupción.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 129</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organismos competentes para la vigilancia del cumplimiento de lo relativo a los recursos públicos.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 130</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obligación de los servidores públicos de presentar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanciones aplicables a servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado.</li> <li>- Competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.</li> <li>- Responsabilidad objetiva y directa del Estado y Municipios por daños causados a los bienes y derechos de los particulares.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 130 BIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Competencia del Sistema Estatal Anticorrupción.</li> <li>- Integración y competencia del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.</li> <li>- Integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.</li> <li>- Competencia y bases de funcionamiento del Sistema Municipal Anticorrupción.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 131</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización constitucional de “Tribunal de lo Contencioso Administrativo” por “Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México”.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 133</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización constitucional de “Tribunal de lo Contencioso Administrativo” por “Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México”.</li> <li>- Votación de los legisladores requerida, para la destitución de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 134</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Competencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 139 BIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Creación de registros estatales y municipales que incluyan los trámites y servicios de la Administración Pública.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 147</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Retribución adecuada e irrenunciable de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, y de los servidores públicos de los organismos constitucionales autónomos.</li> </ul>

<b>REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE NAYARIT</b>	
<b>UBICACIÓN DE LAS REFORMAS</b>	<b>ASPECTOS REFORMADOS</b>
<b>ARTÍCULO 7</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prohibición de toda forma de discriminación, que atente en contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interpretación de las normas relativas a los derechos humanos, favoreciendo a las personas en su protección más amplia.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 47</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facultad del Congreso de declarar que ha lugar a formación de causa contra los servidores</li> </ul>

	públicos con inmunidad procesal.
<b>ARTÍCULO 92</b>	- autonomía, la personalidad jurídica y el patrimonio del Ministerio Público.
<b>ARTÍCULO 93</b>	- Ampliación del período del cargo del Fiscal General, de siete a nueve años.
<b>ARTÍCULO 94</b>	- Procesos y requisitos para la designación del Fiscal General del Estado. - Informe anual de actividades del Fiscal General del Estado.
<b>ARTÍCULO 95</b>	- Requisitos constitucionales para poder ser designado Fiscal General del Estado.
<b>ARTÍCULO 100</b>	- Fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y en combate a la corrupción. - Proceso de nombramiento y remoción de los titulares de las fiscalías especializadas.
<b>ARTÍCULO 125</b>	- Requisitos constitucional para proceder penalmente en contra de los Magistrados de los Tribunales locales y los Jueces de Primera Instancia, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo. - Prohibición constitucional de reconvenir, detener, multar o juzgar a los Diputados al Congreso del Estado, por las opiniones que manifiesten en el ejercicio de su encargo.

<b>REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN</b>	
<b>UBICACIÓN DE LAS REFORMAS</b>	<b>ASPECTOS REFORMADOS</b>
<b>ARTÍCULO 1</b>	- Reconocimiento constitucional de los Derechos Humanos y de las garantías para su protección en el Estado. - Interpretación de los Derechos Humanos favoreciendo en todo tiempo a las personas en su protección más amplia. - Obligaciones de las autoridades respecto de los derechos humanos.
<b>ARTÍCULO 3</b>	- Derecho a la movilidad, a ciudades sustentables y al transporte público de calidad.
<b>ARTÍCULO 20</b>	- Pago de daños y perjuicios por responsabilidades administrativas. - Sanciones aplicables a servidores públicos y particulares por la comisión de delitos o faltas administrativas. - Imprescriptibilidad de la acción de extinción de dominio, en caso de bienes que sean producto de un hecho ilícito.

<b>ARTICULO 38</b>	- Supuestos para la suspensión de la calidad de ciudadano nuevoleonés.
<b>ARTICULO 48</b>	- Servidores públicos inelegibles para poder ser electos Diputados.
<b>ARTICULO 53</b>	- Inviolabilidad de los Diputados por las opiniones manifestadas en el desempeño de su cargo.
<b>ARTÍCULO 62</b>	- Comparecencias de determinados servidores públicos ante el Congreso para informar sobre asuntos de su competencia.
<b>ARTICULO 63</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso de elección del Auditor General del Estado por los integrantes del Congreso.</li> <li>- Proceso de designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos constitucionalmente autónomos.</li> </ul> Faculta del Congreso de : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recibir la protesta de ley de los magistrados de las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa, Fiscal General de Justicia, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y Fiscal Especializado en Delitos Electorales.</li> <li>- Aceptar las renunciaciones del Fiscal General de Justicia, del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Fiscal Especializado en Delitos Electorales y del Auditor General del Estado.</li> <li>- Aprobar las propuestas al cargo, del Titular del Órgano Interno de Control Estatal, del Secretario de Finanzas, y del Tesorero General del Estado.</li> <li>- Autorizar la contratación de obligaciones o empréstitos, cuando afecten ingresos o bienes del Estado o de los Municipios.</li> <li>- Elegir al Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas, del Tribunal de Justicia Administrativa.</li> <li>- Legislar en materia de hechos de corrupción de servidores públicos y particulares.</li> <li>- Legislar respecto de la integración y funcionamiento de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.</li> </ul>
<b>ARTICULO 82</b>	- Servidores públicos inelegibles para poder ser Gobernador del Estado.
<b>ARTICULO 85</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facultad del Gobernador de contratar obligaciones o empréstitos, previo consenso del Congreso.</li> <li>- Obligación del Gobernador de combatir la corrupción e impulsar y proteger la integridad pública y la transparencia en el ejercicio del poder.</li> </ul>
<b>ARTICULO 87</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisitos constitucionales para poder ser nombrado Fiscal General, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y Fiscal Especializado en Delitos Electorales.</li> <li>- Proceso de nombramiento del Fiscal General de Justicia del Estado.</li> </ul>

	- Procedimiento para la elección del Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
<b>ARTICULO 95</b>	- Actualización constitucional de “Congreso” por “Congreso del Estado”.
<b>ARTICULO 98</b>	- Servidores públicos con impedimento para poder ser Magistrados del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal de Justicia Administrativa.
<b>ARTICULO 105</b>	- Obligación para determinados servidores públicos de presentar su declaración patrimonial, de conflicto de intereses y declaración fiscal.
<b>ARTICULO 107</b>	- Remisión al Código Penal para efectos de sanciones por hechos de corrupción de servidores públicos o particulares. - Sanciones aplicables a servidores públicos por faltas administrativas graves o hechos de corrupción. - Imposición de sanciones a particulares que intervengan en hechos de corrupción o actos vinculados con faltas administrativas graves.
<b>ARTÍCULO 109</b>	- Bases constitucionales relativas al objeto del Sistema Estatal Anticorrupción. - Integración del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. - Designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
<b>ARTÍCULO 110</b>	- Servidores públicos sujetos a Juicio Político.
<b>ARTÍCULO 112</b>	- Servidores públicos sujetos a responsabilidad penal por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo.
<b>ARTICULO 114</b>	- Responsabilidad de los servidores públicos que cometan delitos durante el tiempo que se encuentren separados de su cargo.
<b>ARTICULO 116</b>	- Prescripción, no menor a diez años de la responsabilidad por delitos cometidos por servidores públicos, durante el tiempo del encargo.
<b>ARTÍCULO 119</b>	- Facultad de los municipios de contratar obligaciones o empréstitos, previo el cumplimiento de las condiciones constitucionales.
<b>ARTÍCULO 136</b>	- Facultad de la Auditoría Superior del Estado de revisar durante el ejercicio fiscal en curso, a las entidades fiscalizadas constitucionalmente.
<b>ARTÍCULO 137</b>	- Fecha de entrega y contenido del Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública.

<b>REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE OAXACA</b>	
<b>UBICACIÓN DE LAS REFORMAS</b>	<b>ASPECTOS REFORMADOS</b>
<b>ARTÍCULO 35</b>	- Servidores públicos inelegibles para ser electas o electos para cargos de elección popular.
<b>ARTÍCULO 53</b>	- Proceso de aprobación de los proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado.
<b>ARTÍCULO 59</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisitos de elegibilidad de los integrantes de los Consejos Municipales.</li> <li>- Actualización constitucional de “Auditoría Superior del Estado” por “Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca”.</li> <li>- Fecha límite de presentación del Informe de Resultados de la Cuenta Pública.</li> <li>- Proceso de presentación del informe de avance de la Cuenta Pública del Estado, por el Titular del Ejecutivo Estatal.</li> </ul> <p>Facultad del Congreso de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinar y evaluar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.</li> <li>- Autorizar los montos máximos para contraer financiamiento u obligaciones.</li> <li>- Elegir al Fiscal Especializado en Delitos Electorales, al Fiscal Especial en Materia de Combate a la Corrupción y al Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</li> <li>- Requerir la comparecencia de determinados servidores públicos, para que informen en las discusiones y estudio de su ramo o actividades.</li> <li>- Legislar en materia de responsabilidades de los servidores públicos del Estado y Municipios.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 65 BIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización Constitucional de “Auditoría Superior del Estado” por “Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca”.</li> <li>- Atribuciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 79</b>	<p>Facultad del Gobernador de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Designar al comisionado municipal provisional, en los términos y plazos constitucionales.</li> <li>- Contratar financiamientos u obligaciones, previo cumplimiento de los requisitos constitucionales.</li> <li>- Intervenir en la designación del Fiscal General del Estado de Oaxaca.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 80</b>	- Fecha límite de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado.
<b>ARTÍCULO 100</b>	- Proceso de designación de uno de los miembros del Consejo de la Judicatura, como representante ante el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.



<b>ARTÍCULO 113</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentación de la Cuenta Pública Municipal por los Ayuntamientos ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.</li> <li>- Regiduría de Derechos Humanos, en cada Ayuntamiento encargada de la protección, defensa, promoción, estudio, divulgación y vigilancia de los derechos humanos.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 114</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atribución del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de participar en el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.</li> <li>- Competencia del Ministerio Público del Estado.</li> <li>- Proceso para la designación del Fiscal General del Estado de Oaxaca.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 115</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obligación de los servidores públicos de presentar la constancia de haber, declarando impuestos ante las autoridades competentes.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 118</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Derogación de preceptos constitucionales relativos a la declaración de procedencia, para servidores públicos por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 119</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Derogación de preceptos constitucionales relativos a la declaración de procedencia, para servidores públicos por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 120</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización constitucional de "Auditoría Superior del Estado" por "Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca".</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 123</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización relativa a la remisión de los artículos de la propia Constitución.</li> </ul>

<b>REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE PUEBLA</b>	
<b>UBICACIÓN DE LAS REFORMAS</b>	<b>ASPECTOS REFORMADOS</b>
<b>ARTÍCULO 3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Competencia del Instituto Electoral del Estado.</li> <li>- Integración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado.</li> <li>- Incompatibilidades de los consejeros electorales, el Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado.</li> <li>- Obligación de los Partidos políticos de establecer las reglas para garantizar la paridad entre géneros en las candidaturas a integrantes de la Legislatura.</li> <li>- Porcentaje del 3% de la votación válida emitida para que un partido político tenga derecho a registro.</li> <li>- Integración del Tribunal Electoral del Estado.</li> </ul>

<b>ARTÍCULO 4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participación de los partidos políticos nacionales y estatales, en las elecciones del Estado.</li> <li>- Plazos para la celebración de campañas y precampañas electorales en el Estado.</li> <li>- Remisión a la Ley secundaria respecto de las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas y precampañas.</li> <li>- Régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 12</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento del agua.</li> <li>- Garantía de acceso a la información pública.</li> <li>- Principios que rigen el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.</li> <li>- Competencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Puebla.</li> <li>- Organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.</li> <li>- Atención del interés superior de la niñez en todas las medidas concernientes a las niñas, niños y adolescentes.</li> <li>- Erradicación del trabajo infantil y cualquier forma de explotación hacia niñas, niños y adolescentes.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 18</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supuestos constitucionales para la adquisición de la ciudadanía.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 26</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Derecho de protección prioritaria de los integrantes de la familia.</li> <li>- Interés superior de la niñez, en todas las decisiones y actuaciones del Estado.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 27</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obligación de la madre, el padre o del tutor, de inscribir de manera inmediata en el Registro del Estado Civil de las Personas a sus hijas e hijos.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 35</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delimitación del número de diputados de un partido político en la integración de una Legislatura.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 37</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Servidores públicos con impedimento para ser electos diputados.</li> <li>- Reelección de Diputados hasta por cuatro periodos consecutivos.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 50</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Periodos ordinarios de sesiones del Congreso del Estado.</li> </ul>

<b>ARTÍCULO 57</b>	<p>Facultad del Congreso de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorizar la contratación de financiamientos y obligaciones.</li> <li>- Coordinar y evaluar a la Auditoría Superior del Estado.</li> <li>- Dictaminar los informes del resultado de la fiscalización, de los entes sujetos a revisión.</li> <li>- Elegir a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.</li> <li>- Ratificar a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.</li> <li>- Designar al integrante del Comité Consultivo del Consejo de la Judicatura.</li> <li>- Legislar en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.</li> <li>- Legislar respecto del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.</li> <li>- Designar a los titulares de los órganos internos de control, de los organismos constitucionales autónomos.</li> <li>- Ratificar el nombramiento del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo del Estado.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 59</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Derogación de los preceptos relativos al nombramiento de los integrantes de la Comisión Permanente.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 61</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atribución de la Comisión Permanente de recibir protesta de ley de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y del Auditor Superior de Estado.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 79</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facultad del Gobernador de optar por un gobierno de coalición, con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 86</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Competencia e integración del Consejo de la Judicatura.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 90</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organización y facultades del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.</li> <li>- Bases para la formación y actualización de funcionarios y principios que rigen la Carrera Judicial.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 102</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reelección de Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos, para un periodo adicional.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 107</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero de los Municipios.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 113</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atribuciones de la Auditoría Superior del Estado.</li> <li>- Principios de la función de fiscalización.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 114</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facultad del Congreso de revisión de la Cuenta Pública a través de la Auditoría Superior.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 123</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prohibición constitucional de la utilización del trabajo de los menores de quince años.</li> <li>- Jornada máxima de seis horas para los mayores de quince años y menores de dieciséis.</li> </ul>

<b>ARTÍCULO 124</b>	- Obligación de los servidores públicos de presentar su declaración patrimonial y de intereses.
<b>ARTÍCULO 125</b>	- Responsabilidad de los servidores públicos y particulares frente al Estado. - Disposiciones relativas a la Competencia del Tribunal de Justicia Administrativa. - Competencia e integración del Sistema Estatal Anticorrupción. - Comité Coordinador y Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
<b>ARTÍCULO 127</b>	- Reglas para procesar a los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado por la comisión de delitos oficiales.
<b>ARTÍCULO 131</b>	- Remisión a las leyes locales respecto de los delitos o faltas administrativas de los servidores públicos estatales y municipales.
<b>ARTÍCULO 133</b>	- Incompatibilidades de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y Funcionarios del Ministerio Público y Jueces, con cualquier otro cargo, empleo o comisión remunerados.

<b>REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE QUERETARO</b>	
<b>UBICACIÓN DE LAS REFORMAS</b>	<b>ASPECTOS REFORMADOS</b>
<b>ARTÍCULO 17</b>	- Ratificación por la Legislatura Estatal, del nombramiento del Secretario responsable del control interno del Poder Ejecutivo del Estado, hecho por el Gobernador del Estado.
<b>ARTÍCULO 22</b>	- Término para que el Gobernador del Estado rinda ante la Legislatura Estatal, el informe del estado general de la Administración Pública Estatal del último año de ejercicio de su mandato.
<b>ARTICULO 30 BIS</b>	- Incorporación de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción al denominado cuerpo de policía de investigación, bajo el mando y conducción del Ministerio Público.
<b>ARTÍCULO 30 TER</b>	- Designación y remoción del Titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. - Informe anual, ante la Legislatura Estatal, del Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
<b>ARTÍCULO 31</b>	- Principios conforme a los cuales se ejerce la función de fiscalización, por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado. - Atribuciones de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado.
<b>ARTICULO 34</b>	- Funcionamiento, integración y competencia del Tribunal de Justicia Administrativa.

<b>ARTÍCULO 37</b>	- Presentación de los correspondientes informes sobre la situación de la Administración Municipal, por los presidentes municipales, ante la Legislatura del Estado.
<b>ARTÍCULO 37 BIS.</b>	- Determinar quiénes son servidores públicos, para efectos de responsabilidad por actos u omisiones, en que puedan incurrir en el ejercicio de sus funciones.
<b>ARTÍCULO 38</b>	- Sanciones aplicables a servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado.
<b>ARTÍCULO 38 BIS.</b>	- Obligatoriedad para ciertos servidores públicos de presentar su declaración patrimonial y de intereses.
<b>ARTÍCULO 38 TER.</b>	- Bases para la integración, atribuciones y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

<b>REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO</b>	
<b>UBICACIÓN DE LAS REFORMAS</b>	<b>ASPECTOS REFORMADOS</b>
<b>ARTÍCULO 7</b>	- Derogación de preceptos relativos a la resolución de controversias de carácter jurídico mediante la conciliación.
<b>ARTÍCULO 10</b>	- Impulso al desarrollo económico con perspectiva de género por el Estado. - Estabilidad de las finanzas públicas del Estado.
<b>ARTÍCULO 21</b>	- Proceso de designación del órgano interno de control del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.
<b>ARTÍCULO 23</b>	- Determinación constitucional de considerar al enriquecimiento ilícito como un supuesto para la aplicación de las reglas de extinción de dominio.
<b>ARTÍCULO 29</b>	- Utilización de la Unidad de Medida y Actualización para la imposición de multas para jornaleros, obreros o trabajadores.
<b>ARTÍCULO 30</b>	- Inclusión de la confiscación como parte de las penas inusitadas o trascendentales prohibidas.
<b>ARTÍCULO 31</b>	- Actualización constitucional relativa a la derogación del “Capítulo Segundo”
<b>ARTÍCULO 41</b>	- Prerrogativa ciudadana de votar en los mecanismos de participación ciudadana de plebiscito, referéndum y consulta popular. - Prerrogativa ciudadana de iniciar leyes ante el Congreso del Estado.
<b>ARTÍCULO 42</b>	- Deber de los ciudadanos de votar en las elecciones municipales, plebiscito, referéndum, consulta popular y demás mecanismos de participación ciudadana.

<b>ARTÍCULO 49</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disposiciones constitucionales relativas a la competencia del Tribunal Electoral del Estado.</li> <li>- Elección de los titulares de los órganos internos de control del Tribunal Electoral de Quintana Roo y del Instituto Electoral de Quintana Roo, respectivamente.</li> <li>- Actualización constitucional de “Secretario General del Instituto Electoral de Quintana Roo” por “Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Quintana Roo”.</li> <li>- Derecho de los partidos políticos a postular candidatos de forma individual, en coaliciones o a través de candidaturas comunes.</li> <li>- Deber de los partidos político de respetar el principio de paridad de género, en la postulación de candidatos a diputados locales y a integrantes de miembros de los Ayuntamientos.</li> <li>- Utilización de la Unidad de Medida y Actualización para determinar el financiamiento público ordinario de los partidos políticos.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 51 BIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Competencia de los órganos públicos autónomos para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 52</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prohibición de sobre y/o sub-representación en la integración de la Legislatura del Estado.</li> <li>- Facultad del instituto Electoral del Estado de declarar la validez de las elecciones de diputados y de otorgar las constancias a las fórmulas de candidatos que obtengan mayoría de votos.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 52 BIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso constitucional para cubrir las vacantes de Diputados en la Legislatura.</li> <li>- Proceso constitucional para los supuestos de ausencias temporales o definitivas de los Diputados.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 54</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Integración de las listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 56</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Servidores públicos con impedimento para poder ser electos Diputados.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 67</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Administración autónoma del presupuesto del Poder Legislativo.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 68</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Derecho de iniciar leyes de los ciudadanos quintanarroenses.</li> <li>- Derecho del Gobernador del Estado de presentar hasta dos iniciativas de carácter preferente.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 69</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Remisión del proceso legislativo de las iniciativas, al señalado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y en el Reglamento Interior de la Legislatura.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 72</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización constitucional de “Gran Jurado o Colegio Electoral” por “Colegio Electoral”</li> <li>- Actualización constitucional de “Responsabilidad de los funcionarios por delitos oficiales” por “responsabilidad de los servidores públicos”</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 73</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso legislativo de iniciativas de ley o decreto, no aprobadas en los plazos establecidos en la</li> </ul>

	Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura.
<b>ARTÍCULO 75</b>	<p>Facultad de la Legislatura de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legislar respecto de la organización y facultades de la Auditoría Superior del Estado.</li> <li>- Legislar respecto de la integración, atribuciones y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.</li> <li>- Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, así como a los Consejeros Ciudadanos del Consejo de la Judicatura y a los Magistrados.</li> <li>- Legislar con perspectiva de género en todo lo relativo a la Administración Pública, planeación y desarrollo económico y social.</li> <li>- Aprobar los montos de endeudamiento.</li> <li>- Nombrar y remover al Titular de la Auditoría Superior del Estado.</li> <li>- Revisar y fiscalizar la Cuenta Pública.</li> <li>- Designar al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.</li> <li>- Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.</li> <li>- Ratificar al Titular de la Secretaría encargada del Control Interno del Poder Ejecutivo Estatal.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 76</b>	<p>Facultad de la Comisión Permanente de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombrar y remover al Titular de la Auditoría Superior del Estado y de nombrar a los auditores especiales.</li> <li>- Conceder licencias a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.</li> <li>- Designar a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.</li> <li>- Designar y remover a los titulares de los Órganos Interno de Control de los organismos constitucionales autónomos.</li> <li>- Ratificar al Titular de la Secretaría encargada de Control Interno del Poder Ejecutivo Estatal.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 77</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Auditoría Superior del Estado.</li> <li>- Principios constitucionales de la función de fiscalización ejercida por la Auditoría Superior del Estado.</li> <li>- Proceso de elección del Titular de la Auditoría Superior del Estado y de nombramiento de los auditores especiales.</li> </ul>

	- Competencia de la Auditoría Superior del Estado para revisar y fiscalizar la Cuenta Pública de los gobiernos, estatal y municipales.
<b>ARTÍCULO 77-BIS</b>	- Disposiciones constitucionales relativas a la contratación de obligaciones o empréstitos por el Estado y los Municipios.
<b>ARTÍCULO 80</b>	- Requisitos de elegibilidad para poder ser Gobernador del Estado.
<b>ARTÍCULO 90</b>	- Facultad del Gobernador de expedir reglamentos, acuerdos y decretos en el ámbito de su competencia. - Facultad del Gobernador de optar por un Gobierno de Coalición con uno o varios partidos políticos representados en el Congreso del Estado.
<b>ARTÍCULO 91</b>	- Obligación del Gobernador de presentar a la Legislatura la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado.
<b>ARTÍCULO 93</b>	- Corrección constitucional de “decretos promulgados” por “decretos promulgatorios”.
<b>ARTÍCULO 94</b>	- Disposiciones constitucionales relativas al órgano interno de control de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado.
<b>ARTÍCULO 95</b>	- Requisitos constitucionales para poder ser Secretario de Despacho o Director de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal.
<b>ARTÍCULO 96</b>	- Disposiciones constitucionales relativas al funcionamiento del Ministerio Público. - Proceso de designación del Fiscal General del Estado. - Proceso de designación del Titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado.
<b>ARTÍCULO 97</b>	- Reubicación del capítulo y su denominación.
<b>ARTÍCULO 98</b>	- Reubicación del capítulo y su denominación.
<b>ARTÍCULO 99</b>	- Disposiciones constitucionales relativas a la duración del periodo del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado
<b>ARTÍCULO 100</b>	- Duración del Periodo constitucional de los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia y posibilidad de reelección.
<b>ARTÍCULO 102</b>	- Procedimiento constitucional para la designación de los Magistrados del Tribunal de Justicia.
<b>ARTÍCULO 105</b>	- Competencia de la sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
<b>ARTÍCULO 109</b>	- Fecha límite de presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado.
<b>ARTÍCULO 110</b>	- Competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisitos y proceso de integración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.</li> <li>- Proceso de designación del titular del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 111</b>	- Competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
<b>ARTÍCULO 118</b>	- Fecha límite de presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos, por el Ejecutivo a la Legislatura.
<b>ARTÍCULO 122</b>	- Actualización constitucional de “Órgano de Fiscalización Superior del Estado” por “Auditoría Superior del Estado”.
<b>ARTÍCULO 128</b>	- Determinación constitucional de las colindancias del municipio de Puerto Morelos.
<b>ARTÍCULO 135</b>	- Disposiciones constitucionales relativas a la asignación de cargos de regidores electos según el principio de representación proporcional a candidatos independientes.
<b>ARTÍCULO 136</b>	- Requisitos constitucionales de elegibilidad para poder ser miembro de un Ayuntamiento.
<b>ARTÍCULO 153</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bases constitucionales para la administración de la hacienda municipal.</li> <li>- Disposiciones relativas a la autorización de los convenios de adhesión al mecanismo de contratación de Deuda Estatal Garantizada.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 160</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disposiciones constitucionales relativas a las responsabilidades de los servidores públicos y particulares, vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción.</li> <li>- Competencia del Tribunal de Justicia Administrativa para imponer sanciones a los particulares que intervengan en actos vinculados a faltas administrativas graves.</li> <li>- Obligación de los servidores públicos de presentar su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes.</li> <li>- Plazos de prescripción de la responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo, por servidores públicos.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 161</b>	<p>Sistema Estatal Anticorrupción:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bases constitucionales mínimas para el cumplimiento de su objeto;</li> <li>- Competencia y procesos de integración del Comité Coordinador, y</li> <li>- Procedimiento de integración del Comité de Participación Ciudadana .</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 162</b>	- Derogación de disposiciones relativas a la acusación del Gobernador del Estado por la comisión de delitos de traición a la patria y delitos graves del orden común.
<b>ARTÍCULO 163</b>	- Derogación de disposiciones relativas a la declaración de procedencia en contra de servidores públicos.

<b>REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ</b>	
<b>UBICACIÓN DE LAS REFORMAS</b>	<b>ASPECTOS REFORMADOS</b>
<b>ARTÍCULO 25</b>	- Obligación para los ciudadanos de desempeñar los cargos de elección popular para los que sean electos, los cuales en ningún caso serán gratuitos.
<b>ARTÍCULO 30</b>	- Derecho al voto en la elección para Gobernador del Estado, para ciudadanos residentes en el extranjero. - Suspensión de la difusión de propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, hasta la conclusión de la jornada electoral, excepto de la información relativa a servicios de salud, ámbito educativo y de protección civil.
<b>ARTICULO 36</b>	- Paridad de género en la postulación de candidatos, en los procesos electorales estatales y municipales.
<b>ARTÍCULO 44</b>	- Formas y procedimientos relativos a la elección de Diputados de mayoría y a la asignación de diputados de representación proporcional.
<b>ARTÍCULO 47</b>	- Impedimentos para determinados servidores públicos, para poder ser electos diputados.
<b>ARTICULO 48</b>	- Separación del cargo de Diputado de 90 días previos a la elección, para aquellos que pretendan reelegirse.
<b>ARTÍCULO 57</b>	- Atribuciones del Congreso para elegir al Fiscal General del Estado; al Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y al Fiscal Especializado en Delitos Electorales. - Atribuciones del Congreso para instaurar los Juicios Políticos.
<b>ARTÍCULO 73</b>	- Impedimento para el Fiscal General del Estado para poder ser electo Gobernador del Estado, sólo si se separa de su encargo ciento veinte días antes del día de la elección.
<b>ARTÍCULO 80</b>	Atribución del Gobernador de: - Presentar ante el Congreso un informe por escrito en el que manifieste el estado que guarda la administración pública estatal, así como para acudir para comparecer cuando así lo acuerde el Poder Legislativo. - Proponer al Congreso a los candidatos a ocupar los cargos de Fiscal General del Estado; Fiscal

	<p>Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de corrupción y Fiscal Especializado en Delitos Electorales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proponer a los candidatos a ocupar cargos de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y designar a un integrante del Consejo de la Judicatura del Estado.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 81</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impedimento para el Gobernador del Estado para entorpecer, dificultar, obstaculizar o intervenir en las elecciones populares.</li> </ul>
<b>ARTICULOS 85 - 86</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Derogación del contenido del artículo relativo al Ministerio Público.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 99</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impedimento para el Fiscal General del Estado para poder ser Magistrado, o Magistrado supernumerario, del Supremo Tribunal de Justicia.</li> </ul>
<b>ARTÍCULOS 114 Y 117</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reelección de presidentes municipales y de los integrantes de la planilla, electos como candidatos independientes.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 118</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impedimento para diversos servidores públicos estatales y federales para poder ser electos propietarios o suplentes de los Ayuntamientos.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 122 BIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Derecho a la Justicia Penal y aspectos relativos a la Fiscalía General del Estado.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 122 TER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Competencia del Ministerio Público y funcionamiento de la Fiscalía General del Estado.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 123</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adecuación de la numeración del Título.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 124</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adecuación de la numeración de Título.</li> <li>- Gobernador del Estado como servidor público sujeto a Juicio Político.</li> </ul>
<b>ARTICULO 126</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Determinación constitucional de incluir al Fiscal General del Estado; al Fiscal Especializado en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción; y al Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales como servidores públicos sujetos a juicio político.</li> </ul>
<b>ARTICULO 127</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso para determinar la declaración de procedencia de diversos servidores públicos estatales.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 128</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso relativo a Juicio Político y Declaración de Procedencia de diversos servidores públicos estatales.</li> </ul>
<b>ARTÍCULOS 131 Y 137</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adecuación de la numeración del Título.</li> </ul>

<b>REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE SINALOA</b>	
<b>UBICACIÓN DE LAS REFORMAS</b>	<b>ASPECTOS REFORMADOS</b>
<b>ARTÍCULO 3º</b>	- Institucionalización de la Mejora Regulatoria como una estrategia para alcanzar el bienestar individual y colectivo, así como el desarrollo económico sustentable.
<b>ARTÍCULO 4º BIS</b>	- Derecho al libre acceso a Internet y a las tecnologías de la información y comunicación. - Acceso a Internet gratuito inalámbrico de banda ancha en los edificios e instalaciones de los diversos poderes del Estado y en las dependencias y entidades de su administración, así como en determinados lugares públicos. - Derecho de toda familia a disfrutar de vivienda digna y decorosa.
<b>ARTÍCULO 14</b>	- Participación de los partidos políticos en procesos electorales a través de asociación y postulación de candidatos comunes.
<b>ARTÍCULO 15</b>	- Estructura del Instituto Electoral del Estado con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.
<b>ARTÍCULO 24</b>	- Integración del Congreso del Estado con 30 Diputados, 18 electos por el sistema de mayoría relativa y 12 electos de acuerdo con el principio de representación proporcional.
<b>ARTÍCULO 25</b>	- Requisitos de elegibilidad para poder ser electo Diputado del Congreso del Estado.
<b>ARTÍCULO 37</b>	- Término para que el Congreso reciba las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado y las correspondientes de los Municipios.
<b>ARTÍCULO 40</b>	- Comparecencias y presentación de informes de los Secretarios de Despacho y Directores de las Entidades Paraestatales ante el Congreso, con motivo del análisis del Informe relativo a la situación de la Administración Pública del Estado.
<b>ARTÍCULO 43</b>	Facultad exclusiva del Congreso del Estado de: - Elegir a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. - Recibir protesta constitucional de servidores públicos determinados. - Conceder licencia y admitir renunciaciones de servidores públicos determinados constitucionalmente. - Nombrar a los servidores públicos del Congreso del Estado. - Conocer y resolver sobre las solicitudes de destitución de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. - Revisar y fiscalizar la Cuenta Pública a través de la Auditoría Superior del Estado.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisar, discutir, aprobar o rechazar el Dictamen del informe de la Auditoría Superior del Estado.</li> <li>- Expedir la ley que regule a la Auditoría Superior del Estado, así como coordinar y evaluar su desempeño.</li> <li>- Aprobar la contratación de empréstitos y obligaciones; ejercer acciones relativas a la disciplina financiera, equilibrio presupuestario y responsabilidad hacendaria; y autorizar al Ejecutivo para celebrar convenios de adhesión al mecanismo de contratación de deuda estatal garantizada.</li> <li>- Elegir al Fiscal General del Estado y objetar su remoción.</li> <li>- Ratificar el nombramiento del Secretario de Control Interno.</li> <li>- Designar a los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos.</li> <li>- Expedir la Ley del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción; la Ley Orgánica de Justicia Administrativa; y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 54</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimiento de designación del Titular de la Auditoría Superior del Estado.</li> <li>- Requisitos para poder ser titular de la Auditoría Superior del Estado.</li> <li>- Incompatibilidades en el ejercicio del cargo del Titular de la Auditoría Superior del Estado.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 55</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posibilidad de elegibilidad para los titulares de los órganos constitucionales autónomos y del Magistrado del Supremo Tribunal, para el cargo de Gobernador del Estado.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 65.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atribución del Gobernador de contratar empréstitos y obligaciones, previa autorización del Congreso.</li> <li>- Requisitos para la contratación de empréstitos y obligaciones, así como de actos relacionados con los mismos.</li> <li>- Atribución del Gobernador en la elección y remoción del Fiscal General del Estado.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 70.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atribución del Congreso de convocar a los secretarios de Despacho para que presenten informes y respondan a interpelaciones y preguntas.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 76</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organización del Ministerio Público en una Fiscalía General del Estado.</li> <li>- Bases de organización de la Fiscalía General del Estado.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 76 BIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspectos generales relativos a la designación, remoción, responsabilidades e impedimentos del Fiscal General del Estado.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 76 BIS A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Designación y remoción del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 77</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisitos constitucionales para poder ser designado Fiscal General del Estado.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 77 BIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disposiciones relativas al organismo de defensa, protección, observación, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos.</li> </ul>

<b>ARTÍCULO 84</b>	- Condiciones para la contratación de obligaciones o empréstitos por el Estado, los organismos autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, empresas de participación estatal o municipal y fideicomisos públicos estatales y municipales.
<b>ARTÍCULO 91</b>	- Garantía de que las escuelas públicas a cargo del Estado, cuenten con instalaciones y equipos para el acceso a internet y a las tecnologías de la comunicación.
<b>ARTÍCULO 105 BIS</b>	- Adecuación de la denominación del titular de la Fiscalía General del Estado.
<b>ARTÍCULO 109 BIS</b>	- imponer sanciones por responsabilidad administrativa grave; y fincar responsabilidades por daños y perjuicios que afecten a la Hacienda pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales.
<b>ARTÍCULO 109 BIS C</b>	- Creación del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria.
<b>ARTÍCULO 109 BIS D</b>	- Creación del Sistema Estatal Anticorrupción.
<b>ARTÍCULO 112</b>	- Adecuación en el número de regidores que integran los Ayuntamientos de los Municipios.
<b>ARTÍCULO 125</b>	- Condiciones para la contratación de empréstitos y obligaciones por los Ayuntamientos.
<b>ARTÍCULO 130</b>	- Determinación constitucional de quienes son considerados servidores públicos para efectos de responsabilidad.
<b>ARTÍCULO 132</b>	- Determinar constitucionalmente cuales servidores públicos podrán ser sujetos a Juicio Político.
<b>ARTÍCULO 135.</b>	- Precisar los servidores públicos sujetos a declaratoria de procedencia por responsabilidad penal.
<b>ARTÍCULO 138.</b>	- Responsabilidad de carácter administrativa de servidores públicos y de particulares.
<b>ARTÍCULO 140</b>	- Remisión a la ley respecto de los casos de prescripción por responsabilidad administrativa.
<b>ARTÍCULO 144</b>	- Requisito de toma de protesta de ciertos servidores públicos, previo a la toma de posesión de sus cargos.

<b>REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE SONORA</b>	
<b>UBICACIÓN DE LAS REFORMAS</b>	<b>ASPECTOS REFORMADOS</b>
<b>ARTICULO 8</b>	- Derecho a la identidad de toda persona en el Estado. - Derecho a ser registrado de manera inmediata al momento del nacimiento.
<b>ARTICULO 19</b>	- Suspensión de los derechos y prerrogativas de ciudadano, para los procesados desde que se dicte el acto de vinculación a proceso.

<b>ARTÍCULO 22</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Homologación de la jornada comicial estatal, con los procesos electorales federales.</li> <li>- Difusión de las sesiones de los organismos electorales a través de medios electrónicos en tiempo real.</li> <li>- Prevención y sanción administrativa de conductas o hechos presumiblemente constitutivos de violencia política por razones de género.</li> <li>- Disposiciones constitucionales relativas a las características mínimas de los convenios de candidaturas comunes.</li> <li>- Competencia del Tribunal Estatal Electoral, respecto de los procedimientos sancionadores ordinarios y juicios orales en materia electoral.</li> </ul>
<b>ARTICULO 25-D</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Término constitucional para expedir dentro de los primeros cuatro meses del inicio de la administración correspondiente los Planes de desarrollo.</li> </ul>
<b>ARTICULO 33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisitos de elegibilidad para poder ser Diputado del Congreso del Estado.</li> </ul>
<b>ARTICULO 46</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facultad del Titular del Ejecutivo del Estado de presentar por si o de manera extraordinaria, por conducto del Secretario de Gobierno o a quien designe, el Informe sobre el estado que guarde la Administración Pública en sus diversos ramos.</li> </ul>
<b>ARTICULO 50</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incompatibilidades de los legisladores con otra responsabilidad pública.</li> </ul>
<b>ARTICULO 61</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prohibición para el Ejecutivo del Estado de poder hacer observaciones a los decretos que reformen a la Constitución y a la Ley Orgánica del Congreso.</li> </ul>
<b>ARTICULO 62</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Votación calificada de dos terceras partes de los integrantes del Congreso, para poder presentar en un mismo periodo de sesiones, un proyecto de ley o decreto previamente desechado.</li> </ul>
<b>ARTICULO 64</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disposiciones relativas para garantizar por el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos la operatividad logística y difusión del presupuesto participativo.</li> </ul> <p>Facultad del Congreso de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legislar respecto del combate a la drogadicción y la ludopatía en el Estado.</li> <li>- Expedir las bases generales para que los órganos de control de los Municipios celebren convenios con el órgano de control del Gobierno Estatal y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, respecto de las responsabilidades administrativas.</li> <li>- Ratificar o rechazar el nombramiento del Fiscal General de Justicia.</li> <li>- Objetar el nombramiento de los Fiscales Especializados en materia de delitos electorales y anticorrupción.</li> <li>- Legislar en materia de Fiscalización Superior.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Designar al titular del Órgano de Control Interno y personal administrativo de nivel subdirector y superiores del Congreso del Estado.</li> <li>- Legislar respecto de las atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa.</li> <li>- Legislar respecto de los tribunales de conciliación y arbitraje.</li> </ul>
<b>ARTICULO 67</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendición de cuentas del ejercicio presupuestal de los poderes del Estado, los ayuntamientos y entidades públicas.</li> <li>- Facultad de implementar acciones de prevención en materia de corrupción por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.</li> <li>- Principios de la función de fiscalización, ejercida por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.</li> <li>- Atribución del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de entregar al Pleno del Congreso, un informe de resultados de la revisión de las cuentas públicas.</li> <li>- Proceso de designación del Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.</li> <li>- Proceso de designación del titular del Órgano de Control Interno del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.</li> </ul>
<b>ARTICULO 70</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisitos de elegibilidad para poder ser Gobernador del Estado.</li> </ul>
<b>ARTICULO 79</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obligación del Gobernador de rendir ante el Congreso, por sí o por quien el designe, el Informe sobre el Estado de la Administración del Estado.</li> </ul>
<b>ARTICULO 88</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disposiciones relativas a la responsabilidad directa de los funcionarios y empleados de Hacienda sobre el uso de los caudales públicos.</li> </ul>
<b>ARTICULO 89</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Competencia de la Secretaría de Educación y Cultura, respecto de la dirección de la educación pública.</li> </ul>
<b>ARTICULO 96</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Derogación de la atribución del Ministerio Público de informar al Supremo Tribunal sobre defectos encontrados en las leyes, y de las irregularidades y deficiencias observadas en las autoridades encargadas de aplicarlas.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 97</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicación y autorización de los criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, implementados por el Ministerio Público.</li> </ul>
<b>ARTICULO 98</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso de designación y remoción del Fiscal General del Estado.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 100</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toma de protesta de ley, del Fiscal General de Justicia del Estado ante el Presidente del Congreso del Estado y el Titular del Poder Ejecutivo.</li> </ul>
<b>ARTICULO 101</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actuación de la Policía Estatal Investigadora y de las instituciones encargadas de la seguridad</li> </ul>



	pública, con respeto irrestricto a los derechos humanos.
<b>ARTÍCULO 120</b>	- Disposiciones relativas a la integración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Sonora.
<b>ARTÍCULO 127 BIS</b>	- Competencia, objeto e integración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. - Requisitos constitucionales para poder ser designado Presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
<b>ARTICULO 132</b>	- Requisitos constitucionales para poder ser electo Presidente Municipal, Síndico o Regidor de un Ayuntamiento.
<b>ARTÍCULO 143</b>	- Disposiciones constitucionales relativas a los servidores públicos sujetos a responsabilidad.
<b>ARTÍCULO 143 A</b>	- Integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado.
<b>ARTÍCULO 143 B</b>	- Facultad del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de imponer sanciones cuando se cometan faltas administrativas graves que causen perjuicio a los entes públicos estatal o municipales.
<b>ARTICULO 144</b>	- Determinación constitucional para que el Congreso expida las leyes en materia de auditoría, fiscalización y combate a la corrupción.
<b>ARTICULO 150-A</b>	- Determinación constitucional del precepto que señala que en el Estado las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos civiles y políticos. - Deber de los partidos políticos o en su caso de las coaliciones, de postular fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, considerando la paridad de géneros en la totalidad de sus candidaturas. - Conceptualización constitucional de paridad de género vertical y de paridad de género horizontal.
<b>ARTICULO 163</b>	- Facultad de los Ayuntamientos de pronunciarse a favor o en contra de las adiciones o reformas a la Constitución dentro del término de 60 días a partir de que sean notificados por el Congreso.

<b>REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE TABASCO</b>	
<b>UBICACIÓN DE LAS REFORMAS</b>	<b>ASPECTOS REFORMADOS</b>
<b>ARTÍCULO 9</b>	- Utilización del Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización para el cálculo del financiamiento público de los partidos políticos.

<b>ARTÍCULO 15</b>	- Actualización constitucional de “Tribunal de lo Contencioso Administrativo” por “Tribunal de Justicia Administrativa”
<b>ARTÍCULO 26</b>	- Proceso de fiscalización de la cuenta pública por conducto del Órgano Superior de Fiscalización.
<b>ARTÍCULO 36</b>	<p>Facultad del Congreso de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legislar para establecer las bases para que el Ejecutivo y Ayuntamientos puedan contraer obligaciones o empréstitos.</li> <li>- Expedir la Ley que regule su organización y atribuciones.</li> <li>- Expedir los ordenamientos que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes del Estado, los municipios y demás entes públicos estatales y municipales.</li> <li>- Designar al titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a los Consejeros del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Contralor General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.</li> <li>- Designar a los titulares de los órganos de control interno de los organismos constitucionales autónomos.</li> <li>- Ratificar a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.</li> <li>- Nombrar al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.</li> <li>- Recibir la protesta constitucional del Gobernador, y de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa.</li> <li>- Expedir la legislación que instituya al Tribunal de Justicia Administrativa.</li> <li>- Revisar la Cuenta Pública, a través del Órgano Superior de Fiscalización.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 37</b>	- Competencia del Congreso de conocer las renunciaciones y licencias del Gobernador del Estado.
<b>ARTÍCULO 40</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso de fiscalización del Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</li> <li>- Facultades del Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</li> <li>- Requisitos constitucionales para poder ser titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 41</b>	- Fecha límite para la entrega de las cuentas públicas, por los entes públicos fiscalizados, al Órgano Superior de Fiscalización.
<b>ARTÍCULO 44</b>	- Actualización constitucional de “Tribunal de lo Contencioso Administrativo” por “Tribunal de Justicia Administrativa”

<b>ARTÍCULO 51</b>	- Fecha límite para la remisión al Congreso del Estado, a través del Órgano Superior de Fiscalización, de la Cuenta Pública.
<b>ARTÍCULO 54 TER</b>	- Disposiciones constitucionales relativas al nombramiento y remoción de los titulares de las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción.
<b>ARTÍCULO 55 TER</b>	- Administración y destino de los recursos del Poder Judicial del Estado.
<b>ARTÍCULO 56</b>	- Actualización constitucional de “equidad de género” por “igualdad de género”.
<b>ARTÍCULO 57</b>	- Requisitos constitucionales para poder ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
<b>ARTÍCULO 63 TER</b>	- Competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
<b>ARTÍCULO 63 QUATER</b>	- Composición del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. - Requisitos constitucionales para poder ser Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. - Proceso de designación de los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa.
<b>ARTÍCULO 64</b>	- Actualización constitucional de “Tribunal de lo Contencioso Administrativo” por “Tribunal de Justicia Administrativa” - Reelección de los integrantes de los Ayuntamientos.
<b>ARTÍCULO 65</b>	- Fecha límite para la entrega de la Cuenta Pública para efectos de examen y calificación.
<b>ARTÍCULO 66</b>	- Responsabilidad de servidores públicos respecto de sus facultades y obligaciones. - Obligación de los servidores públicos de presentar su declaración patrimonial, de intereses y su declaración fiscal anual.
<b>ARTÍCULO 67</b>	- Responsabilidad de los servidores públicos y particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves.
<b>ARTÍCULO 68</b>	- Adecuación del catálogo de servidores públicos sujetos a Juicio Político.
<b>ARTÍCULO 69</b>	- Adecuación del catálogo de servidores públicos sujetos a declaración de procedencia, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo.
<b>ARTÍCULO 71</b>	- Principios constitucionales que deben observar los servidores públicos en el desempeño de empleos, cargos o comisiones.
<b>ARTÍCULO 72</b>	- Ampliación del plazo de prescripción de la responsabilidad administrativa de tres a siete años.
<b>ARTÍCULO 73 BIS</b>	- Competencia del Sistema Estatal Anticorrupción.
<b>ARTÍCULO 73 TER</b>	- Integración del Sistema Estatal Anticorrupción.

<b>ARTÍCULO 75</b>	- Actualización constitucional de “Tribunal de lo Contencioso Administrativo” por “Tribunal de Justicia Administrativa”
<b>ARTÍCULO 76</b>	- Inclusión del principio de estabilidad de las finanzas públicas de la entidad, a fin de coadyuvar a la generación de condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.

<b>REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS</b>	
<b>UBICACIÓN DE LAS REFORMAS</b>	<b>ASPECTOS REFORMADOS</b>
<b>ARTÍCULO 17</b>	- Derecho de acceso a la cultura y el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de los derechos culturales.
<b>ARTÍCULO 17 BIS</b>	- Procedimiento jurisdiccional autónomo de la materia penal, para el caso de extinción de dominio que procederá en los casos de secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito.
<b>ARTÍCULO 19</b>	- Implementación de la Unidad de Medida y Actualización para la aplicación de sanciones a los jornaleros, obreros y trabajadores.
<b>ARTÍCULO 20</b>	- Homologación de la fecha de elección para Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado con los comicios electorales federales. - Derecho de los tamaulipecos en el extranjero de votar en la elección del Gobernador del Estado.
<b>ARTÍCULO 30</b>	- Servidores públicos inelegibles para poder ser Diputados.
<b>ARTÍCULO 58</b>	- Principios constitucionales para el desarrollo de la función fiscalizadora llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado. - Facultad de la Auditoría Superior del Estado de fiscalizar las acciones del Estado y municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. - Competencia e integración del Tribunal de Justicia Administrativa. Facultad del Congreso de: - Nombrar a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. - Instituir la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. - Elección del Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. - Recibir la protesta constitucional a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instituir el Tribunal de Justicia Administrativa.</li> <li>- Designar a los titulares de los órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 76</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Principios constitucionales para desarrollar la función de fiscalización por la Auditoría Superior del Estado.</li> <li>- Convenios de coordinación entre la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, para la fiscalización de las participaciones federales.</li> <li>- Atribución de la Fiscalía Superior del Estado de fiscalizar el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado el gobierno local y los municipios, cuando se trate de empréstitos con garantía del Estado.</li> <li>- Formato de los informes presentados por la Auditoría Superior del Estado, al Congreso.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 91</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facultad del Gobernador de proponer al Congreso la designación de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 134</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prohibición de expedir en el Estado permisos o licencias sobre uso de suelo o construcción para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juegos o similares, así como para centros donde se presenten espectáculos con personas que realicen actos de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 143 BIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fines y principios constitucionales de la Universidad Autónoma del Estado de Tamaulipas.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 149</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obligación de los servidores públicos de presentar su declaración patrimonial, de conflicto de intereses y declaración fiscal.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 150</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Remisión a la legislación secundaria respecto de las sanciones penales por causa de enriquecimiento ilícito o inexplicable de los servidores públicos durante el tiempo de su encargo.</li> <li>- Competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, para resolver las faltas administrativas graves.</li> <li>- Competencia de los órganos internos de control de los entes públicos estatales y municipales.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 154</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bases constitucionales mínimas para el cumplimiento del objeto del Sistema Estatal Anticorrupción.</li> <li>- Integración y competencia del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.</li> <li>- Integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.</li> </ul>

<b>REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE VERACRUZ</b>	
<b>UBICACIÓN DE LAS REFORMAS</b>	<b>ASPECTOS REFORMADOS</b>
<b>ARTÍCULO 10</b>	- Disposiciones constitucionales relativas a las facultades, funciones y patrimonio de la Universidad Veracruzana.
<b>ARTÍCULO 33</b>	Facultad del Congreso de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legislar respecto de las obligaciones y sanciones aplicables por actos u omisiones en que incurran los servidores públicos.</li> <li>- Nombrar, a los magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y a los Comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.</li> <li>- Revisar las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, a través del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.</li> <li>- Aprobar las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables.</li> <li>- Establecer las bases conforme a las cuales el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos puedan contraer obligaciones y empréstitos.</li> <li>- Designar a los titulares de los órganos internos de control de los organismos Autónomos del Estado.</li> <li>- Legislar respecto del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 55</b>	- Determinación constitucional de los órganos que integran el Poder Judicial del Estado.
<b>ARTÍCULO 56</b>	- Derogación de la atribución del Poder Judicial de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal o municipal, y los particulares.
<b>ARTÍCULO 62</b>	- Integración del Consejo de la Judicatura del Estado.
<b>ARTÍCULO 67</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obligación de los organismos Autónomos de presentar anualmente un informe de Actividades al Congreso del Estado.</li> <li>- Requisitos y procedimientos constitucionales para el nombramiento del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.</li> <li>- Principios constitucionales para llevar a cabo la revisión de las Cuentas Públicas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.</li> <li>- Disposiciones constitucionales relativas al proceso de fiscalización llevado a cabo por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.</li> </ul>

	- Requisitos y procedimientos constitucionales para el nombramiento del Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
<b>ARTÍCULO 67 BIS</b>	- Competencia del Sistema Estatal Anticorrupción. - Integración y competencia del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. - Integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
<b>ARTÍCULO 73</b>	- Previsiones constitucionales relativas al destino y manejo de obligaciones y empréstitos contraídos por los Municipios.
<b>ARTÍCULO 74</b>	- Determinación constitucional de considerar el principio de estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.
<b>ARTÍCULO 76</b>	- Disposiciones constitucionales relativas a los servidores públicos sujetos a responsabilidad. - Obligación de los servidores públicos de presentar su declaración patrimonial y de intereses.
<b>ARTÍCULO 76 BIS</b>	- Sanciones aplicables a los servidores públicos por la comisión de faltas administrativas.
<b>ARTÍCULO 79</b>	- Determinación de los plazos mínimos de prescripción para efectos de responsabilidad administrativa.

<b>REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE YUCATÁN</b>	
<b>UBICACIÓN DE LAS REFORMAS</b>	<b>ASPECTOS REFORMADOS</b>
<b>ARTÍCULO 1</b>	- Derecho de toda persona a la identidad. - Derecho de toda persona a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento.
<b>ARTÍCULO 2</b>	- Disposiciones constitucionales relativas al desarrollo de la cultura maya.
<b>ARTÍCULO 7 BIS</b>	- Derecho de las mujeres y hombres indígenas de votar y ser votados en condiciones de igualdad, y de acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados.
<b>ARTÍCULO 16</b>	- Disposiciones constitucionales relativas a la distribución del financiamiento de recursos públicos determinados para los partidos políticos, para sus actividades ordinarias permanentes y actividades específicas.
<b>ARTÍCULO 19</b>	- Obligación del Presidente del Congreso de garantizar la inviolabilidad del recinto en donde los diputados se reúnan a sesionar.

<b>ARTÍCULO 24</b>	- Actualización constitucional de “Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán” por “Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán”
<b>ARTÍCULO 75 QUATER</b>	- Derogación de la atribución de la Comisión Permanente de ratificar el nombramiento de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
<b>ARTÍCULO 97</b>	- Disposiciones constitucionales relativas a los magistrados y consejeros de la Judicatura del Poder Judicial, sujetos a declaración de procedencia por la comisión de delitos cometidos en contra de la administración de justicia y otros ramos del poder público.
<b>ARTÍCULO 100</b>	- Disposiciones constitucionales relativas a la declaración de procedencia en contra de Magistrados de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. - Determinación constitucional relativa a la permanencia en el cargo, hasta que no se dicte sentencia condenatoria para los servidores públicos sujetos a proceso penal.

<b>REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE ZACATECAS</b>	
<b>UBICACIÓN DE LAS REFORMAS</b>	<b>ASPECTOS REFORMADOS</b>
<b>ARTÍCULO 20</b>	- Adición de la denominación del Título Segundo y de un Capítulo Único.
<b>ARTÍCULO 21</b>	- Derogación de la de la denominación del Título Segundo y de un Capítulo Único.
<b>ARTÍCULO 23</b>	- Proceso de designación del órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.
<b>ARTÍCULO 29</b>	- Proceso de designación del órgano interno de control del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
<b>ARTÍCULO 38</b>	- Proceso de designación del órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
<b>ARTÍCULO 42</b>	- Proceso de designación del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.
<b>ARTÍCULO 59</b>	- Adecuación constitucional de “Procurador General de Justicia del Estado” por “Fiscal General de Justicia del Estado”.
<b>ARTÍCULO 65</b>	Facultad del Congreso de: - Legislar la organización y facultades de la Auditoría Superior del Estado.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Expedir la ley sobre el Sistema Estatal Anticorrupción.</li> <li>- Revisar y resolver sobre la recepción del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas del Gobierno Estatal, de los municipios y de sus entes públicos paraestatales y paramunicipales.</li> <li>- Aprobar y designar a los titulares de los órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 71</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización constitucional de “Entidad de Fiscalización Superior del Estado” por “Auditoría Superior del Estado”.</li> <li>- Proceso de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 82</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha de presentación de la Cuenta Pública Estatal, correspondiente al año anterior, por el Gobernador del Estado.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 87</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disposiciones constitucionales relativas a la organización del Ministerio Público y a la organización de la Fiscalía General de Justicia del Estado.</li> <li>- Proceso de designación del Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado.</li> <li>- Informe de actividades del Fiscal General de Justicia del Estado.</li> <li>- Fiscalías integrantes de la Fiscalía General del Estado.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 88</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Competencia del Ministerio Público del Estado.</li> <li>- Bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 89</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Derogación de preceptos relativos al Procurador General de Justicia.</li> </ul>
<b>ARTÍCULOS 90, 93, 100, 104, 106</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización constitucional de “Juzgados de primera instancia y municipales” por “Juzgados de primera instancia, de control y tribunales de enjuiciamiento”.</li> </ul>
<b>ARTÍCULOS. 97, 107</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización constitucional de “Procurador General de Justicia” por “Fiscal General de Justicia”</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 112</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas.</li> <li>- Órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 113</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso de designación de los Magistrados Integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 118</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Designación de los órganos internos de control de los Ayuntamientos.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 121</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha límite para el envío de la Cuenta Pública de los Ayuntamientos a la Legislatura del Estado.</li> </ul>
<b>ARTÍCULO 122</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Competencia de los órganos internos de control de los Ayuntamientos.</li> </ul>

<b>ARTÍCULO 129</b>	- Inclusión del Sistema Estatal Anticorrupción en la denominación del Título.
<b>ARTÍCULO 137</b>	- Inclusión del Sistema Estatal Anticorrupción en la denominación del Capítulo.
<b>ARTÍCULO 138</b>	- Competencia del Sistema Estatal Anticorrupción. - Integración y competencia del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. - Integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
<b>ARTÍCULO 144</b>	- Remisión a las disposiciones aplicables respecto de la responsabilidad de servidores públicos y particulares.
<b>ARTÍCULO 147</b>	- Obligación para determinados servidores públicos de presentar anualmente su declaración patrimonial y de intereses.
<b>ARTÍCULO 150</b>	- Prevenciones constitucionales relativas a las responsabilidades administrativas de servidores públicos y particulares vinculados con faltas administrativas.
<b>ARTÍCULO 151</b>	- Adecuación constitucional de “Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje” por “Tribunal de Justicia Administrativa” - Adecuación constitucional de “Procurador General de Justicia del Estado” por “Fiscal General de Justicia del Estado”.
<b>ARTÍCULO 154</b>	- Responsabilidad de los particulares respecto de las faltas administrativas.
<b>ARTÍCULO 155</b>	- Ampliación de los plazos de prescripción por responsabilidad administrativa.

## 2.- CUADROS COMPARATIVOS CON EL TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LAS CONSTITUCIONES LOCALES.

Los siguientes cuadros se integran con el texto anterior, (correspondiente al) ( del) mes de noviembre de 2016 en contraste con el texto vigente al mes de noviembre de 2017, de las Constituciones de los Estados de Morelos, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. (La columna izquierda comprende el texto vigente en 2016, señalando con subrayado el texto derogado y la columna derecha se integra con el texto vigente destacando en color rojo los preceptos adicionados).

COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE MORELOS	
TEXTO ANTERIOR	TEXTO VIGENTE
<b>TITULO PRIMERO</b> <b>DISPOSICIONES PRELIMINARES</b> <b>CAPITULO I</b> <b>DE LA SOBERANÍA, INDEPENDENCIA, TERRITORIO Y FORMA DE GOBIERNO DEL ESTADO Y DE LOS DERECHOS HUMANOS</b>	<b>TITULO PRIMERO</b> <b>DISPOSICIONES PRELIMINARES</b> <b>CAPITULO I</b> <b>DE LA SOBERANÍA, INDEPENDENCIA, TERRITORIO Y FORMA DE GOBIERNO DEL ESTADO Y DE LOS DERECHOS HUMANOS</b>
ARTICULO 1. ...	<b>ARTICULO 1. ...</b> Todo Poder Público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. <b>Artículo 1 Bis.</b> De los Derechos Humanos en el Estado de Morelos: En el Estado de Morelos se reconoce que todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la concepción, y asegura a todos sus habitantes, el goce de los Derechos Humanos, contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente Constitución y, acorde con su tradición libertaria, declara de interés público la aplicación de los artículos 27 y 123, de la Constitución Fundamental de la República y su legislación derivada. En el Estado de Morelos, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la

	<p>condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, la orientación sexual, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.</p> <p>La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.</p> <p>El Estado deberá de instrumentar los mecanismos necesarios para garantizar eficientemente el acceso de toda persona a una alimentación suficiente y de calidad, que le permita satisfacer sus necesidades nutricionales que aseguren su desarrollo físico y mental.</p> <p>En el Estado de Morelos se reconoce el derecho humano de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre y asequible. El Estado garantizará este derecho y la Ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo su participación y la de los Municipios, así como la de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.</p> <p>Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte para alcanzar una mejor calidad de vida y desarrollo físico. Corresponde al Estado y los Municipios su fomento, organización y promoción, conforme a las leyes en la materia.</p> <p>Se reconoce como derecho humano, la protección, conservación, restauración y sustentabilidad de los recursos naturales en el Estado.</p> <p>Es derecho de todos los morelenses, acceder a la sociedad de la información y el conocimiento, como una política prioritaria del Estado, a fin de lograr una comunidad integrada y comunicada, en la que cada uno de los morelenses pueda tener acceso libre y universal al internet como un derecho fundamental para su pleno desarrollo, en un entorno de igualdad de oportunidades, con respeto a su diversidad, preservando su identidad cultural y orientada a su crecimiento personal, que permita un claro impacto de beneficios en la educación, la salud, la seguridad, el desarrollo económico, el turismo, la transparencia, la cultura y los trámites gubernamentales.</p> <p>En el Estado de Morelos se reconoce el derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios culturales. Será obligación del</p>
--	--

	<p style="color: red;">Estado promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La Ley establecerá los mecanismos para el acceso, fomento y participación de cualquier manifestación cultural.</p>
<p><b>ARTÍCULO 2.</b> <u>En el Estado de Morelos se reconoce que todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la concepción, y asegura a todos sus habitantes, el goce de los Derechos Humanos, contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente Constitución y, acorde con su tradición libertaria, declara de interés público la aplicación de los artículos 27 y 123, de la Constitución Fundamental de la República y su legislación derivada.</u></p> <p><u>En el Estado de Morelos, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, la orientación sexual, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.</u></p> <p><u>La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.</u> El derecho a la información será garantizado por el Estado.</p> <p>En el Estado de Morelos se reconoce como una extensión de la libertad de pensamiento, el derecho de todo individuo para poder acceder a la información pública sin más restricción que los que establezca la intimidad y el interés público de acuerdo con la ley de la materia, así como el secreto profesional, particularmente el que deriva de la difusión de los hechos y de las ideas a través de los medios masivos de comunicación.</p> <p>Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, el Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:</p> <p><b>I. a X. ...</b></p> <p><u>Es derecho de todos los morelenses, acceder a la sociedad de la información y el conocimiento, como una política prioritaria del Estado, a fin de lograr una comunidad integrada y comunicada, en la que cada</u></p>	<p><b>ARTÍCULO 2.</b></p> <p>El derecho a la información será garantizado por el Estado.</p> <p>En el Estado de Morelos se reconoce como una extensión de la libertad de pensamiento, el derecho de todo individuo para poder acceder a la información pública sin más restricción que los que establezca la intimidad y el interés público de acuerdo con la ley de la materia, así como el secreto profesional, particularmente el que deriva de la difusión de los hechos y de las ideas a través de los medios masivos de comunicación.</p> <p>Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, el Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:</p> <p><b>I. a X. ...</b></p>

<p><u>uno de los morelenses pueda tener acceso libre y universal al internet como un derecho fundamental para su pleno desarrollo, en un entorno de igualdad de oportunidades, con respeto a su diversidad, preservando su identidad cultural y orientada a su crecimiento personal, que permita un claro impacto de beneficios en la educación, la salud, la seguridad, el desarrollo económico, el turismo, la transparencia, la cultura y los trámites gubernamentales.</u></p> <p><u>El Estado reconoce al turismo como base fundamental y prioritaria del desarrollo estatal, destinándole en el Presupuesto de Egresos recursos necesarios para el cumplimiento y desarrollo de los programas relacionados con el rubro. La ley secundaria determinará la forma y condiciones para su cumplimiento.</u></p> <p><u>En el Estado de Morelos se reconoce el derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios culturales. Será obligación del Estado promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La Ley establecerá los mecanismos para el acceso, fomento y participación de cualquier manifestación cultural.</u></p>	
<p><b>ARTÍCULO 2 Bis.</b> El Estado de Morelos tiene una composición pluriétnica, pluricultural y multilingüística, sustentada originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas.</p> <p>Reconoce la existencia histórica y actual en su territorio de los pueblos y protege también los derechos de las comunidades asentadas en ellos por cualquier circunstancia.</p> <p>...</p> <p>Esta Constitución establece sus derechos y obligaciones conforme a las bases siguientes:</p> <p><b>I. a VII. ...</b></p> <p><b>VIII.</b> Se garantizará a los indígenas el efectivo acceso a la justicia, tanto municipal como estatal. Para garantizar este derecho en la fase preventiva o ejecutiva en los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se proveerá lo necesario en materia de prevención, procuración, administración de justicia y ejecución de sanciones y medidas de seguridad, tomando en consideración sus usos, costumbres y especificidades culturales;</p> <p><u>En el caso de los miembros de pueblos o comunidades indígenas, se</u></p>	<p><b>ARTÍCULO 2 Bis.</b> En el Estado se reconoce la presencia de sus pueblos y comunidades indígenas, admitiendo que fueron la base para su conformación política y territorial; garantizará que la riqueza de sus costumbres y tradiciones; territorio, lengua y patrimonio cultural, medicina tradicional y acceso a recursos naturales, así como su autonomía, libre determinación, sistemas normativos y el acceso a la consulta, sean preservados y reconocidos a través de la ley respectiva.</p> <p>...</p> <p>Esta Constitución establece sus derechos y obligaciones conforme a las bases siguientes:</p> <p><b>I. a VII. ...</b></p> <p><b>VIII.</b> Se garantizará a los indígenas el efectivo acceso a la justicia, tanto municipal como estatal. Para garantizar este derecho en la fase preventiva o ejecutiva en los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se proveerá lo necesario en materia de prevención, procuración, administración de justicia y ejecución de sanciones y medidas de seguridad, tomando en consideración sus usos, costumbres y especificidades culturales;</p>

<p>les nombrará intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura, <u>aun cuando hablen el español.</u>  <b>IX. a X. ...</b>  <b>XI.</b> La ley reconocerá a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas el derecho a su etnicidad y al etnodesarrollo, residan temporal o permanentemente en el territorio del Estado de Morelos;   <b>XII. ...</b></p>	<p><b>IX. a X. ...</b>  <b>XI.</b> La ley reconocerá a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas el derecho a su etnicidad y al etnodesarrollo, residan temporal o permanentemente en el territorio del Estado de Morelos;  <b>Así mismo, la Ley deberá garantizar que cualquier forma del Registro Civil pueda ser redactada y expedida en la lengua indígena del interesado, a petición expresa de éste;</b>   <b>XII. ...</b></p>
<p><b>ARTICULO 2 TER.</b> El Estado deberá de instrumentar los mecanismos necesarios para garantizar eficientemente el acceso de toda persona a una alimentación suficiente y de calidad, que le permita satisfacer sus necesidades nutricionales que aseguren su desarrollo físico y mental. De la misma manera deberá garantizar políticas y programas para el desarrollo rural integral, para la generación de empleo y bienestar a la población campesina, y el fomento a la producción agropecuaria y forestal, capacitación y asistencia técnica. El desarrollo rural será sustentable, garantizando el Estado el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.</p>	<p><b>ARTICULO 2 TER.</b> El Estado deberá <b>garantizar políticas y programas para el desarrollo rural integral, para la generación de empleo y bienestar a la población campesina, y el fomento a la producción agropecuaria y forestal, capacitación y asistencia técnica.</b>           El desarrollo rural será sustentable, garantizando el Estado el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.  <b>El Estado reconoce al turismo como base fundamental y prioritaria del desarrollo estatal, destinándole en el Presupuesto de Egresos recursos necesarios para el cumplimiento y desarrollo de los programas relacionados con el rubro. La ley secundaria determinará la forma y condiciones para su cumplimiento.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO III DE LOS MORELENSES</b></p> <p><b>ARTICULO 14.</b> Son derechos del ciudadano morelense:  <b>I.</b> <u>Votar y participar activamente en las elecciones populares y en los procesos de plebiscito y referéndum a los que se convoque, en los términos que señale la Ley;</u>          Los ciudadanos morelenses radicados en el extranjero solo podrán participar en las elecciones para Gobernador del Estado, en los términos que señala la ley.  <b>II. a III. ...</b></p> <p><b>ARTICULO 18.</b> <u>Es facultad exclusiva del Congreso del Estado,</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO III DE LOS MORELENSES</b></p> <p><b>ARTICULO 14.</b> Son derechos del ciudadano morelense:  <b>I.</b> <b>Votar, ser votado y participar activamente en los procesos electorales y de participación ciudadana que correspondan, previstos en esta Constitución y la normativa aplicable.</b>          Los ciudadanos morelenses radicados en el extranjero solo podrán participar en las elecciones para Gobernador del Estado, en los términos que señala la ley  <b>II. a III. ...</b></p> <p><b>ARTICULO 18.</b> <b>La calidad de ciudadano morelense se recobra por el</b></p>

<p>rehabilitar en los derechos de ciudadano a quien los hubiere perdido; <u>pero es requisito indispensable para conceder esta gracia, que la persona objeto de ella goce de los derechos de ciudadano mexicano.</u>                  La calidad de ciudadano morelense se recobra por el sólo hecho de haber cesado la causa que <u>motiva la suspensión.</u></p>	<p>solo hecho de haber cesado la causa que motiva la pérdida o suspensión, pero es requisito indispensable que la persona goce de los derechos de ciudadano mexicano.</p>
<p><b>ARTÍCULO 19.</b> La mujer y el varón tienen igualdad de derechos ante la Ley. De igual manera protegerán la organización y desarrollo de la familia, incluidas las familias monoparentales, entre las que se dará protección al menor de edad, la mujer, las personas con capacidades diferentes y los ancianos.</p> <p>La protección familiar e individual se dará conforme a las siguientes bases:  <b>I. a III. ...</b>  <b>IV.</b> Para garantizar los derechos de la mujer, las leyes establecerán:  <b>a). al g). ...</b>  <u>Asimismo, los morelenses tienen el derecho de contar con las oportunidades y condiciones necesarias para su desarrollo físico y mental, en el ámbito de las diferentes disciplinas y niveles del deporte. Los morelenses que de acuerdo a los estudios socioeconómicos de los distintos órganos de Gobierno, que se determinen que viven en condiciones de pobreza extrema, tienen derecho a acceder a los programas sociales y por lo tanto, el Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos de la Entidad, tienen la obligación de llevar a cabo las acciones necesarias, a efecto de determinar quienes se encuentran en pobreza extrema, registrarlos en los padrones correspondientes y beneficiarlos prioritariamente con los apoyos derivados de los programas que a nivel Federal, Estatal y Municipal se otorgan y que son proporcionados a través o por las autoridades locales. Lo anterior, con independencia de la atención que debe otorgarse a los grupos vulnerables y en pobreza.</u></p>	<p><b>ARTÍCULO 19.</b> La mujer y el varón tienen igualdad de derechos ante la Ley. Los ordenamientos respectivos tutelarán la igualdad de estos derechos y sancionarán cualquier tipo de discriminación o menoscabo producido en relación al género masculino y femenino, a la edad, religión, etnia, condición social, discapacidad, y cualquiera otra que vulnere o dañe la dignidad, la condición y los derechos humanos reconocidos por esta Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados, acuerdos e instrumentos internacionales a los que el país se haya adherido. El Estado protegerá la organización y desarrollo en armonía de la familia, incluidas las familias monoparentales, entre las que se dará protección al menor de edad, la mujer, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores.</p> <p>La protección familiar e individual se dará conforme a las siguientes bases:  <b>I. a III. ...</b>  <b>IV.</b> Para garantizar los derechos de la mujer, las leyes establecerán:  <b>a). al g). ...</b>  <u>Los morelenses que de acuerdo a los estudios socioeconómicos de los distintos órganos de Gobierno, que se determinen que viven en condiciones de pobreza extrema, tienen derecho a acceder a los programas sociales y por lo tanto, el Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos de la Entidad, tienen la obligación de llevar a cabo las acciones necesarias, a efecto de determinar quienes se encuentran en pobreza extrema, registrarlos en los padrones correspondientes y beneficiarlos prioritariamente con los apoyos derivados de los programas que a nivel Federal, Estatal y Municipal se otorgan y que son proporcionados a través o por las autoridades locales. Lo anterior, con independencia de la atención que debe otorgarse a los grupos vulnerables y en pobreza.</u></p>



<p>Los habitantes de Morelos que ingresen a los Institutos de Salud Pública del Estado, recibirán la totalidad de medicamentos que comprende el cuadro básico, material de curación e insumos necesarios para su correcta recuperación.</p>	<p>Los habitantes de Morelos que ingresen a los Institutos de Salud Pública del Estado, recibirán la totalidad de medicamentos que comprende el cuadro básico, material de curación e insumos necesarios para su correcta recuperación.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO CUARTO                  DE LA PARTICIPACION CIUDADANA</b></p> <p><b>ARTICULO 19 bis.</b> Esta Constitución reconoce como medios de participación ciudadana <u>al Plebiscito, al Referéndum, a la Iniciativa Popular, la revocación de mandato y la rendición de cuentas.</u></p> <p><b>A. DE LOS MEDIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b></p> <p><b>1.</b> Se entiende por Plebiscito la consulta a los ciudadanos para que expresen su previa aprobación o rechazo a un acto o decisión del Poder Ejecutivo o de los Ayuntamientos, que sean considerados como trascendentes para la vida pública del Estado o de los Municipios.</p> <p><b>a).</b> Podrán someterse a Plebiscito:</p> <p><b>1.</b> Los actos o decisiones de carácter general del Ejecutivo del Estado que se consideren como trascendentes en la vida pública de esta Entidad Federativa; y</p> <p><b>2.</b> Los actos o decisiones de gobierno y de las autoridades municipales, siempre que se consideren como trascendentes para la vida pública del municipio.</p> <p><b>3.</b> Los actos y/o decisiones del Poder Legislativo.</p> <p><b>b).</b> No podrán someterse a Plebiscito los actos o decisiones del Ejecutivo del Estado o de los Ayuntamientos, relativos a:</p> <p><b>1.</b> El régimen interno de la Administración Pública Estatal y Municipal;</p> <p><b>2.</b> Los actos cuya realización sea obligatoria en los términos de las leyes aplicables; y</p> <p><b>3.</b> Las demás que determine la propia Constitución.</p> <p><b>c).</b> Podrán solicitar que se convoque a Plebiscito:</p> <p><b>1).</b> El Titular del Poder Ejecutivo;</p> <p><b>2).</b> El tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores en el ámbito estatal, cuando se trate de actos del Ejecutivo; y del tres al cinco por ciento de los electores inscritos en listas nominales municipales, dependiendo de su volumen en cada municipio y de acuerdo a la tabla que para el efecto se establezca en la Ley Reglamentaria, para actos o decisiones de gobierno de autoridades municipales.</p> <p><b>3).</b> El Congreso del Estado, a solicitud de uno de sus grupos</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO CUARTO                  DE LA PARTICIPACION CIUDADANA</b></p> <p><b>ARTICULO 19 bis.</b> Esta Constitución reconoce como medios de participación ciudadana <b>los contemplados en la ley de la materia. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, calificará su procedencia o improcedencia, y se encargará de su organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, de conformidad con la normativa aplicable.</b></p>

<p>parlamentarios y por acuerdo de mayoría simple en el pleno.</p> <p><b>4).</b> Los Ayuntamientos por mayoría simple de sus integrantes, en el ámbito de su competencia.</p> <p>Realizado que sea el plebiscito establecido en esta Constitución, si este fuere aprobado por un número de ciudadanos igual al quince por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, tratándose de actos del Ejecutivo estatal, o del trece al quince por ciento de los electores inscritos en listas nominales municipales, dependiendo de su volumen en cada municipio y de acuerdo a la tabla que para el efecto se establezca en la Ley Reglamentaria, el acto sometido a plebiscito será válido y en su caso, continuará el procedimiento respectivo para perfeccionarlo; de no aprobarse, el acto o decisión deberá interrumpirse, sea para no continuarlo y extinguirlo por el medio legal correspondiente, incluyendo su revocación.</p> <p><b>II.</b> Se entiende por Referéndum, el proceso mediante el cual los ciudadanos morelenses, manifiestan su aprobación o rechazo a las reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución Política del Estado, a las leyes que expida el Congreso del Estado o a los reglamentos y bandos que emitan los Ayuntamientos.</p> <p><b>a).</b> El Referéndum no procederá cuando se trate de: <b>1.</b> Leyes o disposiciones de carácter tributario o fiscal;</p> <p><b>2.</b> Reformas a la Constitución Política del Estado y a las leyes locales que deriven de reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;</p> <p><b>3.</b> El régimen interno del Gobierno Estatal o Municipal;</p> <p><b>4.</b> La designación del Gobernador interino, sustituto o provisional;</p> <p><b>5.</b> Juicio Político;</p> <p><b>6.</b> Los convenios con la Federación y con otros Estados de la República; y <b>7.</b> Las demás que determine la propia Constitución.</p> <p><b>b).</b> El Referéndum podrá ser promovido por:</p> <p><b>1.</b> El Titular del Poder Ejecutivo;</p> <p><b>2.</b> El tres por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral cuando se trate de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, iniciativas o proyectos de éstos en el ámbito estatal y reglamentos, bandos o acuerdos y demás disposiciones normativas o los proyectos correspondientes en el ámbito municipal.</p> <p>Tratándose de la Constitución Política del Estado, deberá reunirse el</p>	
---	--

cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en listas nominales de cuando menos quince municipios del Estado.

**3.** El Congreso del Estado, a solicitud de un grupo parlamentario y por acuerdo de mayoría simple en el pleno.

**4.** La mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia.

Para la declaración de validez del Referéndum se deberá contar con el voto de cuando menos el quince por ciento de los ciudadanos inscritos en listas nominales del padrón electoral del Estado o del que corresponda al municipio, según sea el caso.

El referéndum deberá realizarse hasta antes de la publicación e inicio de vigencia de cualquier reforma, adición o derogación a la Constitución Política del Estado de Morelos y a las leyes, decretos o acuerdos que expida el Congreso del Estado y a los acuerdos, reglamentos y demás disposiciones gubernativas que expida el Poder Ejecutivo del Estado o los Ayuntamientos, incluyendo los que sean de nueva creación; si la proporción de los ciudadanos requerida en esta Constitución manifiesta su consentimiento, el trámite administrativo o el proceso legislativo continuarán de manera legítima; en el caso de no aprobarse, el trámite administrativo o el proceso legislativo se extinguirá.

**III.** La iniciativa popular es el medio por el cual, los ciudadanos del Estado de Morelos podrán presentar al Congreso del Estado, al titular del Poder Ejecutivo o a los Ayuntamientos, en el primer caso, proyectos de modificación a la Constitución Política del Estado en los casos establecidos en este artículo, así como de leyes o decretos para la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de disposiciones normativas en el ámbito estatal; en los dos últimos casos, para la presentación de proyectos que creen, reformen, adicionen, deroguen o abroguen decretos, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones gubernativas en las materias de su respectiva competencia.

En todos los casos la autoridad ante la que se promueva la iniciativa popular, estará obligada invariablemente a dar respuesta a los solicitantes, en un plazo no mayor de sesenta días hábiles, contados a partir de la recepción de la iniciativa.

La iniciativa popular corresponde a cualquier ciudadano del Estado.

No podrán ser objeto de Iniciativa Popular las materias señaladas por esta Constitución para el caso de improcedencia del Referéndum.

**IV.** La Revocación de Mandato, constituye un procedimiento mediante

el cual la comunidad electoral, o una parte significativa de ella, puede promover la destitución de los representantes o mandatarios electos, antes de que concluyan su periodo, mediante comicios especiales donde se les confirme o destituya, sin necesidad de agotar la instancia de juicio político, en los casos de fuero constitucional. Las causas por las que podrá promoverse revocación de mandato son:

**a).** Incumplimiento de compromisos contraídos en campaña, por lo tanto los candidatos a puestos de elección popular deberán tomar sus propuestas de campaña como programas de gobierno o en su caso, planes de desarrollo, de llegar a resultar electos. Para efectos de lo anterior, las propuestas referidas deberán ser depositadas y constatadas ante el Instituto Estatal Electoral disponiéndose su cumplimiento como obligatorio.

**b).** Pérdida de legitimidad, a través del incumplimiento constante en las obligaciones derivadas del ejercicio del cargo, que se consagren en la legislación respectiva.

**c).** Actos de corrupción política como el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, el caciquismo, el soborno, extorsiones, malversación, prevaricación, compadrazgo, cooptación, nepotismo e impunidad.

**d).** Violación de derechos humanos conforme a lo establecido en la legislación vigente aplicable.

**e).** La connivencia, entendida esta como el asentimiento o tolerancia para con las faltas a la normatividad e incluso delitos que cometan sus subordinados. El número de ciudadanos que deberá suscribir la solicitud de Revocación de Mandato deberá ser el veinte por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del Estado o de la que corresponda al municipio o distrito electoral, según sea el caso.

Procederá la revocación cuando de los comicios especiales convocados al efecto se obtenga un número igual al de los votos que para ser electo obtuvo el servidor público o representante popular en cuestión, más uno.

En caso de resultar procedente la revocación de mandato, se estará a lo dispuesto en la presente Constitución

**V.** La Rendición de Cuentas, como medio por el cual el Consejo de Participación Ciudadana podrá solicitar información a los funcionarios públicos estatales o municipales, mandatarios y representantes populares, así como a los servidores públicos en general.

**B. DEL CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**

**1.** El Consejo Estatal de Participación Ciudadana es un organismo permanente encargado de la calificación de procedencia de los medios de participación ciudadana contemplados en esta Constitución, así como de observación y evaluación del trabajo gubernamental y legislativo; formado por quince representantes de la sociedad civil debiendo acreditar los siguientes requisitos:

**I.** Tener un amplio reconocimiento por su compromiso de servicio a la Sociedad.

**II.** No ser empleado de gobierno o funcionario público.

**III.** Estar inscrito en el padrón electoral de Morelos.

**IV.** Tener por lo menos 10 años de residencia en el Estado.

**V.** No ser, ni haber sido en el año inmediato anterior, integrante de las dirigencias de partidos políticos a nivel municipal, estatal o federal.

El cargo de Consejero será honorífico. Cada Consejero tendrá un suplente y si cualquiera de ellos (titular o suplente) fuera nombrado funcionario o empleado del Gobierno, automáticamente será substituido.

El Consejo trabajará en forma colegiada y expedirá su Reglamento interno con base en lo establecido en esta Constitución y en la Ley reglamentaria. Entre los objetivos del Consejo estará además el promover y desarrollar Planes y programas a largo plazo, que sirvan de base para los Programas Anuales de Desarrollo de los Gobiernos en el Estado.

**2.** El Consejo será el organismo encargado de calificar la procedencia o improcedencia de las solicitudes de Plebiscito, Referéndum, Revocación de Mandato, Iniciativa Popular y Rendición de Cuentas que se presenten.

El Consejo Estatal de Participación Ciudadana, con el apoyo ejecutivo del Organismo Público Electoral de Morelos, se encargará de preparar, desarrollar, vigilar y calificar los procesos de Revocación de Mandato, Rendición de Cuentas, Referéndum y de Plebiscito, que sean promovidos de conformidad con la

Constitución Política del Estado y la Ley de la materia.

Corresponde al Organismo Público Electoral de Morelos, la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana previstos por la Legislación Local.

<p>En ningún caso la ausencia de texto normativo impedirá que se ejerzan los derechos de los ciudadanos.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>TITULO SEGUNDO                  DE LOS PODERES PUBLICOS                  CAPITULO I                  DIVISION DE PODERES</b></p> <p><b>ARTICULO 22.</b> Los poderes públicos residirán en la Ciudad de Cuernavaca, <u>pero por causas graves podrán trasladarse temporalmente a otro lugar.</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO SEGUNDO                  DE LOS PODERES PUBLICOS                  CAPITULO I                  DIVISION DE PODERES</b></p> <p><b>ARTICULO 22.</b> Los poderes públicos residirán en la Ciudad de Cuernavaca <b>y en segundo término en su Zona Metropolitana</b>, pero por causas graves podrán trasladarse temporalmente a otro lugar.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO II                  INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES</b></p> <p><b>ARTICULO 23.</b> Los procesos electorales del Estado, se efectuarán conforme a las bases que establecen la presente Constitución y las Leyes de la materia y se sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género. Las fórmulas para Diputados al Congreso del Estado que registren los Partidos Políticos, tanto en el caso de mayoría relativa, como de representación proporcional, estarán compuestas cada una por un Propietario y un Suplente ambos del mismo género. <u>La Lista de Representación Proporcional de Diputados al Congreso del Estado, se integrarán alternando las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar la lista.</u>  <u>Las listas de candidatos a Regidores que presenten los Partidos Políticos, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género. Con el objeto de garantizar la paridad de género, la lista de regidores alternará las fórmulas de distinto género, hasta agotar la lista correspondiente.</u></p> <p>...</p> <p>...</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO II                  INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b></p> <p><b>ARTICULO 23.</b> Los procesos electorales y de participación ciudadana del Estado, se efectuarán conforme a las bases que establecen la presente Constitución y las Leyes de la materia y se sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género. Las fórmulas para Diputados al Congreso del Estado que registren los Partidos Políticos, tanto en el caso de mayoría relativa, como de representación proporcional, estarán compuestas cada una por un propietario y un suplente ambos del mismo género. Las listas de representación proporcional de Diputados al Congreso del Estado, se integrarán alternando las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar la lista.</p> <p><b>Los partidos políticos y candidatos independientes deberán postular una planilla con candidaturas a la presidencia municipal, sindicatura, y regidurías. La planilla deberá alternar los géneros desde la presidencia municipal hasta la última regiduría. Los partidos políticos no podrán postular candidatos de un mismo género en más de la mitad de sus candidaturas a Presidencias Municipales si el número de sus candidaturas es par o en más de la mitad más una en caso de candidaturas impares. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellas candidaturas a presidencias municipales en las que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.</b></p> <p>...</p>

<p>...</p> <p><b>I. a II. ...</b></p> <p><b>III. ...</b></p> <p>El financiamiento público para los Partidos Políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las de carácter específico y las tendientes a la obtención del voto durante los Procesos Electorales. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la Ley normativa de la materia:</p> <p><b>a).</b> El financiamiento público del Estado para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento <u>del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal.</u></p> <p>El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los Partidos Políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de Diputados inmediata anterior;</p> <p><b>b). al c). ...</b></p> <p><b>IV. ...</b></p> <p><b>V.</b> La organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a través <u>Organismo Público Electoral de Morelos</u>, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.</p> <p>Las elecciones locales estarán a cargo <u>del Organismo Público Electoral de Morelos</u> y podrá delegarla al Instituto Nacional de Elecciones en los términos de esta Constitución y la Ley en la materia.</p>	<p>...</p> <p>...</p> <p><b>I. a II. ...</b></p> <p><b>III. ...</b></p> <p>El financiamiento público para los Partidos Políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las de carácter específico y las tendientes a la obtención del voto durante los Procesos Electorales. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la Ley normativa de la materia:</p> <p><b>a).</b> El financiamiento público del Estado para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la <b>Unidad de Medida y Actualización que se determine por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.</b></p> <p>El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los Partidos Políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de Diputados inmediata anterior;</p> <p><b>b). al c). ...</b></p> <p><b>IV. ...</b></p> <p><b>V.</b> La organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a través del <b>Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana</b>, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.</p> <p>Las elecciones locales estarán a cargo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y podrá delegarla al Instituto Nacional Electoral en los términos de esta Constitución y la Ley en la materia.</p> <p><b>El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana</b>, es un organismo público local electoral autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración concurren los partidos políticos y la ciudadanía, en términos de la normativa aplicable.</p> <p>Será autoridad en la materia electoral y de participación ciudadana,</p>
--	---

<p><u>El Organismo Público Electoral de Morelos</u> ejercerá las funciones en las siguientes materias:</p> <p><b>1. a 11. ...</b></p> <p>Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección <u>del Organismo Público Electoral de Morelos.</u></p> <p><u>Al Organismo Público Electoral de Morelos se le dispondrán los medios necesarios para acceder al Servicio Profesional Electoral.</u></p> <p><u>El Consejo Estatal de Participación Ciudadana, calificará la procedencia o improcedencia de las solicitudes de plebiscito, referéndum o revocación de mandato y se encargará de la organización, dirección y vigilancia de estos procedimientos de participación ciudadana, con la participación ejecutiva del Organismo Público Electoral de Morelos, salvaguardando los derechos ciudadanos, de conformidad con el artículo 19 Bis de esta Constitución y la ley reglamentaria.</u></p> <p>...</p> <p><u>El Organismo Público Electoral de Morelos</u> podrá, con la aprobación de la mayoría de votos de su Consejo, solicitar al Instituto Nacional Electoral la asunción parcial de alguna actividad propia de la función electoral que les corresponde. Dicho Instituto resolverá sobre la asunción parcial en los términos establecidos en la legislación general de la materia.</p> <p>...</p> <p>En el caso de la facultad de atracción a que se refiere el inciso c), del Apartado C, de la Base V, del artículo 41, de la Constitución Política de</p>	<p>profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, conforme lo determine la normativa aplicable, se estructurará con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos.</p> <p><b>El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana</b>, ejercerá las funciones en las siguientes materias:</p> <p><b>1. a 11. ...</b></p> <p>Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.</p> <p><b>El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana</b> deberá implementar, vigilar y desarrollar el Servicio Profesional Electoral, en el ámbito de su competencia y en los términos de la normativa aplicable.</p> <p>Al <b>Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana</b>, se le dispondrán los medios necesarios para acceder al Servicio Profesional Electoral.</p> <p><b>El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana</b>, calificará la procedencia o improcedencia, y se encargará de la organización, dirección y vigilancia de los mecanismos de participación ciudadana que contemple la ley en la materia, salvaguardando los derechos ciudadanos, de conformidad con el artículo 19 Bis de esta Constitución y la normativa aplicable.</p> <p>Los mecanismos de participación ciudadana que se convoquen, se podrán efectuar en cualquier tiempo, salvo aquellos que requieran llevarse a cabo a la par de la jornada electoral de elecciones constitucionales, de conformidad con la normativa aplicable.</p> <p><b>El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana</b>, expedirá su propio Estatuto, con el que regulará su organización y funcionamiento internos, conforme a las bases que establece esta Constitución y demás normativa aplicable.</p> <p>...</p> <p><b>El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana</b> podrá, con la aprobación de la mayoría de votos de su Consejo, solicitar al Instituto Nacional Electoral la asunción parcial de alguna actividad propia de la función electoral que les corresponde. Dicho Instituto resolverá sobre la asunción parcial en los términos establecidos en la legislación general de la materia.</p>
--	--



<p>los Estados Unidos Mexicanos, la petición sólo podrá formularse por al menos cuatro de los Consejeros Electorales del Consejo del Organismo Público Electoral de Morelos.</p> <p><b>VI.</b> El Organismo Público Electoral de Morelos, se integrará por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto, un Secretario Ejecutivo y un representante por cada uno de los Partidos Políticos con registro, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la normatividad aplicable.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>La fiscalización de todos los ingresos y egresos del <u>Organismo Público Electoral de Morelos</u>, estará a cargo de un órgano interno de control, mismo que tendrá autonomía técnica y de gestión.</p> <p>La persona titular del órgano interno de control <u>del Organismo Público Electoral de Morelos</u>, será designado por el Congreso del Estado con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, en la forma y términos que determine la normativa aplicable. Durará seis años en el cargo y sólo podrá ser designado para un periodo más. Estará adscrito administrativamente al Consejero Presidente y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.</p> <p><b>VII.</b> ...</p>	<p>...</p> <p>En el caso de la facultad de atracción a que se refiere el inciso c), del Apartado C, de la Base V, del artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la petición sólo podrá formularse por al menos cuatro de los Consejeros Electorales del Consejo del <b>Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana</b>.</p> <p><b>VI.</b> El <b>Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana</b>, se integrará por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto, un Secretario Ejecutivo y un representante por cada uno de los Partidos Políticos con registro, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la normatividad aplicable.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>La fiscalización de todos los ingresos y egresos del <b>Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana</b>, estará a cargo de un órgano interno de control, mismo que tendrá autonomía técnica y de gestión.</p> <p>La persona titular del órgano interno de control del <b>Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana</b>, será designado por el Congreso del Estado con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, en la forma y términos que determine la normativa aplicable. Durará seis años en el cargo y sólo podrá ser designado para un periodo más. Estará adscrito administrativamente al Consejero Presidente y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.</p> <p><b>VII.</b> ...</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITULO TERCERO                  DEL PODER LEGISLATIVO                  CAPITULO I                  DE LA ELECCION Y CALIDAD DE LOS DIPUTADOS                  ARTICULO 24. ...</b></p> <p>Al Partido Político que obtenga en las respectivas elecciones el tres por ciento de <u>la votación válida emitida</u>, se le asignará una diputación por el</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO TERCERO                  DEL PODER LEGISLATIVO                  CAPITULO I                  DE LA ELECCION Y CALIDAD DE LOS DIPUTADOS                  ARTICULO 24. ...</b></p> <p>Al Partido Político que obtenga en las respectivas elecciones el tres por ciento de la <b>votación válida emitida para diputados</b>, se le asignará una</p>

<p>principio de representación proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>diputación por el principio de representación proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p><b>ARTICULO 25.</b> Para ser Diputado propietario o suplente se requiere:  <b>I. Ser morelense por nacimiento, <u>o ser morelense por residencia con antigüedad mínima de diez años anteriores a la fecha de la elección;</u></b></p> <p><b>II. a IV. ...</b></p> <p>...</p> <p>...</p>	<p><b>ARTICULO 25.</b> Para ser Diputado propietario o suplente se requiere:  <b>I. Ser morelense por nacimiento <u>o con residencia efectiva de tres años anteriores a la fecha de la elección, en pleno goce de sus derechos como ciudadano del estado.</u></b></p> <p><b>II. a IV. ...</b></p> <p>...</p> <p>...</p>
<p><b>ARTICULO 26.</b> No pueden ser Diputados:  <b>I. a II. ...</b></p> <p><b>III.</b> Los Secretarios o Subsecretarios de Despacho, el Fiscal General del Estado de Morelos, los Fiscales y Fiscales Especializados, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, los Jueces de Primera Instancia, los Agentes del Ministerio Público, los administradores de rentas Estatales o Municipales, los Delegados o equivalentes de la Federación, los miembros del Ejército en servicio activo y los Jefes o Mandos Superiores de Policía de Seguridad Pública Estatal o Municipal y los Presidentes Municipales o los titulares de algún Órgano Político-Administrativo, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se separe del cargo noventa días antes de la fecha de la elección;</p> <p><b>IV. <u>El Consejero Presidente o los Consejeros Electorales del Organismo Público Electoral de Morelos, el Secretario Ejecutivo o el Director Ejecutivo del Organismo Público Electoral del Estado,</u> salvo que se separen del cargo tres años antes de la fecha de inicio del</b></p>	<p><b>ARTICULO 26.</b> No pueden ser Diputados:  <b>I. a II. ...</b></p> <p><b>III.</b> Los Secretarios o Subsecretarios de Despacho, el Fiscal General del Estado de Morelos, los Fiscales y Fiscales Especializados, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, los Jueces de Primera Instancia, los Agentes del Ministerio Público, los administradores de rentas Estatales o Municipales, los Delegados o equivalentes de la Federación, los miembros del Ejército en servicio activo y los Jefes o Mandos Superiores de Policía de Seguridad Pública Estatal o Municipal y los presidentes municipales, <b>así como quienes ocupen un cargo de dirección en los gobiernos federal, estatal y municipal o ejerzan bajo cualquier circunstancia las mismas funciones, los titulares de los organismos públicos autónomos, salvo que se separen del cargo ciento ochenta días antes del día de la fecha de la elección. Los Diputados que pretendan ser reelectos, podrán optar por no separarse de su cargo, en términos de la normativa aplicable;</b></p> <p><b>IV. El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales <u>y el Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,</u> salvo que se separen del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y los</b></p>

<p>proceso electoral de que se trate; y los Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, aún si se separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Constitución;  <b>V. a VIII. ...</b></p>	<p>Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, aún si se separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Constitución;  <b>V. a VIII. ...</b></p>
<p><b>ARTICULO 32.</b> El Congreso del Estado tendrá cada año dos períodos de sesiones ordinarias, el primero se iniciará el <u>1 de septiembre y terminará el 15 de diciembre; el segundo empezará el 1 de febrero y concluirá el 15 de julio.</u> El Congreso se ocupará, conforme a sus facultades, del examen y la revisión de la cuenta pública del Estado, a través de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, misma que se presentará trimestralmente, a más tardar el último día hábil del mes siguiente a aquel en que concluya cada trimestre de calendario, conforme al avance de gestión financiera en concordancia con el avance del Plan Estatal de Desarrollo, los programas operativos anuales sectorizados y por dependencia u organismo auxiliar y, en su caso, del programa financiero.          El Congreso del Estado a más tardar el <b>1</b> de octubre de cada año, recibirá la Iniciativa de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el Ejercicio Fiscal siguiente, así como las Iniciativas de Ley de Ingresos del Estado y de los Municipios, para su examen, discusión y aprobación.</p> <p>Quando el Gobernador inicie su encargo entregará las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado a más tardar el <b>15</b> de noviembre de ese año; <u>de igual forma los Presidentes Municipales que inician su encargo, presentarán al Congreso del Estado sus iniciativas de Ley de Ingresos en la misma fecha. El Congreso del Estado deberá aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado y las Leyes de Ingresos Municipales a más tardar el 15 de diciembre de cada año.</u>          Los Poderes del Estado, Entidades, Organismos Públicos Autónomos, presentarán al Congreso a más tardar el <b>día 30</b> de abril de cada año, la</p>	<p><b>ARTICULO 32.</b> El Congreso del Estado tendrá cada año dos períodos de sesiones ordinarias, el primero se iniciará el <b>uno</b> de septiembre y terminará el <b>quince</b> de diciembre; el segundo empezará el <b>uno</b> de febrero y concluirá el <b>quince</b> de julio. El Congreso se ocupará, conforme a sus facultades, del examen y la revisión de los informes sobre la cuenta pública del Estado, a través de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, mismos que se presentarán trimestralmente, a más tardar el último día hábil del mes siguiente a aquel en que concluya cada trimestre de calendario, conforme al avance de gestión financiera en concordancia con el avance del Plan Estatal de Desarrollo, los programas operativos anuales sectorizados y por dependencia u organismo auxiliar y, en su caso, del programa financiero.          El Congreso del Estado a más tardar el <b>uno</b> de octubre de cada año, recibirá la Iniciativa de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal siguiente, así como las Iniciativas de Ley de Ingresos del Estado y de los Municipios, para su examen, discusión y aprobación, <b>debiendo aprobarlas a más tardar el quince de diciembre de cada año. Las iniciativas de Presupuesto de Egresos del Estado y de Ley de Ingresos del Estado y de los Municipios deberán apegarse a los objetivos, parámetros cuantificables e indicadores de desempeño, congruentes con la normativa aplicable y con el Plan Estatal de Desarrollo, los Planes Municipales de Desarrollo y sus consecuentes Programas.</b>          Cuando el Gobernador inicie su encargo entregará las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado a más tardar el <b>quince</b> de noviembre de ese año.  <b>El año en el que los ayuntamientos inician su encargo, podrán presentar al Congreso del Estado a más tardar el treinta y uno de enero, una nueva Iniciativa de Ley de Ingresos que abrogue la ya aprobada o que reforme a la vigente. El Congreso deberá discutirla y aprobarla a más tardar el último día de febrero de ese año.</b>          Los Poderes del Estado, Entidades y Organismos Públicos Autónomos, presentarán al Congreso a más tardar el <b>día treinta de abril</b> de cada</p>

<p>Cuenta Pública correspondiente al año anterior, debidamente integrada y aprobada por el órgano de gobierno que corresponda, a excepción del año en que concluyan un período constitucional e inicien uno nuevo, en cuyo caso la aprobación de la cuenta pública corresponderá a cada uno por el período a su cargo y deberá ser consolidada y presentada al Congreso por la nueva administración, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a los funcionarios públicos en funciones en cada período constitucional.</p> <p>Los ayuntamientos presentarán al Congreso a más tardar el día <u>30 de abril de cada año</u>, la cuenta pública correspondiente al año anterior debidamente integrada y aprobada por el Cabildo, <u>a excepción del año en que concluya una administración municipal, en cuyo caso la aprobación de la cuenta pública corresponderá a cada uno por el período a su cargo y deberá ser consolidada y presentada al Congreso por la nueva administración, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a los funcionarios públicos en funciones en cada período constitucional.</u></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...El Congreso concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el <b>31</b> de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior, a que se refiere el artículo 84 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, seguirán su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo.</p> <p>Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, <u>el Organismo Público Electoral del Estado</u>, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Municipios así como los organismos públicos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, deberán incluir dentro de su proyecto de presupuesto, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que</p>	<p>año, la Cuenta Pública correspondiente al año anterior, debidamente integrada y aprobada por el órgano de gobierno que corresponda, a excepción del año en que concluyan un período constitucional e inicien uno nuevo, en cuyo caso la aprobación de la cuenta pública corresponderá a cada uno por el período a su cargo y deberá ser consolidada y presentada al Congreso por la nueva administración, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a los funcionarios públicos en funciones en cada período constitucional.</p> <p>Los ayuntamientos presentarán al Congreso a más tardar el <b>día treinta y uno de enero</b> de cada año, la cuenta pública correspondiente al año anterior debidamente integrada y aprobada por el Cabildo, <b>los Ayuntamientos que concluyan su período deberán presentarla en la misma fecha.</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>El Congreso concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el <b>treinta y uno</b> de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior, a que se refiere el artículo 84 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, seguirán su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo.</p> <p>Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, <b>el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana</b>, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Municipios así como los organismos públicos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, deberán incluir dentro de su proyecto de presupuesto, los tabuladores desglosados de las</p>
---	--

<p>se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables.</p>	<p>remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO III</b> <b>DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO</b></p> <p><b>ARTICULO 40.</b> Son facultades del Congreso:  <b>I. a X. ...</b>  <b>XI.</b> Crear nuevos Municipios dentro de los límites de los existentes, previos los siguientes requisitos:  <b>A). al C).</b> ...  <b>D).</b> <u>Que el Ayuntamiento del Municipio que se trata de desmembrar rinda un informe sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección de la nueva entidad municipal; quedando obligado a dar un informe dentro de los 30 días siguientes a aquél en que le fuere pedido;</u>   <b>E).</b> ...  <b>F).</b> <u>Que la erección del nuevo Municipio sea aprobada por las dos terceras partes de los Diputados presentes;</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO III</b> <b>DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO</b></p> <p><b>ARTICULO 40.</b> Son facultades del Congreso:  <b>I. a X. ...</b>  <b>XI.</b> Crear nuevos Municipios dentro de los límites de los existentes, previos los siguientes requisitos:  <b>A). al C).</b> ...  <b>D).</b> Que el Ayuntamiento del Municipio que se trata de desmembrar rinda un informe sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección de la nueva entidad municipal; quedando obligado a dar un informe dentro de los 30 días siguientes a aquél en que le fuere pedido; <b>si transcurriese el plazo fijado sin que el Ayuntamiento rinda el informe requerido, se entenderá que no existe observación contraria a la creación pretendida;</b>  <b>E).</b> ...  <b>F).</b> Que la erección del nuevo Municipio sea aprobada por las dos terceras partes de los Diputados presentes;  <b>Para la creación de municipios conformados por pueblos o comunidades indígenas, se aplicarán criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico, que acrediten que las comunidades indígenas que se pretendan integrar mediante el reconocimiento como municipio, conformen una unidad política, social, cultural, con capacidad económica y presupuestal, asentada en un territorio determinado y que descenden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización o del establecimiento de los actuales límites estatales y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, debiéndose cumplir sólo con los requisitos señalados en los incisos D), E) y F) de esta fracción.</b>  <b>A la creación de un nuevo Municipio, se deberá constituir un Concejo Municipal, el que ejercerá el gobierno en términos de la legislación orgánica municipal, hasta en tanto se efectúen elecciones ordinarias. En la integración de un Concejo Municipal en un Municipio conformado por comunidades indígenas, deberán tomarse en cuenta consideraciones específicas respecto de sus usos y costumbres, con</b></p>

<p><b>XII. a XVII. ...</b>  <b>XVIII.</b> Rehabilitar en sus derechos cívico políticos a los ciudadanos del Estado, que les hayan sido suspendidos;  <b>XIX. ...</b>  <b>XX.</b> Expedir Leyes relativas a la relación de trabajo entre los Poderes y los Ayuntamientos de los Municipios del Estado y sus trabajadores y la seguridad social de dichos trabajadores, sin contravenir las siguientes bases:  <b>A). al E).</b> ...  <b>F).</b> Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o embargos al salario, en los casos previstos en las Leyes;</p> <p><b>G). al M).</b> ...  <b>XXI.</b> Dictar las Leyes que estime pertinentes para combatir el alcoholismo y el uso de yerbas y sustancias enervantes;</p> <p><b>XXII. a XXVI. ...</b>  <b>XXVII.</b> Recibir de los Diputados, Gobernador, Fiscal General del Estado, <u>Magistrados del Tribunal Superior de Justicia</u>, Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, la protesta a que se refiere el artículo 133 de esta Constitución;</p> <p><b>XXVIII. a XXXI. ...</b>  <b>XXXII.</b> Admitir la renuncia de sus cargos a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, del Fiscal General del Estado, Fiscal Especializado <u>para la Investigación de Hechos de Corrupción</u>, de los Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, del Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, del Presidente y Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, así como a los titulares de los <u>Órganos Superiores de los Organismos Públicos Constitucionales Autónomos y los titulares</u></p>	<p><b>atención y respeto a sus condiciones políticas y sociales.</b>  <b>XII. a XVII. ...</b>  <b>XVIII.</b> Derogada;</p> <p><b>XIX. ...</b>  <b>XX.</b> Expedir Leyes relativas a la relación de trabajo entre los Poderes y los Ayuntamientos de los Municipios del Estado y sus trabajadores y la seguridad social de dichos trabajadores, sin contravenir las siguientes bases:  <b>A). al E).</b> ...  <b>F).</b> Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o embargos al salario, en los casos previstos en las Leyes;  <b>El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.</b>  <b>G). al M).</b> ...  <b>XXI.</b> Dictar las Leyes que estime pertinentes para combatir el alcoholismo y el uso de yerbas y sustancias enervantes; <b>así como para expedir la Ley que regule la mejora regulatoria y cree el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria;</b>  <b>XXII. a XXVI. ...</b>  <b>XXVII.</b> Recibir de los Diputados, Gobernador, Fiscal General del Estado, <b>Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción</b>, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización y Secretario de la Contraloría, la protesta a que se refiere el artículo 133 de esta Constitución;  <b>XXVIII. a XXXI. ...</b>  <b>XXXII.</b> Admitir la renuncia de sus cargos a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, del Fiscal General del Estado, del Fiscal Especializado <b>en Combate a la Corrupción</b>, de los Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, del Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, del Presidente y Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, así como a los titulares de los órganos internos de control de</p>
--	---

<p>de los órganos internos de control de cada uno de éstos;</p> <p><b>XXXIII.</b> Conceder licencias a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, <u>del Tribunal de lo Contencioso Administrativo</u>, del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, <u>al Fiscal General del Estado</u> y al Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, siempre que su ausencia exceda de treinta días;</p> <p><b>XXXIV. a XXXVI. ...</b></p> <p><b>XXXVII.</b> Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y al Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes de conformidad con lo previsto en esta Constitución; así como al Fiscal General del Estado de Morelos y al <u>Fiscal Especializado para la Investigación de Hechos de Corrupción</u>, estos últimos de entre la terna de ciudadanos que someta a su consideración el Ejecutivo del Estado.</p> <p><u>Asimismo, designar si fuera procedente, por un período más a los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes.</u></p> <p><b>XXXVIII.</b> Nombrar al Diputado que en forma conjunta con la mesa Directiva del Congreso del Estado, deba integrar la diputación permanente, conforme el artículo 53 de esta Constitución;</p> <p><b>XXXIX. a XLIII. ...</b></p> <p><b>XLIV.</b> Designar, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura, al Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado, así mismo designar con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, <u>a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y a los</u></p>	<p>los Organismos Constitucionales Autónomos;</p> <p><b>XXXIII.</b> Conceder licencias a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del <b>Tribunal de Justicia Administrativa</b>, del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, al Fiscal General del Estado, al <b>Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción</b> y al Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, siempre que su ausencia exceda de treinta días;</p> <p><b>XXXIV. a XXXVI. ...</b></p> <p><b>XXXVII.</b> Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y al Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes de conformidad con lo previsto en esta Constitución; así como al Fiscal General del Estado de Morelos y <b>al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción</b>, estos últimos de entre la terna de ciudadanos que someta a su consideración el Ejecutivo del Estado.</p> <p>Las designaciones a que alude esta fracción, deberán reunir el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso;</p> <p><b>XXXVIII.</b> <b>Examinar los informes sobre la cuenta pública que trimestralmente deberán presentar los Poderes del Estado, mismos que turnará a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, en los que se revisarán el ingreso y la aplicación de los recursos, se verificará su congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, los Programas Operativos Anuales sectorizados y por Dependencia u Organismo Auxiliar, en su caso, con el programa financiero y los informes de gobierno.</b></p> <p>Nombrar al Diputado que en forma conjunta con la mesa Directiva del Congreso del Estado, deba integrar la diputación permanente, conforme el artículo 53 de esta Constitución;</p> <p><b>XXXIX. a XLIII. ...</b></p> <p><b>XLIV.</b> Designar, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura, al Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado; así mismo</p>
--	---

<p>titulares de los órganos internos de control de los organismos públicos autónomos a que se refiere el artículo 23-C de esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado;</p> <p><b>XLV. a LI. ...</b>  <b>LII.</b> Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en todo el Estado, la declaración de Gobernador electo que hubiere hecho el <u>Organismo Público Electoral de Morelos</u> o el <u>Tribunal Electoral del Estado de Morelos</u>, en su caso;  <b>LIII. ...</b>  <b>LIV.</b> Solicitar al <u>Consejo de Participación Ciudadana y al Organismo Público Electoral de Morelos</u> se lleven a cabo los procesos de referéndum y plebiscito; y al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística que realice algún sondeo, encuesta o estadística, para cumplir con sus funciones;  <b>LV. a LIX. ...</b></p>	<p>designar con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos públicos autónomos a que se refiere el artículo 23-C de esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado; <b>a los miembros de la Comisión de Selección que elegirá a su vez a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción; así como ratificar con el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Legislatura, el nombramiento del Secretario de la Contraloría del Estado;</b>  <b>XLV. a LI. ...</b>  <b>LII.</b> Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en todo el Estado, la declaración de Gobernador electo que hubiere hecho el <b>Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana</b> o el <b>Tribunal Electoral del Estado de Morelos</b>, en su caso;  <b>LIII. ...</b>  <b>LIV.</b> Solicitar al <b>Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana</b>, que se lleven a cabo los procesos de participación ciudadana que corresponda, en términos de la normativa aplicable.  <b>LV. a LIX. ...</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO IV</b>  <b>DE LA INICIATIVA Y FORMACION DE LAS LEYES</b>  <b>ARTICULO 42.</b> El derecho de iniciar Leyes y decretos corresponde:  <b>I. a VI. ...</b>                  ...</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO IV</b>  <b>DE LA INICIATIVA Y FORMACION DE LAS LEYES</b>  <b>ARTICULO 42.</b> El derecho de iniciar Leyes y decretos corresponde:  <b>I. a VI. ...</b>                  ...  <b>En las iniciativas que se presenten al Congreso Local, se deberá incluir la estimación del impacto presupuestario que implique su implementación.</b></p>
<p><b>ARTICULO 43.</b> Las iniciativas presentadas por el Ejecutivo del Estado, por el Tribunal Superior de Justicia, por los Ayuntamientos o las signadas por uno o más Diputados, por los ciudadanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, pasarán desde luego a la Comisión respectiva del Congreso.</p>	<p><b>ARTICULO 43.</b> Las iniciativas presentadas por el Ejecutivo del Estado, por el Tribunal Superior de Justicia, por los Ayuntamientos o las signadas por uno o más Diputados, por los ciudadanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, pasarán desde luego a la Comisión respectiva del Congreso.  <b>Las Comisiones encargadas del estudio de las iniciativas, en la elaboración de los dictámenes con proyecto de ley o decreto, incluirán la estimación sobre el impacto presupuestario del mismo.</b></p>



<p><b>TITULO CUARTO                  DEL PODER EJECUTIVO                  CAPITULO I                  DEL GOBERNADOR</b></p>	<p><b>TITULO CUARTO                  DEL PODER EJECUTIVO                  CAPITULO I                  DEL GOBERNADOR</b></p>
<p><b>ARTICULO 58.</b> Para ser Gobernador se requiere:  <b>I. a II. ...</b>  <b>III.</b> Ser morelense por nacimiento con residencia efectiva no menor a cinco años antes de la elección, o morelense por residencia con una vecindad habitual efectiva en el estado no menor a cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección.                  ...  <b>IV. ...</b></p>	<p><b>ARTICULO 58.</b> Para ser Gobernador se requiere:  <b>I. a II. ...</b>  <b>III.</b> Ser morelense por nacimiento o morelense por residencia con una vecindad habitual efectiva en el estado no menor a doce años inmediatamente anteriores al día de la elección.                  ...  <b>IV. ...</b></p>
<p><b>ARTICULO 60.</b> No pueden ser Gobernador del Estado:  <b>I. a VI. ...</b>  <b>VII.</b> El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Organismo Público Electoral de Morelos, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, así como el personal directivo del <u>Organismo Público Electoral de Morelos ni los Comisionados del Instituto Morelense</u> de Información Pública y Estadística, aún si se separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Constitución.</p>	<p><b>ARTICULO 60.</b> No pueden ser Gobernador del Estado:  <b>I. a VI. ...</b>  <b>VII.</b> El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Organismo Público Electoral de Morelos, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, así como el personal directivo del <u>Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana</u>, ni los Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, aún si se separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Constitución.</p>
<p><b>CAPITULO II                  DE LAS FACULTADES, OBLIGACIONES Y RESTRICCIONES DEL GOBERNADOR</b></p>	<p><b>CAPITULO II                  DE LAS FACULTADES, OBLIGACIONES Y RESTRICCIONES DEL GOBERNADOR</b></p>
<p><b>ARTICULO 70.</b> Son facultades del Gobernador del Estado:  <b>I. a V. ...</b>  <b>VI.</b> <u>Designar o nombrar a los Secretarios de Despacho y al Consejero Jurídico, en una proporción que no exceda el 60 por ciento para un mismo género;</u>  <b>VII. a XVIII. ...</b>  <b>XIX.</b> Remitir al Congreso del Estado la cuenta <u>pública</u>, misma que será congruente con el avance de los programas operativos anuales por sector, <u>dependencia u organismo auxiliar durante cada trimestre del ejercicio fiscal y en los treinta días posteriores al cierre de cada uno de los mismos;</u>  <b>XX. a XXXI. ...</b>  <b>XXXII.</b> Solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y al Organismo</p>	<p><b>ARTICULO 70.</b> Son facultades del Gobernador del Estado:  <b>I. a V. ...</b>  <b>VI.</b> Designar o nombrar a los Secretarios de Despacho y al Consejero Jurídico, en una proporción que no exceda la mitad para un mismo género. <u>El nombramiento del Secretario de la Contraloría se sujetará a la ratificación del Congreso del Estado;</u>  <b>VII. a XVIII. ...</b>  <b>XIX.</b> Remitir al Congreso del Estado la cuenta pública <u>anual</u>, misma que será congruente con el avance de los programas operativos anuales por sector, dependencia u organismo auxiliar durante <u>cada ejercicio fiscal y en el plazo que establece el artículo 32 de esta Constitución;</u>  <b>XX. a XXXI. ...</b>  <b>XXXII.</b> Solicitar al <u>Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana</u>, inicie los procesos de Plebiscito y</p>

<p>Público Electoral de Morelos inicien los procesos de Plebiscito, Referéndum y <u>Revocación de Mandato</u> en los términos que disponga la Constitución y la Ley de la Materia;  <b>XXXIII. a XXXIX. ...</b>  <b>XL.</b> Informar trimestralmente al Congreso, sobre el ejercicio de las partidas correspondientes a los montos y conceptos de endeudamiento autorizado y con relación a la situación de la deuda pública estatal, <u>al rendir la cuenta pública. Incluyendo, asimismo, información detallada sobre los contratos de colaboración público privada en vigor y sobre la afectación de sus ingresos, como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, en términos de las leyes aplicables, en su caso;</u>  <b>XLI. a XLIII. ...</b></p>	<p>Referéndum en los términos que disponga la Constitución y la normativa aplicable;   <b>XXXIII. a XXXIX. ...</b>  <b>XL.</b> Informar trimestralmente al Congreso, sobre el ejercicio de las partidas correspondientes a los montos y conceptos de endeudamiento autorizado y con relación a la situación de la deuda pública estatal. Incluyendo, asimismo, información detallada sobre los contratos de colaboración público privada en vigor y sobre la afectación de sus ingresos, como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, en términos de las leyes aplicables, en su caso;   <b>XLI. a XLIII. ...</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO III</b>  <b>DE LOS SECRETARIOS Y DEMAS SERVIDORES PUBLICOS</b>  <b>ARTICULO 75.</b> Para ser Secretario de Despacho se requiere:  <b>I. a II. ...</b>  <b>III.</b> Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión.  <u>Para ser Consejero Jurídico, se deberá reunir los mismos requisitos que esta Constitución exige para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia.</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO III</b>  <b>DE LOS SECRETARIOS Y DEMAS SERVIDORES PUBLICOS</b>  <b>ARTICULO 75.</b> Para ser Secretario de Despacho se requiere:  <b>I. a II. ...</b>  <b>III.</b> Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión.  <b>El Secretario de la Contraloría del Estado, deberá cumplir con los mismos requisitos que para ser Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, establecidos en esta Constitución.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO IV</b>  <b>DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS</b>  <b>ARTICULO 79-B. ...</b>          ...          ...          ...          ...          ...          ...          Para ser Fiscal General del Estado se deberán reunir los siguientes requisitos:  <b>I. a VI. ...</b>          La residencia no se interrumpirá por el desempeño de un cargo de elección popular al Congreso de la Unión o un empleo, cargo o</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO IV</b>  <b>DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS</b>  <b>ARTICULO 79-B. ...</b>          ...          ...          ...          ...          ...          ...          Para ser Fiscal General del Estado se deberán reunir los siguientes requisitos:  <b>I. a VI. ...</b>          La residencia no se interrumpirá por el desempeño de un cargo de elección popular al Congreso de la Unión o un empleo, cargo o</p>

<p>comisión en la Administración Pública Federal.                  El requisito de residencia a que se refiere la fracción I del presente artículo, podrá ser dispensado en el caso de que quien ocupe el cargo de Fiscal General del Estado acredite fehacientemente el haber servido en alguna institución del Ministerio Público del País, durante al menos los cinco años previos a la designación.  <u>Además de los servidores públicos dependientes del Fiscal General que se señalen en la normativa aplicable, contará con un Fiscal Especializado para la Investigación de Hechos de Corrupción, integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyas atribuciones y funciones se establecerán en la respectiva ley.</u></p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>comisión en la Administración Pública Federal.                  El requisito de residencia a que se refiere la fracción I del presente artículo, podrá ser dispensado en el caso de que quien ocupe el cargo de Fiscal General del Estado acredite fehacientemente el haber servido en alguna institución del Ministerio Público del País, durante al menos los cinco años previos a la designación.                  La Fiscalía General se integrará, además, de la estructura que establezca su Ley Orgánica, con una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual tendrá, autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, capacidad para decidir el ejercicio de su presupuesto, para determinar su organización interna y sobre su funcionamiento, actos y resoluciones. Al frente de ésta Fiscalía estará un Fiscal Especializado designado en los términos de ésta Constitución, quien deberá actuar con base en los principios que rigen a la Fiscalía General y será integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyas facultades y competencias se establecerán en la Ley Orgánica.</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO V                  DE LA HACIENDA PÚBLICA, PROGRAMACION Y DEL                  DESARROLLO URBANO Y RURAL</b></p> <p><b>ARTICULO 81.</b> <u>La administración de los ingresos y egresos del Estado estará a cargo de los servidores públicos que determine la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO V                  DE LA HACIENDA PÚBLICA, PROGRAMACION Y DEL                  DESARROLLO URBANO Y RURAL</b></p> <p><b>ARTICULO 81.</b> La administración de los ingresos y egresos del Estado, se efectuará con base en los principios de legalidad, honestidad, honradez, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.                  Los servidores públicos que les corresponda la administración de recursos del Estado, observarán el cumplimiento de estos principios, así como de la ley de la materia y demás normatividad aplicable; y serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos en términos de esta Constitución y la normativa aplicable.                  La aplicación de los recursos estatales, se evaluará de acuerdo con las Leyes de la materia.</p>
<p><b>ARTICULO 82.</b> ...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p><b>ARTICULO 82.</b> ...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>

	<p>Para determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las leyes estatales y las disposiciones jurídicas que de ellas emanan conforme a esta Constitución, se tomará como unidad de cuenta el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se determine por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.</p> <p>Las obligaciones y supuestos denominados en la citada Unidad de Medida y Actualización, se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional, en la inteligencia de que deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en la citada unidad, por el valor de esta última a la fecha correspondiente.</p>
<p><b>ARTICULO 84. ...</b>          ...          ...          ...          ...          ...          ...  <b>A.</b> La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos tendrá las siguientes facultades:  <b>I.</b> Fiscalizar los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de los recursos de los poderes del estado, todos los organismos y entidades públicas y de cualquier entidad, persona física o moral pública o privada y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otro acto jurídico, así como la evaluación sobre el cumplimiento de sus objetivos y metas establecidos en sus programas.          ...          ...          ...          ...          ...</p>	<p><b>ARTICULO 84. ...</b>          ...          ...          ...          ...          ...          ...  <b>A.</b> La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos tendrá las siguientes facultades:  <b>I.</b> Fiscalizar los ingresos, egresos, <b>la deuda pública</b>, el manejo, la custodia y la aplicación de los recursos de los poderes del estado, todos los organismos y entidades públicas y de cualquier entidad, persona física o moral pública o privada y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otro acto jurídico, así como la evaluación sobre el cumplimiento de sus objetivos y metas establecidos en sus programas.          ...          ...          ...          ...          ...          ...          También podrá solicitar y revisar, derivado de denuncias y con la previa autorización de su Titular, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el</p>

<p>...</p> <p><b>II. a III. ...</b></p> <p><b>IV.</b> En su caso, determinar las responsabilidades administrativas en que incurran los servidores públicos del Estado, y municipios, promover juicios civiles y presentar denuncias o querellas y actuar como coadyuvante del Ministerio Público;</p> <p><b>V. a IX. ...</b></p> <p><b>B. ...</b></p>	<p>presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales en términos de la norma aplicable. Las observaciones y recomendaciones que respectivamente emita la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.</p> <p>...</p> <p><b>II. a III. ...</b></p> <p><b>IV.</b> Determinar las responsabilidades administrativas que la ley considere como no graves en las que incurran los servidores públicos, <b>así como presentar denuncias penales que se estimen procedentes, en cuanto se percate de la posible comisión de un delito.</b></p> <p><b>V. a IX. ...</b></p> <p><b>B. ...</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>TITULO QUINTO                  DEL PODER JUDICIAL                  CAPITULO II                  DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA</b></p> <p><b>ARTICULO 89. ...</b></p> <p>Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia rendirán su protesta ante el Pleno del Congreso o la Diputación Permanente, durarán en su cargo <b>seis años</b>, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta constitucional, podrán ser <u>designados para un periodo más y si lo fueren, continuarán en esa función únicamente ocho años más, y sólo podrán ser privados del cargo en los términos que establezcan esta Constitución y las leyes en materia de responsabilidad de los servidores públicos.</u></p> <p>La designación para un período más sólo procederá, de los resultados que arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a través del órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos, e indicadores de gestión, que para dicha evaluación establezca esta Constitución y las leyes en la materia.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado y haya procedido su designación para un nuevo período en términos de esta constitución, podrá volver a ocupar el cargo. En ningún caso y por ningún motivo, los Magistrados que hubieran ejercido el cargo con el carácter de titular, provisional o interino, podrán rebasar catorce años</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO QUINTO                  DEL PODER JUDICIAL                  CAPITULO II                  DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA</b></p> <p><b>ARTICULO 89. ...</b></p> <p>Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, rendirán su protesta ante el Pleno del Congreso o la Diputación Permanente, durarán en su cargo <b>catorce años</b> contados a partir de la fecha en que rindan la protesta constitucional <b>y sólo podrán ser privados del cargo en los términos que establece esta Constitución y las leyes en materia de responsabilidad de los servidores públicos.</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Ninguna que persona que haya sido nombrada magistrado del Tribunal Superior de Justicia podrá volver a ocupar dicho cargo. En ningún caso y por ningún motivo, los Magistrados que hubieran ejercido el cargo con el carácter de titular, provisional o interino, podrán rebasar catorce años</p>

<p>en el cargo.</p> <p>...</p> <p>El Consejo de la Judicatura elaborará un dictamen técnico en el que analizará y emitirá opinión sobre la actuación y desempeño de los magistrados que concluyan su período. Los dictámenes técnicos y los expedientes de los Magistrados serán enviados al órgano político del Congreso del Estado para su estudio y evaluación, por lo menos noventa días hábiles antes de que concluya el período para el que fueron nombrados. El dictamen técnico será un elemento más entre todos los que establezca el órgano político del Congreso, para la evaluación del magistrado que concluye sus funciones. La omisión en remitir los documentos en cita dará lugar a responsabilidad oficial.</p> <p>El procedimiento para la evaluación y en su caso la designación para un período más de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia por el Congreso, junto con la evaluación de los aspirantes que de acuerdo al procedimiento y convocatoria pública que emita el órgano político del Congreso, hayan reunido los requisitos que se señalen, se realizará conforme lo establezcan esta Constitución y las leyes en la materia.</p> <p>El Congreso del Estado conforme a sus facultades, decide sobre la designación de los Magistrados, mediante el voto de las dos terceras partes de los Diputados integrantes de la Legislatura. <u>Si el Congreso resuelve que no procede la designación para un nuevo período, el Magistrado cesará en sus funciones a la conclusión del período para el que fue nombrado.</u></p> <p>El retiro forzoso de los Magistrados se producirá al cumplir <u>sesenta y cinco años</u> de edad o por sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite el desempeño del cargo o de manera voluntaria. La Ley preverá los casos en que tendrán derecho a un haber por retiro en forma proporcional al tiempo en que ejercieron sus funciones en los términos de ley.</p> <p>Asimismo, la Ley en la materia, <u>preverá la forma y proporción en que se otorgará el haber por retiro y la existencia de un mecanismo para generar los recursos para el pago del mismo a partir del presupuesto que se destine anualmente al Poder Judicial, evitando que su pago repercuta como un gasto excesivo a cargo del Presupuesto de dicho Poder.</u></p>	<p>en el cargo.</p> <p>...</p> <p>El Congreso del Estado conforme a sus facultades, decide sobre la designación de los magistrados, mediante el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura.</p> <p>El retiro forzoso de los Magistrados se producirá al cumplir <b>setenta años de edad</b> o por sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite el desempeño del cargo o de manera voluntaria. Tendrán derecho a un haber por retiro en forma proporcional al tiempo en que ejercieron sus funciones en los términos de ley.</p> <p>Asimismo, la ley de la materia <b>deberá prever la forma y proporción en que se otorgará el haber por retiro y la existencia de un mecanismo para generar los recursos para el pago del mismo a partir del presupuesto que se destine anualmente al Tribunal Superior de Justicia y a través de aportaciones que realicen los Magistrados. En todo caso se evitará que el pago repercuta como un gasto excesivo a cargo del</b></p>
---	---

<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO VI</b>  <b>DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS</b></p> <p><b>ARTÍCULO 109-bis. ...</b>          ...          ...          ...          ...          Durarán en su cargo <b>ocho años</b>, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta constitucional, pudiendo ser designados para un período de seis años más y <u>sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley.</u>  <u>La designación por un período más sólo procederá de los resultados que arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a través del órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos e indicadores de gestión que para dicha evaluación establezca esta Constitución y las leyes en la materia.</u>  <u>Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado y haya procedido su designación para un período más en términos de esta Constitución, podrá volver a ocupar el cargo o ser nombrada para un nuevo período. En ningún caso y por ningún motivo, los Magistrados que hubieran ejercido el cargo, podrán rebasar catorce años en el cargo.</u>          ...          ...          ...          ...</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO VI</b>  <b>DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS</b></p> <p><b>ARTÍCULO 109-bis. ...</b>          ...          ...          ...          ...          Durarán en su cargo <b>catorce años</b>, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta constitucional y <b>sólo podrán ser removidos de sus cargos en los términos que establece esta Constitución y las leyes en materia de responsabilidad de los servidores públicos.</b>          Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado <b>podrá volver a ocupar el cargo o ser nombrada para un nuevo periodo. En ningún caso y por ningún motivo, los Magistrados que hubieran ejercido el cargo, podrán rebasar catorce años en ejercicio del mismo.</b>          ...          ...          ...          ...</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO VII</b>  <b>DEL TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES</b></p> <p><b>ARTÍCULO 109-ter. ...</b>          ...          Durará en su encargo un periodo de <u>seis años consecutivos</u>, contados a partir de la fecha en que rinda la protesta constitucional; podrá ser designado para un período más y si lo fuere continuará en esa función hasta por ocho años más, sin que por ningún motivo puedan rebasar catorce años en el cargo, y sólo podrán ser privados del cargo en los</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO VII</b>  <b>DEL TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES</b></p> <p><b>ARTÍCULO 109-ter. ...</b>          ...          Durará en su encargo un periodo de <b>catorce años</b>, contados a partir de la fecha en que rinda la protesta constitucional y <b>sólo podrá ser privado del cargo en los términos que establezcan esta Constitución y las leyes en materia de responsabilidad de los servidores públicos, al término de los cuales tendrá derecho a un haber por retiro, en los términos</b></p>

<p>términos que establezcan esta Constitución y las leyes en materia de responsabilidad de los servidores públicos, al término de los cuales tendrá derecho a un haber por retiro, conforme lo establezca esta Constitución y las leyes en la materia.</p> <p><u>La designación por un período más sólo procederá de los resultados que arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a través del órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos e indicadores de gestión que para dicha evaluación establezca esta Constitución y las leyes en la materia.</u></p> <p>...</p> <p>El Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes administrará sus recursos y propondrá su presupuesto de egresos al Titular del Poder Judicial, quien lo integrará al presupuesto de egresos de dicho poder. La fiscalización de sus recursos estará a cargo de la <u>Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso.</u></p> <p>Habrá un Magistrado titular y un suplente, así como el número de Jueces especializados que señale la Ley Orgánica que para tal efecto se expida. Tendrán competencia exclusiva para administrar justicia a los adolescentes a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes del Estado de Morelos. Los Jueces Especializados serán nombrados por el Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, mediante convocatoria a examen de oposición <u>calificado por el Centro Nacional de Evaluación Superior (CENEVAL),</u> designando en el cargo a quienes obtengan las más altas evaluaciones en dicho examen. Una vez nombrados tienen los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas que los demás jueces pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Morelos.</p> <p>...</p>	<p><b>establecidos para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, conforme a lo establecido en esta Constitución y las leyes en la materia.</b></p> <p>...</p> <p>El Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes administrará sus recursos y propondrá su presupuesto de egresos al Titular del Poder Judicial, quien lo integrará al presupuesto de egresos de dicho poder. La fiscalización de sus recursos estará a cargo <b>de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Morelos.</b></p> <p>Habrá un Magistrado titular y un suplente, así como el número de Jueces especializados que señale la Ley Orgánica que para tal efecto se expida. Tendrán competencia exclusiva para administrar justicia a los adolescentes a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes del Estado de Morelos. Los Jueces Especializados serán nombrados por el Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, mediante convocatoria a examen de oposición <b>calificado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior,</b> designando en el cargo a quienes obtengan las más altas evaluaciones en dicho examen. Una vez nombrados tienen los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas que los demás jueces pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Morelos.</p> <p>...</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO II</b> <b>DE SU INTEGRACIÓN Y ELECCIÓN</b></p> <p><b>ARTICULO 112. ...</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO II</b> <b>DE SU INTEGRACIÓN Y ELECCIÓN</b></p> <p><b>ARTICULO 112. ...</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>



<p>El ejercicio de los Ayuntamientos electos será de tres años y se iniciará el cinco de octubre del año de la elección, salvo lo que disponga esta Constitución y la normatividad aplicable para el caso de elecciones extraordinarias.</p> <p>...</p>	<p>El ejercicio de los Ayuntamientos electos será de tres años, iniciará <b>uno de enero del año siguiente de la elección y concluirá el treinta y uno de diciembre</b>, salvo lo que disponga esta Constitución y la normatividad aplicable para el caso de elecciones extraordinarias.</p> <p>...</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO IV DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAN</b></p> <p><b>ARTÍCULO 114-bis.</b> Los Ayuntamientos tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:</p> <p><b>I. a VII.</b> ...</p> <p><b>VIII.</b> Seguridad Pública, en los términos del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la presente Constitución y de las leyes que de ambas emanen; así como la policía preventiva <u>municipal y de tránsito.</u></p> <p>...</p> <p><b>IX.</b> ...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Los Ayuntamientos deberán otorgar <u>capacitación turística a los ciudadanos residentes y a vecindados en su ámbito territorial</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO IV DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAN</b></p> <p><b>ARTÍCULO 114-bis.</b> Los Ayuntamientos tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:</p> <p><b>I. a VII.</b> ...</p> <p><b>VIII.</b> Seguridad Pública, en los términos del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la presente Constitución y de las leyes que de ambas emanen; así como la policía preventiva municipal y de tránsito, <b>y el Cuerpo de Bomberos.</b></p> <p>...</p> <p><b>IX.</b> ...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Los Ayuntamientos deberán otorgar <b>orientación e información</b> turística a los ciudadanos, residentes, a vecindados, turistas y visitantes en su ámbito territorial.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO V DE SU HACIENDA</b></p> <p><b>ARTICULO 115.</b> Los Ayuntamientos administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso del Estado establezca a su favor, y en todo caso:</p> <p><b>I. a IV.</b> ...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO V DE SU HACIENDA</b></p> <p><b>ARTICULO 115.</b> Los Ayuntamientos administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso del Estado establezca a su favor, <b>lo que harán atendiendo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados,</b> y en todo caso:</p> <p><b>I. a IV.</b> ...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>

<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO VII DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD</b></p> <p><b>ARTICULO 117.</b> Los requisitos de elegibilidad para ser <u>miembro de un Ayuntamiento</u> o Ayudante Municipal son:</p> <p><b>I.</b> Ser morelense por nacimiento, o ser morelense por residencia con antigüedad mínima de diez años anteriores a la fecha de la elección, en pleno goce de sus derechos como ciudadano del Estado;</p> <p><b>II.</b> Tener cinco años de residencia en el Municipio o en la población en la que deban ejercer su cargo, respectivamente;</p> <p><b>III. a IV.</b> ...</p> <p><b>V.</b> No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral del Organismo Público Electoral de Morelos ni Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, así como formar parte del personal directivo del Organismo Público Electoral de Morelos, aún si se separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo 23 de la presente Constitución;</p> <p><b>VI.</b> Tampoco podrán ser, los que tuvieren mando de fuerza pública, si no se separan de su cargo o puesto noventa días antes del día de la elección; y</p> <p><b>VII.</b> El padre en concurrencia con el hijo; el esposo o esposa con el cónyuge, el hermano con la del hermano, el primo con el primo, el socio con su consocio y el patrón con su dependiente.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO VII DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD</b></p> <p><b>ARTICULO 117.</b> Los requisitos de elegibilidad para <b>ser Presidente Municipal, Síndico o</b> miembro de un Ayuntamiento o Ayudante Municipal son:</p> <p><b>I.</b> Ser morelense por nacimiento o con residencia efectiva de tres años anteriores a la fecha de la elección, en pleno goce de sus derechos como ciudadano del estado; <b>con excepción del Presidente Municipal y Síndico, los cuales deberá tener una residencia efectiva mínima de siete años;</b></p> <p><b>II.</b> <b>Tener veintidós años cumplidos; excepto para los cargos de Presidente Municipal y Síndico, en los cuales la edad mínima será de veinticinco años cumplidos al día de la elección;</b></p> <p><b>III. a IV.</b> ...</p> <p><b>V.</b> No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral <b>del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana</b>, ni Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, así como formar parte del personal directivo del Organismo Público Electoral de Morelos, aún si se separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo 23 de la presente Constitución;</p> <p><b>VI.</b> Tampoco podrán ser, los que tuvieren mando de fuerza pública, si no se separan de su cargo o puesto noventa días antes del día de la elección, <b>excepto los miembros de un Ayuntamiento que pretendan ser reelectos, y</b></p> <p><b>VII.</b> Derogada.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO SEXTO BIS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO CAPÍTULO I PRINCIPIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b></p> <p><b>ARTICULO 119.</b> La administración pública se guiará por los siguientes principios:</p> <p><b>I. a II.</b> ...</p> <p><b>III.</b> ...</p> <p>En el sistema de planeación democrática, el Congreso del Estado tendrá la intervención que señale la Ley.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO SEXTO BIS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO CAPÍTULO I PRINCIPIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b></p> <p><b>ARTICULO 119.</b> La administración pública se guiará por los siguientes principios:</p> <p><b>I. a II.</b> ...</p> <p><b>III.</b> ...</p> <p>En el sistema de planeación democrática, el Congreso del Estado tendrá la intervención que señale la Ley.</p> <p><b>Las discusiones que, en su caso, se realicen para la formulación de la política pública de participación democrática, deberán realizarse en escenarios presenciales o a través de medios electrónicos cuando sea</b></p>

	<p>posible, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones.</p>
<p><b>ARTICULO 120.</b> El matrimonio es la unión voluntaria de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos y obligaciones con la posibilidad de procreación de hijos y de ayudarse mutuamente. La celebración, registro y certificación de los hechos y actos constitutivos, modificativos o extintivos del estado civil de las personas, son de exclusiva competencia del Registro Civil en los términos que establezcan las leyes de la materia y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan.                  En el estado se garantizará el derecho a la identidad de las personas a través del registro de nacimiento gratuito.</p>	<p><b>ARTICULO 120.</b> El matrimonio es la unión voluntaria de dos personas, con igualdad de derechos y obligaciones, con el propósito de desarrollar una comunidad de vida y ayudarse mutuamente. La celebración, registro y certificación de los hechos y actos constitutivos, modificativos o extintivos del estado civil de las personas, son de exclusiva competencia del Registro Civil en los términos que establezcan las leyes de la materia y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan.                  El Estado garantizará el derecho a la identidad de las personas, con el registro inmediato a su nacimiento sin costo alguno. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.</p>
<p><b>ARTICULO 121.</b> La Educación que se imparta en la Entidad, deberá ser de calidad con equidad y garantizada por el Estado, a través de las Unidades Gubernamentales que estime pertinentes, ajustándose estrictamente a las disposiciones del artículo 3º y demás relacionados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de asegurar el máximo aprendizaje de los educandos, a través de la participación social; así como la implementación de mecanismos y procedimientos de control que aseguren la evaluación y capacitación permanente de los docentes, tanto de Instituciones Públicas como particulares con autorización o reconocimiento oficial.                  ...                  ...                  ...                  ...</p>	<p><b>ARTICULO 121.</b> El Estado garantizará que la educación que se imparta en la entidad, sea de calidad, inclusiva y con equidad, a través de las Unidades Gubernamentales que estime pertinentes, ajustándose estrictamente a las disposiciones del artículo 3º y demás relacionados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de asegurar el máximo aprendizaje de los educandos, a través de la participación social; así como la implementación de mecanismos y procedimientos de control que aseguren la evaluación y capacitación permanente de los docentes, tanto de Instituciones Públicas como particulares con autorización o reconocimiento oficial.                  ...                  ...                  ...                  ...</p>
	<p><b>ARTÍCULO 132 Bis.</b> El Estado, garantizará el acceso a la inscripción de las propiedades privadas en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales de Morelos, otorgando los medios legales para que los ciudadanos registren su propiedad inmobiliaria.                  La primera inscripción de la propiedad, será gratuita y el registro de los actos traslativos subsecuentes será obligatorio.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITULO SEPTIMO                  DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN</b>  <b>ARTICULO 134. ...</b>                  Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere este Título,</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO SEPTIMO                  DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN</b>  <b>ARTICULO 134. ...</b>                  Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere este Título,</p>

<p>se reputan como servidores públicos a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los Ayuntamientos, el Consejero Presidente y los consejeros electorales del Organismo Público Electoral de Morelos, el Comisionado Presidente y los comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y en general todo aquel que desempeñe un cargo, comisión empleo de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Paraestatal o en las Entidades, organismos públicos autónomos e instituciones mencionadas en esta Constitución. El Sistema Estatal contará con un Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley.</p> <p>...</p> <p>El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los Titulares de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, Fiscalía Especializada en Investigación de Hechos de Corrupción, Secretaría de la Contraloría, el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, así como por un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y otro del Comité de Participación Ciudadana.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>se reputan como servidores públicos a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los Ayuntamientos, el Consejero Presidente y los consejeros electorales <b>del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana</b>, el Comisionado Presidente y los comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y en general todo aquel que desempeñe un cargo, comisión empleo de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Paraestatal o en las Entidades, organismos públicos autónomos e instituciones mencionadas en esta Constitución. El Sistema Estatal contará con un Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley.</p> <p>...</p> <p>El Sistema tendrá un Comité Coordinador, <b>el que contará a su vez con un órgano de apoyo técnico</b>; el Comité estará integrado por los Titulares de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, <b>Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción</b>, Secretaría de la Contraloría, el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, así como por un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, <b>un representante de los Contralores Municipales del Estado y el Presidente del Comité de Participación Ciudadana</b>; <b>el Presidente del Comité de Participación Ciudadana</b>, lo será a su vez del Comité Coordinador.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p><b>ARTICULO 136. ...</b></p>	<p><b>ARTICULO 136. ...</b></p>

<p>...                  ...                  ...  <u>Para proceder penalmente</u> en contra de los Secretarios de Despacho, el Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, el Fiscal General del Estado, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, el Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales <u>del Organismo Público Electoral de Morelos</u>, el Comisionado Presidente y los Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, por la comisión de delitos durante el tiempo de su cargo, no se requerirá la Declaratoria del Congreso del Estado en la que señale si ha lugar o no a la formación de causa.</p>	<p>...                  ...                  ...  <u>Para proceder penalment121.-e (SIC)</u> en contra de los Secretarios de Despacho, el Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, el Fiscal General del Estado, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, el Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del <u>Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana</u>, el Comisionado Presidente y los Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, por la comisión de delitos durante el tiempo de su cargo, no se requerirá la Declaratoria del Congreso del Estado en la que señale si ha lugar o no a la formación de causa.</p>
---	---

<b>COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE MÉXICO</b>	
<b>TEXTO ANTERIOR</b>	<b>TEXTO VIGENTE</b>
<b>TITULO SEGUNDO</b> <b>DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTIAS</b>	<b>TITULO SEGUNDO</b> <b>DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTIAS</b>
<p><b>Artículo 5. ...</b>                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...</p>	<p><b>Artículo 5. ...</b>                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...</p>

...	...
...	...
...	Toda persona en el Estado de México, tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
...	Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.
...	Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el párrafo décimo cuarto de este mismo artículo, de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes:	Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes:
<b>I. a IX. ...</b>	<b>I. a IX. ...</b>
...	...
...	...
...	...
...	El Poder Ejecutivo del Estado de México organizará el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres cumplirán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
...	El Estado de México podrá celebrar convenios con otras entidades federativas y la Ciudad de México, para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en

	<p>establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.</p> <p>El sistema integral de justicia para adolescentes del Estado de México, será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITULO CUARTO                  DEL PODER PÚBLICO DEL ESTADO                  CAPITULO SEGUNDO                  DEL PODER LEGISLATIVO                  SECCIÓN PRIMERA                  DE LA LEGISLATURA</b></p> <p><b>Artículo 51.</b> El derecho de iniciar leyes y decretos corresponde:  <b>I. a VI. ...</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO CUARTO                  DEL PODER PÚBLICO DEL ESTADO                  CAPITULO SEGUNDO                  DEL PODER LEGISLATIVO                  SECCIÓN PRIMERA                  DE LA LEGISLATURA</b></p> <p><b>Artículo 51.</b> El derecho de iniciar leyes y decretos corresponde:  <b>I. a VI. ...</b>  <b>VII.</b> A la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en materia de su competencia.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p><b>Artículo 52. ...</b>                  Cuando se trate de iniciativas de los ayuntamientos o se discutan asuntos de su competencia, podrá solicitarse al presidente municipal que concurra él o un integrante del ayuntamiento, para responder a los cuestionamientos que se les planteen. Tratándose de iniciativas que caigan en el ámbito de competencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, la Legislatura podrá solicitar la presencia de un representante <u>de la misma</u>. Las solicitudes de la Legislatura se harán por conducto de la Junta de Coordinación Política.</p> <p>...</p>	<p><b>Artículo 52. ...</b>                  Cuando se trate de iniciativas de los ayuntamientos o se discutan asuntos de su competencia, podrá solicitarse al presidente municipal que concurra él o un integrante del ayuntamiento, para responder a los cuestionamientos que se les planteen. Tratándose de iniciativas que incidan en el ámbito de competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, <b>o de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México</b>, la Legislatura podrá solicitar la presencia de un representante <b>de los mismos para responder los cuestionamientos que se les planteen</b>. Las solicitudes de la Legislatura se harán por conducto de la Junta de Coordinación Política.</p> <p>...</p>
<p><b>Artículo 59.</b> El Gobernador del Estado, podrá formular observaciones a</p>	<p><b>Artículo 59.</b> El Gobernador del Estado podrá formular observaciones a</p>

<p>las leyes o decretos que expida la Legislatura y remitirlas para su discusión y, en su caso, aprobación <u>durante un mismo período de sesiones.</u></p> <p>...</p> <p><u>Para la aprobación de las observaciones enviadas serán necesarios los votos de al menos las dos terceras partes de los diputados presentes.</u></p>	<p>las leyes o decretos que expida la Legislatura y remitirlas para su discusión y, en su caso, aprobación <b>dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción.</b></p> <p><b>Las leyes o decretos desechados en todo o en parte por el Ejecutivo, serán devueltos, con sus observaciones a la Legislatura. Deberán ser discutidos de nuevo por ésta, y si fuesen confirmados por las dos terceras partes del número total de sus integrantes serán ley o decreto y volverán al Ejecutivo para su promulgación.</b></p> <p>...</p>
<p style="text-align: center;"><b>SECCION SEGUNDA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA LEGISLATURA</b></p> <p><b>Artículo 61.</b> Son facultades y obligaciones de la Legislatura:</p> <p><b>I. a XIV. ...</b></p> <p><b>XV.</b> Aprobar los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que hagan el Consejo de la Judicatura y el Gobernador, respectivamente, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de los nombramientos. Si éstos transcurren sin que la Legislatura hubiera resuelto, se entenderán aprobados.</p> <p>En caso de negativa, el Consejo o el Gobernador, según corresponda, podrán formular una segunda propuesta diversa, y si tampoco es aprobada, el Consejo o el Gobernador quedarán facultados para hacer un tercer nombramiento, que surtirá efectos desde luego. Durante los recesos de la Legislatura, los nombramientos a que se refiere este precepto podrán ser aprobados por la Diputación Permanente;</p> <p><b>XVI. ...</b></p> <p><b>XVII.</b> Resolver sobre las licencias temporales o absolutas de sus miembros, del Gobernador, de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y <u>del Tribunal de lo Contencioso Administrativo</u>, cuando las ausencias excedan del término que establezcan las leyes respectivas.</p> <p>Para los efectos de esta fracción, se consideran temporales las ausencias que excedan de 15, pero no de 60 días. La Legislatura calificará cuando existan los motivos fundados que justifiquen una</p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCION SEGUNDA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA LEGISLATURA</b></p> <p><b>Artículo 61.</b> Son facultades y obligaciones de la Legislatura:</p> <p><b>I. a XIV. ...</b></p> <p><b>XV.</b> <b>Aprobar por las dos terceras partes de la Legislatura, los nombramientos de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México que hagan el Consejo de la Judicatura y el Gobernador, respectivamente, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de los nombramientos, en los términos que disponga la Ley.</b></p> <p>En caso de negativa, el Consejo o el Gobernador, según corresponda, podrán formular una segunda propuesta diversa, y si tampoco es aprobada, el Consejo o el Gobernador quedarán facultados para hacer un tercer nombramiento, que surtirá efectos desde luego. Durante los recesos de la Legislatura, los nombramientos a que se refiere este precepto podrán ser aprobados por la Diputación Permanente;</p> <p><b>XV Bis.</b> <b>Expedir la Ley que instituya el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dotado de plena autonomía para dictar los fallos y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones.</b></p> <p><b>XVI. ...</b></p> <p><b>XVII.</b> Resolver sobre las licencias temporales o absolutas de sus miembros, del Gobernador, de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia <b>y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México</b>, cuando las ausencias excedan del término que establezcan las leyes respectivas.</p> <p>Para los efectos de esta fracción, se consideran temporales las</p>



<p>licencia temporal por un período mayor y que podrá extenderse por el tiempo que dure la causa que la motivó;</p> <p><b>XVIII.</b> Conocer y resolver de las solicitudes de destitución de los <u>Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo</u> y del Tribunal Superior de Justicia en términos de la presente Constitución;</p> <p><b>XIX. a XX.</b> ...</p> <p><b>XXI.</b> Recibir la protesta del Gobernador, de los Diputados, de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, <u>del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado</u>, del Auditor Superior de Fiscalización y del Presidente y miembros del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos; El Gobernador del Estado protestará en los siguientes términos: ... ... ... ... ... <b>XXII. a XXXI.</b> ... <b>XXXII.</b> ... La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de <u>posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.</u>  ... ... <b>XXXIII.</b> Revisar, por conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, las cuentas y actos relativos a la aplicación de los fondos públicos del Estado y de los Municipios, así como fondos públicos federales en los términos convenidos con dicho ámbito que incluirán la información correspondiente a los Poderes Públicos, organismos autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos o</p>	<p>ausencias que excedan de 15, pero no de 60 días. La Legislatura calificará cuando existan los motivos fundados que justifiquen una licencia temporal por un período mayor y que podrá extenderse por el tiempo que dure la causa que la motivó;</p> <p><b>XVIII.</b> Conocer y resolver de las solicitudes de destitución <b>por faltas graves, de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México</b> y del Tribunal Superior de Justicia en términos de la presente Constitución.</p> <p><b>XIX. a XX.</b> ...</p> <p><b>XXI.</b> Recibir la protesta del Gobernador, los Diputados, <b>y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México</b>, del Auditor Superior de Fiscalización y del Presidente y miembros del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos. El Gobernador del Estado protestará en los siguientes términos: ... ... ... ... ... <b>XXII. a XXXI.</b> ... <b>XXXII.</b> ... La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de <b>legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y de máxima publicidad. Así mismo deberá fiscalizar, a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, las acciones del Estado y Municipios en materia de fondos, recursos estatales y deuda pública.</b> <b>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México deberá entregar a la Legislatura un informe de resultados y los informes de auditoría que correspondan, dichos informes serán de carácter público y se presentarán en los términos y con el contenido que determine la Ley.</b> ... ... <b>XXXIII.</b> Revisar, por conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, las cuentas y actos relativos a la aplicación de los fondos públicos del Estado y de los Municipios, así como fondos públicos federales en los términos convenidos con dicho ámbito que</p>
--	--

<p>privados y demás entes públicos que manejen recursos del Estado y Municipios;</p> <p><b>XXXIV.</b> Fiscalizar la administración de los ingresos y egresos del Estado y de los Municipios, que incluyen a los Poderes Públicos, organismos autónomos, organismos auxiliares fideicomisos públicos o privados y demás entes públicos que manejen recursos del Estado y</p>	<p>incluirán la información correspondiente a los Poderes Públicos, organismos autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados y demás entes que manejen recursos del Estado y Municipios. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas estatales y municipales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.</p> <p>Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley de la materia, derivado de denuncias, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, previo análisis de procedencia, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las autoridades fiscalizables, así como respecto de ejercicios anteriores, o en su caso remitirlas a la autoridad competente. Las autoridades fiscalizables proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la Ley de la materia y en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México rendirá un informe específico a la Legislatura en Pleno y en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes.</p> <p>Derivado de sus revisiones, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México podrá promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de sanciones que correspondan a los servidores públicos del Estado y municipios y a los particulares.</p> <p><b>XXXIV.</b> Fiscalizar la administración de los ingresos y egresos del Estado y de los Municipios, que incluyen a los Poderes Públicos,</p>
---	--

<p>Municipios, a través del Órgano Superior de Fiscalización;</p> <p><b>XXXV.</b> Determinar por conducto del Órgano Superior de Fiscalización, los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública del Estado y de los Municipios, incluyendo a los Poderes Públicos, organismos autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados y demás entes <u>públicos que manejen recursos del Estado y Municipios, asimismo a través del propio Órgano fincar las responsabilidades resarcitorias que correspondan y promover en términos de ley, la imposición de otras responsabilidades y sanciones ante las autoridades competentes;</u></p> <p><b>XXXVI. a LIII. ...</b></p> <p><b>LIV.</b> Las demás que la Constitución Política de los Estados Unidos</p>	<p>organismos autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados y demás entes que manejen recursos del Estado y Municipios, a través del <b>Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.</b></p> <p><b>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en las cuentas públicas.</b></p> <p><b>Respecto a la planeación de las auditorías, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos, sin que se entiendan abiertos nuevamente.</b></p> <p><b>Los Poderes Públicos del Estado de México y las demás autoridades fiscalizables auxiliarán al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la Ley en la materia. Asimismo, los servidores públicos estatales y municipales, así como cualquier autoridad, persona física o jurídico colectiva, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales, estatales y municipales deberán proporcionar la información y documentación que solicite el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de las y los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la información, las y los responsables serán acreedores a las sanciones que establezca la Ley.</b></p> <p><b>XXXV.</b> Determinar por conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública del Estado y de los Municipios, incluyendo a los Poderes Públicos, organismos autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados y demás entes <b>que manejen recursos del Estado y Municipios; asimismo, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y demás autoridades competentes, para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias y la imposición de sanciones que correspondan a las y los servidores públicos estatales, municipales y a los particulares.</b></p>
--	--

<p>Mexicanos, la presente Constitución, las leyes federales o las del Estado le atribuyan.</p>	<p><b>XXXVI. a LIII. ...</b>  <b>LIV.</b> Designar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos a los que esta Constitución reconoce autonomía y que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, en términos que disponga la Ley.  <b>LV.</b> Objetar en su caso, en un plazo no mayor de 10 días hábiles con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que realice el Fiscal General de Justicia del Estado de México.  <b>LVI.</b> Las demás que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución, las leyes federales, o las del Estado le atribuyan.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO TERCERO                  DEL PODER EJECUTIVO                  SECCION SEGUNDA                  DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL GOBERNADOR DEL ESTADO</b></p> <p><b>Artículo 77.</b> Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado:  <b>I. a X. ...</b>  <b>XI.</b> Objetar por una sola vez, en el improrrogable término de 10 días hábiles, las leyes y decretos aprobados por la Legislatura; si ésta después de haberlos discutido nuevamente los ratifica, serán promulgados;  <b>XII.</b> <u>Nombrar a los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado</u>, sometiéndolos a la aprobación de la Legislatura o de la Diputación Permanente, en su caso;  <b>XIII. a XIV. ...</b>  <b>XV.</b> <u>Solicitar de la Legislatura Local, o en su caso, de la Diputación Permanente, la destitución por mala conducta, de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado;</u>  <b>XVI. ...</b>  <b>XVII.</b> <u>Conceder el indulto necesario y por gracia y conmutar las penas privativas de libertad, con arreglo a la ley de la materia;</u>  <b>XVIII. ...</b>  <b>XIX.</b> Enviar cada año a la Legislatura, a más tardar el 21 de noviembre,</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO TERCERO                  DEL PODER EJECUTIVO                  SECCION SEGUNDA                  DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL GOBERNADOR DEL ESTADO</b></p> <p><b>Artículo 77.</b> Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado:  <b>I. a X. ...</b>  <b>XI.</b> Formular observaciones, dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción, a las leyes o decretos aprobados por la Legislatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 59 de esta Constitución.  <b>XII.</b> <u>Nombrar a las y los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México</u>, sometiéndolos a la aprobación de la Legislatura o de la Diputación Permanente, en su caso;  <b>XIII. a XIV. ...</b>  <b>XV.</b> <u>Solicitar a la Legislatura Local, o en su caso, a la Diputación Permanente, la destitución por faltas graves, de las y los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.</u>  <b>XVI. ...</b>  <b>XVII.</b> <u>Conceder el indulto necesario y por gracia, con arreglo a la ley de la materia.</u>  <b>XVIII. ...</b>  <b>XIX.</b> Enviar cada año a la Legislatura, a más tardar el 21 de noviembre,</p>

<p>los proyectos de ley de ingresos y presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, que deberán regir en el año fiscal inmediato siguiente, o hasta el 20 de diciembre, cuando inicie su periodo Constitucional el Ejecutivo Federal, y presentar la cuenta de gastos del año inmediato anterior, <u>a más tardar el 15 de mayo</u>;</p> <p>...</p> <p><b>XX. a LI. ...</b></p>	<p>los proyectos de ley de ingresos y presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, que deberán regir en el año fiscal inmediato siguiente, o hasta el 20 de diciembre, cuando inicie su periodo Constitucional el Ejecutivo Federal, y presentar la cuenta pública del año inmediato anterior, <b>a más tardar el 30 de abril del año siguiente</b>.</p> <p>...</p> <p><b>XX. a LI. ...</b></p>
<p><b>Artículo 79. ...</b>                  Para ser secretario del despacho del Ejecutivo, se requiere <u>ser ciudadano</u> en pleno ejercicio de sus derechos, mexiquense o vecino con tres años de residencia efectiva en la entidad y tener 30 años cumplidos.</p>	<p><b>Artículo 79. ...</b>                  Para ser secretario del despacho del Ejecutivo, se requiere ser ciudadano mexicano <b>por nacimiento</b> en pleno ejercicio de sus derechos, y tener como mínimo 30 años cumplidos.</p>
<p><b>Artículo 80.</b> Todas las leyes, decretos, reglamentos, circulares, acuerdos y, en general, los documentos que suscriba el Gobernador en ejercicio de sus atribuciones deberán ser refrendados por el Secretario General de Gobierno; sin este requisito no surtirán efectos legales.</p> <p>...</p>	<p><b>Artículo 80.</b> Los reglamentos, decretos, circulares y acuerdos expedidos por el Gobernador deberán, para su validez y observancia, ir firmados por el Secretario del Despacho respectivo y, cuando se refieran a asuntos de la competencia de dos o más Secretarías, deberán ser refrendados por todos los titulares de las mismas. Tratándose de los decretos promulgatorios de las leyes o decretos expedidos por la Legislatura, sólo se requerirá el refrendo del titular de la Secretaría General de Gobierno.</p> <p>...</p>
<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN CUARTA</b>  <b><u>DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO</u></b></p> <p><b>Artículo 87.</b> El Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá y resolverá las controversias que se susciten entre las administraciones públicas estatal o municipales y organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares y tendrá plena autonomía para dictar sus fallos.</p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN CUARTA</b>  <b>Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México</b></p> <p><b>Artículo 87.</b> El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México es un órgano dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y ejercer su presupuesto; su organización, funcionamiento, procedimientos y en su caso, recursos contra sus resoluciones, se regirán por lo establecido en la Ley de la materia. Conocerá y resolverá de las controversias que se susciten entre la administración pública estatal, municipal, organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares. Así mismo, impondrá en los términos que disponga la Ley, las sanciones a las y los servidores públicos por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar el pago de las responsabilidades resarcitorias, a quien corresponda, indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal y municipal o al patrimonio de los entes públicos locales y municipales.</p>

	<p>El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales.                  Las y los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Gobernador y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura o, en sus recesos, por la Diputación Permanente.                  Durarán en su encargo diez años improrrogables.                  Las y los Magistrados solo podrán ser removidos de sus encargos por las causas graves que determine la ley de la materia.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO CUARTO                  DEL PODER JUDICIAL                  SECCIÓN SEGUNDA                  DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO</b></p> <p><b>Artículo 106.</b> La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura del Estado de México, conforme a las bases que señala esta Constitución y las leyes respectivas.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO CUARTO                  DEL PODER JUDICIAL                  SECCIÓN SEGUNDA                  DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO</b></p> <p><b>Artículo 106.</b> Para la investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa, el Consejo de la Judicatura deberá auxiliarse de un órgano interno de control, con la denominación y en los casos, términos y condiciones que señalen la Ley.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO QUINTO                  DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL                  CAPITULO TERCERO                  DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS</b></p> <p><b>Artículo 123.</b> Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, desempeñarán facultades normativas, para el régimen de gobierno y administración del Municipio, <u>así como funciones</u> de inspección, concernientes al cumplimiento de las disposiciones de observancia general aplicables.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO QUINTO                  DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL                  CAPITULO TERCERO                  DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS</b></p> <p><b>Artículo 123.</b> Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, desempeñarán facultades normativas, para el régimen de gobierno y administración del Municipio, así como <b>lo relacionado al Sistema Municipal Anticorrupción</b> y funciones de inspección, concernientes al cumplimiento de las disposiciones de observancia general aplicables.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO SEXTO                  DE LA ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS                  PÚBLICOS</b></p> <p><b>Artículo 129. ...</b>                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  El Órgano Superior de Fiscalización, la Secretaría de la Contraloría, las contralorías de los poderes Legislativo y Judicial; las de los organismos autónomos; y las de los ayuntamientos, vigilarán el cumplimiento de lo</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO SEXTO                  DE LA ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS                  PÚBLICOS</b></p> <p><b>Artículo 129. ...</b>                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  El Órgano Superior de Fiscalización <b>del Estado de México, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, los órganos internos de control de los Poderes Legislativo y Judicial, de los</b></p>

<p>dispuesto en este título, conforme a sus respectivas competencias.                  ...</p>	<p>organismos constitucionalmente autónomos y de los ayuntamientos, vigilarán el cumplimiento de lo dispuesto en este Título, conforme a sus respectivas competencias.                  ...</p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO SÉPTIMO</b>  <b><u>DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEL JUICIO POLÍTICO</u></b></p> <p><b>Artículo 130.</b> Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se considera como servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno de los poderes del Estado, en los ayuntamientos de los municipios y organismos auxiliares, así como los titulares o quienes hagan sus veces en empresas de participación estatal o municipal, sociedades o asociaciones asimiladas a éstas y en los fideicomisos públicos. Por lo que toca a los demás trabajadores del sector auxiliar, su calidad de servidores públicos estará determinada por los ordenamientos legales respectivos.</p> <p>La Ley de Responsabilidades regulará sujetos, procedimientos y sanciones en la materia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO SÉPTIMO</b>  <b>DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO, PATRIMONIAL DEL ESTADO, DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Y DEL JUICIO POLÍTICO</b></p> <p><b>Artículo 130.</b> Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se considera como servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno de los poderes del Estado, en los ayuntamientos de los municipios y organismos auxiliares, así como los titulares o quienes hagan sus veces en empresas de participación estatal o municipal, sociedades o asociaciones asimiladas a éstas y en los fideicomisos públicos. Por lo que toca a los demás trabajadores del sector auxiliar, su calidad de servidores públicos estará determinada por los ordenamientos legales respectivos. Las y los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial, de intereses ante las autoridades competentes y constancia de presentación de la declaración fiscal y en los términos que determine la ley.</p> <p>La Ley de Responsabilidades regulará sujetos, procedimientos y sanciones en la materia.                  Las y los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:</p> <p><b>I.</b> Se aplicarán sanciones administrativas a las y los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley de la materia establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.                  Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas</p>

	<p>por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo, por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y los órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Las demás faltas y sanciones administrativas que no sean calificadas como graves, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control, quienes substanciarán los procedimientos y en su caso aplicarán las sanciones correspondientes.</p> <p>Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se regirá por lo previsto en el artículo 106 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.</p> <p>La ley de la materia establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.</p> <p>Las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal, los órganos constitucionalmente autónomos y los ayuntamientos tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos y omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales, estatales y municipales, así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.</p> <p>Las instituciones de seguridad pública tendrán su sistema de separación del servicio, de investigación y sanción disciplinaria, de conformidad con lo previsto en las leyes respectivas en congruencia con la fracción XIII del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.</p> <p>II. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas,</p>
--	---



	<p>así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública Estatal o Municipal o al patrimonio de las entidades públicas estatales o municipales. Las personas jurídico colectivas serán sancionadas en los términos de este párrafo cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona jurídico colectiva y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de las entidades públicas, estatales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves, en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes de la materia establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.</p> <p>Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente y no podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.</p> <p>Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba podrá formular denuncia ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.</p> <p><b>III.</b> En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios que competan al ámbito local. La ley de la materia establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información.</p> <p>La responsabilidad del Estado y de los municipios por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, causen en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los</p>
--	--

	<p>particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezca la ley.</p>
	<p><b>Artículo 130 bis.</b> El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas, actos y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas y conforme a la ley respectiva:</p> <p><b>I.</b> El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por el titular de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo, el titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el titular del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, así como un representante del Consejo de la Judicatura Estatal y otro del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá. El Sistema tendrá la organización y funcionamiento que determine la Ley.</p> <p><b>II.</b> El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley.</p> <p><b>III.</b> Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la ley:</p> <p><b>a)</b> El establecimiento de mecanismos de coordinación con el sistema federal y con las instituciones integrantes del Sistema Estatal.</p> <p><b>b)</b> El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas, actos y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan.</p> <p><b>c)</b> La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno.</p> <p><b>d)</b> El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos.</p>

	<p><b>e)</b> La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, para que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.</p> <p>El Sistema Municipal Anticorrupción es la instancia de coordinación y coadyuvancia con el Sistema Estatal Anticorrupción que concurrentemente tendrá por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas, acciones y procedimientos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas, actos y hechos de corrupción, así como coadyuvar con las autoridades competentes en la fiscalización y control de recursos públicos en el ámbito municipal, en congruencia con los Sistemas Federal y Estatal.</p> <p>Para su funcionamiento se sujetará a las siguientes bases mínimas y conforme a la ley respectiva:</p> <p><b>I.</b> El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por el titular de la Contraloría Municipal, el de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, así como un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá.</p> <p><b>II.</b> El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por tres ciudadanos que se hayan destacado por su contribución al combate a la corrupción, de notoria buena conducta y honorabilidad manifiesta, los cuales serán designados en los términos que establezca la ley.</p> <p><b>III.</b> Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:</p> <p><b>a)</b> El establecimiento de mecanismos de coordinación y armonización con el Sistema Estatal Anticorrupción.</p> <p><b>b)</b> El diseño y promoción de políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.</p> <p><b>c)</b> Actualización y difusión de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno.</p> <p><b>d)</b> La elaboración de un informe anual que contenga los avances y</p>
--	---

	<p>resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.</p> <p>e) Elaboración y entrega de un informe anual al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de las acciones realizadas, las políticas aplicadas y del avance de éstas con respecto al ejercicio de sus funciones, además informar al mismo Comité de la probable comisión de hechos de corrupción y faltas administrativas para que en su caso, emita recomendaciones no vinculantes a las autoridades competentes, a fin de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención y erradicación de tales conductas.</p>
<p><b>Artículo 131.</b> Los diputados de la Legislatura del Estado, <u>los magistrados</u> y los integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, <u>los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo</u>, los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo y el Fiscal General de Justicia y los integrantes de los órganos superiores de los organismos a los que la presente Constitución les otorga autonomía, son responsables de los delitos graves del orden común que cometan durante su encargo y de los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de sus funciones. El Gobernador lo será igualmente, pero durante el período de su ejercicio sólo podrá ser acusado por delitos graves del orden común y por delitos contra la seguridad del Estado.</p>	<p><b>Artículo 131.</b> Los <b>Diputados</b> de la Legislatura del Estado, <b>los Magistrados</b> y los integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, <b>los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México</b>, los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, el Fiscal General de Justicia y los integrantes de los órganos superiores de los organismos a los que la presente Constitución les otorga autonomía, son responsables de los delitos graves del orden común, que cometan durante su encargo y de los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de sus funciones. El Gobernador lo será igualmente, pero durante el período de su ejercicio sólo podrá ser acusado por delitos graves del orden común y por delitos contra la seguridad del Estado.</p>
<p><b>Artículo 133.</b> El Gobernador del Estado, cuando el caso lo amerite, podrá pedir a la Legislatura o a la Diputación Permanente la destitución de los <u>magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado</u>. Si por mayoría absoluta del número total de sus integrantes, en sesión de una u otra, se declara justificada la petición, el magistrado acusado quedará privado de su puesto a partir de la fecha en que se le haga saber la resolución, independientemente de la responsabilidad en que, en su caso, haya incurrido, y se procederá a nueva designación. El Consejo de la Judicatura del Estado de México, cuando el caso lo amerite, podrá pedir a la Legislatura o a la Diputación Permanente la destitución de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, en términos del Procedimiento que al efecto determine la ley.</p>	<p><b>Artículo 133.</b> El Gobernador del Estado, cuando el caso lo amerite, podrá pedir a la Legislatura o a la Diputación Permanente la destitución de los <b>Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México</b>. Si por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la <b>Legislatura o de la Diputación Permanente</b>, en sesión de una u otra, se declara justificada la petición, el magistrado acusado quedará privado de su puesto a partir de la fecha en que se le haga saber la resolución, independientemente de la responsabilidad en que, en su caso, haya incurrido y se procederá a nueva designación. El Consejo de la Judicatura del Estado de México, cuando el caso lo amerite, <b>por causas de responsabilidad administrativa o por la comisión de delitos del fuero común, incluidas aquellas faltas y delitos relacionados con actos de corrupción</b>, podrá pedir a la Legislatura o a la Diputación Permanente la destitución de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, misma que será aprobada en su caso por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura</p>

	o de la Diputación Permanente, en términos del Procedimiento que al efecto determine la ley.
<p><b>Artículo 134.</b> Los servidores públicos condenados por delitos cometidos con motivo del desempeño de sus funciones públicas no gozarán del indulto por gracia.</p>	<p><b>Artículo 134.</b> La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es la unidad administrativa competente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, encargada de la investigación de los delitos, y del ejercicio de la acción penal, ante los tribunales correspondientes, derivado de las acciones u omisiones de los servidores públicos y particulares constitutivos de delitos en materia de corrupción, de acuerdo con las leyes de la materia.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO OCTAVO PREVENCIÓNES GENERALES</b></p> <p><b>Artículo 139 BIS.</b> La Mejora Regulatoria y el Gobierno Digital son instrumentos de desarrollo. Es obligatorio para el Estado y los municipios, sus dependencias y organismos auxiliares, implementar de manera permanente, continua y coordinada sus normas, actos, procedimientos y resoluciones, ajustándose a las disposiciones que establece esta Constitución, a fin de promover políticas públicas relativas al uso de las tecnologías de la información e impulsar el desarrollo económico del Estado de México.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO OCTAVO PREVENCIÓNES GENERALES</b></p> <p><b>Artículo 139 BIS.</b> La Mejora Regulatoria y el Gobierno Digital son instrumentos de desarrollo. Es obligatorio para el Estado y los municipios, sus dependencias y organismos auxiliares, implementar de manera permanente, continua y coordinada sus normas, actos, procedimientos y resoluciones, ajustándose a las disposiciones que establece esta Constitución, a fin de promover políticas públicas relativas al uso de las tecnologías de la información e impulsar el desarrollo económico del Estado de México.</p> <p>La Ley establecerá la creación de registros estatales y municipales que incluyan todos los trámites y servicios de la administración pública, atendiendo las disposiciones relativas a la protección de datos personales y acceso a la información pública que la ley en la materia disponga, con el objetivo de generar certeza, seguridad jurídica y facilitar su cumplimiento mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. La inscripción en el registro y su actualización será obligatoria para todas las dependencias de las administraciones públicas estatal, municipal y organismos auxiliares, en los términos que señale la ley de la materia.</p>
<p><b>Artículo 147.</b> El Gobernador, los diputados, los magistrados de los Tribunales Superior de Justicia <u>y de lo Contencioso Administrativo</u>, los miembros del Consejo de la Judicatura, los trabajadores al servicio del Estado, los integrantes <u>y</u> servidores de los <u>organismos</u> autónomos, así como los miembros de los ayuntamientos y demás servidores públicos municipales recibirán una retribución adecuada e irrenunciable por el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que será determinada en el presupuesto de egresos que corresponda.</p>	<p><b>Artículo 147.</b> El Gobernador, los Diputados, y los Magistrados de los Tribunales Superior de Justicia <u>y de Justicia Administrativa del Estado de México</u>, los miembros del Consejo de la Judicatura, los trabajadores al servicio del Estado, los integrantes <u>y los</u> servidores de los organismos <u>constitucionalmente</u> autónomos, así como los miembros de los ayuntamientos y demás servidores públicos municipales recibirán una retribución adecuada e irrenunciable por el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que será determinada en el presupuesto de egresos que corresponda.</p>

<p>...                  La remuneración será determinada anual y equitativamente en el Presupuesto de Egresos correspondiente bajo las bases siguientes:  <b>I. a V. ...</b></p>	<p>...                  La remuneración será determinada anual y equitativamente en el Presupuesto de Egresos correspondiente bajo las bases siguientes:  <b>I. a V. ...</b></p>
--	--

COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE NAYARIT	
TEXTO ANTERIOR	TEXTO VIGENTE
<p><b>TITULO PRIMERO</b>  <b>CAPITULO III</b>  <b>DE LOS HABITANTES</b></p> <p><b>ARTÍCULO 7.</b> El Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Todos los habitantes del estado gozarán sea cual fuere su condición:</p> <p><u>I. La más estricta igualdad ante las leyes, sin otras diferencias que las que resulten de la condición natural o jurídica de las personas.</u></p> <p><b>II. a XVII. ....</b></p> <p><b>ARTÍCULO 8.</b> Las leyes establecerán las sanciones correspondientes a los atentados en contra de estos derechos, los cuales tienen como límites el interés legítimo del Estado y los derechos iguales de los demás hombres, según se encuentran formulados en esta Constitución, en la de la República y en las Leyes secundarias.</p>	<p><b>TITULO PRIMERO</b>  <b>CAPITULO III</b>  <b>DE LOS HABITANTES</b></p> <p><b>ARTÍCULO 7.</b> El Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Todos los habitantes del estado gozarán sea cual fuere su condición:</p> <p><b>I.</b> La más estricta igualdad ante las leyes, sin otras diferencias que las que resulten de la condición natural o jurídica de las personas. <b>Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.</b></p> <p><b>II. a XVII. ...</b></p> <p><b>ARTÍCULO 8.</b> Las leyes establecerán las sanciones correspondientes a los atentados en contra de estos derechos, los cuales tienen como límites el interés legítimo del Estado y los derechos iguales de los demás hombres, según se encuentran formulados en esta Constitución, en la de la República y en las Leyes secundarias.</p> <p><b>Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.</b></p>

<p><b>TITULO TERCERO</b>  <b>CAPITULO III</b>  <b>DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 47.</b> Son atribuciones de la Legislatura:  <b>I. a XIII. ...</b>  <b>XIV.</b> Autorizar al Ejecutivo para gravar, enajenar y ceder los bienes del Estado, así como contraer obligaciones a nombre del mismo.  <b>XV.</b> Declarar a pedimento del Fiscal General cuando ha lugar a formación de causa contra el Gobernador, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los miembros del Consejo de la Judicatura, el Secretario General de Gobierno y los demás secretarios del despacho, tanto por delito de orden común, como por delitos o faltas oficiales, erigiéndose para el caso en Gran Jurado. Tratándose del Fiscal General del Estado, la petición deberá hacerla el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General.  <b>XVI. a XXXIX. ...</b></p>	<p><b>TITULO TERCERO</b>  <b>CAPITULO III</b>  <b>DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 47.</b> Son atribuciones de la Legislatura:  <b>I. a XIII. ...</b>  <b>XIV.</b> Autorizar al Ejecutivo para gravar, enajenar y ceder los bienes del Estado, así como contraer obligaciones a nombre del mismo.  <b>Declarar a pedimento del Fiscal General cuando ha lugar a formación de causa contra el Gobernador, los Magistrados del Tribunal los servidores públicos a los cuales esta Constitución otorga inmunidad procesal, erigiéndose para el caso en Gran Jurado.</b>  <b>XVI. a XXXIX. ...</b></p>
<p><b>TITULO QUINTO</b>  <b>CAPITULO II</b>  <b>SECCIÓN I</b>  <b>DEL MINISTERIO PÚBLICO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 92.</b> El Ministerio Público es el representante legítimo de los intereses sociales y es una institución con autonomía en términos de ley, que se rige en el ejercicio de sus funciones por los principios de buena fe, certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia, honradez, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.</p>	<p><b>TITULO QUINTO</b>  <b>CAPITULO II</b>  <b>SECCIÓN I</b>  <b>DEL MINISTERIO PÚBLICO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 92.</b> El Ministerio Público es el representante legítimo de los intereses sociales y es una <b>institución autónoma, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio</b>, que se rige en el ejercicio de sus funciones por los principios de buena fe, certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia, honradez, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.</p>
<p><b>ARTÍCULO 93.</b> Ejerce las funciones de Ministerio Público en el Estado el Fiscal General, quien durará en el cargo siete años pudiendo ser ratificado por única vez por un periodo igual y será el jefe nato de aquél y los agentes que determine la ley.</p>	<p><b>ARTÍCULO 93.</b> Ejerce las funciones de Ministerio Público en el Estado el Fiscal General, quien durará en el cargo <b>nueve años</b> y será el jefe nato de aquél y los agentes que determine la ley.</p>
<p><b>ARTÍCULO 94.</b> Para ser designado Fiscal General, se necesitan los mismos requisitos que para ser Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, salvo lo previsto para el caso de la profesión, pues en este caso deberá contar invariablemente con título de Licenciado en Derecho.          La propuesta y ratificación respectivas, se harán conforme las bases estipuladas en esta Constitución y en las leyes aplicables. El Fiscal General podrá ser removido solamente en términos del Título Octavo</p>	<p><b>ARTÍCULO 94.</b> El Fiscal General será designado y removido conforme a lo siguiente:  <b>I. El plazo para desarrollar el proceso para la designación del Fiscal General nunca será menor de cuarenta y cinco días.</b>  <b>II. Para la designación por culminación de periodo del Fiscal General se deberá atender a lo siguiente:</b>  <b>1. Durante los primeros quince días del cuarto mes, previo a la culminación del periodo, el Congreso emitirá convocatoria pública</b></p>

de esta Constitución.

abierta para el registro de aspirantes.

**2.** El Congreso contará con un plazo de cuarenta y cinco días para integrar una lista de diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al titular del Ejecutivo Estatal.

En el supuesto de que no se alcance la mayoría calificada en segunda votación, el Congreso aprobará la lista en una tercera votación con la mayoría de los miembros presentes. Al menos una tercera parte de los miembros presentes podrá vetar hasta a una tercera parte de los integrantes de la lista aprobada.

El titular del Ejecutivo no podrá proponer dentro de la terna a los candidatos vetados.

**III.** El proceso y la convocatoria para la designación del Fiscal General deberá contener, al menos, las etapas de acreditación de requisitos, evaluación de conocimientos, control de confianza y escrutinio social. La convocatoria establecerá los mecanismos para desahogar cada una de las etapas.

**IV.** Una vez recibida la lista de candidatos, el titular del Ejecutivo Estatal contará con diez días para enviar una terna al Congreso. En caso de que el ejecutivo no envíe la terna, el Congreso procederá a la designación del Fiscal General de entre los candidatos de la lista aprobada.

**V.** Recibida la terna o excedido el plazo para la remisión de la terna, el Congreso designará, dentro de un plazo no mayor a quince días, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, al Fiscal General para el periodo que corresponda.

Si en segunda votación no se alcanza la mayoría calificada, el Congreso procederá a la designación con la votación de la mayoría de los miembros presentes. Previo a la tercera votación, al menos una tercera parte de los miembros presentes podrá vetar a una de las personas propuestas en la terna o de la lista.

No podrá ser designado Fiscal General quien haya sido vetado, salvo que se elija por unanimidad de los presentes.

**VI.** Para la designación por ausencia definitiva declarada por el Congreso, se deberá emitir convocatoria pública abierta dentro de los quince días siguientes a la declaración de ausencia, y posterior a ello, seguirá el procedimiento señalado en las fracciones II, III, IV y V del presente artículo.



	<p>Cuando la ausencia definitiva del Fiscal General ocurra durante los primeros dos años de ejercicio, se convocará para un nuevo periodo. Si ocurre durante el tercer año y hasta un día antes del último año, se convocará para culminar el periodo. Si ocurre durante del (sic) último año, será fiscal, quien por ministerio de ley deba de suplir las ausencias. En este caso, el Presidente del Congreso notificará al suplente por ministerio de ley, la designación de Fiscal General, por disposición constitucional.</p> <p>En ninguno caso, quien haya sido designado Fiscal General, podrá ser nombrado para un nuevo periodo, salvo el último de los supuestos establecidos en el párrafo anterior.</p> <p><b>VII.</b> El Fiscal General podrá ser removido por causas graves o suficientes por el Congreso del Estado, a petición de al menos una tercera parte de éste o del titular del Ejecutivo Estatal. El Congreso solicitará al Pleno del Tribunal Superior de Justicia para que califique las causas como procedentes o suficientes. Si el pleno califica como procedente las causas de remoción, el Congreso podrá remover al Fiscal General por el voto de la mayoría de los presentes. En caso de que la causa no sea suficiente o se declare improcedente, el Congreso únicamente podrá realizar la remoción por votación de las tres cuartas partes de los miembros presentes.</p> <p><b>VIII.</b> Las ausencias del Fiscal General serán suplidas o sustituidas, según corresponda, por el servidor público que determine la ley de la materia.</p> <p><b>IX.</b> En los recesos del Congreso, la Diputación Permanente convocará de inmediato a periodo extraordinario para la designación o la remoción del Fiscal General.</p> <p>El Fiscal General presentará anualmente al Poder Legislativo del Estado un informe de actividades. Comparecerá ante dicho Poder cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.</p>
<p><b>ARTÍCULO 95.</b> No podrá ser Fiscal General, quien haya ocupado el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o Consejero de la Judicatura, durante el año previo al día de la designación.</p>	<p><b>ARTÍCULO 95.</b> Para ser designado Fiscal General se requiere cumplir con los siguientes requisitos:</p> <p><b>I.</b> Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;</p> <p><b>II.</b> Tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la designación;</p> <p><b>III.</b> Poseer al día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente autorizada para ello;</p>

	<p><b>IV.</b> Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;</p> <p><b>V.</b> Ser originario del Estado o haber residido en el durante los dos años anteriores al día de la designación, y</p> <p><b>VI.</b> No haber sido Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, o haber desempeñado cargo de elección popular, durante el año previo al día de la designación.</p> <p><b>VII.</b> No haber ocupado el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o Consejero de la Judicatura, durante el año previo al día de la designación.</p>
<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN II</b>  <b>DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN</b></p> <p><b>ARTÍCULO 100.</b> La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, será un Órgano autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal, en términos de la ley reglamentaria cuyo objeto es investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción.</p> <p>Para la designación del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el H. Congreso del Estado emitirá convocatoria para la postulación de candidatos, posteriormente se designará por el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes en la sesión.</p> <p>Para ser titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se requiere cumplir con los siguientes requisitos:</p> <p><b>I.</b> Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;</p> <p><b>II.</b> Tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la designación;</p> <p><b>III.</b> Poseer al día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente autorizada para ello;</p> <p><b>IV.</b> Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;</p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN II</b>  <b>DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS</b></p> <p><b>ARTÍCULO 100.</b> La Fiscalía General contará, al menos, con las Fiscalías Especializadas en materia de delitos electorales y en combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General.</p> <p>El nombramiento y remoción de los Fiscales Especializados podrá ser objetado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado; si el Congreso no se pronunciare dentro del plazo de diez días hábiles, se entenderá que no tiene objeción.</p> <p>Los Fiscales Especializados deberán cubrir los mismos requisitos que para ser Fiscal General y durarán en su encargo ocho años sin posibilidad de ser ratificados.</p>

<p>V. Ser originario del estado o haber residido en el estado durante los dos años anteriores al día de la designación, y                  VI. No haber sido Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, o haber desempeñado cargo de elección popular, durante el año previo al día de la designación.                  El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción durará en su encargo siete años sin posibilidad de ser ratificado.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>TITULO OCTAVO                  CAPITULO UNICO                  DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE CORRUPCIÓN, Y PATRIMONIAL DEL ESTADO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 125.</b> <u>Para proceder penalmente contra los diputados al Congreso; los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los miembros del Consejo de la Judicatura, los Jueces de Primera Instancia, el Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, los Secretarios del Despacho y el Fiscal General, los Comisionados del organismo garante de la transparencia en el Estado, los Presidentes, Regidores y Síndicos de los ayuntamientos de la entidad; por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.</u></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO OCTAVO                  CAPITULO UNICO                  DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE CORRUPCIÓN, Y PATRIMONIAL DEL ESTADO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 125.</b> Para proceder penalmente en contra de los Magistrados de los Tribunales locales y los Jueces de Primera Instancia, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha lugar o no a proceder contra el inculpado, de conformidad con lo previsto por esta Constitución y la Ley de la materia.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Los diputados al Congreso del Estado no podrán ser reconvenidos, detenidos, multados o juzgados por las opiniones que manifiesten en el ejercicio propio de su encargo.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p><b>ARTÍCULO 126.</b> No se requerirá declaración de procedencia del Congreso del Estado cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el <b>artículo 124</b> primer párrafo, cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.</p>	<p><b>ARTÍCULO 126.</b> No se requerirá declaración de procedencia del Congreso del Estado cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el <b>artículo 125</b> primer párrafo, cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.</p>

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados en el <b>artículo 124</b> se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.	Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados en el <b>artículo 125</b> se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.
---	---

<b>COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN</b>	
<b>TEXTO ANTERIOR</b>	<b>TEXTO VIGENTE</b>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO I</b> <b>DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE</b></p> <p><b>ARTÍCULO 1.</b> El pueblo nuevoleonés reconoce que los derechos humanos son fundamentales para la base y el objeto de las instituciones sociales. Toda persona en el Estado de Nuevo León, tiene derecho a gozar de los mismos y de las garantías que consagra esta Constitución.</p> <p>En el Estado todos nacen libres. Los esclavos que pisen el territorio del Estado, recobrarán por ese solo hecho su libertad y tienen derecho a la protección de las Leyes.</p> <p><u>Todas las Leyes y las autoridades del Estado, deberán</u> promover, proteger y garantizar que se respeten los derechos humanos, a través de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.</p> <p>Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, <u>género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil</u> o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO I</b> <b>DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE</b></p> <p><b>ARTÍCULO 1.</b> El pueblo nuevoleonés reconoce que los derechos humanos <b>reconocidos en la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y por esta Constitución, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Federal establece.</b></p> <p><b>Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los Tratados Internacionales de la materia, y por lo dispuesto en esta Constitución, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.</b></p> <p>En el Estado todos nacen libres. Los esclavos que pisen el territorio del Estado, recobrarán por ese solo hecho su libertad y tienen derecho a la protección de las Leyes.</p> <p><b>Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de</b> promover, proteger y garantizar que se respeten los derechos humanos, a través de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.</p> <p><b>En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.</b></p> <p>Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, <b>el</b> género, <b>la</b> edad, <b>las</b> discapacidades, <b>la</b> condición social, <b>las</b> condiciones de salud, <b>la</b> religión, <b>las</b> opiniones, <b>las</b> preferencias sexuales, <b>el</b> estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad</p>

<p>objeto anular o menoscabar <u>sus derechos humanos y libertades.</u></p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>humana y tenga por objeto anular o menoscabar <b>los derechos y libertades de las personas.</b></p> <p>...</p> <p>...</p>
<p><b>ARTICULO 3. ...</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p><b>ARTICULO 3. ...</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Toda persona tiene derecho a la movilidad, a gozar de ciudades sustentables que garanticen una adecuada calidad de vida y acceder a un transporte público de calidad, digno y eficiente. El Estado proveerá lo necesario para garantizar dicho acceso.</p>
<p><b>ARTICULO 20. ...</b></p> <p>...</p> <p>No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada <u>de la comisión de un delito.</u></p> <p>Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos de la Ley; la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia.</p>	<p><b>ARTICULO 20. ...</b></p> <p>...</p> <p>No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito, <b>o un tribunal administrativo para el pago de daños y perjuicios derivados de responsabilidades administrativas.</b></p> <p>Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos de la Ley; la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia.</p> <p><b>Los delitos o faltas administrativas de servidores públicos del Estado o sus municipios, así como de particulares vinculados con los mismos, serán sancionados conforme al código penal, la ley aplicable a responsabilidades administrativas y los ordenamientos municipales emitidos legalmente, según corresponda. Para efecto de la reparación del daño y, en su caso, para la aplicación de la ley de extinción de</b></p>

<p>En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:</p> <p><b>I.</b> ...</p> <p><b>II.</b> Procederá en los casos de secuestro, robo de vehículos y trata de personas, y enriquecimiento ilícito respecto de los bienes siguientes:</p> <p><b>a).</b> ...</p> <p><b>b).</b> Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.</p> <p><b>c). al d).</b> ...</p> <p>Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.</p>	<p><b>dominio del Estado, se estará a lo previsto por este artículo.</b></p> <p>En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:</p> <p><b>I.</b> ...</p> <p><b>II.</b> Procederá en los casos de secuestro, robo de vehículos y trata de personas, y enriquecimiento ilícito respecto de los bienes siguientes:</p> <p><b>a).</b> ...</p> <p><b>b).</b> Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del hecho ilícito pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto <b>del hecho ilícito</b>, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.</p> <p><b>c). al d).</b> ...</p> <p><b>e).</b> Aquellos cuyo valor de adquisición o valor de mercado, conjunta o individualmente, exceda los ingresos netos que puedan acreditarse legítimamente.</p> <p>Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.</p> <p><b>La acción de extinción de dominio, en el caso de los bienes que sean producto de un hecho ilícito, será imprescriptible.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO II</b>  <b>DEL ESTADO EN GENERAL, FORMA DE GOBIERNO,</b>  <b>NUEVOLEONESES Y CIUDADANOS</b></p> <p><b>ARTICULO 38.</b> La calidad de Ciudadano Nuevoleonés se suspende:</p> <p><b>I. a II.</b> ...</p> <p><b>III.</b> Por estar procesado. La suspensión tiene efecto, tratándose de individuos que gozan de fuero, desde que son declarados culpables o se resuelve que hay lugar a formación de causa, y desde que se dicta el auto de formal prisión, en los demás casos, hasta que quede cumplida la sentencia o se declare ejecutoriamente la absolución.</p> <p><b>IV. a V.</b> ...</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO II</b>  <b>DEL ESTADO EN GENERAL, FORMA DE GOBIERNO,</b>  <b>NUEVOLEONESES Y CIUDADANOS</b></p> <p><b>ARTICULO 38.</b> La calidad de Ciudadano Nuevoleonés se suspende:</p> <p><b>I. a II.</b> ...</p> <p><b>III.</b> Por estar condenado. La suspensión tiene efecto, desde que cause ejecutoria la sentencia condenatoria y hasta que quede cumplida la condena o se declare ejecutoriamente la absolución;</p> <p><b>IV. a V.</b> ...</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITULO IV</b>  <b>DEL PODER LEGISLATIVO</b></p> <p><b>ARTICULO 48.</b> No pueden ser Diputados:</p> <p><b>I. a II.</b> ...</p> <p><b>III.</b> Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, los Consejeros Electorales de la Comisión</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO IV</b>  <b>DEL PODER LEGISLATIVO</b></p> <p><b>ARTICULO 48.</b> No pueden ser Diputados:</p> <p><b>I. a II.</b> ...</p> <p><b>III.</b> Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, los Consejeros Electorales de la Comisión</p>

<p>Estatad Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los Consejeros de la Judicatura del Estado, los Comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y el Procurador General de Justicia;</p> <p><b>IV. a VII. ...</b> ...</p>	<p>Estatad Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los Consejeros de la Judicatura del Estado, los Comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, <b>el Fiscal General de Justicia del Estado, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y el Fiscal Especializado en Delitos Electorales;</b></p> <p><b>IV. a VII. ...</b> ...</p>
<p><b>ARTÍCULO 53.</b> Los Diputados gozan de una libertad absoluta para hablar, en consecuencia son inviolables por sus opiniones manifestadas en el desempeño de su cargo, sobre los cuales en ningún tiempo pueden ser reconvenidos o <u>juzgados por autoridad alguna.</u></p> <p><u>Corresponde al Presidente del Congreso velar por el respeto al Fuero Constitucional de los miembros del mismo y por el respeto y la inviolabilidad del Recinto donde se reúnan a sesionar.</u></p>	<p><b>ARTÍCULO 53.</b> Los Diputados gozan de una libertad absoluta para hablar, en consecuencia son inviolables por sus opiniones manifestadas en el desempeño de su cargo, sobre los cuales en ningún tiempo pueden ser reconvenidos o juzgados por autoridad alguna. <b>Dicha libertad incluye las expresiones verbales, escritas o en cualquier otra forma que sean manifestadas en el ejercicio del encargo, las que realicen en actos legislativos o en cualquiera de las actuaciones como legisladores y en proclamaciones.</b></p> <p>Corresponde al Presidente del Congreso <b>del Estado</b> velar por el respeto <b>a la inviolabilidad legislativa antes señalada,</b> así como por el respeto e inviolabilidad del Recinto Legislativo donde se reúnan a sesionar.</p>
<p><b>ARTÍCULO 62.</b> Los Secretarios del Despacho del Ejecutivo, así como el Procurador General de Justicia del Estado, el Coordinador Ejecutivo, los titulares de organismos descentralizados, fideicomisos públicos del Estado, así como los titulares de organismos autónomos, ocurrirán al Congreso para informar sobre asuntos de su competencia cuando sean requeridos por éste.</p> <p>... ...</p>	<p><b>ARTÍCULO 62.</b> Los Secretarios del Despacho del Ejecutivo, <b>el Fiscal General de Justicia del Estado, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, el Fiscal Especializado en Delitos Electorales,</b> el Coordinador Ejecutivo, los titulares de organismos descentralizados, fideicomisos públicos del Estado, así como los titulares de organismos autónomos, ocurrirán al Congreso para informar sobre asuntos de su competencia cuando sean requeridos por éste.</p> <p>... ...</p>
<p><b>ARTÍCULO 63.</b> Corresponde al Congreso:</p> <p><b>I. a XII. ...</b> <b>XIII. ...</b> La Auditoría Superior del Estado tendrá personalidad jurídica y autonomía <u>financiera, técnica</u> y de gestión. El Congreso del Estado coordinará y evaluará, sin perjuicio de la <u>autonomía financiera, técnica</u> y de gestión, el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior del Estado, de acuerdo con la Ley de la materia. Para tal efecto, deberá expedir la Ley que regule la creación,</p>	<p><b>ARTÍCULO 63.</b> Corresponde al Congreso:</p> <p><b>I. a XII. ...</b> <b>XIII. ...</b> La Auditoría Superior del Estado tendrá personalidad jurídica y autonomía financiera, <b>presupuestaria,</b> técnica y de gestión. El Congreso del Estado coordinará y evaluará, sin perjuicio de la autonomía financiera, <b>presupuestaria,</b> técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior del Estado, de acuerdo con la Ley de la materia. Para tal efecto, deberá expedir la Ley que regule la creación,</p>

<p>organización y atribuciones de la Auditoría Superior del Estado, y emitir la convocatoria para elegir al Auditor General del Estado, el cual será electo por consenso, a falta de éste por las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, y de no alcanzarse dicha votación, se remitirá de nueva cuenta el dictamen a la Comisión correspondiente para que formule nueva convocatoria.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p><b>XIII. A.</b> Expedir la ley que establezca las bases de coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción a que se refiere esta Constitución;</p> <p><b>XIV. a XV.</b> ...</p> <p><b>XVI.</b> Recibir del Gobernador, Diputados, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados de la Sala Superior y de las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa, Procurador General</p>	<p>organización y atribuciones de la Auditoría Superior del Estado, <b>y emitir la convocatoria pública para elegir al Auditor General del Estado.</b> El Congreso del Estado seleccionará de entre la lista de candidatos remitida por el Comité de Selección del Sistema, en caso de ser más de tres, a una terna de entre los inscritos en la convocatoria pública para elegir al Auditor General del Estado. Para elegir dicha terna, cada legislador votará por tres opciones de la lista de candidatos remitida y los tres candidatos con la votación más alta integrarán la terna.</p> <p><b>El Auditor General del Estado será electo de entre los integrantes de la terna, previa comparecencia, en votación por las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura. De no alcanzarse dicha votación, se procederá a una segunda votación entre los dos integrantes que hayan obtenido más votos. En caso de empate entre quienes no obtuvieron el mayor número de votos, habrá una votación para definir por mayoría quien entre dichos dos candidatos participará en la segunda votación. Si persiste el empate, se resolverá por insaculación entre ellos.</b></p> <p><b>Si en la segunda votación, ninguno de los dos obtiene el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, se procederá a la insaculación de entre estos últimos dos.</b></p> <p><b>La Ley preverá la participación de los integrantes del Comité de Selección del Sistema a que hace referencia la fracción III del artículo 109 de esta Constitución en la elaboración de la convocatoria, diseño de los mecanismos de evaluación y análisis de perfiles. El Comité de Selección del Sistema posterior al análisis de los perfiles definirá de manera fundada y motivada quiénes integran la lista de los candidatos que cumplan con los requisitos constitucionales y legales para ocupar dicho cargo y remitirá dicha lista al Pleno del Congreso.</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p><b>XIII. Bis.</b> Expedir la ley que establezca las bases de coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción a que se refiere esta Constitución;</p> <p><b>XIV. a XV.</b> ...</p> <p><b>XVI.</b> Recibir del Gobernador, Diputados, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados de la <b>Salas del Tribunal de Justicia Administrativa, Fiscal General de Justicia, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Fiscal Especializado en Delitos Electorales,</b> Consejeros de la Judicatura del Estado, Presidente de la Comisión</p>
--	--



<p>de Justicia, Consejeros de la Judicatura del Estado, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y Auditor General del Estado, la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución Federal, la particular del Estado y las Leyes que de ambas emanen;</p> <p><b>XVII.</b> Aceptar las renunciaciones del Gobernador, Diputados, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, Consejeros de la Judicatura del Estado, Auditor General del Estado, Comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, y Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuando se funden en una imposibilidad justificada;</p> <p><b>XVIII. a XXII.</b> ...</p> <p><b>XXIII.</b> La facultad de aprobar la propuesta que sobre los cargos de Procurador General de Justicia y de Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, realice el Ejecutivo, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 87 de esta Constitución;</p>	<p>Estatal de Derechos Humanos, Comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y Auditor General del Estado, la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución Federal, la particular del Estado y las Leyes que de ambas emanen;</p> <p><b>XVII.</b> Aceptar las renunciaciones del Gobernador, Diputados, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, Consejeros de la Judicatura del Estado, <b>Fiscal General de Justicia, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Fiscal Especializado en Delitos Electorales, Auditor General del Estado,</b> Comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, y Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuando se funden en una imposibilidad justificada;</p> <p><b>XVIII. a XXII.</b> ...</p> <p><b>XXIII.</b> La facultad de aprobar la propuesta que sobre <b>el cargo del Titular del Órgano Interno de Control estatal y Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, realice el Ejecutivo, bajo el siguiente procedimiento:</b></p> <p><b>Los titulares de las dependencias antes señaladas serán propuestos al Congreso del Estado por el Ejecutivo. La aprobación se hará, previa comparecencia de la persona propuesta, por el voto secreto de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la comparecencia. Si el Congreso del Estado no se encontrase reunido, la Diputación Permanente convocará de inmediato a un Período Extraordinario de Sesiones.</b></p> <p><b>En caso de que, transcurrido el plazo de cinco días, el Congreso del Estado rechace a la persona propuesta para ocupar el cargo, se abstenga de resolver, o no se alcance la votación de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, el Ejecutivo del Estado, en un plazo de diez días, propondrá a otra persona y la aprobación se efectuará en los términos del párrafo anterior.</b></p> <p><b>Si presentada la segunda propuesta, el Congreso del Estado la rechaza o no reúne la votación requerida dentro de los plazos señalados, en ese mismo acto, la aprobación se llevará a cabo mediante el voto secreto de cuando menos la mayoría de los diputados asistentes a la sesión; de no reunirse esta votación o si el Congreso del Estado se abstiene de resolver dentro de los plazos señalados, el órgano proponente, dentro de los diez días posteriores a la celebración de la sesión, realizará la</b></p>
---	--

<p><b>XXIV. a XXVII. ...</b> <b>XXVIII.</b> Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 112; <b>XXIX. a XXXI. ...</b> <b>XXXII.</b> Autorizar la contratación de empréstitos cuando en garantía se afecten ingresos o bienes del Estado;</p> <p><b>XXXIII. a XLIV. ...</b> <b>XLV. ...</b> ...</p> <p>Asimismo, el Tribunal de Justicia Administrativa será el órgano competente a través de la Sala Especializada <u>en materia Anticorrupción</u>, para imponer las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales, por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves <u>y a los particulares</u> que participen en los actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.</p> <p>Para tal efecto, deberá incluir en la Ley que regula la creación, organización y atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa, las facultades de la sala especializada en <u>materia anticorrupción</u> y la facultad del Congreso para emitir la convocatoria para seleccionar por mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes a una terna para elegir al Magistrado Anticorrupción, el cual será electo por las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, y de no alcanzarse dicha votación, se procederá a la insaculación de uno de los integrantes</p>	<p>designación, la cual no podrá recaer en ninguna de las personas que en ese mismo procedimiento ya hubieran sido propuestas al Congreso del Estado para ocupar dicho cargo.</p> <p><b>XXIV. a XXVII. ...</b> <b>XXVIII.</b> Se deroga</p> <p><b>XXIX. a XXXI. ...</b> <b>XXXII.</b> Autorizar por las dos terceras partes de los miembros presentes, la contratación de obligaciones o empréstitos cuando en garantía se afecten ingresos o bienes del Estado o de los Municipios; <b>XXXIII. a XLIV. ...</b> <b>XLV. ...</b> ...</p> <p>Asimismo, el Tribunal de Justicia Administrativa será el órgano competente a través de la Sala Especializada <u>en materia de Responsabilidades Administrativas</u>, para imponer las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales, por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves <u>o que constituyan hechos de corrupción, así como</u> a los particulares que participen en los actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales <u>así como conocer de los asuntos derivados de las sanciones administrativas que emitan otras autoridades.</u></p> <p>Para tal efecto, deberá incluir en la Ley que regula la creación, organización y atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa, las facultades de la sala especializada en materia <u>de Responsabilidades Administrativas</u> y la facultad del Congreso para emitir la convocatoria <u>y seleccionar de entre la lista de candidatos remitida por el Comité de Selección del Sistema, en caso de ser más de tres, a una terna de entre los inscritos para elegir al Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas.</u> Para elegir dicha terna, cada legislador votará por tres opciones de la lista de candidatos remitida y los tres candidatos con la votación más alta integrarán la terna.</p> <p><u>El Magistrado de la Sala Especializada en materia de</u></p>
---	---

<p>de la terna.</p> <p><b>XLVI. a LIII. ...</b> <b>LIV.</b> Para expedir la ley que distribuya competencias para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados <u>con faltas administrativas graves</u> que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación. <b>LV.</b> Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, a los titulares de los órganos internos de <u>control de los órganos autónomos</u> reconocidos en esta Constitución que ejerzan recursos del</p>	<p><b>Responsabilidades Administrativas</b> será electo de entre los integrantes de la terna, previa comparecencia, en votación por las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura. De no alcanzarse dicha votación, se procederá a una segunda votación entre los dos integrantes que hayan obtenido más votos. En caso de empate entre quienes no obtuvieron el mayor número de votos, habrá una votación para definir por mayoría quien entre dichos dos candidatos participará en la segunda votación. Si persiste el empate, se resolverá por insaculación entre ellos.</p> <p>Si en la segunda votación, ninguno de los dos candidatos obtiene el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, se procederá a la insaculación de entre estos últimos dos.</p> <p>El Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas podrá ser removido por las mismas causas y con el mismo procedimiento que para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.</p> <p>La Ley preverá la participación de los integrantes del Comité de Selección del Sistema a que hace referencia la fracción III del artículo 109 de esta Constitución en la elaboración de la convocatoria, diseño de los mecanismos de evaluación y análisis de perfiles. El Comité de Selección del Sistema posterior al análisis de los perfiles definirá de manera fundada y motivada quiénes integran la lista de los candidatos que cumplan con los requisitos constitucionales y legales para ocupar dicho cargo y remitirá dicha lista al Pleno del Congreso.</p> <p><b>XLVI. a LIII. ...</b> <b>LIV.</b> Para expedir la ley que distribuya competencias para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados <b>con hechos de corrupción</b> y faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación. <b>LV.</b> Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, a los titulares de los órganos internos de control de los órganos <b>constitucionalmente</b> autónomos reconocidos en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado. <b>La designación se hará de la propuesta que los órganos constitucionalmente autónomos presenten al Congreso del Estado de conformidad al siguiente procedimiento:</b></p>
---	--

<p>Presupuesto de Egresos del Estado, así como a los de los Poderes Ejecutivo y Judicial. <u>La designación se</u> hará de la propuesta que los órganos autónomos y los Poderes Ejecutivo y Judicial presenten a la Legislatura.</p> <p><b>LVI.</b> Instituir mediante las leyes que expida, la Fiscalía Anticorrupción, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con las atribuciones que señalen las mismas. En la Ley Reglamentaria se señalarán los requisitos particulares que deberán cumplir los aspirantes a la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción. Su titular será nombrado por el término de ocho años, mediante convocatoria pública que emitirá la Legislatura. El Pleno del Congreso</p>	<p>Los titulares de los órganos internos de control antes señalados serán propuestos al Congreso del Estado. La aprobación se hará, previa comparecencia de la persona propuesta, por el voto secreto de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la comparecencia.</p> <p>Si el Congreso del Estado no se encontrase reunido, la Diputación Permanente convocará de inmediato a un Período Extraordinario de Sesiones.</p> <p>En caso de que, transcurrido el plazo de cinco días, el Congreso del Estado rechace a la persona propuesta para ocupar el cargo, se abstenga de resolver, o no se alcance la votación de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, el órgano proponente, en un plazo de diez días, propondrá a otra persona y la aprobación se efectuará en los términos de los párrafos anteriores.</p> <p>Si presentada la segunda propuesta, el Congreso del Estado la rechaza o no reúne la votación requerida dentro de los plazos señalados, en ese mismo acto, la aprobación se llevará a cabo mediante el voto secreto de cuando menos la mayoría de los diputados asistentes a la sesión; de no reunirse esta votación o si el Congreso del Estado se abstiene de resolver dentro de los plazos señalados, el órgano proponente, dentro de los diez días posteriores a la celebración de la sesión, realizará la designación, la cual no podrá recaer en ninguna de las personas que en ese mismo procedimiento ya hubieran sido propuestas al Congreso del Estado para ocupar dicho cargo.</p> <p><b>LVI.</b> Expedir la ley que regule la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, como órgano con autonomía financiera, técnica, presupuestaria, de gestión, de decisión y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considere como delitos por hechos de corrupción.</p> <p>El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción será nombrado por el término de seis años, mediante convocatoria pública que emitirá la Legislatura a partir de su ausencia definitiva o noventa días previos a que finalice su término.</p> <p>El Congreso del Estado seleccionará de entre la lista de candidatos remitida por el Comité de Selección del Sistema, en caso de ser más de tres, a una terna de entre los inscritos para elegir al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción. Para elegir dicha terna,</p>
--	--

<p>elegirá al titular de la Fiscalía Anticorrupción por las dos terceras partes de sus integrantes. No obstante lo anterior, de no alcanzarse dicha votación, se elegirá por las dos terceras partes de sus integrantes a una terna la cual será propuesta al Pleno de la Legislatura y se procederá a la insaculación de uno de los integrantes de la misma. Lo anterior se hará de acuerdo con los términos de la Ley a que se refiere la fracción XIII-A de este artículo.</p> <p><b>LVII. ...</b></p>	<p>cada legislador votará por tres opciones de la lista de candidatos remitida y los tres candidatos con la votación más alta integrarán la terna.</p> <p>El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción será electo de entre los integrantes de la terna, previa comparecencia, en votación por las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura. De no alcanzarse dicha votación, se procederá a una segunda votación entre los dos integrantes que hayan obtenido más votos. En caso de empate entre quienes no obtuvieron el mayor número de votos, habrá una votación para definir por mayoría quien entre dichos dos candidatos participará en la segunda votación. Si persiste el empate, se resolverá por insaculación entre ellos.</p> <p>Si en la segunda votación, ninguno de los dos obtiene el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, se procederá a la insaculación de entre estos últimos dos.</p> <p>La Ley preverá la participación de los integrantes del Comité de Selección del Sistema a que hace referencia la fracción III del artículo 109 de esta Constitución en la elaboración de la convocatoria, diseño de los mecanismos de evaluación y análisis de perfiles. El Comité de Selección del Sistema posterior al análisis de los perfiles definirá de manera fundada y motivada quiénes integran la lista de los candidatos que cumplan con los requisitos constitucionales y legales para ocupar dicho cargo y remitirá dicha lista al Pleno del Congreso.</p> <p>El titular de la citada fiscalía especializada podrá ser removido por el Congreso del Estado por las causas que establezca la ley mediante el voto de las dos terceras partes de los integrantes, sin perjuicio de que sea destituido por causa de responsabilidad administrativa en términos del Título VII de esta Constitución; y</p> <p><b>LVII. ...</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>TITULO V DEL PODER EJECUTIVO</b></p> <p><b>ARTICULO 82.</b> Para ser Gobernador se requiere:  <b>I. a II. ...</b>  <b>III.</b> No desempeñar el cargo de Secretario del Despacho del Ejecutivo, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal de Justicia Administrativa, Consejero de la Judicatura del Estado, <u>Procurador General de Justicia</u>, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Consejero Electoral de la Comisión Estatal Electoral,</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO V DEL PODER EJECUTIVO</b></p> <p><b>ARTICULO 82.</b> Para ser Gobernador se requiere:  <b>I. a II. ...</b>  <b>III.</b> No desempeñar el cargo de Secretario del Despacho del Ejecutivo, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal de Justicia Administrativa, Consejero de la Judicatura del Estado, <b>Fiscal General de Justicia del Estado, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, el Fiscal Especializado en Delitos Electorales,</b> Presidente</p>

<p>Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, Comisionado de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, Servidor Público o Militar en servicio activo.</p> <p>...</p>	<p>de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Consejero Electoral de la Comisión Estatal Electoral, Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, Comisionado de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, Servidor Público o Militar en servicio activo.</p> <p>...</p>
<p><b>ARTICULO 85.</b> Al Ejecutivo corresponde:</p> <p><b>I. a IV. ...</b></p> <p><b>V.</b> Ejercer el presupuesto asignado al Ejecutivo aprobado por el Congreso con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos del Estado a los que están destinados; <u>contratar créditos previa Ley o Decreto del Congreso del Estado con las limitaciones que establece esta Constitución y las Leyes; garantizar las obligaciones que contraigan las entidades paraestatales y los Ayuntamientos del Estado. El titular del Ejecutivo dará cuenta al Congreso del Estado de los términos en que ejerza las atribuciones anteriores;</u></p> <p><b>VI. a VII. ...</b></p> <p><b>VIII.</b> Derogada</p> <p><b>IX. a XIX. ...</b></p> <p><b>XX.</b> Someter a la aprobación del Congreso del Estado, la propuesta que le presente respecto a los cargos de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Magistrados de la Sala Superior y de las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa, <u>de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 63 fracción XXII, 98 y 99 de esta Constitución;</u></p> <p><b>XXI. a XXVIII. ...</b></p>	<p><b>ARTICULO 85.</b> Al Ejecutivo corresponde:</p> <p><b>I. a IV. ...</b></p> <p><b>V.</b> Ejercer el presupuesto asignado al Ejecutivo aprobado por el Congreso con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos del Estado a los que están destinados; <b>contratar obligaciones o empréstitos previa ley o decreto del Congreso del Estado con las limitaciones que establece el artículo 117 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las Leyes aplicables; garantizar las obligaciones que contraigan las entidades paraestatales y los Ayuntamientos del Estado. El titular del Ejecutivo dará cuenta al Congreso del Estado de los términos en que ejerza las atribuciones anteriores;</b></p> <p><b>VI. a VII. ...</b></p> <p><b>VIII.</b> <b>Combatir la corrupción e impulsar y proteger la integridad pública y la transparencia en el ejercicio del poder, mediante políticas, controles y procedimientos adecuados. El titular del Órgano Interno de Control estatal tendrá autonomía de ejercicio presupuestal y de gestión para organizar la estructura y funcionamiento de dicha Secretaría;</b></p> <p><b>IX. a XIX. ...</b></p> <p><b>XX.</b> Someter a la aprobación del Congreso del Estado, la propuesta que le presente respecto a los cargos de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Magistrados de la Sala Superior y de las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa <b>con excepción del Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas,</b> de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 63 fracción XXII, 98 y 99 de esta Constitución:</p> <p><b>XXI. a XXVIII. ...</b></p>
<p><b>ARTICULO 87. ...</b></p> <p>El Gobernador será Jefe y responsable de la Administración Pública centralizada y paraestatal del Estado, en los términos de esta Constitución y de la Ley Orgánica que expida el Congreso, la cual</p>	<p><b>ARTICULO 87. ...</b></p> <p>El Gobernador será Jefe y responsable de la Administración Pública centralizada y paraestatal del Estado, en los términos de esta Constitución y de la Ley Orgánica que expida el Congreso, la cual</p>

<p>distribuirá los negocios del orden administrativo en las Secretarías y Procuraduría General de Justicia, definirá las bases de creación de las entidades paraestatales y la intervención que en éstas tenga el Ejecutivo.</p> <p>El Ministerio Público, institución que tiene por objeto ejercer la representación y defensa de los intereses de la sociedad, velar por la exacta observancia de las leyes de interés general y perseguir los delitos del orden común, será desempeñado por un Procurador General de Justicia, por un Fiscal Anticorrupción, por los Agentes de dicho Ministerio y demás servidores públicos que determine su Ley Orgánica. El cargo de Procurador sólo es renunciable por causa grave, que será sometida a la consideración del Gobernador del Estado, a quien corresponde su aceptación. Para ser Procurador General de Justicia y para ser Fiscal Anticorrupción se deberán reunir los mismos requisitos que para ser Magistrado prevenga esta Constitución.</p> <p>El Procurador General de Justicia será propuesto al H. Congreso del Estado por el Ejecutivo. La aprobación se hará, previa comparecencia de la persona propuesta, por el voto secreto de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la comparecencia. Si el H. Congreso no se encontrase reunido, la Diputación Permanente convocará de inmediato a un Período Extraordinario de Sesiones.</p> <p>En caso de que, transcurrido el plazo de cinco días, el H. Congreso rechace a la persona propuesta para ocupar el cargo, se abstenga de resolver, o no se alcance la votación de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, el Ejecutivo del Estado, en un plazo de diez días, propondrá a otra persona y la aprobación se efectuará en los términos del párrafo anterior.</p> <p>Si presentada la segunda propuesta, el H. Congreso la rechaza, se abstiene de resolver, o no reúne la votación requerida dentro de los plazos señalados, en ese mismo acto, la aprobación se llevará a cabo mediante el voto secreto de cuando menos la mitad más uno de los diputados asistentes a la sesión; de no reunirse esta votación, el Ejecutivo, dentro de los diez días posteriores a la celebración de la sesión, realizará la designación, la cual no podrá recaer en ninguna de las personas que en ese mismo procedimiento ya hubieran sido propuestas al Congreso para ocupar dicho cargo.</p> <p>El Fiscal Anticorrupción contará con autonomía funcional, presupuestal</p>	<p>distribuirá los negocios del orden administrativo en las Secretarías y definirá las bases de creación de las entidades paraestatales y la intervención que en éstas tenga el Ejecutivo.</p> <p>El Ministerio Público, institución que tiene por objeto ejercer la representación y defensa de los intereses de la sociedad, velar por la exacta observancia de las leyes de interés general y perseguir los delitos del orden común, será desempeñado por una Fiscalía General de Justicia del Estado que contará por lo menos con una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y otra especializada en Delitos Electorales, por los Agentes de dicho Ministerio y demás servidores públicos que determine la Ley.</p> <p>La Fiscalía General de Justicia será un organismo autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión en los términos que determine la Ley.</p> <p>Los cargos de Fiscal General de Justicia del Estado, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y Fiscal Especializado en Delitos Electorales sólo son renunciables por causa grave, que será sometida a la consideración del Poder Legislativo del Estado, a quien corresponde su aceptación.</p> <p>Para ser Fiscal General de Justicia del Estado, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y Fiscal Especializado en Delitos Electorales se deberán reunir los requisitos que señale la Ley y los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;</li><li>II. Tener cuando menos 35 años el día de la designación;</li><li>III. Poseer el día de la designación, título profesional de licenciado en derecho, con antigüedad mínima de diez años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;</li><li>IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado, cohecho u otro hecho de corrupción o delito en general que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y</li><li>V. No haber sido Gobernador o Secretario de Despacho del Ejecutivo, cuando menos un año previo al día de su nombramiento y tener un</li></ol>
---	---

<p>y con facultades plenas para la investigación y persecución de los delitos de su competencia, en materia de corrupción vinculada con servidores públicos, así como para supervisar y organizar la actuación de los agentes del Ministerio Público, agentes investigadores y peritos que le estén adscritos y que se determinen en la Ley Orgánica respectiva.</p> <p>El Titular de la Fiscalía Anticorrupción será nombrado en los términos establecidos en la fracción LIV del artículo 63 de esta Constitución.</p> <p>Una Ley determinará la organización, funcionamiento, competencia y procedimientos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que será un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual contará con un Consejo Consultivo que se ajustará a un procedimiento de convocatoria pública, en los términos y condiciones que determine la Ley.</p> <p>El organismo a que se refiere el párrafo anterior conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público que violen estos derechos, con excepción de los del Poder Judicial del Estado.</p> <p>Asimismo, formulará recomendaciones públicas autónomas, no vinculativas, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.</p> <p>Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presente la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar, motivar y publicar su negativa. El Congreso del Estado a petición de este organismo, podrá solicitar a las autoridades o servidores públicos responsables, un informe por escrito, a efecto de que explique el motivo de su negativa.</p> <p>Este organismo no será competente tratándose de asuntos electorales, y jurisdiccionales.</p> <p>La elección de Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se ajustará a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la Ley.</p>	<p>perfil que le permita que la función de procuración de justicia cumpla con los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.</p> <p>El Fiscal General de Justicia del Estado será nombrado por el término de seis años y será designado y removido conforme a lo siguiente:</p> <p><b>I.</b> Dentro de los diez días posteriores a la ausencia definitiva del Fiscal General o noventa días previos a que finalice su término, el Congreso del Estado emitirá una convocatoria por un plazo de quince días y contará con treinta días después de concluido dicho plazo para integrar una lista de cuatro candidatos al cargo de entre la lista de candidatos remitida por el Comité de Selección del Sistema, en caso de ser más de cuatro. Para elegir a los cuatro candidatos, cada legislador votará por cuatro opciones de la lista de candidatos remitida y los cuatro candidatos con la votación más alta integrarán la lista.</p> <p>La Ley preverá la participación de los integrantes del Comité de Selección del Sistema a que hace referencia la fracción III del artículo 109 de esta Constitución en la elaboración de la convocatoria, diseño de los mecanismos de evaluación y análisis de perfiles. El Comité de Selección del Sistema posterior al análisis de los perfiles definirá de manera fundada y motivada quiénes integran la lista de los candidatos que cumplan con los requisitos constitucionales y legales para ocupar dicho cargo y remitirá dicha lista al Pleno del Congreso.</p> <p><b>II.</b> Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior y dentro de los cinco días siguientes, el Gobernador enviará la terna definitiva para la consideración del Congreso del Estado.</p> <p><b>III.</b> El Congreso del Estado, con base en la terna definitiva enviada por el Gobernador y previa comparecencia, designará al Fiscal General mediante el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura. De no alcanzarse dicha votación, se procederá a una segunda votación entre los dos integrantes de la terna que hayan obtenido más votos. En caso de empate entre quienes no obtuvieron el mayor número de votos, habrá una votación para definir por mayoría quien entre dichos candidatos participará en la segunda votación. Si persiste el empate, se resolverá por insaculación entre ellos.</p> <p>Si en la segunda votación, ninguno de los dos obtiene el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, se procederá a la insaculación de entre estos últimos dos.</p>
--	---



	<p>En caso de que el Gobernador no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Congreso del Estado tendrá diez días para designar al Fiscal General de entre los cuatro candidatos de la lista que señala la fracción I de este artículo.</p> <p><b>IV.</b> El Fiscal General podrá ser removido por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, por las causas que establezca la ley o en virtud de previa solicitud del Gobernador, la cual deberá ser resuelta dentro del término de diez días; si el Congreso del Estado no resuelve en dicho plazo, se tendrá por rechazada la solicitud de remoción;</p> <p><b>V.</b> En los recesos del Congreso del Estado, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a sesiones extraordinarias para conocer de la designación u objeción a la remoción del Fiscal General; y</p> <p><b>VI.</b> Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la Ley.</p> <p>La imputación de los delitos del orden común cuando el acusado sea uno de los servidores públicos a que hace referencia el artículo 112 de esta Constitución será realizada de forma exclusiva e indelegable por el Fiscal General de Justicia o el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, según corresponda.</p> <p>Las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción y en Delitos Electorales funcionarán bajo el principio de unidad y colaboración.</p> <p>La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contará con autonomía funcional, presupuestal, técnica, de gestión, de decisión y operativa para la investigación y persecución de los delitos de su competencia, en materia de corrupción de servidores públicos y particulares, así como para supervisar y organizar la actuación de los agentes del Ministerio Público, agentes investigadores y peritos que le estén adscritos y que se determinen en la Ley respectiva.</p> <p>El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción deberá actuar de oficio en la investigación y, en su caso, persecución de los posibles delitos por hechos de corrupción que sean de su conocimiento por cualquier medio en términos de la Ley.</p> <p>El Fiscal Especializado en Delitos Electorales durará 6 años en su encargo y será nombrado y removido en los mismos términos que el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, establecidos en la fracción LVI del artículo 63 de esta Constitución.</p> <p>Una Ley determinará la organización, funcionamiento, competencia y</p>
--	---

	<p>procedimientos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que será un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual contará con un Consejo Consultivo que se ajustará a un procedimiento de convocatoria pública, en los términos y condiciones que determine la Ley.</p> <p>El organismo a que se refiere el párrafo anterior conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público que violen estos derechos, con excepción de los del Poder Judicial del Estado.</p> <p>Asimismo, formulará recomendaciones públicas autónomas, no vinculativas, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.</p> <p>Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presente la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar, motivar y publicar su negativa. El Congreso del Estado a petición de este organismo, podrá solicitar a las autoridades o servidores públicos responsables, un informe por escrito, a efecto de que explique el motivo de su negativa.</p> <p>Este organismo no será competente tratándose de asuntos electorales, y jurisdiccionales.</p> <p>La elección de Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se ajustará a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la Ley.</p>
<p><b>ARTICULO 95.</b> El tribunal superior de Justicia tendrá jurisdicción plena para conocer y resolver, en los términos que señale la Ley reglamentaria, de los siguientes medios de control de la constitucionalidad local:</p> <p>I. ...</p> <p>II. De la acción de inconstitucionalidad local para impugnar normas generales expedidas por el Congreso <u>o por</u> cualquier ayuntamiento, que en abstracto violen los derechos fundamentales de las personas emanados de esta Constitución, o violen la distribución de competencias que en esta Constitución se establecen para el Estado y los municipios, o para cualquiera de los poderes u órganos públicos estatales o municipales. Esta acción de inconstitucionalidad podrá ser promovida por los diputados, tratándose de normas generales</p>	<p><b>ARTICULO 95.</b> El tribunal superior de Justicia tendrá jurisdicción plena para conocer y resolver, en los términos que señale la Ley reglamentaria, de los siguientes medios de control de la constitucionalidad local:</p> <p>I. ...</p> <p>II. De la acción de inconstitucionalidad local para impugnar normas generales expedidas por el Congreso <del>del Estado</del> o por cualquier ayuntamiento, que en abstracto violen los derechos fundamentales de las personas emanados de esta Constitución, o violen la distribución de competencias que en esta Constitución se establecen para el Estado y los municipios, o para cualquiera de los poderes u órganos públicos estatales o municipales. Esta acción de inconstitucionalidad podrá ser promovida por los diputados, tratándose de normas generales</p>

<p>expedidas por el Congreso del Estado, y por los regidores tratándose de normas generales expedidas por su respectivo ayuntamiento, en los términos que determine la Ley reglamentaria. Esta acción también podrá promoverla el Procurador de Justicia del Estado.</p> <p>...</p>	<p>expedidas por el Congreso del Estado, y por los regidores tratándose de normas generales expedidas por su respectivo ayuntamiento, en los términos que determine la Ley reglamentaria. Esta acción también podrá promoverla el Procurador de Justicia del Estado.</p> <p>...</p>
<p><b>ARTICULO 98.</b> Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, se requiere:</p> <p><b>I. a V. ...</b></p> <p><b>VI.</b> No haber sido Gobernador, Secretario de Despacho del Ejecutivo, Procurador General de Justicia, Senador, ni Diputado Federal o Local, cuando menos un año previo al día de su nombramiento.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p><b>ARTICULO 98.</b> Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, se requiere:</p> <p><b>I. a V. ...</b></p> <p><b>VI.</b> No haber sido Gobernador, Secretario de Despacho del Ejecutivo <b>Fiscal General de Justicia del Estado, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Fiscal Especializado en Delitos Electorales</b>, Senador, ni Diputado Federal o Local, cuando menos un año previo al día de su nombramiento.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITULO VII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE CORRUPCIÓN, Y PATRIMONIAL DEL ESTADO</b></p> <p><b>ARTICULO 105. ...</b></p> <p>...</p> <p>Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo <u>estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial, de conflicto de intereses y declaración fiscal ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO VII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE CORRUPCIÓN, Y PATRIMONIAL DEL ESTADO</b></p> <p><b>ARTICULO 105. ...</b></p> <p>...</p> <p>Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo, <b>así como los candidatos a puestos de elección popular, estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial, de conflicto de intereses y declaración fiscal ante las autoridades competentes en los términos que determine la ley estableciendo además sanciones aplicables en caso de incumplimiento.</b></p>
<p><b>ARTICULO 107.</b> El Congreso del Estado expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial de la Administración Pública, y las demás normas conducentes para sancionar a quienes, teniendo éste carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:</p> <p><b>I. ...</b></p> <p><b>II.</b> La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, <u>en colusión con</u></p>	<p><b>ARTICULO 107.</b> El Congreso del Estado expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial de la Administración Pública, y las demás normas conducentes para sancionar a quienes, teniendo éste carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:</p> <p><b>I. ...</b></p> <p><b>II.</b> La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción <b>será perseguida y</b></p>

<p><u>servidores públicos será perseguida y sancionada en los términos del Código Penal.</u></p> <p>III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los hechos, actos u omisiones que sin constituir delito, puedan afectar la eficiencia y buena marcha de los asuntos públicos. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los hechos, actos u omisiones. <u>La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos, hechos, actos u omisiones.</u></p> <p>Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Los entes públicos estatales y municipales contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia, <u>las facultades</u> que determine la Ley para prevenir, corregir e investigar, hechos, actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades <u>administrativas</u>; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso,</p>	<p><u>sancionada en los términos del Código Penal.</u></p> <p>III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los hechos, actos u omisiones que sin constituir delito, puedan afectar la eficiencia y buena marcha de los asuntos públicos. <b>o sean hechos de corrupción. Los superiores jerárquicos serán corresponsables de las faltas administrativas graves o hechos de corrupción de los servidores públicos cuando exista nepotismo o colusión.</b></p> <p><b>Las sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución o inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los hechos, actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos, hechos, actos u omisiones.</b></p> <p><b>Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de ley por un plazo mayor de diez años pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá dar aviso al titular del órgano interno de control estatal, en forma razonada y justificada, de tal circunstancia.</b></p> <p><b>La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la ley, quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado.</b></p> <p><b>Los hechos de corrupción y las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Los entes públicos estatales y municipales contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia, <b>ejercer las facultades</b> que determine la Ley para prevenir, corregir e investigar, hechos, actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas <b>o hechos de corrupción</b>; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia</p>
---	--

<p>egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales y municipales y participaciones estatales; así como presentar las denuncias por hechos, actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la <u>Fiscalía Anticorrupción</u> a que se refiere esta Constitución.</p> <p><b>IV.</b> La jurisdicción administrativa conocerá de las controversias en que se reclame a la Administración Pública Estatal o Municipal el pago de indemnización <u>por daños y perjuicios que ocasionen a las personas en sus bienes y derechos.</u></p> <p><b>V.</b> El Tribunal de Justicia Administrativa impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Las sanciones administrativas aplicables a las personas morales, se extenderán en el ámbito administrativo a los tenedores y administradores. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para participar en la comisión de faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos hechos, actos u omisiones.</p> <p>Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente.</p> <p>Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante las autoridades competentes, respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.</p>	<p>Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales y municipales y participaciones estatales; así como presentar las denuncias por hechos, actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la <b>Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción</b> a que se refiere esta Constitución.</p> <p><b>IV.</b> La jurisdicción administrativa conocerá de las controversias en que se reclame a la Administración Pública Estatal o Municipal el pago de indemnización <b>conforme al último párrafo del artículo 15 de esta Constitución.</b></p> <p><b>V.</b> El Tribunal de Justicia Administrativa impondrá a los particulares que intervengan <b>en hechos de corrupción o actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación temporal o permanente para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Las sanciones administrativas aplicables a las personas jurídicas, se extenderán en el ámbito administrativo a los propietarios, tenedores, y administradores y personas con poder de mando. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la persona jurídica cuando se trate de hechos de corrupción o faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que se acredite la participación de sus órganos de administración, decisión o vigilancia, o de sus socios, accionistas, dueños o personas con poder de mando, en aquellos casos en que se advierta que la persona jurídica es utilizada de manera sistemática para participar en la comisión de hechos de corrupción o faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Para sancionar los hechos de corrupción cometidos por particulares y personas jurídicas, la ley considerara la capacidad económica de los responsables y la cuantía de la afectación.</b></p> <p><b>Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos hechos, actos u omisiones, así como las medidas precautorias para salvaguardar el patrimonio y los intereses del Estado.</b></p>
--	---

<p>En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información.</p> <p>...</p>	<p>Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. Cualquier persona podrá formular denuncia ante las autoridades competentes, respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo. La ley preverá mecanismos para proteger la confidencialidad de las denuncias ciudadanas y el anonimato de los denunciantes, incentivará la presentación de dichas denuncias y establecerá sanciones a quienes presenten denuncias falsas o de mala fe.</p> <p>En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información.</p> <p>Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial, se observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.</p> <p>...</p>
<p><b>ARTÍCULO 109.</b> El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de <u>recursos públicos</u>.</p> <p>Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:</p> <p><b>I.</b> El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía Anticorrupción; de la Dependencia del Ejecutivo del Estado responsable del control interno; por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana;</p>	<p><b>ARTÍCULO 109.</b> El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. <b>El Sistema se regirá por los principios de transparencia y máxima publicidad.</b></p> <p>Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:</p> <p><b>I.</b> El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado; <b>de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Dependencia del Ejecutivo del Estado responsable del control interno; por el Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura del Estado y tres del Comité de Participación</b></p>

<p><b>II.</b> El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción; la forma para su designación y sus atribuciones quedarán determinadas en la ley, y</p> <p><b>III.</b> Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:</p> <p><b>a)</b> La coordinación con las autoridades Estatales y Municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción;</p> <p><b>b)</b> El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y</p>	<p>Ciudadana. El Comité Coordinador será presidido por uno de los representantes del Comité de Participación Ciudadana y la presidencia será rotativa entre estos representantes. La ley podrá contemplar la participación de otros integrantes con voz;</p> <p><b>II.</b> El Comité de Participación Ciudadana del Sistema será designado por el Comité de Selección del Sistema y estará integrado por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. La forma para su designación y sus atribuciones quedarán determinadas en la ley. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana durarán cinco años en sus cargos y solo podrán ser removidos por las causas graves que prevea la ley de la materia;</p> <p><b>III.</b> El Comité de Selección del Sistema será designado por el Congreso del Estado y estará integrado por nueve ciudadanos con el objeto de realizar una amplia consulta pública estatal dirigida a toda la sociedad en general para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo de integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema además de las otras atribuciones determinadas en esta Constitución y la ley.</p> <p>La forma de la designación del Comité de Selección quedará determinada en esta Constitución y la ley, debiéndose hacer una convocatoria en la cual se presenten propuestas de candidatos por un grupo amplio de instituciones y organizaciones de reconocido prestigio, incluyendo instituciones de educación superior e investigación; organizaciones de la sociedad civil que participen en fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción y agrupaciones profesionales. Dichos candidatos deberán presentar los documentos que acrediten el perfil solicitado en la convocatoria la cual deberá incluir como requisito que los aspirantes tengan experiencia o conocimiento en materia de fiscalización, de rendición de cuentas o combate a la corrupción o en otras que se consideren relevantes;</p> <p><b>IV.</b> Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:</p> <p><b>a)</b> La coordinación con las autoridades Estatales y Municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción;</p> <p><b>b)</b> El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y</p>
---	--

<p>disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;</p> <p><b>c)</b> La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno;</p> <p><b>d)</b> El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos;</p> <p><b>e)</b> La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.</p> <p>Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno.</p> <p>Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.</p>	<p>disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;</p> <p><b>c)</b> La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno;</p> <p><b>d)</b> El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos;</p> <p><b>e)</b> La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia, <b>sin perjuicio de poder elaborar informes adicionales durante el transcurso del año.</b></p> <p>Derivado de sus informes, <b>el Comité Coordinador del Sistema</b> podrá emitir <b>resoluciones a las autoridades. La ley establecerá los casos en que dichas resoluciones serán vinculantes.</b></p> <p>Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.</p>
<p><b>ARTÍCULO 110.</b> Podrán ser sujetos a Juicio Político los Diputados al Congreso del Estado, los Consejeros Electorales de la Comisión Estatal Electoral, los Comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los Consejeros de la Judicatura del Estado, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, los Jueces, <u>el Procurador General de Justicia, el Fiscal Anticorrupción,</u> los Secretarios del Despacho del Ejecutivo, los Directores Generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos; así como los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos.</p>	<p><b>ARTÍCULO 110.</b> Podrán ser sujetos a Juicio Político <b>el Gobernador del Estado,</b> los Diputados al Congreso del Estado, los Consejeros Electorales de la Comisión Estatal Electoral, los Comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los Consejeros de la Judicatura del Estado, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, los Jueces, <b>el Fiscal General de Justicia del Estado, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, el Fiscal Especializado en Delitos Electorales,</b> los Secretarios del Despacho del Ejecutivo, los Directores Generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos; así como los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos.</p>
<p><b>ARTÍCULO 112.</b> Para proceder penalmente contra el Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del Tribunal superior de justicia, el Presidente de la Comisión Estatal de</p>	<p><b>ARTÍCULO 112.</b> Para proceder penalmente contra el Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del Tribunal superior de justicia, el Presidente de la Comisión Estatal de</p>



<p>Derechos Humanos, los Consejeros Electorales de la Comisión Estatal Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, los Comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, el Auditor General del estado, los Consejeros de la Judicatura, el Procurador General de Justicia, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, los Secretarios del Despacho del Ejecutivo, así como los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, <u>el Congreso del Estado declarará por mayoría absoluta de sus integrantes y previa audiencia del indiciado, si ha o no lugar a proceder en contra de él.</u>  <u>Si la resolución del Congreso fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculcado haya concluido el ejercicio de su cargo, pues la misma no prejuzga sobre los fundamentos de la imputación.</u>  <u>Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.</u>  <u>Por lo que toca al Gobernador del Estado, sólo habrá lugar a acusarlo en los términos de lo previsto por el artículo 106, en cuyo caso se resolverá con base en la legislación penal aplicable.</u>  <u>El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculcado, será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria, el inculcado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no cabe la gracia del indulto.</u>  <u>En demanda del orden civil que se entable contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia.</u></p>	<p>Derechos Humanos, los Consejeros Electorales de la Comisión Estatal Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, los Comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, el Auditor General del Estado, los Consejeros de la Judicatura, <b>el Fiscal General de Justicia del Estado, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, el Fiscal Especializado en Delitos Electorales,</b> los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, los Secretarios del Despacho del Ejecutivo, así como los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos por la comisión de delitos <b>durante el tiempo de su encargo conforme a las siguientes bases:</b>  <b>Durante el proceso penal, el servidor público podrá seguir en su encargo salvo que se le imponga alguna medida cautelar consistente en privación, restricción o limitación de la libertad. Las medidas cautelares no podrán consistir en privación, restricción o limitación de la libertad salvo en los casos de delincuencia organizada, delitos relacionados con hechos de corrupción, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación y de la salud.</b>  <b>Dictada la sentencia condenatoria, en su caso, se notificará la misma en un plazo no mayor a tres días naturales a partir de que la misma cause ejecutoria.</b>  <b>En caso de que la sanción impuesta haga incompatible el ejercicio del cargo en términos de la fracción III del artículo 38 de esta Constitución, se separará al sentenciado de sus funciones. La separación del cargo tendrá efectos mientras se extingue la pena.</b></p>
<p><b>ARTICULO 114.</b> No se requerirá declaración de procedencia del Congreso, cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el artículo 112 cometa un delito durante el tiempo que se encuentre separado de su cargo.          Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto pero de los enumerados por el artículo 112, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.</p>	<p><b>ARTICULO 114.</b> Cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el artículo 112 de esta Constitución cometa un delito durante el tiempo que se encuentre separado de su cargo, no se aplicará lo que señala dicho precepto.          Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto pero de los enumerados por el artículo 112 <b>de esta Constitución,</b> se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.  <b>Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o</b></p>

	<p>ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto pero de los enumerados por el artículo 112, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto. (SIC)</p>
<p><b>ARTICULO 116.</b> El procedimiento de Juicio Político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.</p> <p>La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en el Código Penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña algunos de los encargos a que se refiere el Artículo 112.</p>	<p><b>ARTICULO 116.</b> La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en el Código Penal, que nunca serán inferiores a diez años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña algunos de los encargos a que se refiere el Artículo 112 de esta Constitución.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITULO VIII DE LOS MUNICIPIOS</b></p> <p><b>ARTÍCULO 119. ...</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO VIII DE LOS MUNICIPIOS</b></p> <p><b>ARTÍCULO 119. ...</b></p> <p>Los Municipios podrán contratar obligaciones o empréstitos con las condiciones que establece el artículo 117 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las Leyes aplicables.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITULO X DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 136. ...</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la Ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior del Estado <u>previa autorización de su Titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas,</u> así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento,</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO X DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 136. ...</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la Ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior del Estado <b>revisará durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas,</b> así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones</p>

<p>serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior del Estado rendirá un informe específico al Congreso y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción o las autoridades competentes, en los términos que establezca la Ley.</p> <p>...</p> <p>Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría Superior del Estado <b>podrá solicitar</b> información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos.</p>	<p>previstas en la misma. La Auditoría Superior del Estado rendirá un informe específico al Congreso y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción o las autoridades competentes, en los términos que establezca la Ley.</p> <p>...</p> <p>Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría Superior del Estado <b>está facultada para</b> solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos.</p>
<p><b>ARTÍCULO 137.</b> La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada al Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, a más tardar el 30 de marzo del año siguiente.</p> <p>La Auditoría Superior del Estado entregará al Congreso del Estado una descripción de las auditorías practicadas, especificando su alcance; el dictamen resultado de la revisión relativa al manejo de recursos públicos por parte de los sujetos fiscalizados y de la verificación del desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas estatales; así como las observaciones que haya efectuado la Auditoría Superior del Estado que incluya las justificaciones y aclaraciones que las entidades hayan presentado al respecto.</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p><b>ARTÍCULO 137.</b> La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada al Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, a más tardar el 30 de marzo del año siguiente.</p> <p>La Auditoría Superior del Estado entregará <b>el Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente dentro de los ciento treinta días hábiles siguientes a los de su presentación, el cual se someterá a la consideración del Pleno y tendrá carácter público.</b></p> <p><b>El informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública deberá contener, como mínimo, una descripción de las auditorías practicadas, especificando su alcance; el dictamen resultado de la revisión relativa al manejo de recursos públicos por parte de los sujetos fiscalizados y de la verificación del desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas estatales; así como las observaciones que haya efectuado la Auditoría Superior del Estado que incluya las justificaciones y aclaraciones que las entidades hayan presentado al respecto. El dictamen deberá contener además un listado conciso de las observaciones no solventadas y las recomendaciones que estime conveniente.</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p><b>Aualmente, la Auditoría Superior del Estado deberá entregar al Congreso del Estado en el Informe del Resultado, la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por ésta.</b></p>

<b>COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE OAXACA</b>	
<b>TEXTO ANTERIOR</b>	<b>TEXTO VIGENTE</b>
<b>TÍTULO CUARTO                      DEL GOBIERNO DEL ESTADO                      CAPÍTULO II                      DEL PODER LEGISLATIVO                      SECCIÓN PRIMERA                      DE LA LEGISLATURA</b>	<b>TÍTULO CUARTO                      DEL GOBIERNO DEL ESTADO                      CAPÍTULO II                      DEL PODER LEGISLATIVO                      SECCIÓN PRIMERA                      DE LA LEGISLATURA</b>
<p><b>Artículo 35. ...</b>                      ...                      Para los efectos de esta última disposición se consideran también como militares en servicio activo, los jefes y oficiales de las fuerzas de seguridad pública del Estado, cualesquiera que sea su denominación. Las Magistradas y Magistrados y la Secretaria o Secretario General del Tribunal Estatal Electoral; <u>la Auditora o Auditor y las Sub Auditoras y Sub Auditores de la Auditoría Superior del Estado;</u> los titulares del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca; la Presidenta o Presidente, las Consejeras y los Consejeros, la Visitadora o el Visitador General y la Secretaria Ejecutiva o Secretario Ejecutivo de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca, así como las Magistradas y Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas, <u>la Fiscal o el Fiscal General del Estado de Oaxaca así como los Fiscales Especiales, no podrán ser electas o electos para ningún cargo de elección popular, sino hasta después de transcurridos dos años de haberse separado de su cargo.</u></p>	<p><b>Artículo 35. ...</b>                      ...                      Para los efectos de esta última disposición se consideran también como militares en servicio activo, los jefes y oficiales de las fuerzas de seguridad pública del Estado, cualesquiera que sea su denominación. Las Magistradas y Magistrados y la Secretaria o Secretario General del Tribunal Estatal Electoral; <b>el Auditor y los Sub Auditores del órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca;</b> los titulares del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca; la Presidenta o Presidente, las Consejeras y los Consejeros, la Visitadora o el Visitador General y la Secretaria Ejecutiva o Secretario Ejecutivo de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca, así como las Magistradas y Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas, <b>no podrán ser electas o electos para ningún cargo de elección popular, sino hasta después de transcurridos dos años de haberse separado de su cargo.</b></p>
<b>CAPÍTULO II                      DEL PODER LEGISLATIVO                      SECCIÓN TERCERA                      DE LA INICIATIVA Y FORMACIÓN DE LAS LEYES</b>	<b>CAPÍTULO II                      DEL PODER LEGISLATIVO                      SECCIÓN TERCERA                      DE LA INICIATIVA Y FORMACIÓN DE LAS LEYES</b>
<p><b>Artículo 53.</b> En el proceso de elaboración, promulgación y publicación de las leyes o decretos se observarán las reglas siguientes:  <b>I. a VI. ...</b>  <b>VII.</b> En caso de que los proyectos de Ley de Ingresos y/o Presupuesto de Egresos no se aprueben por el Congreso a más tardar <u>el 15 de</u></p>	<p><b>Artículo 53.</b> En el proceso de elaboración, promulgación y publicación de las leyes o decretos se observarán las reglas siguientes:  <b>I. a VI. ...</b>  <b>VII.</b> En caso de que los proyectos de Ley de Ingresos y/o Presupuesto de Egresos del Estado no se aprobaran por el Congreso a más tardar <b>el</b></p>

<p><u>diciembre, no se hubiese superado el veto del Ejecutivo, se prorrogará por treinta días naturales la Ley de Ingresos y/o el Presupuesto de Egresos vigente hasta el momento, en todo o en la parte no vetada del proyecto correspondiente.</u></p> <p><u>Si vencido el plazo referido no se hubieren aprobado los proyectos de Ley de Ingresos y/o Presupuesto de Egresos o la parte faltante de los mismos, se tendrá por extendida su vigencia por el resto del año calendario del ordenamiento o parte faltante de que se trate.</u></p> <p><u>Tratándose de la Ley de Ingresos, el Ejecutivo sólo podrá actualizar los montos, sin aumentar tasas, cuotas o tarifas en los impuestos, derechos o contribuciones; respecto al Presupuesto de Egresos podrá hacer los ajustes que se requieran atendiendo a las necesidades del Estado, en el ejercicio fiscal que corresponda y las derivadas de obligaciones contractuales, indexando los montos a la inflación según lo establecido por el Banco de México, en los términos que disponga la ley en la materia, sin afectar los presupuestos del Poder Judicial y de los órganos constitucionales autónomos.</u></p> <p><u>En el año que corresponda la renovación del titular del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado aprobará la Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado a más tardar el treinta de diciembre.</u></p>	<p>diez de diciembre, o no se hubiese superado el veto del Ejecutivo, se tendrán por extendida su vigencia el año calendario siguiente.</p> <p>El veto a que se refiere la presente fracción se resolverá de acuerdo con las disposiciones contenidas en las fracciones anteriores.</p> <p>Rebasada la fecha a que se refiere el párrafo primero de la presente fracción, el Ejecutivo del Estado, tratándose de la Ley de Ingresos del Estado, sólo podrá actualizar los montos estimados de ingresos, sin aumentar las tasas de los impuestos; respecto del Presupuesto de Egresos podrá hacer los ajustes de conformidad con lo establecido en la Ley reglamentaria.</p> <p>Los presupuestos aprobados en el año anterior al Poder Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos no podrán afectarse.</p>
<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN CUARTA</b>  <b>DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO DEL ESTADO</b></p> <p><b>Artículo 59.</b> Son facultades del Congreso del Estado:  <b>I. a VIII. ...</b>  <b>IX.</b> La Legislatura Local; por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá suspender Ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros por alguna de las causas graves que la ley reglamentaria prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.          ...          Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será substituido por su suplente o se procederá, según lo disponga la ley;</p> <p><b>X. a XII. ...</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN CUARTA</b>  <b>DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO DEL ESTADO</b></p> <p><b>Artículo 59.</b> Son facultades del Congreso del Estado:  <b>I. a VIII. ...</b>  <b>IX.</b> La Legislatura Local; por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá suspender Ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros por alguna de las causas graves que la ley reglamentaria prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.          ...          Los integrantes de los Concejos Municipales se elegirán entre los vecinos y estarán integrados por el número de miembros que determina la ley, quienes deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores;</p> <p><b>X. a XII. ...</b></p>

<p><b>XIII. Designar, a propuesta del Gobernador, a los integrantes de los Consejos Municipales.</b></p> <p><b>XIV. a XXI Bis. ...</b></p> <p><b>XXII.</b> Dictaminar anualmente la Cuenta Pública del Estado y Municipios, el Congreso del Estado contará con el apoyo de <u>la Auditoría Superior del Estado</u> con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por los presupuestos y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas mediante la revisión y fiscalización de las mismas.</p> <p>Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de las Cuentas Públicas cuando se presente solicitud para que sea justificada, a juicio del Congreso del Estado; a condición de que sea presentada por lo menos con quince días de anticipación a la conclusión del plazo, para lo cual deberá comparecer el Secretario de Finanzas o bien, el Presidente Municipal del Ayuntamiento respectivo, según se trate de Cuenta Pública estatal o municipal, a informar de las razones que motiven la solicitud; la prórroga no deberá exceder de quince días naturales y, en tal supuesto, <u>la Auditoría Superior del Estado</u> contará con el mismo tiempo adicional para la presentación el informe de resultado de la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas.</p> <p>...</p> <p><u>La Auditoría Superior del Estado a más tardar el 15 de septiembre de la presentación de la Cuenta Pública,</u> deberá rendir al Congreso, por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, los informes de resultados de la Cuenta Pública del Estado. El Congreso a más tardar el 30 de septiembre del año de su presentación, concluirá su revisión y dictamen.</p> <p>Por lo que respecta a la Cuenta Pública del Estado del último año de gobierno de cada administración, el titular del Ejecutivo presentará trimestralmente el informe de avance de la Cuenta Pública del Estado dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión de cada trimestre, <u>la Auditoría Superior del Estado</u> deberá rendir el informe de resultados de los dos primeros trimestres a más tardar el 15 de septiembre del año en que se presentan, debiendo el Congreso a más tardar el 30 de septiembre de ese año concluir su revisión y dictamen.</p>	<p><b>XIII. Derogado.</b></p> <p><b>XIV. a XXI Bis. ...</b></p> <p><b>XXII.</b> Dictaminar anualmente la Cuenta Pública del Estado y Municipios, el Congreso del Estado contará con el apoyo del <b>Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca</b> con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por los presupuestos y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas mediante la revisión y fiscalización de las mismas.</p> <p>Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de las Cuentas Públicas cuando se presente solicitud para que sea justificada, a juicio del Congreso del Estado; a condición de que sea presentada por lo menos con quince días de anticipación a la conclusión del plazo, para lo cual deberá comparecer el Secretario de Finanzas o bien, el Presidente Municipal del Ayuntamiento respectivo, según se trate de Cuenta Pública estatal o municipal, a informar de las razones que motiven la solicitud; la prórroga no deberá exceder de quince días naturales y, en tal supuesto, el <b>Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca</b> contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del informe de resultado de la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas.</p> <p>...</p> <p>El <b>Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca</b>, a más tardar <b>el día último hábil del mes de noviembre del año de la presentación de la Cuenta Pública,</b> deberá rendir al Congreso, por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, el informe de resultados de la Cuenta Pública del Estado. El Congreso a más tardar el <b>15 de diciembre</b> del año de su presentación, concluirá su revisión, dictamen <b>y votación.</b></p> <p>Por lo que respecta a la Cuenta Pública del Estado del último año de gobierno de cada administración, el titular del Ejecutivo presentará trimestralmente el informe de avance de la Cuenta Pública del Estado dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión de cada trimestre, el <b>Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca</b> deberá rendir el informe de resultados de los dos primeros trimestres a más tardar el 15 de septiembre del año en que se presenta, debiendo el Congreso a más tardar el 30 de septiembre de ese año concluir su revisión y dictamen <b>y votación.</b></p>
--	---

Tratándose del tercer y cuarto trimestres, la Auditoría Superior del Estado tendrá que remitir el informe de resultados que corresponda a ambos trimestres el 15 de septiembre del año de presentación del cuarto trimestre, y el Congreso concluirá su revisión y dictamen a más tardar el 30 de septiembre del mismo año.

En el caso de las Cuentas Públicas de los Municipios se observará el párrafo anterior, con la salvedad de que presentarán la correspondiente al año anterior a más tardar el último día hábil del mes de febrero, el informe de resultados de la Auditoría Superior del Estado se presentará el último día hábil del mes de noviembre y su dictaminación se realizará a más tardar al término del segundo período ordinario de sesiones.

**XXIII.** Coordinar y evaluar, sin perjuicio de la autonomía técnica y de gestión, el desempeño en las acciones y funciones de la Auditoría Superior del Estado, en términos de la ley respectiva;

**XXIV.** ...

**XXV.** Autorizar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, los montos máximos para contraer obligaciones o empréstitos cuando se destinen a inversiones público productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

...

...

**XXVI. a XXXII.** ...

**XXXIII.** Elegir al Fiscal General del Estado de Oaxaca;

Tratándose del tercer trimestre, el titular del Ejecutivo presentará el informe del avance de la Cuenta Pública del Estado el día 15 de octubre, para lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca rendirá el informe de resultados a más tardar el día 7 de noviembre del año en que se presentan, debiendo el Congreso concluir su revisión, dictamen y votación a más tardar el 12 de noviembre de ese año. Por lo que respecta al cuarto trimestre, el titular del ejecutivo la presentará a más tardar el 30 de abril del año siguiente, debiendo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca remitir el informe de resultados que corresponda el día último hábil del mes de noviembre del año de presentación y el Congreso concluirá su revisión, dictamen y votación a más tardar el 15 de diciembre del mismo año.

En el caso de las Cuentas Públicas de los Municipios, se observará el párrafo anterior, con la salvedad de que se presentarán la correspondiente al año anterior a más tardar el último día hábil del mes de febrero, el informe de resultados del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca se presentará el último día hábil del mes de noviembre; su dictaminación y votación se realizará a más tardar al término del segundo período ordinario de sesiones.

**XXIII.** Coordinar y evaluar, sin perjuicio de la autonomía técnica y de gestión, el desempeño en las acciones y funciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, en términos de la ley respectiva;

**XXIV.** ...

**XXV.** Autorizar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, los montos máximos para contraer financiamiento u obligaciones cuando se destinen a inversiones público productivas, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

...

...

**XXVI. a XXXII.** ...

**XXXIII.** Elegir al Fiscal General del Estado de Oaxaca, al Fiscal Especializado en Delitos Electorales y al Fiscal Especial en Materia de Combate a la Corrupción.

**XXXIV. a XXXV.** ...

<p><b>XXXIV. a XXXV. ...</b>  <b>XXXVI.</b> Elegir y remover al Titular de la Auditoría Superior del Estado y a los Sub-Audidores;  <b>XXXVII. a XLV. ...</b>  <b>XLVI.</b> Erigirse en Gran Jurado para declarar, en su caso, que ha lugar a formación de causa contra servidores públicos que gocen de protección constitucional por delitos del orden común y si son o no culpables los propios servidores públicos de los delitos oficiales de que fueren acusados;  <b>XLVII. a L. ...</b>  <b>LI.</b> Requerir la comparecencia de los secretario de despacho del Gobierno del Estado, Consejero Jurídico, Fiscal General del Estado de <u>Oaxaca</u>, titulares de los órganos constitucionales autónomos, directores o administradores de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, <u>Administradores Municipales</u> que considere pertinente, para que informen cuando se discuta o estudie un asunto relativo a su ramo o actividades, así como, para que respondan a preguntas que se les formulen;</p> <p><b>LII. a LXXII. ...</b>  <b>LXXIII.</b> Todas aquellas que deriven a su favor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, las leyes federales, esta Constitución Política y las que sean necesarias para hacer efectivas sus facultades y atribuciones.</p>	<p><b>XXXVI.</b> Elegir y remover al Titular del <b>Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca y a los Sub-Audidores;</b>  <b>XXXVII. a XLV. ...</b>  <b>XLVI.</b> Se deroga.</p> <p><b>XLVII. a L. ...</b>  <b>LI.</b> Requerir la comparecencia de los secretario (sic) de despacho del Gobierno del Estado, Consejero Jurídico, Fiscal General del Estado de <b>Oaxaca</b>, titulares de los órganos constitucionales autónomos, directores o administradores de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, <b>concejos municipales y comisionados municipales que se consideren pertinente(sic)</b>, para que informen cuando se discuta o estudie un asunto relativo a su ramo o actividades, así como, para que respondan a preguntas que se les formulen;  <b>LII. a LXXII. ...</b>  <b>LXXIII.</b> Legislar en materia de responsabilidades de los servidores públicos del Estado y Municipios; y  <b>LXXIV.</b> Todas aquellas que deriven a su favor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, las leyes federales, esta Constitución Política y las que sean necesarias para hacer efectivas sus facultades y atribuciones.</p>
<p style="text-align: center;"><b>SECCION SEXTA</b>  <b>DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA</b>  <b>Artículo 65 BIS.</b> <u>La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca</u> es el órgano técnico del Congreso que tiene a su cargo la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de los Poderes del Estado y Municipios, entes públicos estatales y municipales, organismos públicos autónomos que ejerzan recursos públicos y en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos estatales o municipales. La revisión y fiscalización se constreñirá a la Cuenta Pública del año inmediato anterior <u>y las situaciones excepcionales que prevea la Ley.</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCION SEXTA</b>  <b>DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA</b>  <b>Artículo 65 BIS.</b> El <b>Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca</b> es el órgano técnico del Congreso que tiene a su cargo la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública y gestión financiera de los Poderes del Estado y Municipios, entes públicos estatales y municipales, organismos públicos autónomos que ejerzan recursos públicos y en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos estatales o municipales. La revisión y fiscalización se constreñirá a la Cuenta Pública del año inmediato anterior, <b>así como cuando se advierta la existencia de hechos notorios sobre irregularidades que produzcan daños al erario y a las haciendas de los</b></p>



<p>En el desempeño de sus funciones, contará con plena autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.</p> <p><u>El presupuesto requerido para el funcionamiento de la Auditoría Superior será determinado por el Congreso del Estado.</u></p> <p>La revisión de la cuenta pública tendrá por objeto evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la ley.</p> <p>La Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones:</p> <p>I. Revisar y fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia, la administración y la aplicación de fondos y recursos públicos de los Poderes del Estado y Municipios, entes públicos estatales y municipales que ejerzan recursos públicos, organismos públicos autónomos y particulares que manejen recursos públicos; así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas en la forma y términos que disponga la ley.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, en situaciones excepcionales que determine la ley, podrá requerir a los sujetos de fiscalización que procedan a la revisión de los conceptos que estime pertinentes y le rindan un informe.</p>	<p><b>entes fiscalizables, y las situaciones excepcionales que ésta Constitución y la ley prevean.</b></p> <p>En el desempeño de sus funciones, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, contará con plena autonomía técnica, de gestión, presupuestal y financiera para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, <b>por lo tanto, podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública. Asimismo, para los trabajos de planeación de las auditorías, podrá solicitar información del ejercicio en curso o de los concluidos.</b></p> <p>La revisión de la cuenta pública tendrá por objeto evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la ley reglamentaria.</p> <p><b>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca</b> tendrá las siguientes atribuciones:</p> <p><b>I. Revisar y fiscalizar en forma posterior, salvo las excepciones establecidas en este artículo, los ingresos, egresos, la deuda pública, el manejo, la custodia, la administración y la aplicación de fondos y recursos públicos de los Poderes del Estado y Municipios, entes públicos estatales y municipales, que ejerzan recursos públicos, organismos públicos estatales, organismos públicos autónomos y particulares que manejen recursos públicos, además de los recursos transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero; así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas en la forma y términos que disponga la ley reglamentaria. Quedando facultado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca para solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por</b></p>
--	---

<p>Si estos requerimientos no fueran atendidos en los plazos y formas señalados por la ley, podrá dar lugar al proceso de investigación y en su caso, al fincamiento de las responsabilidades que corresponda.</p> <p>Las entidades fiscalizables a que se refiere el primer párrafo de esta fracción deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterio que establezca la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables de carácter estatal, así como resguardar la documentación comprobatoria, expedientes y libros contables.</p> <p>El hecho de no presentar las cuentas públicas, no impide el ejercicio de</p>	<p>este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pagos diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.</p> <p>Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley, derivado de denuncias el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, previa autorización de su Titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizables, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizables proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la ley reglamentaria y, en su caso, de incumplimiento a estos requerimientos, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca rendirá un informe específico al Congreso del Estado y, en su caso, promoverá las acciones o responsabilidades que correspondan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción o las autoridades competentes.</p> <p>Si estos requerimientos a que refiere el párrafo anterior no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la ley reglamentaria, podrá dar lugar al proceso de investigación y en su caso el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca finque las responsabilidades que sean de su competencia y promueva ante otras instancias las que correspondan.</p> <p>Las entidades fiscalizables a que se refiere el primer párrafo de esta fracción deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterio que establezca la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables de carácter estatal, así como resguardar la documentación comprobatoria, expedientes y libros contables.</p> <p>El hecho de no presentar las cuentas públicas, no impide el ejercicio de</p>
--	---

<p>las atribuciones de revisión, fiscalización y sanción de <u>la Auditoría Superior del Estado</u> contenidas en esta Constitución y en la Ley respectiva.</p> <p><b>II. a III. ...</b></p> <p><b>IV.</b> Derivado de sus investigaciones, en caso de que existan elementos de presunción de violaciones a la ley, promover los procedimientos de responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas.</p> <p><b>V. a VI. ...</b></p> <p><b>VII. ...</b></p> <p>...</p> <p>El titular de <u>la Auditoría Superior del Estado</u> será electo por el Congreso, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros <u>presentes</u>. Para ser Auditor se requerirá contar con experiencia de cinco años en materia de control, <u>auditoría gubernamental y de responsabilidades</u>. La ley determinará el procedimiento para su elección. Durará en su encargo siete años pudiendo ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente por las causas graves que la ley señala con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Séptimo de esta Constitución. En los mismos términos serán electos los subauditores.</p> <p>La ley determinará el procedimiento para su elección, requisitos y funciones.</p>	<p>las atribuciones de revisión, fiscalización y sanción del <b>Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca</b> contenidas en esta Constitución y en la Ley respectiva.</p> <p><b>II. a III. ...</b></p> <p><b>IV.</b> Derivado de sus investigaciones, en caso de que existan elementos de presunción de violaciones a la ley, promover los procedimientos de responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas, <b>los órganos internos de control competentes, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades correspondientes;</b></p> <p><b>V. a VI. ...</b></p> <p><b>VII. ...</b></p> <p>...</p> <p>El titular del <b>Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca</b> será electo por el Congreso, con el voto de las <b>dos terceras partes de sus miembros</b>. Para ser Auditor se requerirá contar con experiencia de cinco años en materia de control <b>fiscalización</b>, auditoría gubernamental y de responsabilidades. La ley determinara el procedimiento para su elección. Durará en su encargo siete años, pudiendo ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente por las causas graves que la ley señala con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Séptimo de esta Constitución. En los mismos términos serán electos los Subauditores.</p> <p>La ley determinará el procedimiento para su elección, requisitos y funciones.</p>
<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN SEGUNDA</b>  <b>DE LAS FACULTADES, OBLIGACIONES Y RESTRICCIONES DEL GOBERNADOR</b></p> <p><b>Artículo 79.</b> Son facultades del Gobernador:</p> <p><b>I. XIV. ...</b></p> <p><b>XV.</b> Proponer al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente en su caso, la integración de los Consejos Municipales, <u>en los términos que señala esta Constitución</u>. Por otra parte, hacer la designación de un encargado de la Administración Municipal, cuando por cualquier circunstancia especial no se verifcare la elección de algún ayuntamiento o se hubiere declarado nula o no válida, o bien se hubiese declarado la suspensión o desaparición del mismo, <u>lo anterior</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN SEGUNDA</b>  <b>DE LAS FACULTADES, OBLIGACIONES Y RESTRICCIONES DEL GOBERNADOR</b></p> <p><b>Artículo 79.</b> Son facultades del Gobernador:</p> <p><b>I. XIV. ...</b></p> <p><b>XV.</b> Proponer al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente en su caso, la integración de los Consejos Municipales, <b>así como designar directamente al comisionado municipal provisional</b>, cuando por cualquier circunstancia especial no se verifcare la elección de algún ayuntamiento o se hubiere declarado nula o no válida, o bien se hubiese declarado la suspensión o desaparición del mismo, <b>en los términos y plazos que señala esta Constitución. La función de los</b></p>

<p><u>de conformidad con lo establecido en la Ley de la materia</u></p> <p><b>XVI. a XVII. ...</b>  <b>XVIII.</b> Contratar <u>obligaciones o empréstitos</u>, en los términos del artículo 59 fracción XXV de esta Constitución.  <b>XIX. a XXVI. ...</b>  <b>XXVII.</b> <u>Proponer la terna para la elección</u> del Fiscal General del Estado de Oaxaca, en términos de lo dispuesto en el apartado D del artículo 114, de esta Constitución y  <b>XXVIII. ...</b></p>	<p><b>comisionados en ningún caso podrá exceder de sesenta días naturales.</b> Estos servidores públicos serán responsables de atender exclusivamente los servicios básicos de los municipios.  <b>La ley determinará los requisitos que deberán reunir los referidos servidores públicos.</b></p> <p><b>XVI. a XVII. ...</b>  <b>XVIII.</b> Contratar <b>financiamientos u obligaciones</b>, en los términos del artículo 59 fracción XXV de esta Constitución.  <b>XIX. a XXVI. ...</b>  <b>XXVII.</b> <b>Intervenir en la designación</b> del Fiscal General del Estado de Oaxaca y removerlo en términos de lo dispuesto en el apartado D del Artículo 114 de esta Constitución.  <b>XXVIII. ...</b></p>
<p><b>Artículo 80.</b> Son obligaciones del Gobernador:  <b>I. a III. ...</b>  <b>IV.</b> Presentar al Congreso a más tardar el <u>25 de noviembre de cada año</u> la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, con el contenido y los anexos que determine <u>la ley</u>. Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 69, el <u>Ejecutivo Estatal presentará al Congreso la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el día cinco de diciembre.</u>  <b>V. a XXX. ...</b></p>	<p><b>Artículo 80.</b> Son obligaciones del Gobernador:  <b>I. a III. ...</b>  <b>IV.</b> Presentar al Congreso a más tardar el <b>diecisiete de noviembre de cada año</b>, la iniciativa de Ley de Ingresos y proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, con el contenido y los anexos que determine <b>la Ley reglamentaria.</b>  <b>V. a XXX. ...</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO IV          DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO          SECCIÓN SEGUNDA          DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA</b></p> <p><b>Artículo 100. ...</b>          ...          El Consejo de la Judicatura se integrará por cinco miembros. La Presidencia del Consejo recaerá en el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Habrá un Consejero Magistrado y un Consejero Juez, quienes serán designados bajo criterios de evaluación y antigüedad. Habrá un miembro designado por cada uno de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Los consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO IV          DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO          SECCIÓN SEGUNDA          DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA</b></p> <p><b>Artículo 100. ...</b>          ...          El Consejo de la Judicatura se integrará por cinco miembros. La Presidencia del Consejo recaerá en el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Habrá un Consejero Magistrado y un Consejero Juez, quienes serán designados bajo criterios de evaluación y antigüedad. Habrá un miembro designado por cada uno de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Los consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad.  <b>De los miembros del Consejo de la Judicatura se designará un representante que deberá integrarse y formar parte del Comité</b></p>

<p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p style="color: red;"><b>Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO QUINTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b></p> <p><b>Artículo 113. ...</b></p> <p>...</p> <p>Los Municipios tienen personalidad jurídica propia y constituyen un nivel de gobierno.</p> <p><b>I. ...</b></p> <p><b>II.</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Los ayuntamientos por conducto del Presidente Municipal, <u>presentarán al Congreso del Estado</u> la Cuenta Pública del año anterior a más tardar el último día hábil del mes de febrero, asimismo, entregarán a la Auditoría Superior del Estado los informes y demás información que le sean solicitados de acuerdo a lo establecido en las leyes.</p> <p>En el año que concluya su mandato, <u>la presentarán al Congreso conforme a los plazos y procedimientos que se establezcan legalmente;</u></p> <p><b>III. a VIII. ...</b></p> <p><b>IX.</b> Cada Ayuntamiento procurará contar con una Regiduría de Equidad y Género, <u>que tendrá como objetivo promover la participación igualitaria de las mujeres en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar de la comunidad y la eliminación de todo acto discriminatorio que contravenga la igualdad de género.</u></p> <p>...</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO QUINTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b></p> <p style="color: red;"><b>Artículo 113. ...</b></p> <p>...</p> <p>Los Municipios tienen personalidad jurídica propia y constituyen un nivel de gobierno.</p> <p><b>I. ...</b></p> <p style="color: red;"><b>II. ...</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Los ayuntamientos por conducto del Presidente Municipal, presentarán al <b>Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca</b> la Cuenta Pública del año anterior a más tardar el último día hábil del mes de febrero, asimismo, entregarán los informes y demás datos que le sean solicitados de acuerdo a lo establecido en las leyes.</p> <p>En el año que concluya su mandato, <b>los Ayuntamientos presentarán dicha Cuenta Pública al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,</b> conforme a los plazos y procedimientos que se establezcan legalmente;</p> <p><b>III. a VIII. ...</b></p> <p><b>IX.</b> Cada Ayuntamiento procurará contar con una Regiduría <b>de Derechos Humanos encargada de la protección, defensa, promoción, estudio, divulgación y vigilancia de los derechos humanos.</b> Asimismo, procurará contar con una Regiduría de Equidad y Género, que tendrá como objetivo promover la participación igualitaria de las mujeres en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar de la comunidad y la eliminación de todo acto discriminatorio que contravenga la igualdad de género.</p> <p>...</p>

<p>...</p> <p style="text-align: center;"><b>TÍTULO SEXTO</b> <b>DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO</b></p> <p><b>Artículo 114. ...</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p><b>A. al B. ...</b></p> <p><b>C. EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERONSALES.</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>El Instituto contará con las siguientes atribuciones:</p> <p><b>I. a VI. ...</b></p> <p><b>VII.</b> Las demás que señale; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley General de Transparencia y acceso a la Información pública, esta Constitución Política y las leyes aplicables en la materia.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p><b>D. DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA.</b></p> <p>El Ministerio Público es un órgano público autónomo, único e indivisible, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, <u>que representa a la sociedad y le compete la conducción de la investigación de los delitos y de manera exclusiva el ejercicio de la acción penal ante los Tribunales, debiendo velar por la exacta observancia de las leyes y que se rige en el ejercicio de sus funciones por los principios de buena fe, autonomía, certeza, legalidad, objetividad, pluriculturalidad, imparcialidad, eficacia, honradez, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.</u></p>	<p>...</p> <p style="text-align: center;"><b>TÍTULO SEXTO</b> <b>DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO</b></p> <p><b>Artículo 114. ...</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p><b>A. al B. ...</b></p> <p><b>C. EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERONSALES.</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>El Instituto contará con las siguientes atribuciones:</p> <p><b>I. a VI. ...</b></p> <p><b>VII. Ser integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.</b></p> <p><b>VIII.</b> Las demás que señale; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley General de Transparencia y acceso a la Información pública, esta Constitución Política y las leyes aplicables en la materia.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p><b>D. DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA.</b></p> <p>El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado de Oaxaca como órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.</p> <p><b>Corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden común; y por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de estos hechos que las Leyes señalen como delito; procurará que los juicios en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas e intervendrá en todos los asuntos que la Ley determine y que se rige en el ejercicio de sus</b></p>
--	--

<p>El titular del Ministerio Público será el Fiscal General del Estado de Oaxaca.</p> <p>Para ser Fiscal <u>General del Estado</u>, se requiere: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de su elección; contar al día de su elección con antigüedad mínima de diez años, con título y cédula profesional de licenciado en derecho, expedidos por la autoridad o institución legalmente facultada para ello; gozar de buena reputación; no haber sido condenado por delito doloso, y haber residido en el Estado durante los dos años anteriores al día de la elección. La ley determinará los requisitos que deben reunir los Agentes del Ministerio Público.</p> <p>El Fiscal General del Estado durará en su encargo cuatro años y será elegido por el Congreso del Estado de una terna de juristas de reconocida capacidad profesional y solvencia moral que el titular del Poder Ejecutivo someterá dentro los veinte días siguientes a partir de la ausencia definitiva del Fiscal General.</p> <p>El Congreso elegirá al Fiscal General del Estado, previa comparecencia de las personas propuestas, por la mayoría de los diputados presentes. En sus recesos, la Diputación Permanente convocara a un periodo extraordinario en el improrrogable plazo de diez días hábiles para elegir al Fiscal General. En caso de que la Legislatura no resuelva dentro de dicho plazo, ocupará el cargo la persona que de esta terna designe el Gobernador del Estado.</p> <p>Si el Congreso del Estado rechaza la terna propuesta o no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, ocupará el cargo la persona que dentro de la terna propuesta designe el Gobernador del Estado.</p> <p>El Fiscal General del Estado dejará de ejercer su cargo por renuncia, o podrá ser removido por el ejecutivo por las causales de responsabilidad en los casos previstos en el Título Séptimo de esta Constitución y la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se pronuncia al respecto,</p>	<p>funciones por los principios de buena fe, autonomía, certeza, legalidad, objetividad y pluriculturalidad, imparcialidad, eficacia, honradez, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.</p> <p>El titular del Ministerio Público será el Fiscal General del Estado de Oaxaca.</p> <p>Para ser Fiscal General del Estado <b>de Oaxaca</b>, se requiere: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de su designación; contar con antigüedad mínima de diez años con <b>título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación; no haber sido condenado por delito doloso.</b></p> <p><b>El Fiscal General del Estado de Oaxaca durará en su encargo siete años y será designado y removido conforme a lo siguiente:</b></p> <p><b>I. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General del Estado de Oaxaca, el Congreso del Estado, contará con veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los Diputados presentes, la cual enviará al Ejecutivo del Estado.</b></p> <p><b>En sus recesos, la Diputación Permanente convocará a un período extraordinario.</b></p> <p><b>Si el Ejecutivo del Estado, no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Congreso del Estado una terna y designará provisionalmente al Fiscal General del Estado de Oaxaca, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el Fiscal General designado podrá formar parte de la terna.</b></p> <p><b>II. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el Titular del Ejecutivo del Estado formulará una terna y la enviará a la consideración del Congreso del Estado.</b></p> <p><b>III. El Congreso, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General del Estado de Oaxaca con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días.</b></p> <p><b>En caso de que el ejecutivo no envíe la terna a la que se refiere la fracción anterior, el Congreso del Estado tendrá diez días para designar al Fiscal General del Estado de Oaxaca de entre los candidatos de la lista que señala la fracción I, mismo que será designado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.</b></p>
---	---

<p>se entenderá que no existe objeción.</p> <p>Las ausencias del Fiscal General del Estado de Oaxaca, serán suplidas en los términos que determine la ley.</p> <p>El Fiscal General del Estado de Oaxaca, podrá crear las fiscalías que se requieran para el adecuado funcionamiento de la Institución, así mismo podrá nombrar y remover a los servidores públicos y agentes del Ministerio Público; y contará al menos con una fiscalía especializada en delitos electorales y otra en materia de combate a la corrupción.</p> <p><u>Los titulares de las fiscalías serán nombrados por el Fiscal General del Estado de Oaxaca, cumpliendo con los requisitos que establezca la Ley.</u></p> <p>La Ley determinará los requisitos que deben cubrir los Agentes del Ministerio Público y demás servidores públicos que integran la estructura de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.</p> <p>Las funciones del Fiscal General <u>del Estado</u>, Fiscalías y Agentes del Ministerio Público, son incompatibles con el ejercicio de la abogacía y con cualquier otro cargo, empleo o comisión por el que se disfrute sueldo, excepto cuando litigue en causa propia, de su cónyuge, concubina o concubinario, de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos o de su adoptante o adoptado; y cuando se trate de actividades académicas o docentes.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>Si el Congreso no hace la designación en los plazos que se establecen los (sic) párrafos anteriores o rechaza la terna, el Ejecutivo designará al Fiscal General del Estado de Oaxaca de entre los candidatos que integran la lista o, en su caso, la terna respectiva.</p> <p>Por lo que se refiere a la remoción, el Fiscal General del Estado de Oaxaca dejará de ejercer su cargo por renuncia, o podrá ser removido por el Ejecutivo por causales de responsabilidad en los casos previstos en esta Constitución y la Ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso del estado dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General del Estado de Oaxaca será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.</p> <p>Las ausencias del Fiscal General del Estado de Oaxaca serán suplidas en los términos que determine la Ley, el Fiscal General del Estado de Oaxaca podrá crear las fiscalías que se requieran para el adecuado funcionamiento de la Institución, asimismo podrá nombrar y remover a los servidores públicos y Agentes del Ministerio Público; y contará al menos con una fiscalía especializada en delitos electorales y otra (sic) materia de combate a la corrupción, <b>quienes serán nombrados por el Congreso del Estado, conforme al procedimiento establecido en esta Constitución para la elección del Fiscal General del Estado de Oaxaca y quienes deberán cumplir con los mismo(sic) requisitos de elegibilidad establecidos para éste.</b></p> <p>La Ley determinará los requisitos que deben cubrir los Agentes del Ministerio Público y demás servidores públicos que integran la estructura de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.</p> <p>Las funciones del Fiscal General del Estado <b>de Oaxaca</b>, Fiscalías y Agentes del Ministerio Público, son incompatibles con el ejercicio de la abogacía y con cualquier otro cargo, empleo, o comisión por el que se disfrute sueldo, excepto cuando litigue en su causa propia, de su cónyuge, concubina o concubinario; de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos o de su adoptante o adoptado; y cuando se trate de actividades académicas o docentes.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>La <b>Fiscalía</b> General del Estado de Oaxaca, respetará, los sistemas</p>
---	--



<p>La <u>fiscalía</u> General del Estado de Oaxaca, respetara, los sistemas normativos, las especificidades culturales y la integridad de las <u>personas indígenas</u>.</p>	<p>normativos, las especificidades culturales y la integridad de las personas Indígenas <b>y Afromexicanas</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO SÉPTIMO</b>  <b>DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPALES, PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS O HECHOS DE CORRUPCIÓN Y PATRIMONIAL DEL ESTADO</b></p> <p><b>Artículo 115. ...</b>          ...          ...          Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses <u>ante las autoridades competentes y en los términos que determine su ley.</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO SÉPTIMO</b>  <b>DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPALES, PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS O HECHOS DE CORRUPCIÓN Y PATRIMONIAL DEL ESTADO</b></p> <p><b>Artículo 115. ...</b>          ...          ...          Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial de intereses <b>y la constancia de haber declarado impuestos</b> ante las autoridades competentes y en los términos que determine su Ley.</p>
<p><b>Artículo 118.</b> Para proceder penalmente contra los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; los titulares de las Secretarías; el Fiscal General del Estado de Oaxaca; los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca; el Consejero Presidente, el Secretario Ejecutivo, los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; los Consejeros de la Judicatura, el Auditor Superior del Estado, los Sub Auditores y los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas, Titulares e integrantes del órgano superior de dirección de los órganos constitucionales autónomos, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Legislatura declarará, por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. Si la resolución de la Legislatura fuese negativa, se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso, cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la resolución no prejuzga los fundamentos de la imputación. Si la Legislatura declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen conforme a la ley. Por lo que se refiere al gobernador del Estado, sólo habrá lugar a</p>	<p><b>Artículo 118. Se deroga.</b></p>

<p>acusarlo ante el Congreso del Estado en los términos de los artículos 110 de la Constitución Federal y 81 de esta Constitución. En este supuesto la legislatura declarará por la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, si ha o no lugar a proceder en contra del inculpado, en base a la legislación penal aplicable.</p> <p>Las declaraciones y resoluciones del Congreso del Estado son inatacables.</p> <p>El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.</p> <p>En demandas del orden civil que se establecen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia.</p> <p>Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo a lo dispuesto en la legislación penal y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.</p> <p>Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.</p>	
<p><b>Artículo 119.</b> No se requerirá declaración de procedencia del Congreso del Estado cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el Párrafo primero del Artículo 118, comete un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.</p> <p>Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para que desempeñe otro cargo distinto, pero de los enumerados en el Artículo 118 se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.</p>	<p><b>Artículo 119. Se deroga.</b></p>
<p><b>Artículo 120.</b> El Sistema Estatal de Combate a la Corrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:</p> <p><b>I.</b> El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado</p>	<p><b>Artículo 120.</b> El Sistema Estatal de Combate a la Corrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:</p> <p><b>I.</b> El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado</p>

<p>por los titulares de la Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; por el presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas; el presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca; así como por un representante del Consejo de la Judicatura y otro del Comité de Participación Ciudadana;</p> <p>II. ...</p> <p>III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:</p> <p>a). al e). ...</p> <p>...</p> <p>Las autoridades del Estado y de los Municipios colaborarán y prestarán auxilio a los órganos de control interno de los poderes, organismos autónomos, así como la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas en materia de combate a la corrupción en los términos que fije la ley.</p> <p>...</p> <p><b>Artículo 123.</b> En los delitos del orden común y violación de las leyes federales y del Estado, los servidores públicos municipales no gozarán de protección constitucional alguna, pudiendo en consecuencia proceder contra ellos el Ministerio Público.</p>	<p>por los titulares del <b>Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca</b>; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; por el presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas; el presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca; así como por un representante del Consejo de la Judicatura y otro del Comité de Participación Ciudadana;</p> <p>II. ...</p> <p>III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:</p> <p>a). al e). ...</p> <p>...</p> <p>Las autoridades del Estado y de los Municipios colaborarán y prestarán auxilio a los órganos de control interno de los poderes, organismos autónomos, así como al <b>Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca</b>, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al Tribunal de lo Contencioso y de Cuentas en materia de combate a la corrupción en los términos que fije la ley.</p> <p>...</p> <p><b>Artículo 123.</b> En los delitos del orden común y violación de las leyes federales y del Estado, los servidores públicos <b>señalados en el artículo 115 de esta Constitución</b>, no gozarán de protección constitucional alguna, pudiendo en consecuencia proceder contra ellos ante la Fiscalía General del Estado.</p>
---	--

COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE PUEBLA	
TEXTO ANTERIOR	TEXTO VIGENTE
<p><b>TÍTULO PRIMERO</b>  <b>DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO</b>  <b>CAPÍTULO I</b>  <b>DEL ESTADO Y SU FORMA DE GOBIERNO</b></p> <p><b>Artículo 3.</b> El pueblo ejerce su soberanía por medio por (sic) los Poderes del Estado, en los casos de su competencia, en la forma y términos que establecen la Constitución Política de los Estado Unidos</p>	<p><b>TÍTULO PRIMERO</b>  <b>DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO</b>  <b>CAPÍTULO I</b>  <b>DEL ESTADO Y SU FORMA DE GOBIERNO</b></p> <p><b>Artículo 3.</b> El pueblo ejerce su soberanía por medio por (sic) los Poderes del Estado, en los casos de su competencia, en la forma y términos que establecen la Constitución Política de los Estado Unidos</p>

<p>Mexicanos y la particular del Estado. ...</p> <p>La jornada comicial tendrá lugar <u>el primer domingo de julio del año que corresponda</u>. El Instituto Electoral del Estado podrá convenir con el Instituto Federal Electoral, que este se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales, en términos de la legislación aplicable.</p> <p>I. La elección de Gobernador, de Diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional y de miembros de Ayuntamientos en el Estado, se efectuará conforme a lo previsto en esta Constitución, y el Código de la materia, que regulará:</p> <p><b>a) <u>Las etapas del proceso electoral y la forma de participación de los ciudadanos en el mismo;</u></b></p> <p><b>b). al g). ...</b></p> <p>II. El Instituto Electoral del Estado será el organismo público, <u>de carácter permanente, autónomo e independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, al que se le encomendará la función estatal de organizar las elecciones</u>. En el ejercicio de estas funciones serán principios rectores la legalidad, la imparcialidad, la objetividad, la certeza y <u>la independencia</u>. Además tendrá a su cargo, en los términos de esta Constitución y de la Ley respectiva, la organización de los procesos de plebiscito y referéndum.</p> <p>Los órganos del Instituto estarán integrados invariablemente por ciudadanos, quienes de manera exclusiva, con su voto, tomarán las decisiones del organismo; los partidos políticos <u>y el Poder Legislativo, en los términos que prescriban las disposiciones legales relativas</u>.</p> <p>...</p> <p>El Consejo General será el Órgano Superior de Dirección del Instituto y el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de vigilar que los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia guíen todas las actividades del Instituto.</p>	<p>Mexicanos y la particular del Estado. ...</p> <p><b>La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado, organismo público local, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la legislación electoral aplicable.</b></p> <p>La jornada comicial tendrá lugar <b>el primer domingo de junio del año que corresponda</b>. El Instituto Electoral del Estado podrá convenir con el Instituto <b>Nacional</b> Electoral, que éste se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales, en términos de la legislación aplicable.</p> <p><b>I.</b> La elección de Gobernador, de Diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional y de miembros de Ayuntamientos en el Estado, se efectuará conforme a lo previsto en esta Constitución, y el Código de la materia, que regulará:</p> <p><b>a) Los actos preliminares al inicio del proceso electoral</b>, así como las etapas del proceso electoral y la forma de participación de los ciudadanos en el mismo;</p> <p><b>b). al g). ...</b></p> <p><b>II.</b> El Instituto Electoral del Estado será el organismo público <b>local, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, de carácter permanente, al que se le encomendará la función estatal de organizar las elecciones</b>. En el ejercicio de estas funciones serán principios rectores la legalidad, la imparcialidad, la objetividad, la certeza, la independencia <b>y máxima publicidad</b>. Además tendrá a su cargo, en los términos de esta Constitución y de la Ley respectiva, la organización de los procesos de plebiscito y referéndum.</p> <p>Los órganos del Instituto estarán integrados invariablemente por ciudadanos, quienes de manera exclusiva, con su voto, tomarán las decisiones del organismo; y los partidos políticos <b>en los términos que prescriban las disposiciones legales relativas</b>.</p> <p>...</p> <p>El Consejo General será el Órgano Superior de Dirección del Instituto y el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de vigilar que los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, <b>independencia y máxima publicidad</b> guíen todas las actividades del</p>
--	---

<p>El Consejo General se reunirá en la primera semana del mes de febrero del año de la jornada electoral para declarar el inicio del proceso electoral. El Consejo General del Instituto se integrará por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a). ...</li><li>b) Ocho Consejeros Electorales con derecho a voz y voto;</li><li>c) Un representante del Poder Legislativo por cada uno de los partidos políticos que integren el Congreso del Estado, con derecho a voz y sin voto;</li><li>d). al g). ...</li></ul> <p>La designación del Consejero Presidente y de los Consejeros Electorales a los que se refieren los incisos anteriores de este artículo es responsabilidad exclusiva de la Legislatura del Estado. Serán nombrados por consenso o por mayoría calificada de los miembros del Congreso presentes, en ese orden de prelación, de entre las propuestas que realice la Sociedad Civil y los Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso del Estado y conforme a las reglas que establezca el Código.</p> <p>Los Consejeros Electorales y el Consejero Presidente deberán reunir los requisitos que el Código les exija para su nombramiento, el que deberá realizarse a más tardar en el mes de octubre del año anterior al de la elección, desempeñarán su encargo por un periodo de siete años. La retribución que perciban los Consejeros Electorales será igual a la prevista para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.</p> <p>Durante el tiempo de su nombramiento los Consejeros Electorales y el Consejero Presidente del Consejo General no deberán, en ningún caso, aceptar o desempeñar cargo, empleo o comisión de la Federación, del Estado, de los Municipios o de los partidos políticos.</p> <p>Los Consejeros Electorales, el Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo, no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con</p>	<p>Instituto. El Consejo General se reunirá entre los días tres y cinco del mes de noviembre del año previo a la elección para declarar el inicio del Proceso Electoral. El Consejo General del Instituto se integrará por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a). ...</li><li>b) Seis Consejeros Electorales con derecho a voz y voto;</li><li>c) Se deroga.</li></ul> <p>d). al g). ...</p> <p>Los partidos políticos representados en el Congreso podrán participar mediante un representante legislativo en las sesiones del Consejo General como invitados permanentes, no contarán para la integración del quórum, y sólo tendrán derecho a voz sin voto.</p> <p><b>(Párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 77/2015 y su acumulado 78/2015)</b></p> <p>La designación y remoción del Consejero Presidente y de los Consejeros Electorales corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establece la legislación correspondiente.</p> <p>Los Consejeros Electorales Estatales tendrán un periodo de desempeño de siete años y no podrán ser reelectos. La retribución que perciban los Consejeros Electorales no podrá ser menor a la prevista para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.</p> <p>Los Consejeros Electorales, el Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas,</p>
--	---

<p>excepción de aquéllos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados.</p> <p>El Secretario Ejecutivo del Instituto será nombrado por el Consejo General, a propuesta del Consejero Presidente.</p> <p>Corresponderá al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, realizar el cómputo final de la elección de Gobernador, formular la declaración de validez de la elección y expedir la constancia de Gobernador electo a favor del candidato que hubiera alcanzado el mayor número de votos.</p> <p>El Instituto Electoral del Estado, será autoridad en la materia, autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño, contando en su estructura con un cuerpo directivo y técnico <u>integrado con miembros del Servicio Electoral Profesional, en términos del Estatuto que regule su funcionamiento.</u></p> <p>La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos estará a cargo de un Órgano Técnico del Instituto Electoral del Estado, dotado de autonomía Técnica y de gestión, cuyo titular será designado por el voto de la mayoría de los integrantes del Consejo General a propuesta del Consejero Presidente.</p> <p><u>La Ley</u> establecerá los requisitos para ser titular y desarrollará la integración y funcionamiento de dicho Órgano, así como los procedimientos para la sustanciación y la aplicación de sanciones por el Consejo General; el Órgano Técnico tendrá las atribuciones que establezca el Código de la materia.</p> <p><u>El vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral y el titular de la Unidad de Fiscalización, participarán en el Pleno del Consejo General con el único objeto de rendir los informes relativos a los trabajos realizados por el Órgano a su cargo, previa convocatoria por el Consejero Presidente del Consejo General.</u></p>	<p>culturales, de investigación, de beneficencia o de aquéllos en que actúen en representación del Consejo General. Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo.</p> <p>El Secretario Ejecutivo del Instituto será nombrado por el Consejo General, a propuesta del Consejero Presidente.</p> <p>Corresponderá al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, realizar el cómputo final de la elección de Gobernador, formular la declaración de validez de la elección y expedir la constancia de Gobernador electo a favor del candidato que hubiera alcanzado el mayor número de votos.</p> <p>El Instituto Electoral del Estado, será autoridad en la materia, autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño, contando en su estructura con un cuerpo directivo y técnico, <b>en términos de la legislación aplicable. El Instituto contará con servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, sus atribuciones y funcionamiento se regulará en el Código de la materia.</b></p> <p>La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos <b>y de las campañas de los candidatos estará a cargo de la Comisión correspondiente del Instituto Nacional Electoral; con excepción de los casos en que le sea delegada dicha función al Instituto Electoral del Estado, en términos de las disposiciones legales aplicables.</b></p> <p>La Ley <b>contemplará la conformación de la Comisión correspondiente y de la estructura de la Unidad encargada de desarrollar los trabajos de fiscalización que de acuerdo con las leyes generales en la materia le corresponden al organismo público local, estableciendo conforme a dichas disposiciones sus atribuciones y estructura.</b></p> <p><b>Se deroga.</b></p> <p><b>III.</b> Los partidos políticos son entidades de interés público, democráticos hacia su interior, autónomos y formas de organización política,</p>
---	--

<p><b>III.</b> Los partidos políticos son entidades de interés público, democráticos hacia su interior, autónomos y formas de organización política, integrados conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.</p> <p>Los partidos políticos deberán de constituirse sólo por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo, corresponde a éstos el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución.</p> <p><b>IV.</b> El Tribunal Electoral del Estado, como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del Estado, es el organismo de control constitucional local, autónomo e independiente, de carácter permanente, encargado de garantizar que los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad, legalidad y definitividad, rectores en los procesos electorales.</p>	<p>integrados conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y la legislación general y local en la materia y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. <b>Así como establecer las reglas para garantizar la paridad entre géneros de las candidaturas a integrantes de la legislatura.</b></p> <p>Los partidos políticos deberán de constituirse sólo por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo, corresponde a éstos el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución. <b>El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales le será cancelado el registro.</b></p> <p><b>La ley establecerá los términos y procedimientos para los partidos políticos nacionales que pierdan su registro y que opten por su registro local.</b></p> <p><b>IV.</b> El Tribunal Electoral del Estado, como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del Estado, es el organismo de control constitucional local, autónomo e independiente, de carácter permanente, encargado de garantizar que los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad, legalidad y definitividad, rectores en los procesos electorales.</p> <p><b>El Tribunal Electoral del Estado, se integrará por tres Magistrados, que actuarán en forma colegiada y permanecerá en su cargo durante siete años, y serán electos por el Senado de la República, en los términos de la ley aplicable. La retribución que perciban los Magistrados Electorales durante el tiempo que ejerzan sus funciones, no podrá ser menor a la prevista para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.</b></p> <p><b>El Código de la materia establecerá el procedimiento de designación</b></p>
---	--

<p>V. ...</p>	<p>del Magistrado Presidente, así como las reglas para cubrir las vacantes temporales que se presenten. La presidencia deberá ser rotatoria. En el caso de las vacantes definitivas, se dará vista al Senado de la República.</p> <p>Además de lo establecido en las leyes que resulten aplicables, el Código de la materia determinará las causas adicionales de responsabilidad de los Magistrados Electorales.</p> <p>Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realice el Instituto Nacional Electoral con motivo de los procesos electorales locales, serán resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme lo determine la legislación aplicable.</p> <p>V. ...</p>
<p><b>Artículo 4.</b> Los partidos políticos con registro nacional o estatal participarán en las elecciones, para Gobernador, Diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, y miembros de Ayuntamientos, con todos los derechos, obligaciones y prerrogativas que el Código respectivo les señale.</p> <p>I. El Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado deberá establecer:</p> <p>a) ...</p> <p>b) El procedimiento para la liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados al Estado; y</p> <p>Las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, <u>las campañas para cualquier cargo de elección durarán un plazo máximo de sesenta días; de igual forma las precampañas no podrán exceder de cuarenta días, debiendo concluir antes del inicio del plazo de presentación del registro de candidatos.</u></p> <p>II. ...</p> <p>...</p>	<p><b>Artículo 4.</b> Los partidos políticos nacionales y estatales, acreditados o registrados, respectivamente, en términos de la legislación general aplicable y la que se emita en el Estado, participarán en las elecciones, para Gobernador, Diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, y miembros de Ayuntamientos, con todos los derechos, obligaciones y prerrogativas que el Código respectivo les señale.</p> <p>I. El Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado deberá establecer:</p> <p>a) ...</p> <p>b) El procedimiento para la liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados al Estado; y</p> <p>Las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, <u>la duración de las campañas será de sesenta días para la elección de gobernador y de treinta días para la elección de diputados locales y ayuntamientos; las precampañas para la elección de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, no podrán exceder de diez días.</u></p> <p>II. ...</p> <p>...</p>



<p>...</p> <p>Para el otorgamiento de financiamiento público se estará a las siguientes reglas:</p> <p><b>a) al c).</b> ...</p> <p><u>Asimismo el Consejo General fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones pecuniarias de sus militantes y simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder el diez por ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de Gobernador; y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; así como las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estos rubros.</u></p> <p>...</p> <p><b>III.</b> El Código de la materia deberá de instituir las bases obligatorias para la coordinación entre el Instituto <b>Federal</b> Electoral y las autoridades electorales del Estado en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, en los términos que señala la Constitución Federal y las Leyes en la materia.</p> <p>...</p> <p>Para garantizar la equidad en las campañas electorales durante el tiempo que comprendan las mismas y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes públicos, los órganos autónomos, los municipios, las dependencias y entidades de la <u>Administración Pública Estatal y Municipales o cualquier otro ente público, salvo</u> las que fueran de carácter urgente por una contingencia natural, las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para los programas de protección civil en casos de emergencia, así como los que acuerde el Consejo General del Instituto <b>Federal</b> Electoral. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.</p> <p>...</p> <p><b>IV.</b> La Ley establecerá el régimen al que se sujetarán las candidaturas</p>	<p>...</p> <p>Para el otorgamiento de financiamiento público se estará a las siguientes reglas:</p> <p><b>a) al c).</b> ...</p> <p>La ley de la materia fijará los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes. Para el caso de que la autoridad nacional delegue las funciones relativas a la fiscalización, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten para precampañas y campañas se actuará conforme a las disposiciones aplicables.</p> <p>...</p> <p><b>III.</b> El Código de la materia deberá de instituir las bases obligatorias para la coordinación entre el Instituto <b>Nacional</b> Electoral y las autoridades electorales del Estado en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, en los términos que señala la Constitución Federal y las Leyes en la materia.</p> <p>...</p> <p>Para garantizar la equidad en las campañas electorales durante el tiempo que comprendan las mismas y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes públicos, los órganos autónomos, los municipios, las dependencias y entidades de la <b>Administración Pública o cualquier otro ente público</b>, salvo las que fueran de carácter urgente por una contingencia natural, las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para los programas de protección civil en casos de emergencia, así como los que acuerde el Consejo General del <b>Instituto Nacional Electoral</b>. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.</p> <p>...</p> <p><b>IV.</b> La Ley de la materia establecerá el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos</p>
--	--

<p>independientes.</p>	<p>independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los términos de la legislación correspondiente.</p> <p>V. La Ley electoral establecerá los casos y formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos. El partido político nacional o estatal que participe por primera ocasión en una elección local no podrá formar frentes, coaliciones o fusiones, ni postular candidaturas en común.</p> <p><b>(Párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 88/2015 y sus acumulados 93/2015 y 95/2015, en la porción normativa que indica “coaliciones”)</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO III</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS</b></p> <p><b>Artículo 12.</b> Las leyes se ocuparán de:</p> <p>I. a V. ...</p> <p>VI. Se deroga</p> <p><b>VII.</b> Garantizar el acceso a la información pública gubernamental y la protección de los datos personales, el derecho a la vida privada, la intimidad y la propia imagen, en los términos y con las excepciones que establezca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley aplicable a la materia;</p> <p>Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, será el organismo público autónomo, independiente y de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de promover, difundir y garantizar en el Estado y sus Municipios, el acceso a la información pública y la protección a los datos personales en los términos que establezca la legislación de la materia y demás disposiciones que de ella emanen.</p> <p>La comisión, se integrará y funcionará en los términos que establezca la Ley de la materia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO III</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS</b></p> <p><b>Artículo 12.</b> Las leyes se ocuparán de:</p> <p>I. a V. ...</p> <p>VI. Proteger el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;</p> <p>VII. Garantizar el acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, así como de proteger los datos personales y la información relativa a la vida privada, en los términos y con las excepciones que establezca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley aplicable a la materia.</p> <p>El ejercicio del derecho de acceso a la información se regirá por los siguientes principios:</p> <p>a) Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos que fijen</p>

	<p>las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.</p> <p><b>b)</b> La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.</p> <p><b>c)</b> Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.</p> <p><b>d)</b> Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante el organismo autónomo, especializado e imparcial que establece esta Constitución.</p> <p><b>e)</b> Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.</p> <p><b>f)</b> Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.</p> <p><b>g)</b> La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes de la materia.</p> <p>Para efectos de lo establecido en el inciso d), el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, será el organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de promover, difundir y garantizar en el Estado y sus Municipios, el acceso a la información pública, la protección de los datos personales y el uso responsable de la información en los términos que establezca la legislación de la materia</p>
--	--

<p><b>VII Bis. a IX. ...</b> <b>X.</b> Instituir un Tribunal de lo Contencioso Administrativo Estatal, dotado de plena autonomía en el pronunciamiento de sus fallos y con facultades para resolver las controversias derivadas de actos administrativos que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares; y</p>	<p>y demás disposiciones aplicables. El Instituto a que se refiere esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública, la ley en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal. El Instituto estará conformado por tres comisionados, los cuales durarán en su encargo 6 años, sin posibilidad de reelección y serán designados por mayoría calificada del Pleno del Congreso del Estado, en los términos que establezca la ley de la materia. En su conformación se procurará la equidad de género. El Instituto tendrá un Consejo Consultivo, integrado por tres consejeros, con experiencia en acceso a la información, protección de datos y derechos humanos, provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la academia, que serán designados en términos de la Ley de la materia. La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones; <b>VII Bis. a IX. ...</b> <b>X.</b> Establecer la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, así como las disposiciones que regulen los procedimientos y recursos contra sus resoluciones. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado estará dotado de plena autonomía para dictar sus resoluciones y tendrá competencia para dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal o municipal y para imponer, en los términos que disponga la Ley de la materia, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad</p>
--	---

<p>XI. ...</p> <p>...</p>	<p>administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos, según corresponda.</p> <p>El Tribunal se integrará por tres Magistrados que durarán en su cargo quince años improrrogables y deberán reunir los requisitos que se señalen en la Ley.</p> <p>Los Magistrados del Tribunal serán designados por el Gobernador del Estado y ratificados por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado.</p> <p>Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la Ley.</p> <p><b>XI. ...</b></p> <p><b>XII.</b> Atender como una consideración primordial, el interés superior de la niñez en todas las medidas concernientes a las niñas, niños y adolescentes y garantizar plenamente sus derechos; y</p> <p><b>XIII.</b> Erradicar el trabajo infantil y cualquier otra forma de explotación hacia niñas, niños y adolescentes.</p> <p>...</p>
<p><b>CAPÍTULO IV</b>  <b>DE LOS POBLANOS Y DE LOS CIUDADANOS DEL ESTADO</b>  <b>Artículo 18. <u>Son poblanos:</u></b></p> <p><b>I. ...</b></p> <p><b>II.</b> Los mexicanos hijos de padre poblano o madre poblana, nacidos fuera del territorio del Estado, mayores de edad, que manifiesten ante el Congreso local, su deseo de ser poblanos y obtengan del mismo su aprobación para ser considerados como tales; y</p> <p><b>III.</b> Los mexicanos nacidos fuera del territorio del Estado, hijos de padres no poblanos, con residencia continua y comprobable de cinco años dentro del mismo, mayores de edad, que manifiesten ante el Congreso local su deseo de ser poblanos y obtengan del mismo su aprobación para ser considerados como tales.</p>	<p><b>CAPÍTULO IV</b>  <b>DE LOS POBLANOS Y DE LOS CIUDADANOS DEL ESTADO</b>  <b>Artículo 18. Son poblanos por nacimiento o por residencia, ejerciendo los mismos derechos y cumpliendo las mismas obligaciones en los términos que señale la presente Constitución y las leyes de la materia:</b></p> <p><b>I. ...</b></p> <p><b>II.</b> Los mexicanos mayores de edad hijos de padre o madre poblana, nacidos fuera del territorio del Estado; o</p> <p><b>III.</b> Los mexicanos mayores de edad nacidos fuera del territorio del Estado, hijos de padres no poblanos, con residencia continua y comprobable de cinco años dentro del mismo, previa certificación que realice el Ayuntamiento del Municipio en el que residan.</p>

<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO V DE LA FAMILIA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO V DE LA FAMILIA</b></p>
<p><b>Artículo 26. ...</b>                      ...                      Los Poderes Públicos garantizarán el desarrollo integral de la Familia, con sus derechos y obligaciones; atendiendo los contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados, Convenciones y demás Instrumentos Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y los ordenamientos secundarios; al tenor de los siguientes principios:  <b>I. a IX. ...</b>  <b>X.</b> La familia tiene derecho a ser protegida <u>adecuadamente, en particular respecto a sus integrantes menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores;</u>  <b>XI.</b> Los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros les respeten su integridad física y psíquica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su <u>plena incorporación. y participación en la sociedad;</u> y   <b>XII.</b> <u>Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar.</u></p>	<p><b>Artículo 26. ...</b>                      ...                      Los Poderes Públicos garantizarán el desarrollo integral de la Familia, con sus derechos y obligaciones; atendiendo los contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados, Convenciones y demás Instrumentos Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y los ordenamientos secundarios; al tenor de los siguientes principios:  <b>I. a IX. ...</b>  <b>X.</b> La familia tiene derecho a ser protegida, <b>primordialmente sus integrantes niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores;</b>  <b>XI.</b> Los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros les respeten su integridad física y psíquica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su <b>plena incorporación y participación en la sociedad. Queda prohibido el castigo corporal y cualquier acto u omisión que atente contra su integridad física o psicológica;</b> y  <b>XII.</b> Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar.  <b>Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.</b>  <b>En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.</b></p>
<p><b>Artículo 27.</b> La madre, el padre o el tutor tienen las siguientes obligaciones para con sus hijas e hijos:  <b>I. Inscribirlos en el Registro del Estado Civil;</b>   <b>II. a V. ...</b></p>	<p><b>Artículo 27.</b> La madre, el padre o el tutor tienen las siguientes obligaciones para con sus hijas e hijos:  <b>I. Inscribirlos de manera inmediata en el Registro del Estado Civil de las Personas;</b>  <b>II. a V. ...</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO TERCERO                  DEL PODER LEGISLATIVO                  CAPÍTULO PRIMERO                  DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO</b></p> <p><b>Artículo 35.</b> La Elección de Diputados por el principio de representación proporcional, se sujetará a lo que disponga el Código respectivo y las siguientes bases:</p> <p><b>I. a III. ...</b></p> <p><b>IV.</b> <u>En ningún caso un Partido Político podrá contar con más de veintiséis Diputados por ambos principios.</u></p> <p><b>V. ...</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO TERCERO                  DEL PODER LEGISLATIVO                  CAPÍTULO PRIMERO                  DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO</b></p> <p><b>Artículo 35.</b> La Elección de Diputados por el principio de representación proporcional, se sujetará a lo que disponga el Código respectivo y las siguientes bases:</p> <p><b>I. a III. ...</b></p> <p><b>IV.</b> Ningún Partido Político podrá contar con más de veintiséis Diputados por ambos principios.                  En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.</p> <p><b>V. ...</b></p>
<p><b>Artículo 37.</b> No pueden ser electos diputados propietarios o suplentes:</p> <p><b>I. ...</b></p> <p><b>II.</b> <u>Los Magistrados en ejercicio del Tribunal Superior de Justicia del Estado y los del Tribunal Electoral del Estado, los Secretarios de Despacho del Ejecutivo, los Subsecretarios, el Fiscal General del Estado, el Secretario Particular del Gobernador, los Directores de las Dependencias del Ejecutivo, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y los Titulares de los cuerpos de Seguridad Pública del Estado;</u></p> <p><b>III. a VI. ...</b></p> <p>...</p> <p><u>Los Diputados a la Legislatura no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Los Diputados Suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de propietario, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los Diputados Proprietarios no podrán ser</u></p>	<p><b>Artículo 37.</b> No pueden ser electos diputados propietarios o suplentes:</p> <p><b>I. ...</b></p> <p><b>II.</b> <u>Los Magistrados en ejercicio del Tribunal Superior de Justicia del Estado los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, los Secretarios de Despacho del Ejecutivo, los Subsecretarios, el Fiscal General del Estado, el Secretario Particular del Gobernador, los Directores de las Dependencias del Ejecutivo, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y los Titulares de los cuerpos de Seguridad Pública del Estado;</u></p> <p><b>III. a VI. ...</b></p> <p>...</p> <p><u>Los diputados a la legislatura local podrán ser electos consecutivamente hasta por cuatro períodos, la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan perdido o</u></p>

<p>electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.</p>	<p>renunciado a su militancia antes de la mitad de su mandato.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO II</b>  <b>DE LA INSTALACIÓN Y LABORES DEL CONGRESO</b></p> <p><b>Artículo 50.</b> El Congreso tendrá cada año tres períodos de Sesiones, en la forma siguiente:</p> <p><b>I.</b> El primero comenzará el día quince de enero, terminará el quince de marzo y se ocupará de estudiar, discutir y votar las iniciativas de ley que se presenten y resolver los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.</p> <p><u>Tratándose de la Cuenta Pública Parcial del primer día del mes de noviembre al último día de conclusión de la administración constitucional del Ejecutivo del Estado, quien hubiere fungido como su Titular, la presentará ante el Congreso del Estado por conducto de la Auditoría Superior del Estado, dentro de los primeros cinco días del mes de enero del año siguiente, la cual se examinará, revisará calificará y aprobará en este Periodo de Sesiones.</u></p> <p><u>Por lo que hace a la Cuenta Pública Parcial del primer año de la administración constitucional del Ejecutivo del Estado, será presentada por su Titular ante el Congreso del Estado, dentro del mes de enero del año siguiente, para su examen, revisión, calificación y aprobación durante este Periodo de Sesiones.</u></p> <p>Derogado.</p> <p><b>II.</b> El segundo comenzará el primero de junio y terminará el treinta y uno de julio, en el que además de conocer de los asuntos mencionados en el párrafo primero de la fracción anterior, <u>se examinará, revisará, calificará y en su caso, aprobará la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del año inmediato anterior, que será presentada por los Titulares del Ejecutivo y del Legislativo ante el Congreso del Estado antes del inicio de este periodo.</u></p> <p><u>En el año de conclusión de la administración constitucional del Ejecutivo y del Legislativo del Estado, dentro de los primeros quince días del mes de julio, serán presentadas por sus respectivos titulares ante el Congreso del Estado por conducto de la Auditoría Superior del Estado, las Cuentas Públicas Parciales correspondientes a los meses de enero a junio.</u></p> <p><u>En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, la Legislatura en funciones sesionará de manera Ordinaria del primer día hábil del mes de septiembre al catorce del mismo mes y año, en el que incluirán en</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO II</b>  <b>DE LA INSTALACIÓN Y LABORES DEL CONGRESO</b></p> <p><b>Artículo 50.</b> El Congreso tendrá cada año tres períodos de Sesiones, en la forma siguiente:</p> <p><b>I.</b> El primero comenzará el día quince de enero, terminará el quince de marzo y se ocupará de estudiar, discutir y votar las iniciativas de ley que se presenten y resolver los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.</p> <p>Se deroga.          Se deroga.</p> <p>Derogado.</p> <p><b>II.</b> El segundo comenzará el primero de junio y terminará el treinta y uno de julio, en el que conocerá de los asuntos mencionados en la fracción anterior.</p> <p>Se deroga.          Se deroga.</p>



<p>la agenda legislativa, el examen, revisión, calificación y aprobación de <u>las Cuentas Públicas Parciales de enero a junio, declarando si las cantidades percibidas y gastadas están de acuerdo con las partidas respectivas de los presupuestos, si los gastos están justificados y si ha lugar o no a exigir responsabilidades.</u></p> <p>III. ...</p>	<p>III. ...</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO III DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO</b></p> <p><b>Artículo 57.</b> Son facultades del Congreso:  <b>I. a VII. ...</b>  <b>VIII.</b> Establecer las bases para que el Estado y los Municipios, así como los organismos descentralizados y empresas públicas puedan contraer obligaciones y empréstitos destinados a inversiones públicas productivas, y fijar anualmente, en la Ley de Egresos del Estado y en los presupuestos de los Municipios, los conceptos y los montos máximos de dichas obligaciones <u>o empréstitos.</u> <u>El Congreso aprobará las operaciones de financiamiento, que se contratarán, convertirán o consolidarán mediante el Decreto que emita.</u></p> <p>Examinar, discutir y aprobar, en su caso, a través de la ley aplicable, el establecimiento de los requisitos generales que deberán ser cumplidos, o mediante decreto específico, a solicitud del Titular del Poder Ejecutivo, la afectación de ingresos del Estado derivados de participaciones en ingresos federales, fondos federales, contribuciones, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, accesorios u otros conceptos susceptibles de afectación, respecto al cumplimiento de todo tipo de obligaciones del Estado, de sus organismos descentralizados o de terceros prestadores de bienes o servicios, que deriven de la contratación de deuda pública, de</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO III DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO</b></p> <p><b>Artículo 57.</b> Son facultades del Congreso:  <b>I. a VII. ...</b>  <b>VIII.</b> Establecer las bases para que el Estado y los Municipios, así como los organismos descentralizados y empresas públicas puedan contraer obligaciones y empréstitos destinados a inversiones públicas productivas, y fijar anualmente, en la Ley de Egresos del Estado y en los presupuestos de los Municipios, los conceptos y los montos máximos de dichas obligaciones <b>o financiamientos.</b> <b>El Congreso autorizará mediante Decreto la contratación de financiamientos y obligaciones, así como su refinanciamiento o reestructura, en los términos que señala la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.</b>  <b>Fijar los límites y modalidades bajo los cuales dichos Entes Públicos podrán afectar sus respectivas participaciones o ingresos propios para cubrir los financiamientos y obligaciones que contraigan; además de establecer su obligación de inscribir y publicar la totalidad de sus financiamientos y obligaciones en el Registro Público Único y en el propio del Estado, de manera oportuna y transparente; así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan con las disposiciones de la materia.</b></p> <p>Examinar, discutir y aprobar, en su caso, a través de la ley aplicable, el establecimiento de los requisitos generales que deberán ser cumplidos, o mediante decreto específico, a solicitud del Titular del Poder Ejecutivo, la afectación de ingresos del Estado derivados de participaciones en ingresos federales, fondos federales, contribuciones, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, accesorios u otros conceptos susceptibles de afectación, respecto al cumplimiento de todo tipo de obligaciones del Estado, de sus organismos descentralizados o de terceros prestadores de bienes o servicios, que deriven de la contratación de deuda pública, de</p>

<p>Proyectos para Prestación de Servicios y otro tipo de proyectos relacionados a obra pública, bienes o servicios que contrate o celebre el Estado, en los términos de las leyes respectivas. De la misma manera, corresponderá al Congreso, a solicitud del Titular del Poder Ejecutivo, la aprobación de la desafectación de dichos ingresos en términos de la legislación aplicable, cuando así sea establecido en la ley aplicable;</p> <p>El Congreso del Estado autorizará a los Ayuntamientos, cuando proceda, afectar en garantía sus participaciones.</p> <p><b>IX.</b> Supervisar, coordinar y evaluar a la Auditoría Superior del Estado, sin perjuicio de la autonomía que le confiere el artículo 113 de esta Constitución, y expedir la Ley que regule su organización, funcionamiento y atribuciones;</p> <p><b>X.</b> ...</p> <p><b>XI.</b> Dictaminar las Cuentas Públicas de los Poderes del Estado, de los Ayuntamientos y demás sujetos de revisión, con el apoyo de la Auditoría Superior del Estado con base en el Informe del Resultado de</p>	<p>Proyectos para Prestación de Servicios y otro tipo de proyectos relacionados a obra pública, bienes o servicios que contrate o celebre el Estado, en los términos de las leyes respectivas. De la misma manera, corresponderá al Congreso, a solicitud del Titular del Poder Ejecutivo, la aprobación de la desafectación de dichos ingresos en términos de la legislación aplicable, cuando así sea establecido en la ley aplicable;</p> <p>El Congreso del Estado autorizará a los Ayuntamientos, cuando proceda, afectar en garantía sus participaciones.</p> <p><b>El Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, autorizará los montos máximos para que en las mejores condiciones del mercado, se contraten financiamientos y obligaciones, previo análisis de la capacidad de pago del Ente Público, su destino y en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.</b></p> <p><b>Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno del Estado y los Municipios podrán contratar obligaciones exclusivamente para cubrir sus necesidades a corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante los últimos tres meses.</b></p> <p><b>El Estado y sus Municipios, podrán adherirse al mecanismo de contratación de Deuda Estatal Garantizada que otorga el Gobierno Federal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables en la materia.</b></p> <p><b>IX.</b> Coordinar y evaluar a la Auditoría Superior del Estado, sin perjuicio de la autonomía que le confiere el artículo 113 de esta Constitución, y expedir la Ley que regule su organización, funcionamiento y atribuciones, así como expedir la Ley que establezca las bases para la integración, atribuciones y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, de conformidad con las disposiciones aplicables;</p> <p><b>X.</b> ...</p> <p><b>XI.</b> Dictaminar, dentro de los ocho meses siguientes a su presentación, los Informes del Resultado de la fiscalización de los sujetos de revisión, entregados por la Auditoría Superior del Estado, en términos de la legislación aplicable;</p>
--	--

<p>la revisión que éste le remita en cualquiera de los periodos de sesiones a que se refiere esta Constitución;</p> <p><b>XII. a XIII. ...</b></p> <p><b>XIV.</b> Elegir a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Contencioso Administrativo, a propuesta en terna del Ejecutivo y a los del Tribunal Electoral del Estado, en los términos señalados por la legislación electoral vigente;</p> <p><b>XV.</b> Conocer y resolver sobre las renunciaciones; así como de las licencias por más de treinta días del Gobernador, de los Diputados, de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, <u>del Tribunal Contencioso Administrativo, de los del Tribunal Electoral del Estado, del Auditor Superior del Estado y demás que conforme a Ley deba conocer;</u></p> <p><b>XVI.</b> Nombrar, por consenso o por mayoría calificada de los miembros del Congreso presentes, en ese orden de prelación, al Consejero Presidente y a los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado. De igual forma deberá nombrar a los Consejeros Electorales Suplentes. El Código aplicable establecerá el procedimiento y las reglas respectivas;</p> <p><b>XVII. a XXII. ...</b></p> <p><b>XXIII.</b> Recibir la protesta Constitucional a los Diputados, al Gobernador de elección popular directa, al interino o al sustituto, a los Consejeros Electorales y al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, a los suplentes de éstos, así como al Auditor Superior del Estado, y a todos los demás que conforme a las Leyes no deban otorgar protesta ante otra autoridad;</p> <p><b>XXIV. a XXX. ...</b></p> <p><b>XXXI.</b> Instituir mediante leyes que para tal efecto expida, el Tribunal de</p>	<p><b>XII. a XIII. ...</b></p> <p><b>XIV.</b> Elegir a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia a propuesta en terna del Ejecutivo; y ratificar por mayoría de los miembros presentes del Congreso a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa designados por el Ejecutivo del Estado, así como designar al integrante del Comité Consultivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado que le corresponda;</p> <p><b>XIV. Bis.</b> Expedir la Ley que establezca las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación;</p> <p><b>XV.</b> Conocer y resolver sobre las renunciaciones; así como de las licencias por más de treinta días del Gobernador, de los Diputados, de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y <b>del Tribunal de Justicia Administrativa, del Auditor Superior del Estado y demás que conforme a Ley deba conocer;</b></p> <p><b>XVI. Se deroga;</b></p> <p><b>XVII. a XXII. ...</b></p> <p><b>XXIII.</b> Recibir la protesta Constitucional a los Diputados, al Gobernador de elección popular directa, al interino o al sustituto, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, al Auditor Superior del Estado y a todos los demás que conforme a las Leyes no deban otorgar protesta ante otra autoridad;</p> <p><b>XXIV. a XXX. ...</b></p> <p><b>XXXI.</b> Expedir la Ley que regule la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;</p>
---	---

<p>lo Contencioso Administrativo, dotado de autonomía plena en el pronunciamiento de sus fallos y con facultades para resolver los conflictos y controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal, ya sea centralizada o paraestatal, estableciendo las normas que regulen su organización y funcionamiento; así como las atribuciones de sus integrantes y los requisitos para su nombramiento, sus procedimientos y los recursos contra las resoluciones que pronuncien;  <b>XXXII. a XXXIII. ...</b></p>	<p><b>XXXII. a XXXIII. ...</b>  <b>XXXIV.</b> Designar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida por esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, así como ratificar el nombramiento del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo del Estado; y  <b>XXXV.</b> Las demás que le confiera expresamente esta Constitución.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO IV          DE LA COMISIÓN PERMANENTE</b></p> <p><b>Artículo 59.</b> Durante los recesos del Congreso, habrá una Comisión Permanente compuesta por nueve Diputados. En su integración se procurará reflejar la composición plural del Congreso.  <u>La Comisión Permanente será nombrada por el Congreso tres días antes de la clausura de sus sesiones ordinarias, y en el año de la renovación de la Legislatura funcionará hasta la instalación del Congreso.</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO IV          DE LA COMISIÓN PERMANENTE</b></p> <p><b>Artículo 59.</b> Durante los recesos del Congreso, habrá una Comisión Permanente compuesta por nueve Diputados. En su integración se procurará reflejar la composición plural del Congreso.</p>
<p><b>Artículo 61.</b> Son atribuciones de la Comisión Permanente:  <b>I. ...</b>  <b>II.</b> Recibir la protesta del Gobernador, de los Diputados, de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Electoral del Estado, de los Consejeros Electorales, del Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, del Auditor Superior del Estado y demás que conforme a Ley deba conocer el Congreso;  <b>III. a VIII. ...</b></p>	<p><b>Artículo 61.</b> Son atribuciones de la Comisión Permanente:  <b>I. ...</b>  <b>II.</b> Recibir la protesta del Gobernador, de los Diputados, de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, <b>del Tribunal de Justicia Administrativa, del Auditor Superior del Estado, y demás que conforme a Ley deba conocer el Congreso;</b>  <b>III. a VIII. ...</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO CUARTO          DEL PODER EJECUTIVO          CAPÍTULO I          DEL GOBERNADOR</b></p> <p><b>Artículo 79.</b> Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado:  <b>I. a XVII. ...</b>  <b>XVIII.</b> Se deroga.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO CUARTO          DEL PODER EJECUTIVO          CAPÍTULO I          DEL GOBERNADOR</b></p> <p><b>Artículo 79.</b> Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado:  <b>I. a XVII. ...</b>  <b>XVIII.</b> En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con</p>

<p><b>XIX. a XXXVI. ...</b>  <u>Al término del período constitucional, el Gobernador saliente, enviará al Congreso una memoria, acompañada de los documentos necesarios para su completa inteligencia, en la cual expondrá la situación del Estado en todos los ramos de la Administración Pública.</u></p>	<p>uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso del Estado.                  El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición.  <b>XIX. a XXXVI. ...</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO QUINTO                  DEL PODER JUDICIAL                  CAPÍTULO UNICO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 86.</b> El ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Cuerpo Colegiado denominado "<b>TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO</b>" y en los Juzgados que determine la Ley Orgánica correspondiente.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO QUINTO                  DEL PODER JUDICIAL                  CAPÍTULO UNICO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 86.</b> El ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Cuerpo Colegiado denominado "<b>TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO</b>" y en los Juzgados que determine la Ley Orgánica correspondiente.                  La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura en los términos que establezca la Ley.                  El Consejo de la Judicatura será un órgano del Poder Judicial del Estado con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.                  El Consejo se integrará por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo; por dos Consejeros designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de entre los Magistrados o Jueces inamovibles, y por un Comité Consultivo.                  El Comité Consultivo se integrará por dos miembros con carácter honorífico, uno designado por el Congreso del Estado y otro por el Gobernador del Estado, y funcionará según lo disponga la Ley.                  Los integrantes del Comité Consultivo no tendrán la calidad referida en el artículo 124 de esta Constitución.                  Todos los miembros del Consejo deberán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades.                  Los Consejeros designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 89 de esta Constitución y gozar de reconocimiento en el ámbito judicial. En el caso de los integrantes del Comité Consultivo éstos tendrán el carácter de honoríficos y por tanto no tendrán derecho a remuneración alguna</p>

	<p>por el ejercicio o desempeño de este cargo, debiendo cumplir con las fracciones I, II, IV y V del artículo 89 de esta Constitución, y no podrán desempeñar cualquier otro cargo, empleo o comisión que pueda resultar en un conflicto de intereses.</p> <p>El Consejo de la Judicatura funcionará en Pleno o en comisiones, y será competente para resolver sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de jueces, así como de los demás asuntos que la Ley determine.</p> <p>Salvo el Presidente del Consejo, los demás integrantes del mismo durarán hasta cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y podrán ser nombrados para un nuevo período.</p> <p>El Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia podrá solicitar al Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional. El Pleno del Tribunal también podrá revisar y, en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes. La Ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones.</p> <p>Las decisiones del Consejo serán definitivas y no admitirán recurso.</p> <p>El Tribunal Superior de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo de la Judicatura lo hará para el resto del Poder Judicial, los que serán remitidos por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado. La administración del Tribunal Superior de Justicia corresponderá a su Presidente.</p>
<p><b>Artículo 90.</b> La Ley Orgánica del Poder Judicial establecerá:  <b>I. a VI. ...</b></p>	<p><b>Artículo 90.</b> La Ley Orgánica del Poder Judicial establecerá:  <b>I. a VI. ...</b>  <b>VII.</b> La organización del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y sus facultades; y  <b>VIII.</b> Las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO SÉPTIMO          DEL MUNICIPIO LIBRE          CAPÍTULO ÚNICO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO SÉPTIMO          DEL MUNICIPIO LIBRE          CAPÍTULO ÚNICO</b></p>

<p><b>Artículo 102. ...</b>  <b>I. ...</b>  <b>II. <u>No podrán ser electos para el período inmediato, como propietarios:</u></b></p> <p><b>a). a b). ...</b>  <b>III.</b> Los funcionarios mencionados en las fracciones anteriores, cuando hayan tenido el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el período inmediato, como suplentes; pero los que fueron suplentes podrán ser electos para el período inmediato como propietarios, salvo que hayan estado en ejercicio.  <b>IV. a V. ...</b></p>	<p><b>Artículo 102. ...</b>  <b>I. ...</b>  <b>II.</b> Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndico de los Ayuntamientos podrán ser electos consecutivamente para el mismo cargo por un período adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan perdido o renunciado a su militancia antes de la mitad de su mandato.                  No podrán ser electos para un tercer período consecutivo, como propietarios:  <b>a). a b). ...</b>  <b>III. Se deroga.</b></p> <p><b>IV. a V. ...</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO OCTAVO                  DE LA ADMINISTRACIÓN EN GENERAL                  CAPÍTULO I                  DE LA PLANEACIÓN Y LAS COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO</b></p> <p><b>Artículo 107.</b> En el Estado de Puebla, se organizará un Sistema de Planeación del Desarrollo, que será democrático y que se integrará con los planes y programas de desarrollo de carácter estatal, regional, municipal y especiales.</p> <p>...                  ...                  ...</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO OCTAVO                  DE LA ADMINISTRACIÓN EN GENERAL                  CAPÍTULO I                  DE LA PLANEACIÓN Y LAS COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO</b></p> <p><b>Artículo 107.</b> En el Estado de Puebla, se organizará un Sistema de Planeación del Desarrollo, que será democrático y que se integrará con los planes y programas de desarrollo de carácter estatal, regional, municipal y especiales.</p> <p>...                  ...                  ...</p> <p>En los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo, el Gobierno del Estado y cada uno de los Municipios velarán por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.</p> <p>...</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO II                  DE LA HACIENDA PÚBLICA</b></p> <p><b>Artículo 113.</b> La Auditoría Superior del Estado, es la unidad de Fiscalización, Control y Evaluación, dependiente del Congreso del Estado, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan las</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO II                  DE LA HACIENDA PÚBLICA</b></p> <p><b>Artículo 113.</b> La Auditoría Superior del Estado, es la unidad de Fiscalización, Control y Evaluación, dependiente del Congreso del Estado, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan las</p>

leyes respectivas, el cual contará con las atribuciones siguientes:  
I. Fiscalizar en forma posterior, los ingresos y egresos, control, administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, bienes y recursos de los Poderes del Estado, Ayuntamientos, organismos autónomos, entidades paraestatales y paramunicipales, organismos públicos desconcentrados, fideicomisos en los que el fideicomitente sea cualquiera de los Poderes del Estado o Ayuntamientos y en general, cualquier persona física o jurídica, pública o privada, mandato, fondo y demás que por cualquier razón recauden, manejen, ejerzan, resguarden o custodien recursos, fondos, bienes o valores públicos estatales, municipales o federales, tanto en el país como en el extranjero:

II. Ejercer la función de fiscalización conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Sin perjuicio del principio de anualidad, la Auditoría Superior del Estado podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejercicio y pago, diversos Ejercicios Fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de programas estatales, municipales o federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, emita la Auditoría Superior del Estado, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.

Sin perjuicio del principio de posterioridad, la Auditoría Superior del Estado, podrá realizar revisiones preventivas;

leyes respectivas, el cual contará con las atribuciones siguientes:  
I. Fiscalizar los ingresos, egresos, control, administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, bienes y recursos de los Poderes del Estado, Ayuntamientos, organismos autónomos, entidades paraestatales y paramunicipales, organismos públicos desconcentrados, fideicomisos en los que el fideicomitente sea cualquiera de los Poderes del Estado o Ayuntamientos y en general, cualquier persona física o jurídica, pública o privada, mandato, fondo y demás que por cualquier razón recauden, manejen, ejerzan, resguarden o custodien recursos, fondos, bienes o valores de la hacienda pública estatal o municipal, tanto en el país como en el extranjero, y demás que formen parte de la cuenta pública, en términos de las disposiciones aplicables; asimismo, fiscalizará las acciones del Estado y Municipios en materia de fondos, recursos locales, deuda pública estatal y municipal, y las garantías que, en su caso, otorguen el Gobierno del Estado y los Municipios a sus entidades paraestatales o paramunicipales, según corresponda, así como el destino y ejercicio de los recursos obtenidos por estos financiamientos;

II. Ejercer la función de fiscalización conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

La Auditoría Superior del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, se referirán a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública.

La Auditoría Superior del Estado, podrá realizar revisiones preventivas conforme a la Ley respectiva.

En los trabajos de planeación de auditorías y revisiones, la Auditoría Superior del Estado podrá solicitar información del ejercicio en curso, en términos de las disposiciones aplicables.

La Auditoría Superior del Estado podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejercicio y pago, diversos Ejercicios Fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los



<p><b>III. a IV. ...</b></p> <p><b>V.</b> Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, control, administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, bienes y recursos estatales, municipales y federales, de los Poderes del Estado, de los Ayuntamientos, de los organismos autónomos del Estado y demás sujetos de revisión establecidos en la legislación aplicable;</p> <p><b>VI.</b> Realizar auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, presentados a través de los informes que rindan en los términos que disponga la Ley;</p> <p><b>VII.</b> Determinar los daños y perjuicios por la afectación a las haciendas públicas estatal, municipal o federal, o al patrimonio de las entidades paraestatales, paramunicipales, de los organismos autónomos del Estado y demás sujetos de revisión;</p> <p><b>VIII.</b> Emitir resoluciones, imponer sanciones, <u>medidas de apremio, fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y</u></p>	<p>objetivos de programas estatales, municipales y demás de su competencia en términos de las disposiciones aplicables. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, emita la Auditoría Superior del Estado, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.</p> <p>En los casos que determine la Ley, derivado de denuncias y previa autorización de su Titular, la Auditoría Superior del Estado podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a los sujetos de revisión, así como respecto de ejercicios anteriores. Los sujetos de revisión proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. En estos supuestos, la Auditoría Superior del Estado rendirá un informe específico al Congreso del Estado y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción o las autoridades competentes;</p> <p><b>III. a IV. ...</b></p> <p><b>V.</b> Investigar, en ejercicio de la función de fiscalización, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o presunta conducta ilícita en el ingreso, egreso, control, administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, bienes y recursos estatales, municipales y demás de su competencia, de los Poderes del Estado, de los Ayuntamientos, de los organismos autónomos del Estado y demás sujetos de revisión establecidos en la legislación aplicable; y como resultado de estas investigaciones, substanciar y en su caso, promover las acciones que sean procedentes ante las instancias competentes, en términos de las disposiciones aplicables;</p> <p><b>VI.</b> Realizar auditorías sobre el desempeño en los términos que disponga la Ley;</p> <p><b>VII.</b> Se deroga.</p> <p><b>VIII.</b> Emitir resoluciones, imponer sanciones y medidas de apremio, en términos de la legislación aplicable;</p>
--	--

<p><u>promover en su caso, ante las autoridades competentes, el fincamiento de otras responsabilidades, en términos de la legislación aplicable;</u></p> <p><b>IX.</b> Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Noveno de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la Ley; y</p> <p><b>X.</b> ...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p><b>IX.</b> Promover las acciones de responsabilidad <b>ante las autoridades competentes, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la Ley; y</b></p> <p><b>X.</b> ...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p><b>Artículo 114.</b> La revisión de las Cuentas Públicas tendrá por objeto determinar los resultados de la gestión financiera, verificar si se ajustaron a los criterios señalados en los presupuestos, conforme a las disposiciones aplicables, así como comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes, programas y subprogramas.</p> <p>La Auditoría Superior entregará al Congreso del Estado por conducto de la Comisión respectiva, el Informe del Resultado de la revisión de las Cuentas Públicas en cualquiera de los periodos de sesiones a que se refiere esta Constitución. Si de la revisión que se realice aparecieren diferencias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, habrá lugar a determinar la responsabilidad de acuerdo con la Ley.</p> <p>La Auditoría Superior, también informará al Pleno del Congreso, a través de la Comisión respectiva, de las Cuentas que se encuentren pendientes o en proceso de revisión, explicando la razón por la que no se han concluido.</p> <p>El incumplimiento de este precepto, será causa de responsabilidad de los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado o de la Comisión respectiva del Congreso del Estado.</p> <p>Las sanciones y demás resoluciones de la Auditoría Superior del Estado podrán ser impugnadas por los sujetos de revisión, y en su caso, por los servidores públicos afectados adscritos a las mismas ante la propia Auditoría Superior, en términos de las disposiciones legales aplicables.</p> <p>Los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y demás sujetos de</p>	<p><b>Artículo 114.</b> La revisión de las Cuentas Públicas <b>corresponde al Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior, y tendrá por objeto determinar los resultados de la gestión financiera, verificar si se ajustaron a los criterios señalados en los presupuestos, conforme a las disposiciones aplicables, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes, programas y subprogramas.</b></p> <p><b>La Cuenta Pública del Estado del ejercicio correspondiente, deberá ser presentada por el Poder Ejecutivo ante el Congreso del Estado, a más tardar el último día hábil del mes de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar este plazo, cuando medie solicitud del Gobernador del Estado, suficientemente justificada a juicio de la Legislatura, en términos de las disposiciones aplicables.</b></p> <p><b>Tratándose de las Cuentas Públicas municipales del ejercicio correspondiente, cada Ayuntamiento deberá presentarla ante el Congreso del Estado, por conducto de la Auditoría Superior, a más tardar el último día hábil del mes de abril del año siguiente.</b></p> <p><b>Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, se observará sin perjuicio de la demás información que deban presentar conforme a la Ley, para su revisión y fiscalización por la Auditoría Superior del Estado.</b></p> <p><b>La Auditoría Superior entregará por conducto de la Comisión respectiva, los Informes del Resultado de la fiscalización superior y demás que, conforme a esta Constitución y la Ley respectiva, deba conocer el Congreso del Estado.</b></p> <p><b>Los Informes del Resultado serán de carácter público; los plazos, contenido y el procedimiento para su emisión y entrega, se determinarán en la Ley respectiva.</b></p> <p><b>La Auditoría Superior, también informará al Pleno del Congreso, a</b></p>

<p>revisión, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoría Superior del Estado de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados directamente por la Auditoría Superior del Estado en los términos que establezcan su propia Ley y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.</p>	<p>través de la Comisión respectiva, de las Cuentas que se encuentren pendientes o en proceso de revisión, explicando la razón por la que no se han concluido.</p> <p>El incumplimiento de este precepto, será causa de responsabilidad de los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado o de la Comisión respectiva del Congreso del Estado.</p> <p>La Auditoría Superior del Estado guardará reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que entregue los Informes del Resultado de la fiscalización superior de los sujetos de revisión, la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.</p> <p>Los actos y demás resoluciones de la Auditoría Superior del Estado, podrán ser impugnadas ante la propia Auditoría en los casos que proceda, en términos de las disposiciones legales aplicables.</p> <p>Los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y demás sujetos de revisión, facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones. Asimismo, los servidores públicos estatales y municipales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos estatales, municipales, y demás que compete fiscalizar a la Auditoría Superior del Estado, deberán proporcionar la información y documentación que la misma les solicite de conformidad con los procedimientos establecidos en las Leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de incumplimiento a lo dispuesto en este párrafo, los responsables serán sancionados en los términos que establezcan las Leyes aplicables.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO VII DEL DERECHO SOCIAL</b></p> <p><b>Artículo 123.</b> El Gobierno, en el ámbito de su competencia, vigilará y estimulará el debido cumplimiento de las leyes y demás disposiciones que se dicten en materia de trabajo y previsión social, educación, fomento agropecuario, vivienda y cualesquiera otras que siendo de orden público tiendan al mejoramiento de la población y a la realización de la justicia social.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO VII DEL DERECHO SOCIAL</b></p> <p><b>Artículo 123.</b> El Gobierno, en el ámbito de su competencia, vigilará y estimulará el debido cumplimiento de las leyes y demás disposiciones que se dicten en materia de trabajo y previsión social, educación, fomento agropecuario, vivienda y cualesquiera otras que siendo de orden público tiendan al mejoramiento de la población y a la realización de la justicia social.</p> <p>Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas.</p>

<p>...</p> <p style="text-align: center;"><b>TÍTULO NOVENO</b>  <b><u>DISPOSICIONES GENERALES</u></b>  <b>CAPÍTULO I</b>  <b><u>DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y</u></b>  <b><u>PATRIMONIAL DEL ESTADO</u></b></p> <p><b>Artículo 124.</b> Servidores públicos son las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, sea cual fuere la forma de su elección o nombramiento:  <b>I. a IV. ...</b></p>	<p>...</p> <p style="text-align: center;"><b>TÍTULO NOVENO</b>  <b>CAPÍTULO I</b>  <b>DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>  <b>Y PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS</b>  <b>GRAVES O HECHOS DE CORRUPCIÓN Y PATRIMONIAL DEL</b>  <b>ESTADO</b></p> <p><b>Artículo 124.</b> Servidores públicos son las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, sea cual fuere la forma de su elección o nombramiento:  <b>I. a IV. ...</b>          Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la Ley.</p>
<p><b>Artículo 125.</b> El Congreso del Estado expedirá la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad de acuerdo con las siguientes disposiciones:  <b>I. ...</b>  <b>II. Se impondrán, mediante juicio político, <u>las sanciones de destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza, al Gobernador del Estado, Diputados al Congreso Local, Auditor Superior y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, por:</u></b>  <b>a). al c). ...</b>          ...  <b>III. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público <u>será perseguida y sancionada en los términos de la Legislación Penal.</u></b></p>	<p><b>Artículo 125.</b> Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:  <b>I. ...</b>  <b>II. Se impondrán, mediante juicio político, y conforme al procedimiento establecido en Ley, las sanciones de destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza, al Gobernador del Estado, Diputados al Congreso Local, Auditor Superior, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y del Tribunal de Justicia Administrativa, así como a los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por:</b>  <b>a). al c). ...</b>          ...  <b>III. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable.</b>          Las Leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las Leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de</p>

<p><b>IV.</b> Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.</p>	<p>dichos bienes, además de las otras penas que correspondan;</p> <p><b>IV.</b> Para la aplicación de sanciones administrativas a los servidores públicos, se observará lo previsto en la Ley de la materia.</p> <p>Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos, que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La Ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.</p> <p>Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control estatales y municipales, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control estatales o municipales según corresponda.</p> <p>Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en las Leyes respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.</p> <p>Para impugnar la calificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control, se observará lo previsto en la Ley de la materia.</p> <p>Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la Ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales, municipales y demás de su competencia; y presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución;</p>
--	---

<p>V. Los procedimientos para la aplicación de las penas a que se refieren las fracciones anteriores, se desarrollarán autónomamente y no podrán imponerse dos veces por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza.</p> <p>VI. La Ley de Responsabilidades determinará los casos y circunstancias en los que se deba sancionar penalmente, por causa de enriquecimiento ilícito, a los servidores públicos que durante el</p>	<p><b>IV Bis.</b> El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a las Haciendas Públicas estatal o municipales, o a los entes públicos locales o municipales.</p> <p>Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella.</p> <p>También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a las Haciendas Públicas estatal o municipales, o a los entes públicos locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva.</p> <p>Las Leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones;</p> <p>V. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones a que se refieren las fracciones anteriores, se desarrollarán autónomamente y no podrán imponerse dos veces por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza.</p> <p>Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado, respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo;</p> <p>VI. En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la confidencialidad y reserva de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La Ley establecerá los</p>
---	---

<p>tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes cuya procedencia lícita no pudiesen justificar, o se conduzcan como dueños de ellos.</p> <p><u>VII. Se sancionará el enriquecimiento ilícito con el decomiso y la privación de la propiedad de los bienes a que se refiere la fracción anterior, además de las otras penas que correspondan.</u></p>	<p>procedimientos para que les sea entregada dicha información.</p> <p>La Auditoría Superior del Estado, la Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del Control Interno y los órganos internos de control estatales y municipales, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada de combate a la corrupción del Estado y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y en las Leyes respectivas;</p> <p><b>VII.</b> El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades competentes en el Estado y en los Municipios que lo integran en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:</p> <p><b>a).</b> El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; de la Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; el presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado; así como por un representante del Consejo de la Judicatura del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana.</p> <p><b>b).</b> El Comité de Participación Ciudadana del Sistema, deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la Ley;</p> <p>y</p> <p><b>c).</b> Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1.</b> El establecimiento de mecanismos de coordinación con las autoridades que correspondan.</li><li><b>2.</b> El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan.</li><li><b>3.</b> La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de</li></ol>
--	--

<p><b>VIII.</b> La Ley Sobre Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos del Estado, determinará:</p> <p><b>a).</b> Las obligaciones de los servidores públicos, a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones.</p> <p><b>b).</b> Las sanciones aplicables que, además de las que señalen las Leyes, consistirán en suspensión, destitución, inhabilitación, así como en sanciones económicas, cuyo monto se establecerá de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales, causados por sus actos u omisiones, y que no excederán de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños causados.</p> <p><b>c).</b> Los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa. La prescripción penal se regirá por las leyes aplicables.          No podrán concederse las gracias de indulto o conmutación de pena a los condenados por responsabilidad oficial.</p>	<p>gobierno.</p> <p><b>4.</b> El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos.</p> <p><b>5.</b> La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.          Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas;</p> <p><b>VIII.</b> La Ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción IV de este artículo. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años.          La prescripción penal se regirá por las leyes aplicables.          No podrán concederse las gracias de indulto o conmutación de pena a los condenados por responsabilidad oficial.</p>
<p><b>Artículo 127.</b> Para procesar por delitos oficiales a los Diputados, al Auditor Superior y a los Magistrados se seguirán las reglas siguientes:</p> <p><b>I. a IV. ...</b></p>	<p><b>Artículo 127.</b> Para procesar por delitos oficiales a los Diputados, al Auditor Superior, a los Magistrados y los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial de Estado, se seguirán las reglas siguientes:</p> <p><b>I. a IV. ...</b></p>



<p><b>Artículo 131.</b> La responsabilidad del Estado y los Municipios será objetiva y directa, por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular, se causen en los bienes y derechos de los particulares.</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p><b>Artículo 131.</b> La responsabilidad del Estado y los Municipios será objetiva y directa, por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular, se causen en los bienes y derechos de los particulares.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Respecto a los delitos o faltas administrativas de los servidores públicos estatales o municipales, se estará a lo dispuesto en las Leyes respectivas.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO II DE LAS PREVENCIONES</b></p> <p><b>Artículo 133.</b> Se prohíbe:</p> <p>I. ...</p> <p>II. A los Secretarios de Despacho, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, <u>Jueces y funcionarios del Ministerio Público, el desempeño de cualquier otro cargo, empleo o comisión remunerados.</u></p> <p>III. a IV. ...</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO II DE LAS PREVENCIONES</b></p> <p><b>Artículo 133.</b> Se prohíbe:</p> <p>I. ...</p> <p>II. A los Secretarios de Despacho, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, <u>del Tribunal de Justicia Administrativa, Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, funcionarios del Ministerio Público y Jueces,</u> el desempeño de cualquier otro cargo, empleo o comisión remunerados;</p> <p>III. a IV. ...</p>

<b>COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE QUERÉTARO</b>	
<b>TEXTO ANTERIOR</b>	<b>TEXTO VIGENTE</b>
<p style="text-align: center;"><b>Título Segundo El Estado Capítulo Cuarto Poder Público Sección Segunda Poder Legislativo</b></p> <p><b>ARTÍCULO 17.</b> Son facultades de la Legislatura: I a III ...</p> <p>IV terceras partes de los integrantes de la Legislatura, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, al Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; al Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, a los Comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la</p>	<p style="text-align: center;"><b>Título Segundo El Estado Capítulo Cuarto Poder Público Sección Segunda Poder Legislativo</b></p> <p><b>ARTÍCULO 17.</b> Son facultades de la Legislatura: I a III ...</p> <p>IV Elegir, con el voto de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, al Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; al Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, a los Comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la</p>

<p>Información Pública del Estado de Querétaro, al Auditor Superior del Estado, al Fiscal General del Estado y a los demás servidores públicos que determine la Ley; debiendo mantener un equilibrio entre mujeres y hombres cuando se trate de órganos colegiados;</p> <p>V. ...  <b>VI.</b> Resolver si ha lugar o no, proceder en juicio político o <u>declaración de procedencia</u>, en contra de los servidores públicos;  <b>VII. a XIX.</b> ...</p>	<p>Información Pública del Estado de Querétaro, al Auditor Superior del Estado, al Fiscal General del Estado y a los demás servidores públicos que determine la Ley; debiendo mantener un equilibrio entre mujeres y hombres cuando se trate de órganos colegiados;</p> <p>Ratificar por las dos terceras partes de sus miembros presentes de la Legislatura del Estado, el nombramiento que el Gobernador del Estado de Querétaro, haga del Secretario responsable del control interno del Poder Ejecutivo del Estado.</p> <p>Asimismo, la Legislatura del Estado designará por las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos que esta Constitución les reconoce autonomía;</p> <p>V. ...  <b>VI.</b> Resolver si ha lugar o no, proceder en juicio político, en contra de los servidores públicos;  <b>VII. a XIX.</b> ...</p>
<p style="text-align: center;"><b>Sección Tercera                  Poder Ejecutivo</b></p> <p><b>ARTÍCULO 22.</b> Son facultades y obligaciones del gobernador del Estado las siguientes:  <b>I. a IX.</b> ...  <b>X.</b> Rendir ante la Legislatura, el cuarto domingo del mes de julio de cada año, por escrito, un informe del estado general que guarda la administración pública en los términos que establezca la Ley.</p> <p><b>XI a XIV</b> ...</p>	<p style="text-align: center;"><b>Sección Tercera                  Poder Ejecutivo</b></p> <p><b>ARTÍCULO 22.</b> Son facultades y obligaciones del gobernador del Estado las siguientes:  <b>I. a IX.</b> ...  <b>X.</b> Rendir ante la Legislatura, durante el mes de septiembre de cada año, por escrito, un informe del estado general que guarda la administración pública en los términos que establezca la Ley, salvo el último año de ejercicio constitucional, en el cual el informe a que se refiere el presente artículo se rendirá en el mes de julio;  <b>XI a XIV</b> ...</p>
<p style="text-align: center;"><b>Capítulo Quinto                  Organismos Autónomos</b></p> <p><b>ARTICULO 30 BIS.</b> ...                  Dicho organismo constitucional autónomo contará con un Consejo, en el que se garantice la participación ciudadana; con un cuerpo de policía de investigación que actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público, con una Unidad Especializada en Delitos Electorales y las demás que establezca su Ley.</p> <p>...</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capítulo Quinto                  Organismos Autónomos</b></p> <p><b>ARTICULO 30 BIS.</b> ...                  Dicho organismo constitucional autónomo contará con un Consejo, en el que se garantice la participación ciudadana; con un cuerpo de policía de investigación que actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público, con una Unidad Especializada en Delitos Electorales, una <b>Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción</b> y las demás que establezca su Ley.</p> <p>...</p>

<p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
	<p><b>ARTÍCULO 30 ter.</b> El titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del Estado y deberá cubrir los mismos requisitos descritos en el párrafo cuarto, del artículo 30 bis, de la presente Constitución. Durará en su encargo nueve años y únicamente podrá ser removido por las causas graves que establezca la Ley, mediante la misma votación requerida para su designación. El titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción presentará un informe anual ante la Legislatura del Estado.</p>
<p><b>ARTÍCULO 31.</b> La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, es el organismo público autónomo, mediante el cual se ejercerá la función de fiscalización, en los términos que establece la ley y conforme a los principios de <u>posterioridad</u>, <u>anualidad</u>, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Tendrá a su cargo:</p> <p><b>I.</b> Fiscalizar, en forma posterior, los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de los recursos de los Poderes del Estado, de las Entidades Públicas, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, y, en general, cualquier persona física o moral que recaude, administre, maneje o ejerza recursos públicos, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas gubernamentales;</p> <p><b>II.</b> Investigar los actos y omisiones que impliquen irregularidad o conducta ilícita en materia de cuenta pública y manejo de recursos públicos;</p> <p><b>III.</b> Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal, promoviendo ante las autoridades competentes el fincamiento de responsabilidades. En su caso podrá imponer las sanciones correspondientes;</p> <p><b>IV.</b> Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública al Presidente de la Legislatura del Estado, debiendo guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que se publiquen los informes de la misma; y</p> <p><b>V.</b> Actuar como órgano técnico de la Legislatura para la revisión y</p>	<p><b>ARTÍCULO 31.</b> La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, es el organismo público autónomo, mediante el cual se ejercerá la función de fiscalización, en los términos que establece la ley y conforme a <b>los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad</b>. Tendrá a su cargo:</p> <p><b>I.</b> Fiscalizar, en forma posterior, los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de los recursos de los Poderes del Estado, de las Entidades Públicas, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, y, en general, cualquier persona física o moral que recaude, administre, maneje o ejerza recursos públicos, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas gubernamentales;</p> <p><b>Además, fiscalizará las acciones del Estado y los municipios, en materia de fondos, recursos locales y deuda pública;</b></p> <p><b>II.</b> Realizar revisiones durante el ejercicio fiscal en curso o respecto de ejercicios anteriores, en las situaciones que determine la Ley;</p> <p><b>III.</b> Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos y omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas o la comisión de faltas administrativas, en términos de las disposiciones aplicables;</p> <p><b>IV.</b> Determinar la existencia de daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal, promoviendo ante las autoridades competentes la imposición de las sanciones correspondientes;</p> <p><b>V.</b> Entregar el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, al Poder Legislativo del Estado,</p>

<p>fiscalización de las cuentas públicas de los municipios, en los términos que establezca la Ley.</p> <p>Los Poderes del Estado y demás <u>entidades públicas</u>, independientemente de su naturaleza, son sujetos de fiscalización y estarán obligados, <u>en los términos de Ley</u>, a rendir cuentas del ejercicio presupuestal que les corresponda ante la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, así como a facilitar los auxilios que requiera la misma para el ejercicio de sus funciones, con excepción de los Municipios, que lo harán ante la Legislatura.</p> <p>...</p>	<p>debiendo guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta la entrega de dicho informe;</p> <p><b>VI.</b> Actuar como órgano técnico de la Legislatura para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los municipios, en los términos que establezca la Ley; y</p> <p><b>VII.</b> Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, para la imposición de sanciones a los servidores públicos estatales y municipales y a los particulares.</p> <p>Los Poderes del Estado y demás <b>entes públicos</b>, independientemente de su naturaleza, son sujetos de fiscalización y estarán obligados <b>en los términos que establezca la Ley</b>, a rendir cuentas del ejercicio presupuestal que les corresponda ante la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, así como a facilitar los auxilios que requiera la misma para el ejercicio de sus funciones, con excepción de los Municipios, que lo harán ante la Legislatura.</p> <p>...</p>
<p style="text-align: center;"><b>Capítulo Sexto de los Tribunales Administrativos</b></p> <p><b>ARTICULO 34.</b> El funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se sujetará a lo siguiente:</p> <p><b>Apartado A.</b></p> <p>El Tribunal de lo Contencioso Administrativo estará dotado de plena autonomía y será independiente de cualquier autoridad administrativa. Tendrá a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre las dependencias administrativas estatales y municipales con los particulares.</p> <p>Residirá en la ciudad de Santiago de Querétaro y tendrá la estructura, la organización, la jurisdicción y la competencia que le atribuya la ley. Para ser Magistrado, se deberán satisfacer los requisitos que se señalan en el artículo 28 de la presente Constitución y será electo para un período de cuatro años, pudiendo ser ratificado por un periodo igual.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capítulo Sexto de los Tribunales Administrativos</b></p> <p><b>ARTICULO 34.</b> El funcionamiento del <b>Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro</b> y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se sujetará a lo siguiente:</p> <p><b>Apartado A.</b></p> <p><b>El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro</b> estará dotado de plena autonomía, será independiente de cualquier autoridad administrativa y tendrá su residencia en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro. La Ley establecerá su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, los recursos contra sus resoluciones.</p> <p>Asimismo, tendrá a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal y municipal con los particulares y será el órgano competente para imponer, en los términos que disponga la Ley, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias</p>

<p>Apartado B. ...</p>	<p>que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.</p> <p>El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, se compondrá de tres Magistrados propietarios, los cuales serán propuestos por el Titular del Ejecutivo del Estado y electos por cuando menos las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del Estado.</p> <p>Para ser Magistrado se deberá contar con experiencia en materia de derecho administrativo de al menos cinco años previos a la designación, satisfacer los requisitos que se señalan en el artículo 28 de la presente Constitución y su designación será para un periodo de doce años. No se podrá ocupar el cargo como propietario en forma consecutiva, ni discontinua, por más de dicho periodo; a su vencimiento, o antes si el Magistrado llega a la edad de setenta años, cesará en sus funciones, tendrá derecho a un haber por retiro y podrá ser considerado Magistrado supernumerario o para otros cargos.</p> <p>Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que establezca la Ley y con la misma votación requerida para su designación.</p> <p>Apartado B. ...</p>
<p style="text-align: center;"><b>Título Tercero Municipio Capítulo Único</b></p> <p><b>ARTÍCULO 37.</b> El Presidente Municipal, <u>en el mes de julio de cada año, rendirá ante el Ayuntamiento, un informe por escrito de la situación general que guarde la administración municipal, en los términos que establezca la Ley.</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>Título Tercero Municipio Capítulo Único</b></p> <p><b>ARTÍCULO 37.</b> El Presidente Municipal, <u>en el mes de septiembre de cada año, rendirá ante el Ayuntamiento, un informe por escrito de la situación general que guarde la administración municipal, en los términos que establezca la Ley, salvo el último año de ejercicio constitucional, en el cual el informe a que se refiere el presente artículo se rendirá en el mes de julio.</u></p>
	<p><b>ARTÍCULO 37 bis.</b> Son servidores públicos las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, sea cual fuere la forma de su elección o nombramiento, en los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los municipios del Estado y sus dependencias y entidades; así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados, quienes serán responsables por los actos u</p>

	<p>omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.                  Los servidores públicos de elección popular por el tiempo en el cual ejercen su función, no generan antigüedad laboral por la naturaleza de su encargo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Título Cuarto</b>  <b>De la responsabilidad de los Servidores Públicos</b>  <b>Capítulo Primero</b>  <b>De la responsabilidad</b></p> <p><b>ARTÍCULO 38.</b> Los Servidores Públicos <u>serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. La Ley y demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidades, se ajustarán a las siguientes prevenciones:</u></p> <p><b>I.</b> Se impondrán, mediante juicio político, cuando los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Podrán ser sujetos a juicio político, los Magistrados de los Tribunales del Estado, los Jueces del Poder Judicial, los Secretarios, Sub-secretarios, Oficial Mayor y Directores de la Administración Pública Estatal, el Fiscal General del Estado y los Ministerios Públicos; el Auditor Superior del Estado, los Comisionados integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, los miembros de los Ayuntamientos y los Directores Generales o sus equivalentes en las entidades paraestatales y paramunicipales;</p> <p><b>II.</b> La comisión de delitos, por parte de cualquier servidor público, será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal. Para proceder en contra de los Diputados de la Legislatura, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Jueces, el Fiscal General del Estado, los Presidentes Municipales y los titulares de los Organismos Autónomos reconocidos por esta Constitución, se requiere declaración de procedencia por la Legislatura del Estado;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Título Cuarto</b>  <b>De la responsabilidad de los Servidores Públicos</b>  <b>Capítulo Primero</b>  <b>De la responsabilidad</b></p> <p><b>ARTÍCULO 38.</b> Los Servidores Públicos <b>y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:</b></p> <p><b>I.</b> Se impondrán, mediante juicio político, cuando los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Podrán ser sujetos a juicio político, los Magistrados de los Tribunales del Estado, los Jueces del Poder Judicial, los Secretarios, Sub-secretarios, Oficial Mayor y Directores de la Administración Pública Estatal, el Fiscal General del Estado y los Ministerios Públicos; el Auditor Superior del Estado, los Comisionados integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, los miembros de los Ayuntamientos y los Directores Generales o sus equivalentes en las entidades paraestatales y paramunicipales;  <b>La resolución relativa a lo previsto en la presente fracción será inatacable.</b></p> <p><b>II.</b> <b>La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal aplicable.</b>  <b>Las leyes determinarán los casos y circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes,</b></p>

<p><b>III.</b> Se aplicarán sanciones administrativas a los Servidores Públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones;</p> <p><b>IV.</b> Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas, se desarrollarán autónomamente; y</p>	<p>además de las otras penas que correspondan.</p> <p><b>III.</b> Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La Ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. La sanción se ejecutará hasta que la resolución sea firme.</p> <p>Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo y los órganos internos de control, según corresponda y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por la citada dependencia y los órganos internos de control.</p> <p>Los entes públicos del Estado y los municipios, contarán con órganos internos de control con las facultades que determine la Ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas de las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; para realizar actos de vigilancia, así como para presentar denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción; y</p> <p><b>IV.</b> El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos estatales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación</p>
---	---

<p>V. Las declaraciones y resoluciones relativas a lo previsto en las fracciones I y II del presente artículo son inatacables.</p>	<p>de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos estatales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea firme. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones;</p> <p><b>V. Derogada.</b> Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores, se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza. Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en los artículos 29 y 30 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. En todos los procesos derivados o relativos al presente artículo, las autoridades garantizarán a los involucrados los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la propia del Estado y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Federal, este ordenamiento y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.</p>
	<p><b>ARTÍCULO 38 bis.</b> El titular del Poder Ejecutivo del Estado, los Diputados de la Legislatura del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los miembros del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, los integrantes de los ayuntamientos de los municipios del Estado, los servidores públicos de los organismos constitucionales autónomos, así como los demás</p>



	<p>servidores públicos estatales y municipales, estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses, en los términos que determine la Ley.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Capítulo Segundo</b> <b>Del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro</b></p> <p><b>ARTÍCULO 38 ter.</b> El Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro es la instancia de coordinación entre las autoridades estatales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. La integración, atribuciones y funcionamiento del Sistema, se regirán por lo que dispongan las leyes, atendiendo a las bases siguientes:</p> <p><b>I.</b> El Sistema contará con:</p> <p><b>a).</b> Un Comité Coordinador que será la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema y tendrá a su cargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción en la Entidad. El Comité estará integrado por los titulares de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, por el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; el Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, así como por un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Querétaro y otro del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá;</p> <p><b>b).</b> Un Comité de Participación Ciudadana, cuyo propósito será el de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, en los términos que establezcan las leyes, así como ser la instancia de vinculación entre las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro. El Comité deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la Ley;</p> <p><b>II.</b> Asimismo, el Sistema:</p> <p><b>a).</b> Tendrá acceso a la información pública necesaria, adecuada y</p>

	<p>oportuna para el ejercicio de sus atribuciones.</p> <p><b>b).</b> Las recomendaciones, políticas públicas e informes que emita deberán tener respuesta de los sujetos públicos a quienes se dirijan y contará con las atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a las mismas.</p> <p>Rendirá un informe público a los titulares de los Poderes del Estado, en el que dará cuenta de las acciones anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus recomendaciones.</p>
--	---

<b>COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b>	
<b>TEXTO ANTERIOR</b>	<b>TEXTO VIGENTE</b>
<b>TITULO PRIMERO</b> <b>CAPITULO UNICO</b> <b>Principios Constitucionales</b>	<b>TITULO PRIMERO</b> <b>CAPITULO UNICO</b> <b>Principios Constitucionales</b>
<p><b>ARTÍCULO 7.</b> Son Ley Suprema en el Estado de Quintana Roo, las disposiciones que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y esta Constitución. Los ordenamientos que de ellas emanen forman la estructura jurídica de Quintana Roo.</p> <p><u>Todos los habitantes del Estado de Quintana Roo tienen derecho, en la forma y términos establecidos por esta Constitución y la ley, a resolver sus controversias de carácter jurídico, mediante la conciliación, la que podrá tener lugar antes de iniciarse un juicio o durante su tramitación. Cuando los interesados así lo determinen, habrá lugar a la conciliación en la fase de ejecución.</u></p> <p><b>ARTÍCULO 10.</b> Al Estado corresponde impulsar el desarrollo económico en equilibrio con el medio ambiente, <u>procurar el progreso compartido</u> y la distribución equitativa de la riqueza para garantizar la justicia social, a cuyo efecto planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica, en la esfera de su competencia, regulando y fomentando las actividades de interés general a la cual concurrirán los diversos sectores de población de conformidad a las leyes de la materia, con irrestricto apego a las libertades consagradas en la Constitución Federal y la del Estado.</p>	<p><b>Artículo 7.</b> Son Ley Suprema en el Estado de Quintana Roo, las disposiciones que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y esta Constitución. Los ordenamientos que de ellas emanen forman la estructura jurídica de Quintana Roo.</p> <p>...</p> <p><b>Artículo 10.</b> Al Estado corresponde impulsar el desarrollo económico en equilibrio con el medio ambiente <b>y con perspectiva de género</b>, procurar el progreso compartido y la distribución equitativa de la riqueza para garantizar la justicia social, a cuyo efecto planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica, en la esfera de su competencia, regulando y fomentando las actividades de interés general a la cual concurrirán los diversos sectores de población de conformidad a las leyes de la materia, con irrestricto apego a las libertades consagradas en la Constitución Federal y la del Estado.</p> <p><b>El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas para</b></p>

	<p style="color: red;">coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. Los planes estatal y municipales deberán observar dicho principio.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO SEGUNDO</b>  <b>De los Derechos Humanos y sus Garantías</b>  <b>CAPÍTULO ÚNICO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 21. ...</b>          ...          El derecho de acceso a la información y la protección de datos personales será garantizado por un órgano público autónomo, especializado, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, denominado Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.          El presupuesto de egresos del Instituto no podrá ser menor al cero punto doce por ciento del presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate y en ningún caso, será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior, para tal efecto, el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto será remitido a la Legislatura para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 15 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda.</p> <p>...          ...          ...          ...          ...          ...          ...          Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, regirán los principios y bases siguientes:  <b>I. a VII. ...</b>          ...</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO SEGUNDO</b>  <b>De los Derechos Humanos y sus Garantías</b>  <b>CAPÍTULO ÚNICO</b></p> <p style="color: red;"><b>Artículo 21. ...</b>          ...          El derecho de acceso a la información y la protección de datos personales será garantizado por un órgano público autónomo, especializado, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, denominado Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. <span style="color: red;">Este Instituto contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado por la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, en su caso; durará cuatro años en su encargo sin posibilidad de reelección, y no podrá durante el ejercicio de su cargo, formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. El presupuesto de egresos del Instituto no será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior, para tal efecto, el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto será remitido a la Legislatura para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 20 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda.</span></p> <p>...          ...          ...          ...          ...          ...          ...          Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, regirán los principios y bases siguientes:  <b>I. a VII. ...</b>          ...</p>
<p><b>Artículo 23. ...</b></p>	<p style="color: red;"><b>Artículo 23. ...</b></p>

<p>... ... ... No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considera confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos de esta Constitución, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se registrará por las siguientes reglas:</p> <p>I. ...  <b>II.-</b> Procederá en los casos de delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, <u>respecto de los bienes siguientes:</u></p> <p><b>a) al d).</b> ...          III. ...</p>	<p>... ... ... No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considera confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos de esta Constitución, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se registrará por las siguientes reglas:</p> <p>I. ....  <b>II.</b> Procederá en los casos de delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas <b>y enriquecimiento ilícito</b>, respecto de los bienes siguientes:</p> <p><b>a) al d).</b> ...          III. ...</p>
<p><b>ARTÍCULO 29.</b> La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la Autoridad Judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial del Estado, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél. Compete a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, que consistirá únicamente en multa o arresto hasta por 36 horas. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no podrá ser sancionado con multa mayor del importe <u>de su jornal o salario de un día</u>. La multa impuesta a los trabajadores no asalariados no excederá del equivalente <u>de un día de su ingreso</u>.</p>	<p><b>Artículo 29.</b> La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la Autoridad Judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial del Estado, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél. Compete a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, que consistirá únicamente en multa o arresto hasta por 36 horas. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no podrá ser sancionado con multa mayor del importe <b>del valor diario de la unidad de medida y actualización</b>. La multa impuesta a los trabajadores no asalariados no excederá del equivalente <b>al valor diario de un día de su ingreso</b>.</p>
<p><b>ARTÍCULO 30.</b> Quedan prohibidas la pena de muerte, las de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de toda especie, la multa excesiva, <u>la confiscación de bienes</u> y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.</p>	<p><b>Artículo 30.</b> Quedan prohibidas la pena de muerte, las de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de toda especie, la multa excesiva, <b>la confiscación</b> y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.</p> <p><b>DEROGADO (Segundo Párrafo).</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO II DE LAS GARANTÍAS SOCIALES</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Capítulo derogado POE 30-07-2013</b></p>

<p><b>Artículo 31. ...</b>                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...</p>	<p><b>Artículo 31. ...</b>                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITULO TERCERO                  De la Población                  CAPITULO III                  De los Ciudadanos del Estado de Quintana Roo</b></p> <p><b>ARTÍCULO 41.</b> Son prerrogativas de los ciudadanos del Estado de Quintana Roo:  <b>I.</b> Votar en las elecciones populares estatales y municipales.</p> <p><b>II. a III. ...</b>  <b>IV.</b> Las demás que le confieran esta Constitución y las leyes que de ella emanen.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO TERCERO                  De la Población                  CAPITULO III                  De los Ciudadanos del Estado de Quintana Roo</b></p> <p><b>Artículo 41.</b> Son prerrogativas de los ciudadanos del Estado de Quintana Roo:  <b>I.</b> Votar en las elecciones populares estatales y municipales, <b>así como en el plebiscito, referéndum, consulta popular y en los demás mecanismos de participación ciudadana, en los términos que señale la ley respectiva;</b>  <b>II. a III. ...</b>  <b>IV.</b> <b>Iniciar leyes ante el Congreso del Estado, mediante escrito firmado por uno o más ciudadanos, en los términos que señale la Ley, y</b>  <b>V.</b> Las demás que le confieran esta Constitución y las leyes que de ella emanen.</p>
<p><b>ARTÍCULO 42.</b> Son deberes de los ciudadanos del Estado de Quintana Roo:  <b>I. a III. ...</b>  <b>IV.</b> <u>Votar en las elecciones populares en los términos que señale la Ley.</u></p> <p><b>V. a VI. ...</b></p>	<p><b>Artículo 42.</b> Son deberes de los ciudadanos del Estado de Quintana Roo:  <b>I. a III. ...</b>  <b>IV.</b> <b>Votar en las elecciones populares estatales y municipales, así como en el plebiscito, referéndum, consulta popular y en los demás mecanismos de participación ciudadana, en los términos que señale la ley respectiva.</b>  <b>V. a VI. ...</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>TITULO QUINTO                  DE LA DIVISIÓN DE PODERES                  CAPITULO I                  PRINCIPIOS</b></p> <p><b>ARTÍCULO 49. ...</b>                  ...                  La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO QUINTO                  DE LA DIVISIÓN DE PODERES                  CAPITULO I                  PRINCIPIOS</b></p> <p><b>Artículo 49. ...</b>                  ...                  La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará</p>

<p>mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, en las que podrán participar los partidos políticos nacionales y estatales, por sí mismos o en coaliciones, así como candidatos independientes. La Ley reglamentará estas participaciones.</p> <p>I. ...</p> <p>II. La preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los procesos para las elecciones de Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y Ayuntamientos, así como la instrumentación de las formas de participación ciudadana que señale la Ley, son una función estatal que se realizará a través del Instituto Nacional Electoral y del organismo público denominado Instituto Electoral de Quintana Roo, cuya integración será designada por el Instituto Nacional Electoral en los términos que disponga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este organismo será autoridad en la materia, tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, con el carácter de permanente y profesional en su desempeño.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>El Instituto Electoral de Quintana Roo, contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos. El Consejo General será su órgano máximo de dirección y responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar por que las actividades del Instituto se guíen por los principios rectores de la función estatal electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; se integrará con siete Consejeros Electorales con voz y voto, uno de los cuales fungirá como Presidente, y concurrirán, con voz pero sin voto, un representante de cada partido político y un <b>Secretario General</b>. <u>La Ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de sus órganos, así como las relaciones de mando entre éstos, con base en las disposiciones establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.</u></p> <p>...</p>	<p>mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, en las que podrán participar los partidos políticos nacionales y estatales, por sí mismos o en coaliciones, así como candidatos independientes. La Ley reglamentará estas participaciones.</p> <p>I. ...</p> <p>II. La preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los procesos para las elecciones de Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y Ayuntamientos, así como la instrumentación de las formas de participación ciudadana que señale la Ley, son una función estatal que se realizará a través del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral de Quintana Roo, cuya integración será designada por el Instituto Nacional Electoral en los términos que disponga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. <b>El Instituto Electoral de Quintana Roo es un órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna,</b> con el carácter de permanente y profesional en su desempeño.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>El Instituto Electoral de Quintana Roo, contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos. El Consejo General será su órgano máximo de dirección y responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar por que las actividades del Instituto se guíen por los principios rectores de la función estatal electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; se integrará con siete Consejeros Electorales con voz y voto, uno de los cuales fungirá como Presidente y concurrirán, con voz pero sin voto, un representante de cada partido político y un <b>Secretario Ejecutivo</b>.</p> <p>...</p> <p>...</p>
---	---

<p>...</p> <p>Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas, en los términos que señale la Ley.</p> <p>El Tribunal Electoral de Quintana Roo, tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, y tendrá el carácter de permanente; <u>tendrá competencia y organización para funcionar en pleno y sus sesiones serán públicas.</u></p> <p>El Tribunal Electoral de Quintana Roo y el Instituto Electoral de Quintana Roo contarán con una Contraloría Interna con autonomía técnica y de gestión, responsable de la fiscalización, vigilancia, y control del uso, manejo y destino de los recursos, así como del desempeño de los órganos, funcionarios y servidores electorales. Son órganos adscritos administrativamente al Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo y al Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo respectivamente. Los contralores internos tanto del Instituto como del Tribunal Electoral de Quintana Roo, durarán en su encargo seis años y serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Legislatura del Estado o de la Diputación Permanente en los recesos de ésta, de entre las propuestas que formulen los Grupos Parlamentarios, con base en los requisitos y en los términos que disponga la Ley, y estarán sujetos al régimen de responsabilidades públicas previsto por esta Constitución para los servidores públicos del Estado.</p> <p><u>El Secretario General</u> del Instituto Electoral de Quintana Roo, será electo por las terceras partes del Consejo General, a propuesta de su Consejero Presidente y durará en su encargo el tiempo que determine la Ley.</p> <p>La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece los requisitos que deben reunir los Consejeros Electorales, así como los Magistrados Electorales. La ley establecerá los requisitos que deban</p>	<p>Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección <b>del Instituto Electoral de Quintana Roo</b>, serán públicas y garantizarán la transparencia, la máxima publicidad y el derecho de acceso a la información, en los términos que señale la Ley.</p> <p>El Tribunal Electoral de Quintana Roo, es un órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, independencia en sus decisiones, con plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, y será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con el carácter de permanente; tendrá competencia y organización para funcionar en pleno y sus sesiones serán públicas, y garantizarán la transparencia, la máxima publicidad y el derecho de acceso a la información, en los términos que señale la ley.</p> <p>El Tribunal Electoral de Quintana Roo y el Instituto Electoral de Quintana Roo contarán cada uno con un órgano interno de control, cuyos titulares durarán cuatro años en su encargo sin posibilidad de reelección y no podrán durante el ejercicio de su cargo, formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. Los órganos internos de control son órganos adscritos administrativamente al Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo y al Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, respectivamente. El titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Quintana Roo será designado por la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente.</p> <p><b>El Secretario Ejecutivo</b> del Instituto Electoral de Quintana Roo, será electo por las dos terceras partes del Consejo General, a propuesta de su Consejero Presidente y durará en su encargo el tiempo que determine la Ley.</p> <p>La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece los requisitos que deben reunir los Consejeros Electorales, así como los Magistrados Electorales. La ley establecerá los requisitos y el procedimiento para la designación y remoción de los titulares de los</p>
---	--

reunir para la designación del Contralor Interno y el Secretario General del Instituto Electoral de Quintana Roo y el Contralor Interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, los que estarán sujetos al régimen de responsabilidades públicas previsto por esta Constitución para los servidores públicos del Estado.

Los funcionarios señalados en el párrafo que antecede, no podrán, durante su ejercicio, desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión oficial y sólo podrán recibir percepciones derivadas de actividades profesionales, regalías, derechos de autor o publicaciones siempre que no se afecte la independencia, imparcialidad y equidad que debe regir el ejercicio de su función; también podrán ejercer cargos no remunerados en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia.

La retribución que perciban los Consejeros Electorales, así como los Magistrados Electorales, será la prevista en el presupuesto de egresos del Instituto Electoral de Quintana Roo y del Tribunal Electoral de Quintana Roo, respectivamente. Durante los intervalos entre los procesos electorales estarán obligados a realizar tareas de investigación y difusión acerca de temas electorales. La retribución de los Contralores Internos será la misma que se señale para los Consejeros y Magistrados Electorales, según corresponda. En todo caso, el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, deberá incluir el tabulador desglosado de las remuneraciones que perciban los servidores públicos del Instituto Electoral de Quintana Roo, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución. El Instituto Electoral de Quintana Roo, presentará su presupuesto de egresos ante la instancia correspondiente para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, del año que corresponda. El presupuesto de egresos del Tribunal Electoral de Quintana Roo no podrá ser menor al cero punto quince por ciento del presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate y en ningún caso, será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior, para tal efecto, el proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal, será remitido a la Legislatura, para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 15 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda. El proyecto de presupuesto de egresos deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos del Tribunal, sujetándose a lo dispuesto en el

**órganos internos de control y Secretarios Generales del Instituto Electoral de Quintana Roo y del Tribunal Electoral de Quintana Roo, respectivamente**, los que estarán sujetos al régimen de responsabilidades previsto por esta Constitución para los servidores públicos del Estado.

**DEROGADO.**

La retribución que perciban los Consejeros Electorales, así como los Magistrados Electorales, será la prevista en el presupuesto de egresos del Instituto Electoral de Quintana Roo y del Tribunal Electoral de Quintana Roo, respectivamente. Durante los intervalos entre los procesos electorales estarán obligados a realizar tareas de investigación y difusión acerca de temas electorales. **La retribución de los titulares de los órganos internos de control** será la misma que se señale para los Consejeros y Magistrados Electorales, según corresponda. **El proyecto de presupuesto de egresos deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones** que perciban los servidores públicos del Instituto Electoral de Quintana Roo, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución. El Instituto Electoral de Quintana Roo, presentará su proyecto de presupuesto de egresos **ante la Legislatura a más tardar el 20 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda**, para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, del año que corresponda. **El presupuesto de egresos del Tribunal Electoral de Quintana Roo no será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior, para tal efecto, el proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal, será remitido a la Legislatura, para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 20 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda. En todo caso, el proyecto de presupuesto de egresos deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos del Tribunal Electoral de Quintana Roo, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución.**



<p>artículo 165 de esta Constitución.</p> <p>III. ... La Ley determinará los fines, derechos, prerrogativas, obligaciones y responsabilidades que con tal carácter les correspondan a los partidos políticos como entidades de interés público, así como las formas específicas de su intervención en los procesos electorales estatales.</p> <p>Las autoridades electorales solo intervendrán en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que expresamente se señalen en la Ley.</p> <p>... Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos que señale la Ley, la igualdad de oportunidades y la paridad entre mujeres y hombres en la vida política del Estado, a través de postulaciones a cargo de elección popular, tanto de mayoría relativa como de <u>representación proporcional</u>.</p> <p>Corresponde a los partidos políticos el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular por ambos principios. Los ciudadanos tendrán el derecho de solicitar su registro como candidatos independientes a cargos de elección popular únicamente por el principio de mayoría relativa.</p> <p>En todo caso, será obligación de los partidos políticos postular candidatos de ambos géneros, cuidando que ninguno de éstos sea mayor al cincuenta por ciento en las candidaturas a legisladores locales, así como en las candidaturas a miembros que conformen las planillas de Ayuntamientos.</p>	<p>... III. ... La Ley determinará los fines, derechos, prerrogativas, obligaciones y responsabilidades que con tal carácter les correspondan a los partidos políticos como entidades de interés público, así como las formas específicas de su intervención en los procesos electorales estatales, <b>y tendrán derecho a postular candidatos de forma individual, en coaliciones o a través de candidaturas comunes.</b> Las autoridades electorales solo intervendrán en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que expresamente se señalen en la Ley.</p> <p>... Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos que señale la Ley, la igualdad de oportunidades y la paridad entre mujeres y hombres en la vida política del Estado, a través de postulaciones a cargo de elección popular, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, <b>así como un ambiente libre de cualquier tipo de violencia política por razones de género.</b> Corresponde a los partidos políticos el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular por ambos principios. Los ciudadanos tendrán el derecho de solicitar su registro como candidatos independientes a cargos de elección popular únicamente por el principio de mayoría relativa.</p> <p>En todo caso, será obligación de los partidos políticos postular candidatos de ambos géneros, <b>procurando, siempre que el número de postulaciones lo permita, que ninguno de éstos obtenga una cantidad mayor al cincuenta por ciento en las candidaturas a legisladores locales, así como en las candidaturas a miembros que conformen las planillas de Ayuntamientos. En la integración de las planillas de los Ayuntamientos se deberá postular una fórmula de candidatos jóvenes. En la postulación de candidatos a diputados locales y a integrantes de miembros de los ayuntamientos, se deberá respetar el principio de paridad de género, tanto en su dimensión vertical como en su dimensión horizontal, cuyos supuestos serán regulados en la ley. En ambos casos, no se admitirá la postulación de candidaturas, tanto a diputados locales como a miembros de los ayuntamientos, en detrimento de la sub- representación y/o sobre-representación de cualquiera de los géneros, en la medida que esto sea posible.</b></p> <p>...</p>
---	---

<p>...</p> <p>El financiamiento público para los partidos políticos se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y se otorgará conforme a las siguientes bases:</p> <p><b>1.</b> El financiamiento público ordinario para el sostenimiento de sus actividades permanentes, se fijará cada año por el Instituto Electoral de Quintana Roo al elaborar su presupuesto. El monto total se determinará multiplicando el sesenta y cinco por ciento de un salario mínimo general vigente en el Estado, por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la entidad, con corte al mes de julio del año anterior.</p> <p><u>La cantidad que resulte se otorgará conforme a las siguientes disposiciones:</u></p> <p><b>a) al b).</b> ...</p> <p><b>2. a 3.</b> ...</p> <p><b>4.</b> Los partidos políticos nacionales y estatales que hubiesen obtenido su registro ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, con fecha posterior a la última elección, recibirán financiamiento público, otorgándose a cada uno de ellos, a partir del mes de enero del año siguiente al que hayan obtenido su registro, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, el dos por ciento del monto total que en forma igualitaria corresponda distribuir al conjunto de los partidos políticos, así como una cantidad igual adicional para gastos de campaña durante los procesos electorales.</p> <p><b>5.</b> Se reintegrará hasta el setenta y cinco por ciento de los gastos anuales que eroguen los partidos políticos por concepto de actividades relativas a educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a tareas editoriales, con base en lo que disponga la Ley.</p>	<p>El financiamiento público para los partidos políticos se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y se otorgará conforme a las siguientes bases:</p> <p><b>1.</b> El financiamiento público ordinario para el sostenimiento de sus actividades permanentes, se fijará cada año por el Instituto Electoral de Quintana Roo al elaborar su presupuesto. El monto total se determinará multiplicando el sesenta y cinco por ciento <b>del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por el sesenta y cinco por ciento del listado nominal de la entidad con corte al mes de octubre del año anterior o por la votación válida emitida en la elección de diputados inmediata anterior, en caso de que ésta resulte mayor.</b> La cantidad que resulte se otorgará conforme a las siguientes disposiciones:</p> <p><b>a) al b).</b> ...</p> <p><b>2. a 3.</b> ...</p> <p><b>4.</b> Los partidos políticos nacionales y estatales que hubiesen obtenido su registro ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, con fecha posterior a la última elección, recibirán financiamiento público, otorgándose a cada uno de ellos, a partir del mes de enero del año siguiente al que hayan obtenido su registro, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, el dos por ciento del monto total que en forma igualitaria corresponda distribuir al conjunto de los partidos políticos, así como una cantidad igual adicional para gastos de campaña durante los procesos electorales.</p> <p><b>Aquellos partidos nacionales con registro local que no hubiesen obtenido al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en la elección de Diputados inmediata anterior, sólo tendrán derecho a recibir el financiamiento correspondiente a sus gastos de campaña durante los procesos electorales.</b></p> <p><b>5.</b> Los partidos políticos recibirán un monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias como entidades de interés público, para la educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales. <b>El monto total será distribuido entre los partidos políticos, el treinta por ciento de manera igualitaria y el setenta por ciento de acuerdo con el porcentaje de votos que hubiere obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.</b></p> <p><b>6.</b> ...</p>
---	--

<p>6. ...          ...          ...          Los partidos políticos y candidatos independientes observarán las disposiciones que se establezcan para las precampañas y campañas electorales; en todo caso la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de Gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan Diputados a la Legislatura o miembros de los Ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas.</p> <p>...          ...  <b>IV. a VI. ...</b>  <b>VII.</b> La Ley respectiva tipificará los delitos y determinará las faltas y responsabilidades en materia electoral, así como las sanciones que por ellos deban imponerse;  <b>VIII. ...</b></p>	<p>...          ...          Los partidos políticos y los candidatos independientes observarán las disposiciones que se establezcan para las precampañas y campañas electorales; en todo caso la duración de las campañas será de <b>noventa días</b> para la elección de Gobernador, <b>cuarenta y cinco días para la elección de miembros de los Ayuntamientos</b> y <b>cuarenta y cinco días para la elección de Diputados a la Legislatura</b>. <b>Las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas.</b></p> <p>...          ...  <b>IV. a VI. ...</b>  <b>VII. DEROGADA.</b></p> <p><b>VIII. ...</b></p>
	<p><b>Artículo 51 BIS.</b> Esta constitución reconoce que los órganos públicos autónomos, tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna. Los titulares de los órganos públicos autónomos, así como los servidores públicos que en ellos presten sus servicios, se sujetarán a las disposiciones contenidas en esta Constitución y demás leyes que de ella emanen.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO II          DEL PODER LEGISLATIVO          SECCIÓN PRIMERA          DE LA ELECCIÓN E INSTALACIÓN DE LA LEGISLATURA</b></p> <p><b>ARTÍCULO 52.</b> La Legislatura del Estado de Quintana Roo, se integra con quince diputados electos en igual número de distritos electorales según el principio de votación mayoritaria relativa y con diez diputados electos según el principio de representación proporcional.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO II          Del Poder Legislativo          SECCION PRIMERA          De la Elección e Instalación de la Legislatura</b></p> <p><b>Artículo 52.</b> La Legislatura del Estado de Quintana Roo, se integra con quince diputados electos en igual número de distritos electorales según el principio de votación mayoritaria relativa y con diez diputados electos según el principio de representación proporcional, <b>cuya determinación y asignación no podrá realizarse en exceso y/o defecto de los límites de sobre y/o sub-representación, previstos en el artículo 54, fracción III de esta Constitución. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente.</b></p>

<p>...</p> <p><u>Los diputados</u> electos según el principio de votación mayoritaria relativa y los de representación proporcional, son representantes del pueblo quintanarroense, y tienen la misma calidad e igualdad de derechos y obligaciones.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p><u>Los Diputados electos en elecciones extraordinarias concluirán el período de la Legislatura respectiva.</u></p>	<p>...</p> <p><b>Los Diputados</b> electos según el principio de votación mayoritaria relativa y los de representación proporcional, son representantes del pueblo quintanarroense, y tienen la misma calidad e igualdad de derechos y obligaciones.</p> <p>...</p> <p><b>El organismo público previsto en el artículo 49 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados en cada uno de los distritos electorales y otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos.</b> Asimismo, hará la declaración de validez y asignación de diputados según el principio de representación proporcional de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución. Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados podrán ser impugnadas ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Los fallos del Tribunal serán definitivos e inatacables en el ámbito local. La Ley de la materia establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación.</p> <p><b>DEROGADO.</b></p>
<p><b>ARTÍCULO 52 BIS. DEROGADO</b></p>	<p><b>Artículo 52 BIS.</b> Cuando se produzcan vacantes en la Legislatura por cualquiera de las causas previstas por esta Constitución, si se tratare de Diputados propietarios electos por el principio de mayoría relativa, se convocará al suplente respectivo. Cuando se actualice la vacante absoluta de la fórmula de diputados por el principio de mayoría relativa, ésta será cubierta por el integrante de la lista registrada por el mismo partido político bajo el principio de representación proporcional, que siga en el orden de prelación, el cual de forma preferente será del mismo género.</p> <p>En el caso de las ausencias temporales o definitivas del Diputado propietario por el principio de representación proporcional, se cubrirán con el suplente respectivo de la fórmula. De actualizarse la vacante de la fórmula completa se llamará a aquel integrante del mismo partido político que hubiere quedado en lugar preferente en la lista definitiva respectiva, después de haberse asignado diputados por dicho principio.</p>
<p><b>ARTÍCULO 54.</b> La elección de los diez diputados según el principio de representación proporcional, se sujetará a las bases siguientes y a lo</p>	<p><b>Artículo 54.</b> La elección de los diez Diputados según el principio de representación proporcional, se sujetará a las bases siguientes y a lo</p>

<p>que en particular disponga la Ley de la materia.  <b>I. ...</b></p> <p><b>II. a III. ...</b></p>	<p>que en particular disponga la Ley de la materia:  <b>I. ...</b>                  La lista a de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional de cada partido político, deberá estar integrada de la siguiente manera:                  Cinco candidatos postulados y registrados de manera directa y cinco candidatos que hayan participado bajo el principio de mayoría relativa y que no habiendo obtenido el triunfo por este principio, hayan obtenido los mayores porcentajes de votación válida distrital.                  La lista en su totalidad deberá estar integrada de manera alternada entre géneros, estableciéndose las posiciones 1, 3, 5, 7 y 9 a un mismo género y al otro género las posiciones 2, 4, 6, 8 y 10, de la lista registrada ante el Instituto Electoral.                  El partido político definirá con base en el inciso b), qué posiciones registrará de manera directa y qué posiciones se integrarán con los candidatos que no habiendo ganado, hayan obtenido los mejores resultados de la contienda electoral.  <b>II. a III. ...</b></p>
<p><b>ARTÍCULO 56.</b> No podrá ser Diputado:  <b>I. ...</b>                  II. Los Secretarios de Despacho dependientes del Ejecutivo, el Fiscal General del Estado, el Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Jueces y cualquier otro servidor público que desempeñe cargo público estatal, a menos que se separe definitivamente de su cargo noventa días antes de la fecha de la elección.  <b>III. a VII. ...</b></p>	<p><b>Artículo 56.</b> No podrá ser diputado:  <b>I. ...</b>                  II. Los Secretarios de Despacho dependientes del Ejecutivo, el Fiscal General del Estado, el Titular de la Auditoría Superior del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, <b>los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado</b>, los Jueces y cualquier otro servidor público que desempeñe cargo público estatal, a menos que se separe definitivamente de su cargo noventa días antes de la fecha de la elección.  <b>III. a VII. ...</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN SEGUNDA                  DE LAS SESIONES</b></p> <p><b>ARTÍCULO 67.</b> El Poder Legislativo del Estado administrará con autonomía su presupuesto, el cual no podrá ser menor al <u>tres por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate, y en ningún caso, será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior.</u>                  ...</p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN SEGUNDA                  DE LAS SESIONES</b></p> <p><b>Artículo 67.</b> El Poder Legislativo del Estado administrará con autonomía su presupuesto, el cual no será menor <b>al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior.</b>                  ...</p>
<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN TERCERA                  DE LA INICIATIVA Y FORMACIÓN DE LEYES Y DECRETOS</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCION TERCERA                  De la Iniciativa y Formación de las Leyes y Decretos</b></p>

<p><b>ARTÍCULO 68.</b> El derecho de iniciar Leyes y decretos compete:  <b>I. a III. ...</b>  <b>IV.</b> A los ciudadanos quintanarroenses, en los términos que señale la Ley respectiva.  <b>V.</b> Al Tribunal Superior de Justicia del Estado, en materia de legislación civil, penal, familiar, procesal de estas materias y en la legislación relativa a la organización y administración de justicia.</p>	<p><b>Artículo 68.</b> El derecho de iniciar leyes y decretos compete:  <b>I. a III. ...</b>  <b>IV.</b> A los ciudadanos quintanarroenses, mediante escrito firmado por uno o más ciudadanos, en los términos que señale la Ley respectiva.  <b>V.</b> Al Tribunal Superior de Justicia del Estado, en materia de legislación civil, penal, familiar, procesal de estas materias y en la legislación relativa a la organización y administración de justicia.  <b>El Gobernador del Estado tendrá derecho a presentar hasta dos iniciativas de carácter preferente dentro de los diez días hábiles al inicio del periodo ordinario de sesiones, debiendo sustentar las razones por las cuales les otorga dicho carácter.</b>  <b>Las iniciativas con carácter preferente deberán ser sometidas a discusión y votación de la Legislatura, a más tardar, dentro de los cuarenta días naturales siguientes a su presentación.</b>  <b>La ley establecerá los mecanismos aplicables para dar cumplimiento a lo previsto por el presente artículo. No podrán incluirse como iniciativas preferentes las que modifiquen esta Constitución.</b></p>
<p><b>ARTÍCULO 69.</b> Las iniciativas se sujetarán al trámite señalado en el <u>Reglamento Interior de la Legislatura</u>. Una vez aprobadas, pasarán al Ejecutivo para que en un plazo no mayor de 10 días formule, si las hubiere, las observaciones pertinentes, o proceda a su publicación. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decreto se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.</p>	<p><b>Artículo 69.</b> Las iniciativas se sujetarán al trámite señalado en la <u>Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y en el Reglamento Interior de la Legislatura</u>. Una vez aprobadas, pasarán al Ejecutivo para que en un plazo no mayor de 10 días formule, si las hubiere, las observaciones pertinentes, o proceda a su publicación. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decreto se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.</p>
<p><b>ARTÍCULO 72.</b> El Ejecutivo no podrá hacer observaciones sobre los acuerdos económicos, las resoluciones que dicte la Legislatura erigida en <u>Gran Jurado o Colegio Electoral</u>, las referentes a la responsabilidad <u>de los funcionarios por delitos oficiales</u>, ni al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias expedido por la Diputación Permanente.</p>	<p><b>Artículo 72.</b> El Ejecutivo no podrá hacer observaciones sobre los acuerdos económicos, las resoluciones que dicte la Legislatura erigida en <u>Colegio Electoral</u>, las referentes a la responsabilidad <u>de los servidores públicos</u>, ni al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias expedido por la Diputación Permanente.</p>
<p><b>ARTÍCULO 73.</b> Las iniciativas de ley o decreto que fueren desechadas por la Legislatura, no podrán volver a ser presentadas en el mismo período de sesiones.</p>	<p><b>Artículo 73.</b> Las iniciativas de Ley o decreto que fueren desechadas por la Legislatura, no podrá volver a ser presentadas en el mismo período de sesiones.  <b>Si presentada la iniciativa de ley o decreto no ha sido aprobada por la Legislatura del Estado en los plazos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y el Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, se considerará por ese hecho desechada, excepto cuando la o las comisiones competentes o sus promoventes soliciten a la Legislatura prórroga en los términos establecidos en los</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN CUARTA DE LAS FACULTADES DE LA LEGISLATURA</b></p> <p><b>ARTÍCULO 75.</b> Son facultades de la Legislatura del Estado:  <b>I. a III. ...</b>  <b>IV.</b> Expedir su Ley Orgánica y su Reglamento Interior, así como la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado y su Reglamento Interior.</p> <p>La Legislatura del Estado coordinará y evaluará, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones <u>del Órgano de Fiscalización Superior del Estado</u>, en los términos que disponga la ley.</p> <p><b>V. a XVI. ...</b>  <b>XVII.</b> Erigirse en Gran Jurado para calificar las causas de responsabilidad de sus miembros por delitos cometidos en el desempeño de sus funciones.  <b>XVIII.</b> Declarar si ha lugar o no a formación de causa de que habla el <u>Artículo 162 de esta Constitución.</u>  <b>XIX. ...</b>  <b>XX.</b> Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado así como a los Consejeros Ciudadanos del Consejo de la Judicatura y aprobar o rechazar, en su caso, las renunciaciones o destituciones de éstos, en los términos de esta Constitución.  <b>XXI.</b> Legislar en todo lo relativo a la administración pública, planeación y desarrollo económico y social, así como para la programación y ejecución de acciones de orden económico, en la esfera de la competencia estatal y otras cuya finalidad sea la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y estatalmente necesarios.  <b>XXII. a XXIV. ...</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCION CUARTA De las Facultades de la Legislatura</b></p> <p><b>Artículo 75.</b> Son facultades de la Legislatura del Estado.  <b>I. a III. ...</b>  <b>IV.</b> Expedir su Ley Orgánica y su Reglamento Interior, <b>así como para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior del Estado y su Reglamento Interno y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes del Estado y de los entes públicos estatales; así como para expedir la ley que establezca la integración, atribuciones y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción a que se refiere el artículo 161 de esta Constitución.</b>  La Legislatura del Estado coordinará y evaluará, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones <b>de la Auditoría Superior del Estado</b>, en los términos que disponga la ley.  <b>V. a XVI. ...</b>  <b>XVII. Derogada.</b>  <b>XVIII.</b> Declarar si ha lugar o no a formación de causa de que habla el <b>artículo 172 de esta Constitución.</b>  <b>XIX. ...</b>  <b>XX.</b> Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, <b>así como a los Consejeros Ciudadanos del Consejo de la Judicatura; y a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, así como aprobar o rechazar, en su caso, las renunciaciones o destituciones de éstos, en los términos de esta Constitución;</b>  <b>XXI.</b> Legislar <b>con perspectiva de género en todo</b> lo relativo a la administración pública, planeación y desarrollo económico y social, así como para la programación y ejecución de acciones de orden económico, en la esfera de la competencia estatal y otras cuya finalidad sea la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y estatalmente necesarios.  <b>XXII. a XXIV. ...</b>  <b>XXV.</b> Autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos para contratar</p>
---	--

<p><b>XXV.</b> Autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos para contratar Empréstitos a nombre del Estado y de los Municipios, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal y Municipal, siempre que se destinen a Inversiones Públicas productivas, conforme a las bases que establezca la Ley de Deuda Pública del Estado y por los conceptos y montos que la Legislatura señale anualmente en los respectivos Presupuestos. El Ejecutivo y los Ayuntamientos en su caso, informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública.</p> <p><b>XXVI. a XXVII. ...</b></p> <p><b>XXVIII.</b> Nombrar y remover, conforme al procedimiento previsto en esta Constitución o en la Ley correspondiente, al Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.</p> <p><b>XXIX.</b> Examinar, aprobar y sancionar, en su caso, la Cuenta Pública de las entidades fiscalizables señaladas en la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.</p> <p>Para la revisión de la cuenta pública, la legislatura se apoyará en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado. Si del examen que éste realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y a las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, <u>el Órgano de Fiscalización Superior del Estado</u> podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la ley.</p>	<p>Empréstitos a nombre del Estado y de los Municipios, <b>Órganos autónomos, Organismos Descentralizados y Empresas Públicas y Fideicomisos</b>, siempre que se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura de deuda, las que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como aprobar los montos de endeudamiento, los cuales deberán incluirse en la Ley de Ingresos, conforme a las bases de la Ley correspondiente. El Ejecutivo y los Ayuntamientos en su caso, informarán anualmente sobre el ejercicio de dicha deuda, al momento de rendir la cuenta pública.</p> <p><b>XXVI. a XXVII. ...</b></p> <p><b>XXVIII.</b> Nombrar y remover, conforme al procedimiento previsto en esta Constitución y en la ley de la materia, al Titular de la Auditoría Superior del Estado; así como ratificar con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes el nombramiento de los auditores especiales;</p> <p><b>XXIX.</b> Aprobar o rechazar los Informes de Resultados que presente la auditoría Superior del Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de esta Constitución.</p> <p>Así como revisar y fiscalizar la Cuenta Pública del año anterior que deberán presentar las entidades fiscalizables ante la Auditoría Superior del Estado, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.</p> <p>Para la revisión de la cuenta pública, la legislatura se apoyará en la Auditoría Superior del Estado. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y a las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, <b>la Auditoría Superior del Estado</b> podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la ley.</p> <p><b>La Legislatura del Estado evaluará el desempeño de la Auditoría Superior del Estado y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización.</b></p> <p><b>XXX.</b> Aprobar las leyes de ingresos municipal y estatal y el presupuesto</p>
--	--



<p><b>XXX.</b> Aprobar las leyes de ingresos municipal y estatal y el presupuesto de egresos del Estado, determinando en cada caso, las partidas correspondientes para cubrirlas. Asimismo, podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos del Estado</p> <p>...</p> <p>...</p> <p><b>XXXI. a XXXIV.</b> ...</p> <p><b>XXXV.</b> Crear o suprimir Municipios y reformar la división política del Estado, mediante el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los diputados y la mayoría de los Ayuntamientos en los términos del Artículo 129 de esta Constitución.</p> <p><b>XXXVI. a XLIII.</b> ...</p> <p><b>XLIV.</b> Integrar la lista de candidatos a Fiscal General del Estado; designar y remover a dicho servidor público de conformidad con esta Constitución y la ley de la materia, así como tomarle la protesta.</p> <p><b>XLV. a XLIX.</b> ...</p> <p><b>L. DEROGADA</b></p> <p><b>LI.</b> <u>Expedir todas las leyes y decretos que sean necesarios para hacer efectivas las facultades anteriores.</u></p>	<p>de egresos del Estado, determinando en cada caso, las partidas correspondientes para cubrirlas. Asimismo, podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos del Estado.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Sólo se podrán ampliar los plazos previstos en los artículos 91 y 118, para la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Legislatura, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven.</p> <p><b>XXXI. a XXXIV.</b> ...</p> <p><b>XXXV.</b> Crear o suprimir municipios y reformar la división política del Estado, mediante el voto de los dos terceras partes de la totalidad de los diputados y la mayoría de los ayuntamientos <b>en los términos del artículo 132 de esta Constitución.</b></p> <p><b>XXXVI. a XLIII.</b> ...</p> <p><b>XLIV.</b> Integrar la lista de candidatos a Fiscal General del Estado; designar y remover a dicho servidor público de conformidad con esta Constitución y la ley en la materia, así como tomarle protesta. <b>Así como designar al titular de la fiscalía especializada en combate a la corrupción en los términos que establezca esta constitución y la ley;</b></p> <p><b>XLV. a XLIX.</b> ...</p> <p><b>L.</b> Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, para establecer su organización, funcionamiento y procedimientos;</p> <p><b>LI.</b> Ratificar al Titular de la Secretaría encargada del Control Interno del Poder Ejecutivo Estatal;</p> <p><b>LII.</b> Autorizar la celebración de los convenios del Estado o sus Municipios, en caso de adherirse al mecanismo de contratación de Deuda Estatal Garantizada de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.</p> <p><b>LIII.</b> Expedir las leyes que señale el Título Octavo de esta Constitución, y</p> <p><b>LIV.</b> Expedir todas las leyes y decretos que sean necesarios para hacer</p>
--	---

<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN QUINTA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE</b></p> <p><b>ARTÍCULO 76. ...</b>                  Son facultades y obligaciones de la Diputación Permanente:  <b>I. a II. ...</b>  <b>III.</b> Nombrar interinamente al Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado;</p> <p><b>IV. ...</b>  <b>V.</b> Conceder licencias temporales a los Diputados y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia;</p> <p><b>VI. a VII. ...</b>  <b>VIII.</b> Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado así como a los Consejeros Ciudadanos del Consejo de la Judicatura y aprobar o rechazar, en su caso, las renunciaciones o destituciones de éstos, en los términos de ésta Constitución.</p> <p><b>IX. a XI. ...</b>  <b>XII.</b> Designar mediante el procedimiento previsto en esta Constitución y en las leyes respectivas, a los Contralores Internos del Instituto Electoral de Quintana Roo y del Tribunal Electoral de Quintana Roo y tomarles la protesta de Ley;</p> <p><b>XIII. a XV. ...</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCION QUINTA De la Diputación Permanente</b></p> <p><b>Artículo 76. ...</b>                  Son facultades y obligaciones de la Diputación Permanente:  <b>I. a II. ...</b>  <b>III.</b> Nombrar y remover, conforme al procedimiento previsto en esta Constitución y en la ley de la materia, al Titular de la Auditoría Superior del Estado; así como ratificar con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes el nombramiento de los auditores especiales;</p> <p><b>IV. ...</b>  <b>V.</b> Conceder licencias temporales a los Diputados, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa;</p> <p><b>VI. a VII. ...</b>  <b>VIII.</b> Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a los Consejeros Ciudadanos del Consejo de la Judicatura y a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Así como aprobar o rechazar, en su caso, las renunciaciones o destituciones de éstos, en los términos de esta Constitución.</p> <p><b>IX. a XI. ...</b>  <b>XII.</b> Designar y remover a los titulares de los Órganos Internos de Control de los órganos públicos autónomos reconocidos en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, con excepción del titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral de Quintana Roo. La Ley que rija a los órganos públicos autónomos determinará los requisitos y el procedimiento para su designación y remoción. Asimismo, ratificará al Titular de la Secretaría encargada del Control Interno del Poder Ejecutivo Estatal;</p> <p><b>XIII. a XV. ...</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN SEXTA DE LA FISCALIZACIÓN DEL ESTADO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 77.</b> El Órgano de Fiscalización Superior del Estado, de la Legislatura, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga la ley. Asimismo, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio. El presupuesto de egresos del Órgano de Fiscalización Superior no podrá</p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCION SEXTA De la Revisión y Fiscalización del Estado</b></p> <p><b>Artículo 77.</b> La Auditoría Superior del Estado, de la Legislatura, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga la ley. Asimismo, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio. El proyecto de presupuesto de egresos será remitido a la Legislatura, para su inclusión</p>

<p>ser menor al cero punto cinco por ciento del presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate y en ningún caso, será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior.</p> <p>La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. El Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado será electo por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura. La ley correspondiente determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su encargo siete años y no podrá, durante el ejercicio de su cargo, formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.</p> <p><u>Para ser Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado</u>, se requiere cumplir, además de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV y V del artículo 101 de esta Constitución, los que señale la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. En todo caso, deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. La Legislatura del Estado, al elegir al Titular del Órgano de Fiscalización Superior, elegirá un titular suplente, en los términos previstos en los dos párrafos anteriores, quien cubrirá las ausencias o falta definitivas del Titular del Órgano de Fiscalización del Estado.</p>	<p>en el Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 20 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda. El presupuesto de egresos de la Auditoría Superior del Estado no será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior.</p> <p>La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. El Titular de la Auditoría Superior del Estado será electo por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del Estado. Los auditores especiales serán nombrados por el Titular de la Auditoría Superior del Estado, y ratificados por la Legislatura o en su caso, por la Diputación Permanente. Los auditores especiales auxiliarán al Titular en sus funciones. El titular durará en su encargo siete años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Los auditores especiales, durarán en su encargo siete años, con la posibilidad de ser nombrados por un periodo adicional de tres años. El titular de la Auditoría Superior del Estado podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por causas y conforme a los procedimientos previstos en el título octavo de esta Constitución. El titular y los auditores especiales no podrán, durante el ejercicio de su cargo, formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.</p> <p><u>Para ser Titular de la Auditoría Superior del Estado</u>, se requiere cumplir los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV y V del artículo 101 de esta Constitución y los que señale la Ley de la materia. En todo caso, deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. <u>Para ser auditor especial</u>, se deberán cubrir los mismos requisitos que para ser titular. La ley determinará el procedimiento para la designación y remoción del titular y los auditores especiales. La Auditoría Superior del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública. Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría Superior del Estado podrá solicitar información</p>
--	---

<p>El Órgano de Fiscalización Superior del Estado tendrá a su cargo:</p> <p>I. Revisar y fiscalizar en forma posterior la cuenta pública que los gobiernos, estatal y municipales le presenten sobre su gestión financiera, <u>a efecto de comprobar que la recaudación, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos durante un ejercicio fiscal, se ejercieron con apego a los criterios y disposiciones legales aplicables y determinar el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas aprobados conforme a la ley. La fiscalización también procederá respecto a la recaudación, administración, manejo o ejercicio de los recursos públicos que realice cualquier persona física o moral, pública o privada.</u></p> <p>También fiscalizará directamente los recursos estatales y municipales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los usuarios del sistema financiero.</p> <p>Las Cuentas Públicas a que se refiere la presente fracción, deberán ser presentadas por las entidades fiscalizables ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a más tardar el 31 de marzo del año posterior al del ejercicio fiscal que corresponda.</p>	<p><b>del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos.</b></p> <p>La Auditoría Superior del Estado tendrá a su cargo:</p> <p>I. Revisar y fiscalizar en forma posterior la cuenta pública que los gobiernos, estatal y municipales le presenten sobre su gestión financiera, <b>incluyendo las acciones en materia de fondos, recursos locales y deuda pública</b>, a efecto de comprobar que la recaudación, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos durante un ejercicio fiscal, se ejercieron con apego a los criterios y disposiciones legales aplicables y determinar el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas aprobados conforme a la ley. La fiscalización también procederá respecto a la recaudación, administración, manejo o ejercicio de los recursos públicos que realice cualquier persona física o moral, pública o privada.</p> <p><b>También fiscalizará los recursos estatales y municipales que administre o ejerza el Estado y los municipios, en términos que establezcan las leyes. Y en términos que establezca la ley fiscalizará en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación las participaciones federales. Asimismo, fiscalizará los recursos que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.</b></p> <p><b>Las entidades fiscalizadas a que se refieren los párrafos anteriores deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos estatales y municipales que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezcan las leyes.</b></p> <p><b>La Cuenta Pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura, a través de la Auditoría Superior del Estado, a más tardar el 30 de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud por escrito suficientemente justificada, a juicio de la Legislatura, para lo cual deberá comparecer el titular del ente fiscalizable respectivo, según se trate de cuenta pública estatal o municipal, a informar de las razones que motiven la solicitud. Tratándose de la Cuenta Pública de los Poderes Ejecutivo y Judicial, podrán comparecer los titulares de las Dependencias o quien se designe para tal efecto.</b></p> <p><b>En caso de ampliación del plazo de presentación de la cuenta pública</b></p>
--	---

<p>II. Entregar a la Legislatura Estatal el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública, a más tardar el 5 de septiembre del mismo año de su presentación al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo. Dicho informe contendrá al menos, las auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión, el apartado correspondiente a la fiscalización del manejo de</p>	<p>del ejercicio fiscal correspondiente; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la Auditoría Superior del Estado contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del Informe General Ejecutivo del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública.</p> <p>La Auditoría Superior del Estado podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas estatales y municipales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.</p> <p>Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior del Estado, previa autorización de su Titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores.</p> <p>Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior del Estado rendirá un informe específico a la Legislatura del Estado y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado o las autoridades competentes;</p> <p>II. Entregar a la Legislatura del Estado, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, los informes individuales de auditoría que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del Pleno de la Legislatura del Estado. El Informe</p>
---	---

los recursos estatales o municipales, así como de las participaciones federales o estatales en su caso, por parte de las entidades fiscalizadas y a la verificación del desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas estatales o municipales, el cumplimiento de las normas de información financiera para el sector público, los resultados de la gestión financiera, la comprobación de que las entidades se ajustaron a la ley de la materia o al presupuesto de egresos que corresponda, el análisis de las desviaciones presupuestarias en su caso, así como también un apartado específico con las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado que incluya las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas.

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del informe del resultado, se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado para la elaboración del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública.

El Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado enviará a las entidades fiscalizadas, a más tardar a los 3 días hábiles posteriores a que sea entregado a la Legislatura el informe del resultado, las recomendaciones y acciones promovidas que correspondan para que, en un plazo de hasta 5 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes; en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en la ley. Este término podrá ser ampliado hasta por 5 días hábiles más, previa petición y si a juicio del Titular del Órgano de Fiscalización Superior así lo amerita el caso en concreto. Los plazos anteriores no aplicarán a los pliegos de observaciones y a las promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la ley.

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado deberá pronunciarse en un plazo de 15 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas; en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas.

En el caso de las recomendaciones al desempeño, las entidades fiscalizadas deberán precisar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado las mejoras realizadas o, en su caso, justificar su

General Ejecutivo y los informes individuales serán de carácter público y tendrán el contenido que determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico con las observaciones de la Auditoría Superior del Estado, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas.

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del Informe General Ejecutivo y de los informes individuales de auditoría, se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la Auditoría Superior del Estado para la elaboración de los informes individuales de auditoría.

El Titular de la Auditoría Superior del Estado, enviará a las entidades fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe individual de auditoría respectivo a la Legislatura del Estado, mismos que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes; en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a las promociones de responsabilidades ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley.

La Auditoría Superior del Estado deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas.

En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la Auditoría Superior del Estado las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia.

La Auditoría Superior del Estado deberá entregar a la Legislatura del Estado, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los informes individuales de auditoría que haya presentado en los términos de esta fracción. En dicho informe, el cual tendrá carácter

<p>improcedencia. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado deberá entregar a la Legislatura, en los meses de julio y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado tendrá la obligación de guardar reserva respecto de sus actuaciones e informaciones hasta la fecha en que se entregue a la Legislatura el informe de resultados.</p> <p>III. ... IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten la Hacienda Pública o al Patrimonio de los Poderes del Estado o de los Municipios, o al patrimonio de los entes públicos estatales y municipales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades, incluyendo las referidas en el Título Octavo de esta Constitución y presentar las denuncias o querellas penales, en los términos y con las formalidades que señale la ley. Los Poderes del Estado, los Municipios y demás entes públicos que deban ser fiscalizados facilitarán los auxilios que requiera el Órgano de Fiscalización Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones.</p>	<p>público, la Auditoría incluirá los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Estatal o municipal, al patrimonio de los entes públicos estatales y municipales, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. La Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes individuales de auditoría y el Informe General Ejecutivo a la Legislatura del Estado a que se refiere esta fracción; la ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición;</p> <p>III. ... IV. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos estatales y, en el caso de los párrafos segundo y tercero de la fracción I de este artículo, a los servidores públicos estatales, municipales, y a los particulares. Los Poderes del Estado, los municipios y las demás entidades fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los servidores públicos estatales y municipales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos estatales y municipales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoría Superior del Estado, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos que establezca la Ley. La Legislatura del Estado concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones,</p>
--	---

<p>V. Las demás facultades y atribuciones que le otorguen las leyes respectivas.</p> <p><u>La fiscalización que realice el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se ejercerá de manera posterior a la gestión financiera y tiene carácter externo por lo que se llevará a cabo de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización interna de los sujetos que sean fiscalizables conforme a la ley de la materia.</u></p> <p><u>Sin perjuicio del principio de anualidad, el Órgano de Fiscalización Superior podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas estatales o municipales. Las observaciones y recomendaciones, que al respecto emita el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.</u></p> <p><u>Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la ley, derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. El Órgano de Fiscalización Superior rendirá un informe específico a la Legislatura y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes.</u></p> <p><u>De igual forma, los servidores públicos estatales y municipales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales, estatales o municipales deberán proporcionar la información y documentación que solicite el</u></p>	<p><b>recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, sigan su curso en términos de lo dispuesto en este artículo;</b></p> <p>V. Las demás facultades y atribuciones que le otorguen las leyes respectivas.</p>
--	---



<p><u>Órgano de Fiscalización Superior del Estado, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos que establezca la ley.</u>  <u>Las entidades fiscalizadas, deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos que les sean transferidos y asignados.</u></p>	
	<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN SÉPTIMA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>De las Facultades de la Legislatura en Materia de Deuda Pública</b></p> <p><b>Artículo 77-BIS.</b> El Estado y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso del Estado, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezcan la legislatura en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. El ejecutivo y los ayuntamientos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.</p> <p>La Legislatura por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberá autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, el Estado y los Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses.</p>
<p><b>CAPITULO III DEL PODER EJECUTIVO</b></p>	<p><b>CAPITULO III DEL PODER EJECUTIVO</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN PRIMERA DEL GOBERNADOR</b></p> <p><b>ARTÍCULO 80.</b> Para ser Gobernador del Estado se requiere:</p> <p><b>I.</b> Ser ciudadano mexicano por nacimiento, nativo de la entidad o hijo de padre o madre nacido en la entidad, y con residencia efectiva y vecindad en el Estado de cuando menos diez años inmediatamente anteriores al día de la elección. A falta de los requisitos antes señalados, ser ciudadano mexicano por nacimiento y con residencia efectiva y vecindad en el Estado no menor de veinte años inmediatamente anteriores al día de la elección.</p> <p><b>II.</b> Tener 25 años cumplidos al día de la elección, y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos.</p> <p><b>III. a IV. ...</b></p> <p><b>V.</b> No ser Secretario de Estado o Jefe de Departamento, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Fiscal General de la República, en funciones, dentro de los noventa días anteriores a la fecha de la elección.</p> <p><b>VI.</b> No ser Secretario o Subsecretario del despacho, Director de Organismos Descentralizados o Empresas de Participación Estatal, Oficial Mayor, Fiscal General del Estado, Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, a menos que se separe del cargo noventa días antes de la fecha de la elección.</p> <p><b>VII. ...</b></p> <p><b>VIII.</b> No ser Consejero Presidente, Consejero Electoral, Secretario General o Funcionario del Instituto Electoral de Quintana Roo o Magistrado Electoral, a menos que se separe de su cargo tres años antes de la fecha de la elección.</p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN PRIMERA DEL GOBERNADOR</b></p> <p><b>Artículo 80.</b> Para ser Gobernador del Estado se requiere:</p> <p><b>I.</b> Ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de la entidad o hijo de padre o madre nacido en la entidad o con residencia efectiva <b>no menor de diez años inmediatamente anteriores al día de la elección;</b></p> <p><b>II.</b> <b>Tener treinta años cumplidos al día de la elección, y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos.</b></p> <p><b>III. a IV. ...</b></p> <p><b>V.</b> No ser Secretario de Estado, <b>Diputado o Senador,</b> Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fiscal General de la República, <b>Fiscal Federal Especializado en Combate a la Corrupción,</b> en funciones, <b>a menos que se separe del cargo noventa días anteriores a la fecha de la elección;</b></p> <p><b>VI.</b> No ser Secretario o Subsecretario del despacho, Director de Organismos Descentralizados o Empresas de Participación Estatal, Oficial Mayor, Fiscal General del Estado, <b>Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado, Titular de la Auditoría Superior del Estado, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado,</b> a menos que se separe del cargo noventa días antes de la fecha de la elección.</p> <p><b>VII. ...</b></p> <p><b>VIII.</b> No ser Consejero Presidente, Consejero Electoral, <b>Secretario Ejecutivo</b> o Funcionario del Instituto Electoral de Quintana Roo, <b>Secretario o Magistrado del Tribunal Electoral,</b> a menos que se separe de su cargo tres años antes de la fecha de la elección.</p> <p><b>IX.</b> <b>No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate, y</b></p> <p><b>X.</b> <b>No ser Presidente Municipal o titular de algún órgano político administrativo, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se separe del cargo noventa días antes de la fecha de la elección.</b></p>
<b>SECCIÓN SEGUNDA</b>	<b>SECCION SEGUNDA</b>

<p><b>DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL GOBERNADOR</b>  <b>ARTÍCULO 90.</b> Son facultades del Gobernador:  <b>I. a II. ...</b>  <b>III. DEROGADA</b></p> <p><b>IV. a XVIII. ...</b>  <b>XIX. DEROGADA</b></p> <p><b>XX. ...</b></p>	<p><b>De las Facultades y Obligaciones del Gobernador</b>  <b>Artículo 90.</b> Son facultades del Gobernador:  <b>I. a II. ...</b>  <b>III.</b> Expedir los reglamentos, acuerdos y decretos en el ámbito de su competencia dentro de la administración pública centralizada y descentralizada, empresas de participación estatal, fideicomisos y demás órganos que se creen en la forma en que determinen las leyes;  <b>IV. a XVIII. ...</b>  <b>XIX.</b> En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso del Estado.                      El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición.  <b>XX. ...</b></p>
<p><b>ARTÍCULO 91.</b> Son obligaciones del Gobernador:  <b>I. a VI. ...</b>  <b>VII.</b> Presentar a la Legislatura antes del 16 de Noviembre de cada año las iniciativas de Ley de Ingresos del Estado, que deberán regir en el año inmediato siguiente.  <b>VIII. a XIII. ...</b></p>	<p><b>Artículo 91.</b> Son obligaciones del Gobernador:  <b>I. a VI. ...</b>  <b>VII.</b> Presentar a la Legislatura <b>a más tardar el 20 de noviembre</b> de cada año <b>la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado</b>, que deberán regir en el año inmediato siguiente;  <b>VIII. a XIII. ...</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN TERCERA</b>  <b>DE LA ADMINISTRACIÓN DEL EJECUTIVO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 93.</b> Todos los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Gobernador del Estado deberán estar firmados por el Secretario al que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos. Tratándose de los <u>decretos promulgados</u> de las leyes o decretos expedidos por el Congreso del estado, sólo se requerirá el refrendo del titular de la Secretaría de Gobierno.</p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN TERCERA</b>  <b>DE LA ADMINISTRACIÓN DEL EJECUTIVO</b></p> <p><b>Artículo 93.</b> Todos los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Gobernador del Estado deberán estar firmados por el Secretario al que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos. Tratándose de los <b>decretos promulgatorios</b> de las leyes o decretos expedidos por el Congreso del Estado, sólo se requerirá el refrendo del titular de la Secretaría de Gobierno.</p>

<p><b>ARTÍCULO 94.</b> La Legislatura Estatal, mediante la ley o decreto que al efecto expida, establecerá un Organismo de Protección de los Derechos Humanos, en el marco que otorga el orden jurídico vigente, el cual conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor público, del Estado o de los Ayuntamientos que violen estos derechos.</p> <p>El Organismo que establezca la legislatura se denominará Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.</p> <p>El presupuesto de egresos de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo no podrá ser menor al cero punto dieciocho por ciento del presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate y en ningún caso, será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior, para tal efecto, el proyecto de presupuesto de egresos de la Comisión, será remitido a la Legislatura, para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 15 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda.</p> <p>El proyecto de presupuesto de egresos deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos de la Comisión, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p><b>Artículo 94.</b> La Legislatura Estatal, mediante la ley o decreto que al efecto expida, establecerá un Organismo de Protección de los Derechos Humanos, en el marco que otorga el orden jurídico vigente, el cual conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor público, del Estado o de los Ayuntamientos que violen estos derechos.</p> <p>El Organismo que establezca la legislatura se denominará Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, <b>el cual será órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna. Esta Comisión contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado por la Legislatura o la Diputación Permanente, en su caso; durará cuatro años sin posibilidad de reelección, y no podrá durante el ejercicio de su cargo, formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. La Ley establecerá los requisitos y el procedimiento para la designación del titular del órgano interno de control. El presupuesto de egresos de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo no será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior, para tal efecto, el proyecto de presupuesto de egresos de la Comisión, será remitido a la Legislatura, para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 20 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda.</b> El proyecto de presupuesto de egresos deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos de la Comisión, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
--	---

<p><b>ARTÍCULO 95.</b> Para ser Secretario del Despacho y Director de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal se requiere:</p> <p><b>I.</b> Ser Ciudadano quintanarroense y nativo de la Entidad o <u>con residencia no menor de 5 años.</u></p> <p><b>II. a III.</b> ...</p>	<p><b>Artículo 95.</b> Para ser Secretario del Despacho y Director de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal se requiere:</p> <p><b>I.</b> Ser Ciudadano quintanarroense, y nativo de la Entidad o con residencia efectiva <b>no menor de cinco años.</b></p> <p><b>II. a III.</b> ...</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO IV</b> <b>DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 96.</b> El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General como órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.</p> <p>Para ser Fiscal General se requiere:</p> <p><b>I. VII.</b> ...</p> <p><b>A.</b> El Fiscal General del Estado durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo siguiente:</p> <p><b>a).</b> A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General del Estado, la Legislatura del Estado contará con veinte días naturales para integrar una lista de diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Legislatura, la cual se enviará al Ejecutivo Estatal.</p> <p>...</p> <p><b>b).</b> Recibida la lista a que se refiere el inciso anterior, dentro de los diez días naturales siguientes el Ejecutivo formulará la terna y la enviará a la consideración de la Legislatura del Estado.</p> <p><b>c).</b> La Legislatura del Estado, con base en la terna y previa</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO IV</b> <b>De la Fiscalía General del Estado</b></p> <p><b>Artículo 96.</b> El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General como un órgano público autónomo, <b>con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna.</b></p> <p>Para ser Fiscal General se requiere:</p> <p><b>I. VII.</b> ...</p> <p><b>A.</b> El Fiscal General del Estado durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo siguiente:</p> <p><b>a).</b> A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General del Estado, la Legislatura del Estado contará con veinte días naturales para integrar una lista de diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Legislatura, la cual se enviará al Ejecutivo Estatal.</p> <p>...</p> <p><b>Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo señalado en el primer párrafo del presente inciso, enviará libremente a la Legislatura del Estado una terna y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el Fiscal General designado podrá formar parte de la terna.</b></p> <p><b>En el caso de ausencia definitiva del Fiscal General, el Gobernador del Estado designará a un Fiscal Interino en los términos previstos por este artículo, en tanto la Legislatura inicia el procedimiento de designación del Fiscal General en los términos establecidos en el primer párrafo de este inciso.</b></p> <p><b>b).</b> Recibida la lista a que se refiere el inciso anterior, dentro de los diez días naturales siguientes el Ejecutivo formulará la terna y la enviará a la consideración de la Legislatura del Estado.</p> <p><b>c).</b> La Legislatura del Estado, con base en la terna y previa</p>

<p>comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General del Estado con el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Legislatura, dentro del plazo de diez días naturales.</p> <p>...</p> <p><b>d).</b> El Fiscal General del Estado podrá ser removido por la Legislatura del Estado, por determinación de ésta o a solicitud del Ejecutivo Estatal ante la Legislatura del Estado por las causas graves y el procedimiento que establezca la ley. La remoción deberá ser aprobada por el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Legislatura del Estado.</p> <p><b>e). al f).</b> ...</p> <p><b>B.</b> ...</p> <p><b>C.</b> La Fiscalía General del Estado administrará con autonomía su presupuesto; el Fiscal General del Estado elaborará el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Fiscalía General.</p> <p>En todo caso, el anteproyecto de presupuesto de egresos deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban sus servidores públicos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución. El Fiscal General del Estado remitirá dicho anteproyecto a la Legislatura del Estado para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado a más tardar el <u>15 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda.</u></p> <p><u>El presupuesto de egresos para la Fiscalía General del Estado no podrá ser menor al dos punto ocho por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate, y en ningún caso será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior.</u></p> <p>...</p> <p><b>D.</b> La Fiscalía General del Estado contará con una Contraloría Interna con autonomía técnica y de gestión, responsable de la fiscalización, vigilancia y control del uso, manejo y destino de los recursos, así como del desempeño de los órganos, direcciones, funcionarios y personal. El contralor interno de la Fiscalía General del Estado, durará en su</p>	<p>comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General del Estado con el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Legislatura, dentro del plazo de diez días naturales.</p> <p>...</p> <p>Si la Legislatura del Estado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará al Fiscal General de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva.</p> <p><b>d).</b> El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo del Estado por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Legislatura del Estado dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si la Legislatura no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.</p> <p><b>e). al f).</b> ...</p> <p><b>B.</b> ...</p> <p><b>C.</b> La Fiscalía General del Estado administrará con autonomía su presupuesto; el Fiscal General del Estado elaborará el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Fiscalía General.</p> <p>En todo caso, el proyecto de presupuesto de egresos deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban sus servidores públicos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución. El Fiscal General del Estado remitirá dicho proyecto a la Legislatura del Estado para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado a más tardar <b>el 20 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda.</b></p> <p>El presupuesto de egresos para la Fiscalía General del Estado no será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior.</p> <p>...</p> <p><b>D.</b> La Fiscalía General contará, al menos, con una Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción. El nombramiento del fiscal se sujetará a la remisión de una terna por parte del Fiscal General del Estado a la Legislatura o en su caso, a la Diputación Permanente, quien deberá designar de entre los candidatos</p>
--	--

<p>encargo seis años y será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Legislatura del Estado, de entre las propuestas que formulen los Grupos Parlamentarios, con base en los requisitos y en los términos que disponga la Ley, y estará sujeto al régimen de responsabilidades públicas previsto por esta Constitución para los Servidores Públicos del Estado.</p> <p>El Contralor interno de la Fiscalía General del Estado no podrá, durante su ejercicio, desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión oficial y sólo podrá recibir percepciones derivadas de la docencia, regalías, derechos de autor o publicaciones siempre que no se afecte la independencia, imparcialidad y equidad que debe regir el ejercicio de su función; también podrá ejercer cargos no remunerados en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia.</p> <p>La retribución del Contralor interno de la Fiscalía General del Estado será la que corresponda a las obligaciones y responsabilidades del desempeño del cargo.</p>	<p>al Titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, sujetándose al procedimiento que se establezca en la ley. El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción deberá cubrir los mismos requisitos para ser Fiscal General y durará en su encargo siete años sin posibilidad de ser reelecto.</p> <p><b>E.</b> La Fiscalía General contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado por la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, en su caso; durará cuatro años en su cargo sin posibilidad de reelección, y no podrá durante el ejercicio de su cargo, formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. La Ley establecerá los requisitos y el procedimiento para su designación.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>CAPÍTULO V</u></b> <b><u>DEL PODER JUDICIAL</u></b></p> <p><b>Artículo 97. ...</b> ... ... ... ...</p>	<p><b>Artículo 97. ...</b> ... ... ... ...</p>
<p><b>Artículo 98. ...</b> ... ... ... ... ... ...</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO V</b> <b>Del Poder Judicial</b></p> <p><b>Artículo 98. ...</b> ... ... ... ... ... ...</p>
<p><b>ARTÍCULO 99.</b> El Tribunal Superior de Justicia será presidido por un Magistrado que no integrará Sala, exceptuando lo establecido en el último párrafo del Artículo 98 de esta Constitución, designado por el Tribunal en Pleno en el mes de agosto de cada seis años y podrá ser reelecto por una sola vez, para un periodo de igual duración. <u>A la Sesión</u> de Pleno para designar Presidente del Tribunal Superior de</p>	<p><b>Artículo 99.</b> El Tribunal Superior de Justicia será presidido por un Magistrado que no integrará Sala, exceptuando lo establecido en el último párrafo del artículo 98 de esta Constitución, designado por el Tribunal en Pleno en el mes de agosto <b>de cada cinco años sin posibilidad de reelección.</b> A la Sesión de Pleno para designar Presidente del Tribunal Superior de Justicia, se convocará también al</p>

<p>Justicia, se convocará también al Magistrado Consejero para que, con voz y voto, pueda ejercer su derecho de elegir. Cada Sala Colegiada elegirá a su propio Presidente en la primera sesión del año.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>Magistrado Consejero para que, con voz y voto, pueda ejercer su derecho de elegir. Cada Sala Colegiada elegirá a su propio Presidente en la primera sesión del año.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p><b>ARTÍCULO 100.</b> Esta Constitución garantiza la independencia de los Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado, quienes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, actuarán sin más sujeción que a las leyes, la equidad y los principios generales del derecho.</p> <p>...</p> <p>Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su encargo un período de seis años, <u>podrán ser reelectos por una sola vez, para un período de igual duración, y solo podrán ser separados en los términos que señala el Título Octavo de esta Constitución o en su caso, como consecuencia del retiro forzoso.</u></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia se retirarán de sus cargos en forma forzosa por alguna de las siguientes causas:</p> <p><b>I. a III. ...</b></p> <p>...</p>	<p><b>Artículo 100.</b> Esta Constitución garantiza la independencia de los Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado, quienes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, actuarán sin más sujeción que a las leyes, la equidad y los principios generales del derecho.</p> <p>...</p> <p>Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su encargo un período de seis años. <b>Los Magistrados Numerarios podrán ser reelectos por una sola vez, para un período de seis años. Los Magistrados Supernumerarios, podrán ser reelectos por una sola vez, para un periodo de tres años. Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia solo podrán ser separados en los términos que señala el Título Octavo de esta Constitución o en su caso, como consecuencia del retiro forzoso en términos de esta Constitución.</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia se retirarán de sus cargos en forma forzosa por alguna de las siguientes causas:</p> <p><b>I. a III. ...</b></p> <p>...</p>
<p><b>ARTÍCULO 102.</b> Los Magistrados del Tribunal de Justicia del Estado y de adolescentes, se elegirán de la forma siguiente:</p> <p><b>I.</b> El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial, propondrá seis candidatos por cada cargo a Magistrado remitiendo los expedientes correspondientes al titular del Ejecutivo del Estado, quien de entre ellos formulará una terna por cada magistratura vacante, la cual enviará a la Legislatura del Estado para que designe a un Magistrado con la aprobación de la mayoría de los diputados que integren la legislatura.</p>	<p><b>ARTÍCULO 102.</b> Los Magistrados del Tribunal de Justicia serán designados conforme al siguiente procedimiento:</p> <p><b>I.</b> El Gobernador del Estado someterá una terna a la consideración de la Legislatura del Estado, la cual previa comparecencia de las personas propuestas, hará la designación correspondiente mediante el voto de la mayoría de sus miembros, dentro del plazo de quince días naturales;</p>



<p>II. Si dentro del término de quince días hábiles de haber sometido la terna para Magistrado a la consideración de la Legislatura del Estado, ésta nada resolviere o la rechaza, el derecho pasará al Ejecutivo del Estado, quien nombrará al Magistrado dentro de los candidatos propuestos en la terna señalada en el párrafo que antecede, y lo comunicará al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para que éste a su vez proceda a la toma de protesta de ley.</p>	<p>II. Si la Legislatura del Estado no resolviere en el término señalado, rechaza la terna o no alcanza la votación requerida, el Gobernador dentro de los quince días posteriores, propondrá una nueva terna;</p> <p>III. Si presentada la segunda terna, a la Legislatura del Estado, ésta la rechaza, se abstiene de resolver, o no reúne la votación requerida dentro del plazo señalado en la fracción I del presente artículo, se llevará a cabo la aprobación mediante el voto de cuando menos la mitad más uno de los Diputados asistentes a la sesión; de no reunirse esta votación, el Gobernador, dentro de los quince días posteriores a la celebración de la sesión, realizará la designación de entre los integrantes de la segunda terna.</p> <p>En los recesos de la Legislatura, la Diputación Permanente hará el nombramiento con carácter de provisional, en tanto aquélla se reúne y emite la aprobación definitiva.</p> <p>Las licencias de los Magistrados para separarse temporalmente de sus funciones, por un lapso menor a un mes, podrán ser conferidas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Las que excedan de este término requerirán de la autorización expresa de la Legislatura del Estado.</p>
<p><b>ARTÍCULO 105.</b> <u>Para el cumplimiento de las atribuciones señaladas en la fracción VIII del Artículo 103 de esta Constitución, el Tribunal Superior de Justicia contará con una Sala Constitucional, integrada por un Magistrado numerario, que tendrá competencia para substanciar y formular, en los términos de la Ley respectiva, los correspondientes proyectos de resolución definitiva que se someterán al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en los siguientes medios de control:</u></p> <p><b>APARTADO A. y APARTADO B. ...</b></p> <p><b>APARTADO C.</b> Conocerá y resolverá de los recursos o medios de defensa que la ley señale como de su competencia que tengan por objeto dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal o municipal:</p> <p><b>I.</b> De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública del Estado y de los Ayuntamientos dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales;</p> <p><b>II.</b> De los juicios en contra de los actos administrativos de la Administración Pública Paraestatal de Estado o los Municipios, cuando actúen con el carácter de autoridades;</p>	<p><b>ARTÍCULO 105.</b> El Tribunal Superior de Justicia contará con una Sala Constitucional, integrada por un Magistrado numerario, que tendrá competencia para:</p> <p><b>APARTADO A. y APARTADO B. ...</b></p> <p><b>APARTADO C. DEROGADO</b></p>

<p><b>III.</b> De los juicios en contra de las resoluciones definitivas dictadas por la Administración Pública del Estado o de los Ayuntamientos en las que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación, nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido o cualesquiera otras que causen agravio en materia fiscal;</p> <p><b>IV.</b> De los juicios en contra de la falta de contestación de las mismas autoridades, dentro de un término de treinta días naturales, a las promociones presentadas ante ellas por los particulares, a menos que las leyes y reglamentos fijen otros plazos o la naturaleza del asunto lo requiera;</p> <p><b>V.</b> De los juicios en contra de resoluciones de negativa ficta en materia fiscal, que se configuraran transcurridos cuatro meses a partir de la recepción por parte de las autoridades demandadas competentes de la última promoción presentada por él o los demandantes, a menos que las leyes fiscales fijen otros plazos;</p> <p><b>VI.</b> De los juicios en que se demande la resolución de afirmativa ficta, cuando lo establezcan expresamente las disposiciones legales aplicables y en los plazos en que éstas lo determinen;</p> <p><b>VII.</b> De los juicios en que se impugne la negativa de la autoridad a certificar la configuración de la afirmativa ficta, cuando así lo establezcan las leyes;</p> <p><b>VIII.</b> De los juicios que promuevan las autoridades para que sean nulificadas las resoluciones fiscales favorables a las personas físicas o morales y que causen una lesión a la Hacienda Pública del Estado o de los Ayuntamientos, y</p> <p><b>IX.</b> De las demás que expresamente se señalen en esta Constitución y la ley.</p>	
<p><b>ARTÍCULO 109.</b> El Poder Judicial del Estado administrará con autonomía su presupuesto; el Consejo de la Judicatura elaborará el anteproyecto y lo someterá a la aprobación del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. En todo caso, el Presupuesto deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban sus servidores públicos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución; el Presupuesto de Egresos para el Poder Judicial no podrá ser menor al tres por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate, y en ningún caso será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior, para tal</p>	<p><b>Artículo 109.</b> El Poder Judicial del Estado administrará con autonomía su presupuesto; el Consejo de la Judicatura elaborará el anteproyecto y lo someterá a la aprobación del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. En todo caso, el proyecto de Presupuesto deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban sus servidores públicos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución; el Presupuesto de Egresos para el Poder Judicial no será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior, para tal efecto, el proyecto de presupuesto de egresos será remitido a la Legislatura para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado,</p>

<p>efecto, el proyecto de presupuesto de egresos será remitido a la Legislatura para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 15 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia lo remitirá para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto del Estado.</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>a más tardar el 20 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia lo remitirá para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto del Estado.</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO VI</b></p> <p><b>ARTÍCULO 110. DEROGADO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO VI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo</b></p> <p><b>Artículo 110</b> El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, es un órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna.</p> <p><b>DEROGADO.</b></p> <p>El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado se integrará por cinco magistrados, uno de los cuales fungirá como su Presidente. La Presidencia será rotativa en los términos que establezca la ley.</p> <p><b>DEROGADO.</b></p> <p><b>DEROGADO.</b></p> <p>Para ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, se deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y los que determine la ley.</p> <p>Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa serán designados por la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, y durarán en su encargo ocho años, con posibilidad de ser nombrados por la Legislatura del Estado por cuatro años adicionales.</p> <p>Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado rendirán protesta ante la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente.</p> <p>El procedimiento para la designación de los Magistrados se deberá sujetar a los principios de paridad de género y máxima publicidad, y se llevará a cabo de conformidad con las siguientes disposiciones generales:</p> <p><b>a).</b> La Legislatura del Estado o en su caso, la Diputación Permanente, emitirá una convocatoria pública abierta, en la que se establecerán las</p>

	<p>bases para participar y conformar la lista de candidatos a Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Dicha convocatoria deberá ser emitida y publicada en el Periódico Oficial del Estado, dos periódicos de mayor circulación y en la página web oficial del Poder Legislativo del Estado.</p> <p><b>b).</b> Una vez recibidas las solicitudes de las personas que deseen participar y que hayan cumplido con lo estipulado en las bases de la convocatoria, la Legislatura del Estado o en su caso, la Diputación Permanente, a través de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, determinará qué aspirantes cumplieron los requisitos constitucionales y legales y los entrevistará a efecto de emitir el dictamen que corresponda.</p> <p><b>c).</b> Posteriormente, la Legislatura del Estado o en su caso, la Diputación Permanente, enviará el dictamen al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que éste conforme una bina por cada magistrado a nombrar. En ningún caso, se podrá remitir al Titular del Poder Ejecutivo el mismo número de aspirantes por bina a integrar. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá remitir su propuesta dentro de los tres días hábiles posteriores, a la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, en su caso.</p> <p><b>d).</b> La Legislatura o en su caso, la Diputación Permanente, una vez llevado a cabo lo dispuesto en el inciso anterior, designará por cada bina propuesta a un magistrado.</p> <p>La ley desarrollará de manera específica los términos del procedimiento de designación antes mencionado.</p> <p>Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado sólo podrán ser removidos de sus cargos por la Legislatura del Estado o en su caso, la Diputación Permanente, por las causas graves que señale la ley.</p> <p>Los magistrados no podrán tener, servir o desempeñar al mismo tiempo otro empleo, cargo o comisión diverso, con excepción de la docencia y los cargos honoríficos en instituciones públicas o privadas, asociaciones o sociedades científicas, literarias, culturales, educativas, deportivas, de investigación científica o de beneficencia, cuyo desempeño no perjudique las funciones o labores propias de su cargo.</p> <p>La retribución que perciban los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, será la equivalente a la de un Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.</p>
--	---

	<p>El proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal, será remitido a la Legislatura, para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 20 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda y deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban sus servidores públicos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución. El presupuesto de egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, no será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior.</p> <p>El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado por la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, en su caso; durará cuatro años en su cargo, sin posibilidad de reelección, y no podrá durante el ejercicio de su cargo, formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.</p>
<b>ARTÍCULO 111. DEROGADO</b>	<p><b>Artículo 111.</b> El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, tendrá a su cargo:</p> <p><b>I.</b> Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal y los particulares, derivados de:</p> <p><b>a).</b> Los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública del Estado o de los Ayuntamientos dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales;</p> <p><b>b).</b> Los juicios en contra de los actos administrativos de la Administración Pública Paraestatal del Estado o los Municipios, cuando actúen con el carácter de autoridades;</p> <p><b>c).</b> Los juicios en contra de las resoluciones definitivas dictadas por la Administración Pública del Estado o de los Ayuntamientos en las que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación, nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido o cualesquiera otras que causen agravio en materia fiscal;</p> <p><b>d).</b> Los juicios en contra de la falta de contestación de las mismas autoridades, dentro de un término de treinta días naturales, a las promociones presentadas ante ellas por los particulares, a menos que las leyes y reglamentos fijen otros plazos o la naturaleza del asunto lo requiera;</p> <p><b>e).</b> Los juicios en contra de resoluciones de negativa ficta en materia</p>

	<p>fiscal, que se configurarán transcurridos cuatro meses a partir de la recepción por parte de las autoridades demandadas competentes de la última promoción presentada por el o los demandantes, a menos que las leyes fiscales fijen otros plazos;</p> <p><b>f).</b> Los juicios en que se demande la resolución de afirmativa ficta, cuando lo establezcan expresamente las disposiciones legales aplicables y en los plazos en que éstas lo determinen;</p> <p><b>g).</b> Los juicios en que se impugne la negativa de la autoridad a certificar la configuración de la afirmativa ficta, cuando así lo establezcan las leyes, y</p> <p><b>h).</b> Los juicios que promuevan las autoridades para que sean nulificadas las resoluciones fiscales favorables a las personas físicas o morales y que causen una lesión a la Hacienda Pública del Estado o de los Ayuntamientos;</p> <p><b>II.</b> Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves;</p> <p><b>III.</b> Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales;</p> <p><b>IV.</b> Aprobar, modificar o dejar sin efectos la jurisprudencia y tesis relevantes que se deriven de las sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y</p> <p><b>V.</b> Las demás atribuciones que expresamente se señalen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, su ley orgánica y demás disposiciones aplicables.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITULO SEXTO                  DEL PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO                  CAPITULO II                  DE LA HACIENDA PÚBLICA</b></p> <p><b>ARTÍCULO 118.</b> Anualmente, a más tardar el 15 de noviembre, el Ejecutivo presentará a la Legislatura el proyecto de Presupuesto de Egresos, que deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos estatales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución.</p> <p><b>ARTÍCULO 122.</b> Las cuentas de los caudales públicos deberán</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO SEXTO                  DEL PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO                  CAPITULO II                  DE LA HACIENDA PÚBLICA</b></p> <p><b>Artículo 118.</b> Anualmente, a más tardar el 20 de noviembre, el Ejecutivo presentará a la Legislatura el proyecto de Presupuesto de Egresos, que deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos estatales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución.</p> <p><b>Artículo 122.</b> Las cuentas de los caudales públicos deberán glosarse</p>

<p>glosarse sin excepción por el <u>Órgano de Fiscalización Superior del Estado.</u></p> <p style="text-align: center;"><b>TITULO SÉPTIMO DE LOS MUNICIPIOS CAPITULO I DE LA DIVISIÓN POLÍTICA, ADMINISTRATIVA Y TERRITORIAL DEL ESTADO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 128.</b> La extensión, límites y cabeceras de los municipios del Estado son:  <b>I a VII. ...</b>  <b>VIII.</b> MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, con cabecera en la Ciudad de Playa del Carmen, con la siguiente extensión territorial:          CUADRO DE CONSTRUCCION          LADOS RUMBOS DISTANCIAS COORDENADAS VERT</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>EST</th> <th>P.V.</th> <th></th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>N 02°26'03" E</td> <td>806.048</td> <td>508214.170</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2300545.146 1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3</td> <td>S 89°45'12" O</td> <td>16536.808</td> <td>508248.404</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2301350.467 2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> <td>S 65°20'26" O</td> <td>12865.144</td> <td>491711.749</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2301279.263 3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>5</td> <td>S 41°43'51" O</td> <td>8435.226</td> <td>480019.869</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2295911.594 4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>6</td> <td>S 50°56'42" E</td> <td>999.101</td> <td>474405.106</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2289616.558 5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>7</td> <td>S 41°59'15" O</td> <td>4686.392</td> <td>475180.950</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2288987.059 6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>8</td> <td>S 55°01'35" E</td> <td>2024.184</td> <td>472045.900</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2285503.709 7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>9</td> <td>N 89°45'49" O</td> <td>13161.669</td> <td>473704.546</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2284343.445 8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>10</td> <td>N 89°01'27" O</td> <td>5664.766</td> <td>460542.990</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2284397.722 9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>11</td> <td>N 87°03'55" O</td> <td>939.170</td> <td>454879.045</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2284494.191 10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>12</td> <td>N 89°05'27" O</td> <td>8504.052</td> <td>453941.107</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2284542.275 11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>13</td> <td>S 01°14'16" E</td> <td>7507.943</td> <td>445438.125</td> </tr> </tbody> </table>	EST	P.V.		X	Y	1	2	N 02°26'03" E	806.048	508214.170			2300545.146 1			2	3	S 89°45'12" O	16536.808	508248.404			2301350.467 2			3	4	S 65°20'26" O	12865.144	491711.749			2301279.263 3			4	5	S 41°43'51" O	8435.226	480019.869			2295911.594 4			5	6	S 50°56'42" E	999.101	474405.106			2289616.558 5			6	7	S 41°59'15" O	4686.392	475180.950			2288987.059 6			7	8	S 55°01'35" E	2024.184	472045.900			2285503.709 7			8	9	N 89°45'49" O	13161.669	473704.546			2284343.445 8			9	10	N 89°01'27" O	5664.766	460542.990			2284397.722 9			10	11	N 87°03'55" O	939.170	454879.045			2284494.191 10			11	12	N 89°05'27" O	8504.052	453941.107			2284542.275 11			12	13	S 01°14'16" E	7507.943	445438.125	<p>sin excepción por <b>la Auditoría Superior del Estado.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TITULO SÉPTIMO DE LOS MUNICIPIOS CAPITULO I DE LA DIVISIÓN POLÍTICA, ADMINISTRATIVA Y TERRITORIAL DEL ESTADO</b></p> <p><b>Artículo 128.</b> La extensión, límites y cabeceras de los Municipios del Estado son:  <b>I. a VII. ...</b>  <b>VIII.</b> MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, con cabecera en la Ciudad de Playa del Carmen, con la siguiente extensión territorial:          LADOS RUMBOS DISTANCIAS COORDENADAS VERT EST</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>P.V.X</th> <th>Y</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>N 02°26'03" E</td> <td>806.048</td> <td>508214.170</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2300545.146 1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3</td> <td>S 89°45'12" O</td> <td>16536.808</td> <td>508248.404</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2301350.467 2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> <td>S 65°20'26" O</td> <td>12865.144</td> <td>491711.749</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2301279.263 3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>5</td> <td>S 41°43'51" O</td> <td>8435.226</td> <td>480019.869</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2295911.594 4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>6</td> <td>S 50°56'42" E</td> <td>999.101</td> <td>474405.106</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2289616.558 5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>7</td> <td>S 41°59'15" O</td> <td>4686.392</td> <td>475180.950</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2288987.059 6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>8</td> <td>S 55°01'35" E</td> <td>2024.184</td> <td>472045.900</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2285503.709 7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>9</td> <td>N 89°45'49" O</td> <td>13161.669</td> <td>473704.546</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2284343.445 8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>10</td> <td>N 89°01'27" O</td> <td>5664.766</td> <td>460542.990</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2284397.722 9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>11</td> <td>N 87°03'55" O</td> <td>939.170</td> <td>454879.045</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2284494.191 10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>12</td> <td>N 89°05'27" O</td> <td>8504.052</td> <td>453941.107</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2284542.275 11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>13</td> <td>S 01°14'16" E</td> <td>7507.943</td> <td>445438.125</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2284677.191 12</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	P.V.X	Y				1	2	N 02°26'03" E	806.048	508214.170			2300545.146 1			2	3	S 89°45'12" O	16536.808	508248.404			2301350.467 2			3	4	S 65°20'26" O	12865.144	491711.749			2301279.263 3			4	5	S 41°43'51" O	8435.226	480019.869			2295911.594 4			5	6	S 50°56'42" E	999.101	474405.106			2289616.558 5			6	7	S 41°59'15" O	4686.392	475180.950			2288987.059 6			7	8	S 55°01'35" E	2024.184	472045.900			2285503.709 7			8	9	N 89°45'49" O	13161.669	473704.546			2284343.445 8			9	10	N 89°01'27" O	5664.766	460542.990			2284397.722 9			10	11	N 87°03'55" O	939.170	454879.045			2284494.191 10			11	12	N 89°05'27" O	8504.052	453941.107			2284542.275 11			12	13	S 01°14'16" E	7507.943	445438.125			2284677.191 12		
EST	P.V.		X	Y																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	N 02°26'03" E	806.048	508214.170																																																																																																																																																																																																																																																		
		2300545.146 1																																																																																																																																																																																																																																																				
2	3	S 89°45'12" O	16536.808	508248.404																																																																																																																																																																																																																																																		
		2301350.467 2																																																																																																																																																																																																																																																				
3	4	S 65°20'26" O	12865.144	491711.749																																																																																																																																																																																																																																																		
		2301279.263 3																																																																																																																																																																																																																																																				
4	5	S 41°43'51" O	8435.226	480019.869																																																																																																																																																																																																																																																		
		2295911.594 4																																																																																																																																																																																																																																																				
5	6	S 50°56'42" E	999.101	474405.106																																																																																																																																																																																																																																																		
		2289616.558 5																																																																																																																																																																																																																																																				
6	7	S 41°59'15" O	4686.392	475180.950																																																																																																																																																																																																																																																		
		2288987.059 6																																																																																																																																																																																																																																																				
7	8	S 55°01'35" E	2024.184	472045.900																																																																																																																																																																																																																																																		
		2285503.709 7																																																																																																																																																																																																																																																				
8	9	N 89°45'49" O	13161.669	473704.546																																																																																																																																																																																																																																																		
		2284343.445 8																																																																																																																																																																																																																																																				
9	10	N 89°01'27" O	5664.766	460542.990																																																																																																																																																																																																																																																		
		2284397.722 9																																																																																																																																																																																																																																																				
10	11	N 87°03'55" O	939.170	454879.045																																																																																																																																																																																																																																																		
		2284494.191 10																																																																																																																																																																																																																																																				
11	12	N 89°05'27" O	8504.052	453941.107																																																																																																																																																																																																																																																		
		2284542.275 11																																																																																																																																																																																																																																																				
12	13	S 01°14'16" E	7507.943	445438.125																																																																																																																																																																																																																																																		
P.V.X	Y																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	N 02°26'03" E	806.048	508214.170																																																																																																																																																																																																																																																		
		2300545.146 1																																																																																																																																																																																																																																																				
2	3	S 89°45'12" O	16536.808	508248.404																																																																																																																																																																																																																																																		
		2301350.467 2																																																																																																																																																																																																																																																				
3	4	S 65°20'26" O	12865.144	491711.749																																																																																																																																																																																																																																																		
		2301279.263 3																																																																																																																																																																																																																																																				
4	5	S 41°43'51" O	8435.226	480019.869																																																																																																																																																																																																																																																		
		2295911.594 4																																																																																																																																																																																																																																																				
5	6	S 50°56'42" E	999.101	474405.106																																																																																																																																																																																																																																																		
		2289616.558 5																																																																																																																																																																																																																																																				
6	7	S 41°59'15" O	4686.392	475180.950																																																																																																																																																																																																																																																		
		2288987.059 6																																																																																																																																																																																																																																																				
7	8	S 55°01'35" E	2024.184	472045.900																																																																																																																																																																																																																																																		
		2285503.709 7																																																																																																																																																																																																																																																				
8	9	N 89°45'49" O	13161.669	473704.546																																																																																																																																																																																																																																																		
		2284343.445 8																																																																																																																																																																																																																																																				
9	10	N 89°01'27" O	5664.766	460542.990																																																																																																																																																																																																																																																		
		2284397.722 9																																																																																																																																																																																																																																																				
10	11	N 87°03'55" O	939.170	454879.045																																																																																																																																																																																																																																																		
		2284494.191 10																																																																																																																																																																																																																																																				
11	12	N 89°05'27" O	8504.052	453941.107																																																																																																																																																																																																																																																		
		2284542.275 11																																																																																																																																																																																																																																																				
12	13	S 01°14'16" E	7507.943	445438.125																																																																																																																																																																																																																																																		
		2284677.191 12																																																																																																																																																																																																																																																				

13	2284677.191	12	14	N 85°06'54" O	9572.217	445600.326	13	14	N 85°06'54" O	9572.217	445600.326
	2277171.000	13						13			
14	15	N 02°33'18" E	5847.704	436062.881			14	15	N 02°33'18" E	5847.704	436062.881
	2277986.155	14						14			
15	16	N 88°47'14" O	13964.238	436323.569			15	16	N 88°47'14" O	13964.238	436323.569
	2283828.046	15						15			
16	17	S 58°09'18" O	31460.658	422362.459			16	17	S 58°09'18" O	31460.658	422362.459
	2284123.600	16						16			
17	18	S 04°32'29" E	6038.673	395637.320			17	18	S 04°32'29" E	6038.673	395637.320
	2267524.206	17						17			
18	19	S 88°30'35" E	5552.274	396115.454			18	19	S 88°30'35" E	5552.274	396115.454
	2261504.492	18						18			
19	20	S 88°06'15" E	6532.642	401665.851			19	20	S 88°06'15" E	6532.642	401665.851
	2261360.089	19						19			
20	21	S 83°31'51" E	3453.484	408194.917			20	21	S 83°31'51" E	3453.484	408194.917
	2261143.972	20						20			
21	22	N 44°00'08" E	11448.321	411626.411			21	22	N 44°00'08" E	11448.321	411626.411
	2260754.871	21						21			
22	23	S 84°42'19" E	186.033	419579.408			22	23	S 84°42'19" E	186.033	419579.408
	2268989.790	22						22			
23	24	S 89°41'55" E	13874.745	419764.647			23	24	S 89°41'55" E	13874.745	419764.647
	2268972.623	23						23			
24	25	S 42°47'43" E	7058.483	433639.200			24	25	S 42°47'43" E	7058.483	433639.200
	2268899.645	24						24			
25	26	S 16°04'28" E	3139.733	438434.603			25	26	S 16°04'28" E	3139.733	438434.603
	2263720.235	25						25			
26	27	S 37°34'18" E	9492.914	439303.946			26	27	S 37°34'18" E	9492.914	439303.946
	2260703.255	26						26			
27	28	N 74°47'36" E	8323.167	445092.270			27	28	N 74°47'36" E	8323.167	445092.270
	2253179.245	27						27			
28	29	S 60°27'8" E	6451.204	453124.005			28	29	S 60°27'8" E	6451.204	453124.005
	2255362.441	28						28			
29	30	S 61°11'00" E	1987.165	458736.202			29	30	S 61°11'00" E	1987.165	458736.202
	2252181.045	29						29			
30	31	N 26°40'02" E	3048.404	460477.290			30	31	N 26°40'02" E	3048.404	460477.290
	2251223.217	30						30			
31	32	N 60°05'41" O	3201.067	461845.437			31	32	N 60°05'41" O	3201.067	461845.437
								31			



2253947.358	31									
32	33	N 61°06'32" O	1990.667		459070.591					
	2255543.309	32								
33	34	N 30°47'51" E	5429.599		457327.682					
	2256505.089	33								
34	35	S 63°31'41" E	2084.392		460107.661					
	2261169.021	34								
35	36	N 30°47'45" E	1302.997		461973.510					
	2260239.882	35								
36	37	S 52°45'00" E	1188.075		462640.619					
	2261359.152	36								
37	38	S 30°28'43" E	1985.835		463586.330					
	2260640.018	37								
38	39	S 30°32'19" E	1837.395		464593.578					
	2258928.588	38								
39	40	N 59°13'49" E	954.710		465527.193					
	2257346.064	39								
40	41	S 61°25'48" E	1148.025		466347.508					
	2257834.484	40								
41	42	N 28°48'39" E	249.046		467355.744					
	2257285.464	41								
42	43	S 65°14'53" E	957.671		467475.764					
	2257503.682	42								
43	Sobre la línea de costa del Mar Caribe hacia el norte hasta llegar al vértice 1. Se respeta el polígono de CALICA perteneciente al municipio de Cozumel descrito en el Artículo 128 fracción IV párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.									
<u>Se excluyen de su jurisdicción, las áreas descritas en la fracción IV párrafo tercero de este artículo.</u>										
<b>IX. a X. ...</b>										
32	33	N 61°06'32" O	1990.667		459070.591					
	2255543.309	32								
33	34	N 30°47'51" E	5429.599		457327.682					
	2256505.089	33								
34	35	S 63°31'41" E	2084.392		460107.661					
	2261169.021	34								
35	36	N 30°47'45" E	1302.997		461973.510					
	2260239.882	35								
36	37	S 52°45'00" E	1188.075		462640.619					
	2261359.152	36								
37	38	S 30°28'43" E	1985.835		463586.330					
	2260640.018	37								
38	39	S 30°32'19" E	1837.395		464593.578					
	2258928.588	38								
39	40	N 59°13'49" E	954.710		465527.193					
	2257346.064	39								
40	41	S 61°25'48" E	1148.025		466347.508					
	2257834.484	40								
41	42	N 28°48'39" E	249.046		467355.744					
	2257285.464	41								
42	43	S 65°14'53" E	957.671		467475.764					
	2257503.682	42								
43	1	Sobre la línea de costa del Mar Caribe hacia el norte hasta llegar al vértice 1. Se respeta el polígono de CALICA perteneciente al municipio de Cozumel descrito en el Artículo 128 fracción IV párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.								
<u>Se excluyen de su jurisdicción, las áreas descritas en la fracción IV párrafo cuarto de este artículo.</u>										
<b>IX. a X. ...</b>										
<b>XI. MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS</b> , con cabecera en la Ciudad de Puerto Morelos, comprendiendo la siguiente extensión territorial: MARCO DE REFERENCIA: ITRF2008, ÉPOCA 2010.0 LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS ESTÁN EXPRESADAS EN NOTACIÓN SEXAGESIMAL; LAS COORDENADAS MÉTRICAS ESTÁN CONFIGURADAS EN LA PROYECCIÓN UTM ZONA 16N. Las colindancias del municipio de Puerto Morelos, son: VÉRTICE LATITUD LONGITUD NORTE ESTE FUENTE										

1	N 21 06 04.20944	W 87 19 13.35754	2333377.879 466725.948	Vértice 1 del ejido Leona Vicario
2	N 21 06 01.39777	W 87 14 43.61308	2333277.606 474507.910	Vértice 1500 del ejido Leona Vicario
3	N 21 05 58.59052	W 87 12 53.11943	2333186.694 477695.529	Vértice 7001 del ejido Leona Vicario
4	N 21 05 53.72363	W 87 09 30.03554	2333030.204 483554.357	Vértice 7002 del ejido Leona Vicario
5	N 21 05 53.32480	W 87 09 24.89916	2333017.797 483702.531	Vértice 6 del ejido Leona Vicario
6	N 21 05 55.24823	W 87 05 49.77641	2333071.975 489908.913	Vértice del meridiano de 87 grados 05 minutos 50 segundos según la Constitución Política del Estatal
7	N 21 05 55.46181	W 87 05 25.91481	2333078.135 490597.327	Vértice 30000 del ejido Leona Vicario
8	N 21 05 55.46330	W 87 05 25.74147	2333078.178 490602.328	Vértice 2054 del ejido Leona Vicario
9	N 21 05 55.83384	W 87 04 43.20512	2333088.917 491829.512	Vértice ubicado sobre el lindero de Alfredo V. Bonfil, esquina con Leona Vicario (entre los vértices 2054 y 7 de Leona Vicario)
10	N 21 03 51.31635	W 87 04 45.10565	2329260.935 491772.778	Vértice 6 del ejido Alfredo V. Bonfil
11	N 21 03 46.62942	W 87 04 44.54400	2329116.838 491788.914	Vértice 9 del ejido Alfredo V. Bonfil
12	N 21 03 23.26215	W 87 04 44.12959	2328398.460 491800.517	Vértice 10 del ejido Alfredo V. Bonfil
13	N 21 02 54.05376	W 87 04 43.92611	2327500.514 491805.945	Vértice 2004 del ejido Leona Vicario
14	N 21 02 53.78634	W 87 04 43.94451	2327492.293 491805.410	Vértice 30001 del ejido Leona Vicario
15	N 21 02 46.71931	W 87 04 44.43070	2327275.041	

	491791.271	Vértice 47 del ejido Leona Vicario	
16	N 21 02 40.58058	W 87 04 44.53965	2327086.322
	491788.033	Vértice 48 del ejido Leona Vicario	
17	N 21 01 07.90685	W 87 04 45.11125	2324237.302
	491770.123	Vértice 2007 del ejido Leona Vicario	
18	N 20 59 45.14028	W 87 04 45.62160	2321692.860
	491754.129	Vértice 2008 del ejido Leona Vicario	
19	N 20 55 53.43679	W 87 04 47.04973	2314569.778
	491709.352	Vértice 1501 del ejido Leona Vicario	
20	N 20 55 55.04759	W 86 52 44.68449	2314621.976
	512572.867	Vértice 2 del ejido Puerto Morelos	
21	N 20 55 55.27564	W 86 52 19.46758	2314629.552
	513301.182	Vértice 10 del ejido Puerto Morelos	
22	N 20 55 55.26041	W 86 51 55.90424	2314629.641
	513981.744	Vértice 33 del ejido Puerto Morelos	
23	N 20 55 55.42964	W 86 51 34.95515	2314635.362
	514586.796	Vértice basado en brechas observadas en la imagen de satélite (Basemap de ArcGIS)	
24	N 20 56 04.77890	W 86 51 33.39183	2314922.818
	514631.696	Vértice basado en brechas observadas en la imagen de satélite (Basemap de ArcGIS)	
25	N 20 56 08.20460	W 86 50 20.91527	2315030.101
	516724.839	Vértice basado en brechas observadas en la imagen de satélite (Basemap de ArcGIS)	
26	N 20 56 07.94535	W 86 50 16.79479	2315022.251
	516843.853	Vértice ubicado en la costa según imagen de satélite (Basemap de ArcGIS)	
27	N 20 48 26.50740	W 86 55 15.41954	2300830.248
	508226.083	Vértice ubicado en la costa según imagen de satélite (Basemap de ArcGIS)	
28	N 20 48 43.43085	W 86 55 14.64594	2301350.516
	508248.189	Vértice 2 del Municipio de Solidaridad	

29	N 20 48 41.11398	W 87 04 46.74627	2301279.311
	491711.534 Vértice 3 del Municipio de Solidaridad		
30	N 20 45 46.18891	W 87 11 31.01443	2295911.641
	480019.654 Vértice 4 del Municipio de Solidaridad		
31	N 20 45 46.18660	W 87 11 31.01858	2295911.570
	480019.534 Esquina norte del ejido de Playa del Carmen, según límite descrito para el Mpio de Lázaro Cárdenas		
32	N 20 52 15.57704	W 87 11 31.02027	2307882.172
	480033.737 Vértice del cruce del meridiano de la esquina norte del ejido Playa del Carmen con Leona Vicario		
33	N 20 52 15.78112	W 87 13 01.40404	2307891.767
	477422.199 Vértice 1506 del ejido Leona Vicario		
34	N 20 52 16.29172	W 87 14 33.31591	2307911.259
	474766.520 Vértice 1507 del ejido Leona Vicario		
35	N 20 52 17.38523	W 87 16 26.64196	2307950.136
	471492.130 Vértice 1508 del ejido Leona Vicario		
36	N 20 52 19.35327	W 87 19 24.07060	2308020.160
	466365.621 Vértice 14 del ejido Leona Vicario		
37	N 20 53 01.65641	W 87 19 23.91187	2309320.649
	466372.822 Vértice 15 del ejido Leona Vicario		
38	N 20 56 08.06542	W 87 19 21.25703	2315051.168
	466461.040 Vértice 16 del ejido Leona Vicario		
39	N 20 56 26.08260	W 87 19 20.99496	2315605.047
	466469.723 Vértice 50 del ejido Leona Vicario		
40	N 20 56 26.60693	W 87 19 20.98733	2315621.166
	466469.976 Vértice 51 del ejido Leona Vicario		
41	N 20 56 27.62239	W 87 19 20.97253	2315652.383
	466470.466 Vértice 52 del ejido Leona Vicario		
42	N 20 56 28.05269	W 87 19 20.96629	2315665.611
	466470.673 Vértice 17 del ejido Leona Vicario		
43	N 20 56 40.04043	W 87 19 20.74058	2316034.132
	466477.933 Vértice 2127 del ejido Leona Vicario		

	<p>44 N 20 56 40.28837 W 87 19 20.73591 2316041.754 466478.083 Vértice 2113 ejido Leona Vicario</p> <p>45 N 20 56 48.07094 W 87 19 20.58939 2316281.002 2316281.002 Vértice 18 del ejido Leona Vicario</p> <p>46 N 20 57 13.46025 W 87 19 20.21608 2317061.514 2317061.514 Vértice 19 del ejido Leona Vicario</p> <p>47 N 20 57 23.42220 W 87 19 20.18779 2317367.769 2317367.769 Vértice 20 del ejido Leona Vicario</p> <p>48 N 20 57 33.68122 W 87 19 20.16717 2317683.157 2317683.157 Vértice 21 del ejido Leona Vicario</p> <p>49 N 20 57 34.59268 W 87 19 20.15469 2317711.177 466498.227 Vértice 53 del ejido Leona Vicario</p> <p>50 N 20 59 38.28635 W 87 19 18.45979 2321513.757 466554.816 Vértice 22 del ejido Leona Vicario</p> <p>51 N 20 59 43.94351 W 87 19 18.18691 2321687.658 466563.045 Vértice 23 del ejido Leona Vicario</p> <p>52 N 20 59 47.48400 W 87 19 17.93873 2321796.488 466570.429 Vértice 24 del ejido Leona Vicario</p> <p>53 N 20 59 49.31568 W 87 19 18.18165 2321852.813 466563.529 Vértice 25 del ejido Leona Vicario</p> <p>54 N 20 59 52.59338 W 87 19 18.37666 2321953.590 466558.102 Vértice 26 del ejido Leona Vicario</p> <p>55 N 20 59 58.38090 W 87 19 18.05989 2322131.496 466567.605 Vértice 49 del ejido Leona Vicario</p> <p>56 N 21 00 00.44797 W 87 19 18.13502 2322195.048 466565.563 Vértice 1509 ejido Leona Vicario</p> <p>Al norte, los municipios de Lázaro Cárdenas y Benito Juárez; al este, el municipio de Benito Juárez y el Mar Caribe; al sur, los municipios de Solidaridad y Lázaro Cárdenas y al oeste, el municipio de Lázaro Cárdenas.</p>
<p><b>ARTÍCULO 135.</b> Los miembros del Ayuntamiento se elegirán por sufragio universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos</p>	<p><b>Artículo 135.</b> Los miembros del Ayuntamiento se elegirán por sufragio universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos quintanarroenses</p>

<p>quintanarroenses en ejercicio de sus derechos, en jornada electoral que tendrá lugar el primer domingo de junio del año que corresponda, mediante el sistema electoral mixto de mayoría relativa y de representación proporcional conforme a las bases siguientes:</p> <p><b>I. a II. ...</b></p> <p><b>III.</b> Los cargos de Regidores electos según el principio de representación proporcional, se asignarán a los <u>Partidos Políticos</u> que hayan obtenido por los menos el tres por ciento del total de votos válidos emitidos en los Municipios donde hubiere participado, excepto el Partido Político que haya obtenido mayoría de votos.</p> <p><b>IV.</b> La Ley establecerá los términos y requisitos que deberán satisfacer los ciudadanos que pretendan ser registrados como candidatos independientes a los Ayuntamientos.</p>	<p>en ejercicio de sus derechos, en jornada electoral que tendrá lugar el primer domingo de junio del año que corresponda, mediante el sistema electoral mixto de mayoría relativa y de representación proporcional conforme a las bases siguientes:</p> <p><b>I. a II. ...</b></p> <p><b>III.</b> Los cargos de Regidores electos según el principio de representación proporcional, se asignarán a los Partidos Políticos <b>y Candidatos independientes</b> que hayan obtenido por los menos el tres por ciento del total de votos válidos emitidos en los Municipios donde hubiere participado, excepto el Partido Político <b>o la planilla de candidatos independientes que haya obtenido la mayoría de votos.</b></p> <p><b>IV. DEROGADA.</b></p>
<p><b>ARTÍCULO 136.</b> Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere:</p> <p><b>I. a III. ...</b></p> <p><b>IV.</b> No ser Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, ni Consejero, Secretario General o Director del Instituto Electoral del Estado, a menos que se separe dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral.</p> <p><b>V. ...</b></p> <p>...</p>	<p><b>Artículo 136.</b> Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere:</p> <p><b>I. a III. ...</b></p> <p><b>IV.</b> No ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, ni del Tribunal Electoral del Estado, ni Consejero, <b>Secretario Ejecutivo</b> o Director del Instituto Electoral del Estado, a menos que se separe dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral.</p> <p><b>V. ...</b></p> <p>...</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO V DE LA HACIENDA PÚBLICA.</b></p> <p><b>ARTÍCULO 153.</b> Los Municipios administrarán libremente su hacienda conforme a las siguientes bases:</p> <p><b>I. a V. ...</b></p> <p><b>VI.</b> La Deuda Pública Municipal se sujetará a lo que disponga la Ley e invariablemente requerirá de la aprobación de la Legislatura del Estado;</p> <p><b>VII. ...</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO V De la Hacienda Pública</b></p> <p><b>Artículo 153.</b> Los Municipios administrarán libremente su Hacienda conforme a las siguientes bases:</p> <p><b>I. a V. ...</b></p> <p><b>VI.</b> La Deuda Pública Municipal se sujetará <b>a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a lo que disponga la Ley correspondiente</b> e invariablemente requerirá de la aprobación de la Legislatura del Estado;</p> <p><b>VII. ...</b></p> <p><b>VIII.</b> Autorizar los convenios para adherirse al mecanismo de contratación de Deuda Estatal Garantizada, así como suscribir los convenios previa la autorización de la Legislatura, de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.</p>

<p style="text-align: center;"><b>TITULO OCTAVO CAPÍTULO ÚNICO DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS</b></p> <p><b>ARTÍCULO 160.</b> Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial, funcionarios y empleados del gobierno del Estado y de los ayuntamientos y en general, a toda persona que desempeñe un cargo de cualquier naturaleza en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ayuntamientos, organismos descentralizados de la administración pública estatal o municipal, empresas de participación estatal o municipal y fideicomisos públicos del estado o de los municipios, así como a los funcionarios y empleados del Instituto Electoral de Quintana Roo, del Tribunal Electoral de Quintana Roo, del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.</p> <p>La Legislatura del Estado expedirá una Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las demás disposiciones que sancionen conductas que entrañen responsabilidad de los servidores públicos conforme a las siguientes prevenciones:</p> <p><b>I.</b> Se impondrá mediante juicio político: a la o el Gobernador del Estado, a las y los Diputados de la Legislatura, las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, las y los Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, las y los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial, a la o al Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a las o los comisionados del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, a las o los Consejeros Electorales del Consejo General, así como a la o el Secretario General del Instituto Electoral de Quintana Roo, las y los Secretarios y Subsecretarios del Despacho, a la o el Fiscal General del Estado, las y los Directores Generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados del Estado o de los Municipios, empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos del Estado o de los</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO OCTAVO CAPÍTULO UNICO De la Responsabilidad de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con las Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción</b></p> <p><b>Artículo 160.</b> Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial del Estado, y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo del Estado, el Poder Judicial o en la Administración Pública Estatal o Municipal, entidades paraestatales y paramunicipales y órganos públicos autónomos a los que esta Constitución les otorga dicha calidad, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, y por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.</p> <p>Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:</p> <p><b>I.</b> Se impondrá mediante juicio político:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>a).</b> A la o el Gobernador del Estado;</li><li><b>b).</b> A las y los Diputados de la Legislatura del Estado;</li><li><b>c).</b> A las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia;</li><li><b>d).</b> A las y los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;</li><li><b>e).</b> A las y los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial;</li><li><b>f).</b> A la o el Titular de la Auditoría Superior del Estado;</li><li><b>g).</b> A las o los comisionados del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo;</li><li><b>h).</b> A las o los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo;</li><li><b>i).</b> A las o los Secretarios Generales del Instituto Electoral de Quintana</li></ul>
---	--

<p>Municipios y miembros de los Ayuntamientos; sanciones consistentes en destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, cuando incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y aportando los elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Legislatura, de las conductas a que se refiere esta fracción.</p> <p>Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y aportando los elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Legislatura, de las conductas a que se refiere esta fracción.</p> <p>La Ley correspondiente establecerá el procedimiento del Juicio Político seguido ante la Legislatura, previniendo la forma de oír al acusado en su defensa.</p> <p>No procede el Juicio Político por la mera expresión de ideas.</p> <p>La Legislatura del Estado conocerá con este procedimiento de los casos que le remita la Cámara de Senadores en los términos del Artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.</p> <p><b>II. a III. ...</b></p> <p><b>IV.</b> Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, <u>mismas que serán determinadas en las</u></p>	<p>Roo y del Tribunal Electoral de Quintana Roo, respectivamente;</p> <p><b>j).</b> A la o el Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado;</p> <p><b>k).</b> A las y los Secretarios y Subsecretarios del Despacho;</p> <p><b>l).</b> A la o el Fiscal General del Estado;</p> <p><b>m).</b> A las y los Directores Generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados del Estado o de los Municipios, empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos del Estado o de los Municipios;</p> <p><b>n).</b> A las y los miembros de los Ayuntamientos, y</p> <p><b>o).</b> A los titulares de los órganos internos de control de los órganos públicos autónomos reconocidos en esta Constitución.</p> <p>Las sanciones a los sujetos antes mencionados serán las consistentes en destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, cuando incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, en los términos que establezca la ley.</p> <p>El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.</p> <p>Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y aportando los elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Legislatura, de las conductas a que se refiere esta fracción.</p> <p>La Ley correspondiente establecerá el procedimiento del Juicio Político seguido ante la Legislatura, previniendo la forma de oír al acusado en su defensa.</p> <p>No procede el Juicio Político por la mera expresión de ideas.</p> <p>La Legislatura del Estado conocerá con este procedimiento de los casos que le remita la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.</p> <p><b>II. a III. ...</b></p> <p><b>IV.</b> Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. <b>Dichas sanciones consistirán en</b></p>
--	---



<p><u>Leyes, reglamentos o decretos de las Dependencias, Instituciones u Organismos que los creen o regulen su funcionamiento, previniendo el procedimiento la autoridad encargada de aplicarla y la forma de oír al responsable en su defensa.</u> <u>Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente.</u> <u>No podrá imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.</u></p> <p>V. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, determinará las obligaciones de éstos, las sanciones aplicables por los</p>	<p>amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La investigación y sanción de dichos actos u omisiones se realizará en apego a las leyes aplicables en materia de Responsabilidades Administrativas.</p> <p>Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.</p> <p>Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en la ley respectiva, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.</p> <p>La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.</p> <p>La clasificación de las faltas administrativas que realicen los órganos internos de control podrá ser impugnada en términos que establezca la Ley.</p> <p>Los entes públicos estatales y municipales, así como los órganos públicos autónomos, contarán con órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales y municipales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución.</p> <p>V. El Tribunal de Justicia Administrativa impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con</p>
---	---

<p>actos u omisiones indebidos que señala este Título, los procedimientos a seguir y las autoridades encargadas de su aplicación.</p> <p><b>VI. ...</b> <b>VII.</b> En los juicios de orden civil no existe fuero ni inmunidad de ningún servidor público. <b>VIII.</b> Las declaraciones y resoluciones que se dicten a quienes se sujeten a Juicio Político son inatacables.</p>	<p>independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos estatales y municipales.</p> <p>Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos estatales y municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.</p> <p>En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios; en términos que establezcan las leyes.</p> <p>La Auditoría Superior del Estado y la Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de conformidad con lo previsto en el artículo 26, Apartado C, fracción VII en su primer párrafo de esta Constitución;</p> <p><b>VI. ...</b> <b>VII.</b> Derogado.</p> <p><b>VIII.</b> Las declaraciones y resoluciones que se dicten a quienes se sujeten a Juicio Político son inatacables. <b>Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán</b></p>
--	---

	<p>obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.</p> <p>La responsabilidad por los delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el primer párrafo de este artículo.</p> <p>Para el caso de faltas administrativas no graves, las facultades de la Secretaría de la Gestión Pública o de los órganos internos de control para imponer las sanciones, prescribirán en tres años, contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado.</p> <p>Cuando se trate de faltas administrativas graves o faltas de particulares, el plazo de prescripción será de siete años, contados en los mismos términos del párrafo anterior.</p> <p>La prescripción se interrumpirá en los términos que establezca la legislación aplicable</p> <p>Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrá imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.</p>
<p><b>ARTÍCULO 161.</b> La responsabilidad oficial sólo podrá exigirse durante el tiempo que el funcionario o empleado desempeñe el encargo, y hasta un año después.</p>	<p><b>Artículo 161.</b> El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de los órdenes de gobierno estatal y municipal competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, en apego a las bases, mecanismos y políticas del Sistema Nacional Anticorrupción. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:</p> <p><b>I.</b> El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo responsable del control interno, el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el Presidente del organismo garante que establece el artículo 21 de esta Constitución, así como por un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana;</p> <p><b>II.</b> El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse</p>

	<p>por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados conforme al siguiente procedimiento:</p> <p><b>a).</b> La Legislatura del Estado constituirá una Comisión de Selección integrada por cinco mexicanos, residentes del Estado, por un periodo de tres años, de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1.</b> Convocará a las instituciones de educación superior y de investigación del Estado, para proponer candidatos a fin de integrar la Comisión de selección, para lo cual deberán enviar los documentos que acrediten el perfil solicitado en la convocatoria, en un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a tres miembros basándose en los elementos decisivos que se hayan plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción.</li><li><b>2.</b> Convocará a organizaciones de la sociedad civil que tengan experiencia comprobada en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, para seleccionar a dos miembros, en los mismos términos del inciso anterior.</li><li><b>3.</b> El cargo de miembro de la Comisión de selección será honorario. Quienes funjan como miembros no podrán ser designados como integrantes del Comité de Participación Ciudadana por un periodo de seis años contados a partir de la disolución de la Comisión de selección.</li></ol> <p><b>b).</b> La Comisión de selección deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta pública en el Estado, dirigida a toda la sociedad, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo. Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana Estatal y deberá hacerlos públicos; en donde deberá considerar al menos las siguientes características:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1.</b> El método de registro y evaluación de los aspirantes;</li><li><b>2.</b> Hacer pública la lista de las y los aspirantes;</li><li><b>3.</b> Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en versiones públicas;</li><li><b>4.</b> Hacer público el cronograma de audiencias;</li><li><b>5.</b> Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a investigadores, académicos y a organizaciones de la</li></ol>
--	--

	<p>sociedad civil, especialistas en la materia, y</p> <p><b>6.</b> El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se determine, y que se tomará, en sesión pública, por el voto de la mayoría de sus miembros.</p> <p>En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del nuevo integrante no podrá exceder el límite de noventa días y el ciudadano que resulte electo desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante a ocupar.</p> <p><b>III.</b> Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:</p> <p><b>a).</b> El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales de otras entidades federativas y con el sistema nacional;</p> <p><b>b).</b> El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;</p> <p><b>c).</b> La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno estatal y municipal;</p> <p><b>d).</b> El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno estatal y municipal en materia de fiscalización y control de los recursos públicos, y</p> <p><b>e).</b> La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades estatales y municipales, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.</p>
<p><b>ARTÍCULO 162.</b> El Gobernador del Estado, durante el período de su encargo, sólo podrá ser acusado por los delitos de traición a la patria y delitos graves del orden común.</p>	<p><b>Artículo 162. Derogado.</b></p>
<p><b>ARTÍCULO 163.</b> Siempre que se trate de alguno de los servidores</p>	<p><b>Artículo 163. Derogado.</b></p>

<p>públicos especificados en la fracción XVII, del Artículo 75, y el delito fuere de orden común, la Legislatura, erigida en Gran Jurado, declarará si ha lugar o no a proceder contra el acusado. En caso afirmativo, por esa sola declaración quedará el acusado separado de su encargo y sujeto a la autoridad judicial correspondiente.</p>	
---	--

<b>COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ</b>	
<b>TEXTO ANTERIOR</b>	<b>TEXTO VIGENTE</b>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO CUARTO DE LA POBLACIÓN CAPITULO II De los Ciudadanos Potosinos</b></p> <p><b>ARTÍCULO 25.</b> Son obligaciones de los ciudadanos potosinos:  <b>I.</b> Desempeñar los cargos de elección popular para los que sean electos;  <b>II. a IV. ...</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO CUARTO DE LA POBLACIÓN CAPITULO II De los Ciudadanos Potosinos</b></p> <p><b>ARTÍCULO 25.</b> Son obligaciones de los ciudadanos potosinos:  <b>I. Desempeñar los cargos de elección popular para los que sean electos que, en ningún caso, serán gratuitos;</b>  <b>II. a IV. ...</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO QUINTO DE LA PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS ELECTORALES, EN EL REFERENDUM Y EN EL PLEBISCITO CAPÍTULO I Del Sufragio</b></p> <p><b>ARTÍCULO 30.</b> El sufragio es el derecho que otorga la ley a los ciudadanos para participar en la vida política del Estado y constituye un deber cívico y legal que se ejerce a través del voto para expresar la voluntad soberana del individuo. El voto deberá ser libre, universal, secreto y directo. Las autoridades garantizarán la libertad y secreto del mismo.                  Corresponde a los ciudadanos, partidos políticos y al Consejo Estatal Electoral, la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, así como velar porque los mismos se lleven a cabo bajo los principios de, certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad, objetividad y equidad.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO QUINTO DE LA PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS ELECTORALES, EN EL REFERENDUM Y EN EL PLEBISCITO CAPÍTULO I Del Sufragio</b></p> <p><b>ARTÍCULO 30.</b> El sufragio es el derecho que otorga la ley a los ciudadanos para participar en la vida política del Estado y constituye un deber cívico y legal que se ejerce a través del voto para expresar la voluntad soberana del individuo. El voto deberá ser libre, universal, secreto y directo. Las autoridades garantizarán la libertad y secreto del mismo.  <b>Los ciudadanos potosinos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en la elección de Gobernador del Estado, en los términos que disponga la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.</b>  <b>Corresponde a los ciudadanos potosinos partidos políticos y a las autoridades electorales locales y federales, administrativas y jurisdiccionales, cada una en ámbito de su competencia, la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, así como velar</b></p>

<p>La ley determinará los organismos que tendrán a su cargo esta función y la debida corresponsabilidad de los partidos políticos y de los ciudadanos; además, establecerá los medios de impugnación para garantizar que los actos de los organismos electorales se ajusten a lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que de ella emanen.</p>	<p>porque los mismos se lleven a cabo bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independenciam, máxima publicidad, objetividad y equidad.</p> <p>La ley determinará los organismos que tendrán a su cargo esta función y la debida corresponsabilidad de los partidos políticos y de los ciudadanos; además, establecerá los medios de impugnación para garantizar que los actos de los organismos electorales se ajusten a lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que de ella emanen.</p> <p>Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, y hasta la conclusión de la jornada electoral, deberá suspenderse toda difusión de propaganda gubernamental en los medios de comunicación social, tanto de los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los ayuntamientos y sus delegaciones. Se exceptúa de lo anterior la información que difundan las autoridades electorales, las relativas a servicios de salud y el ámbito educativo, así como a la protección civil en casos de emergencia.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO II</b> <b>De los Partidos Políticos</b></p> <p><b>ARTICULO 36.</b> Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, y hacer posible el acceso de sus candidatos, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo de los electores, al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas postulados por aquellos; así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a diputados locales, y ayuntamientos.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO II</b> <b>De los Partidos Políticos</b></p> <p><b>ARTICULO 36.</b> Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, y hacer posible el acceso de sus candidatos, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo de los electores, al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas postulados por aquellos; así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, <b>de conformidad con los procedimientos que establezcan sus estatutos para la postulación de candidatos.</b></p> <p>Los partidos políticos que participen en los procesos electorales locales para integración del Congreso del Estado, deberán garantizar la paridad entre los géneros en la totalidad de sus candidaturas, por ambos principios, debiendo sus fórmulas estar compuestas por candidatos del mismo género.</p> <p>En los procesos electorales municipales que se rigen por el principio de mayoría relativa, los partidos políticos promoverán la postulación de una proporción paritaria de candidatos de ambos géneros.</p> <p>En el caso de las candidaturas a los Ayuntamientos postulados por cada partido político se registrá por el principio de paridad horizontal. Las planillas deberán integrarse por candidatos propietarios y suplentes del mismo género.</p>

	<p style="color: red;">Las listas de representación proporcional en cargos de elección municipal, se conformarán y asignarán bajo el principio de paridad de género en propietarios y suplentes.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO SEXTO                  DEL PODER LEGISLATIVO                  CAPITULO II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>De la Elección e Instalación del Congreso</b></p> <p><b>ARTÍCULO 44.</b> La ley reglamentará la forma y procedimientos relativos a la elección de Diputados de mayoría y a la asignación de Diputados de representación proporcional.</p> <p>El máximo de Diputados por ambos principios, que pueda alcanzar un partido político, <u>será igual al número de distritos uninominales del Estado.</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO SEXTO                  DEL PODER LEGISLATIVO                  CAPITULO II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>De la Elección e Instalación del Congreso</b></p> <p><b>ARTÍCULO 44.</b> La ley reglamentará la forma y procedimientos relativos a la elección de Diputados de mayoría y a la asignación de Diputados de representación proporcional, <span style="color: red;">con el propósito de garantizar que un partido político no pueda contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que no exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida, así como de que el porcentaje de representación de un partido político no sea menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.</span></p> <p>El máximo de Diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido político <span style="color: red;">es de quince; esta base no aplica al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga quince o más curules.</span></p>
<p><b>ARTÍCULO 47.</b> No pueden ser Diputados:</p> <p><b>I.</b> ...</p> <p><b>II.</b> Los secretarios, subsecretarios o Procurador General del Estado, ni los titulares de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración; o a los que ésta Constitución otorga autonomía;</p> <p><b>III. a VI.</b> ...</p> <p><b>VII.</b> Los Magistrados y Jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no podrán ser electos en la Entidad de sus respectivas jurisdicciones.</p>	<p><b>ARTÍCULO 47.</b> No pueden ser Diputados:</p> <p><b>I.</b> ...</p> <p><b>II.</b> Los secretarios, subsecretarios <span style="color: red;">El Fiscal General del Estado</span>, ni los titulares de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración; o a los que ésta Constitución otorga autonomía;</p> <p><b>III. a VI.</b> ...</p> <p><b>VII.</b> Los Magistrados y Jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no podrán ser electos en la Entidad de sus respectivas jurisdicciones;</p> <p><b>VIII.</b> <span style="color: red;">No ser titular de alguno de los organismos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal;</span></p> <p><b>IX.</b> <span style="color: red;">No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado o juez federal, ni Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral del Consejo General, local o distritales del Instituto</span></p>



<p><u>Quienes se encuentren en los supuestos que señalan las fracciones, II, III, IV, y VII de este artículo, estarán impedidos a menos que se separen definitivamente de sus funciones noventa días antes del día de la elección. Los ministros de culto deberán hacerlo con la anticipación y en la forma establecida en la Ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Federal.</u></p>	<p><b>Nacional</b>                  Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo tres años antes del día de la elección;  <b>X.</b> No ser servidor público de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en el ámbito federal, con atribuciones de mando, y en ejercicio de autoridad;  <b>XI.</b> No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;  <b>XII.</b> No ser Senador, Diputado Federal o miembro de un Ayuntamiento, salvo que se separe del cargo noventa días antes de la elección, y  <b>XIII.</b> No ser funcionario municipal con atribuciones de mando.                  Quienes se encuentren en los supuestos que señalan las fracciones, II, III, IV, VII, VIII, X, y XIII de este artículo, estarán impedidos a menos que se separen definitivamente de sus funciones noventa días antes del día de la elección. Los ministros de culto deberán hacerlo con la anticipación y en la forma establecida en la Ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Federal.</p>
<p><b>ARTICULO 48.</b> Los Diputados podrán ser electos hasta por cuatro períodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.</p>	<p><b>ARTICULO 48.</b> Los Diputados podrán ser electos hasta por cuatro períodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.                  Los diputados que pretendan reelegirse deberán separarse de su cargo noventa días antes de la elección solicitando licencia respectiva, pudiendo reincorporarse el día posterior de la elección. Los diputados electos como candidatos independientes sólo podrán ser reelectos bajo esta misma figura.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO IV</b>  <b>De las Atribuciones del Congreso</b></p> <p><b>ARTÍCULO 57.</b> Son atribuciones del Congreso:  <b>I a XXXIV. ...</b>  <b>XXXV.</b> Calificar las renunciaciones de los magistrados de los tribunales del Estado y de los consejeros de la Judicatura, así como conocer y resolver las solicitudes de destitución de los mismos, en los términos de la presente Constitución;</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO IV</b>  <b>De las Atribuciones del Congreso</b></p> <p><b>ARTÍCULO 57.</b> Son atribuciones del Congreso:  <b>I a XXXIV. ...</b>  <b>XXXV.</b> Elegir, en los términos de esta Constitución, al Fiscal General del Estado; al Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción ; y al Fiscal Especializado en Delitos Electorales; así como a oponerse con el voto de por lo menos las dos terceras partes de sus miembros, a la remoción de estos fiscales;</p>

<p>XXXVI a XXXIX ...                  XL. Instaurar los juicios políticos y en su caso aplicar las sanciones a que se refiere el Artículo 128 de esta Constitución, y hacer la declaración de procedencia de las acusaciones penales contra servidores públicos;                  XLI a XLVIII ...</p>	<p>XXXVI a XXXIX ...                  XL. Instaurar los juicios políticos y, en su caso, aplicar las sanciones a que se refiere el Artículo 128 de esta Constitución;                   XLI a XLVIII ...</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITULO SÉPTIMO                  DEL PODER EJECUTIVO                  CAPITULO I                  Del Gobernador del Estado</b></p> <p><b>ARTÍCULO 73.</b> Para ser Gobernador del Estado se requiere:                  I a IV ...                  V. No ser secretarios o subsecretarios de Estado, Procurador General de Justicia del Estado, Presidente Municipal, a menos de que se separe de su encargo ciento veinte días antes del día de la elección;                  I. a VIII. ...</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO SÉPTIMO                  DEL PODER EJECUTIVO                  CAPITULO I                  Del Gobernador del Estado</b></p> <p><b>ARTÍCULO 73.</b> Para ser Gobernador del Estado se requiere:                  I a IV ...                  V. No ser secretarios o subsecretarios de Estado, <b>Fiscal General del Estado, o</b> Presidente Municipal, a menos de que se separe de su encargo ciento veinte días antes del día de la elección;                  I. a VIII. ...</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO II                  De las Atribuciones del Gobernador</b></p> <p><b>ARTÍCULO 80.</b> Son atribuciones del Gobernador del Estado las siguientes:                  I a IV ...                  V. Presentar ante el Congreso del Estado, durante la segunda quincena de septiembre de cada año, un informe por escrito en el que manifieste el estado que guarda la administración pública y comparecer posteriormente, cuando así lo acuerde con el Poder Legislativo, a fin de responder a las observaciones que los Diputados le presenten sobre el particular;                   VI a XI ...                  XII. Designar, con la ratificación de cuando menos la mayoría de los integrantes del Congreso del Estado al Procurador General de Justicia y removerlo libremente;                   XIII. Proponer al Congreso, a los candidatos a ocupar los cargos de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; y designar a un integrante del Consejo de la</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO II                  De las Atribuciones del Gobernador</b></p> <p><b>ARTÍCULO 80.</b> Son atribuciones del Gobernador del Estado las siguientes:                  I a IV ...                  V. Presentar ante el Congreso del Estado, durante la segunda quincena de septiembre de cada año; <b>excepto el último año del ejercicio legal, durante la primera quincena del mes de agosto del año que se trate, un informe por escrito en el que manifieste el estado que guarda la administración pública y, comparecer posteriormente, cuando así lo acuerde con el Poder Legislativo, a fin de responder a las observaciones que los diputados le presenten sobre el particular;</b>                  VI a XI ...                  XII. Proponer al Congreso a los candidatos a ocupar los cargos de, <b>Fiscal General del Estado; Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción ; y Fiscal Especializado en Delitos Electorales; así como removerlos por causas graves, y hacerlo del conocimiento del Congreso del Estado para los efectos de la fracción XXXVII del artículo 57 de esta Constitución;</b>                  XIII. Proponer al Congreso, a los candidatos a ocupar los cargos de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; y designar a un integrante del Consejo de la</p>

Judicatura del Estado, de conformidad con la presente Constitución; <b>XIV a XIX ...</b>	Judicatura del Estado, de conformidad con la presente Constitución; <b>XIV a XIX ...</b>
<b>ARTÍCULO 81.</b> El Gobernador del Estado está impedido para: <b>I a IV ...</b> V. Entorpecer, dificultar u obstaculizar las elecciones populares determinadas por la Constitución o por las leyes respectivas; y  <b>VI ...</b>	<b>ARTÍCULO 81.</b> El Gobernador del Estado está impedido para: <b>I a IV ...</b> V. Entorpecer, dificultar, obstaculizar o intervenir, por sí mismo o por medio de servidor público a su mando, en las elecciones populares determinadas por la Constitución o por las leyes respectivas, para que recaigan en determinada persona de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, y  <b>VI ...</b>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO IV</b>  <b>Del Ministerio Público</b></p> <b>ARTICULO 85.</b> La ley organizará al Ministerio Público del Estado, cuyos funcionarios con responsabilidad de mando serán nombrados y separados libremente por el titular del Ejecutivo del Estado, reservándose la designación, adscripción, ratificación y remoción de los demás funcionarios a las tareas de un Consejo del Ministerio Público del Estado, que cuidará el servicio profesional de carrera. Además de las obligaciones, deberes y principios que vinculan a los funcionarios del Ministerio Público en el sistema penal acusatorio, para asegurar el debido proceso en el Estado de San Luis Potosí, éstos se regirán por igual con los principios de mínima intervención, oportunidad, presunción de inocencia y proporcionalidad. El Ministerio Público estará presidido por un Procurador General de Justicia, quien deberá llenar los requisitos exigidos para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Será designado por el Gobernador, con la ratificación de la mayoría de los miembros del Congreso del Estado, y podrá ser removido libremente por aquél. Los requisitos para ser subprocurador de Justicia, agente del Ministerio Público, o agente de la Policía Ministerial, serán establecidos por la ley orgánica respectiva. No podrán desempeñar dichos cargos quienes hayan sido cesados en el desempeño de iguales o similares empleos en ésta o cualquier otra Entidad federativa, o en la administración pública federal.	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO IV</b>  <b>Del Ministerio Público</b></p> <b>ARTICULO 85. DEROGADO</b>
<b>ARTICULO 86.</b> Corresponde al Ministerio Público y a las policías la investigación de los delitos; y al primero, cuando proceda, el ejercicio de la acción penal. Las policías actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público	<b>ARTICULO 86. DEROGADO</b>

<p>en la investigación de los delitos, y tendrán las atribuciones y estructura que la ley establezca.                  El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley, la que señalará los casos en que serán objeto de revisión judicial.                  Los particulares, en su caso, podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial en los casos previstos en la ley.                  Cuando se trate de materia penal, el Procurador General de Justicia intervendrá personalmente en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, En los casos en que deba intervenir el Ministerio Público, podrá hacerlo por sí o por medio de sus agentes.                  El Procurador General de Justicia y sus agentes se someterán estrictamente a las disposiciones de la ley; y serán responsables de toda falta, omisión, o violación en que incurran con motivo de sus funciones.                  En la investigación de los delitos que practique el Ministerio Público y la policía a su mando, los demás cuerpos de seguridad pública del Estado y sus municipios deberán prestarle su colaboración.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO OCTAVO                  DEL PODER JUDICIAL                  CAPÍTULO II                  Del Supremo Tribunal de Justicia</b></p> <p><b>ARTÍCULO 99.-</b> Para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia se requiere:  <b>I a V ...</b>  <b>VI.</b> No haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho o su equivalente, Procurador General de Justicia, Diputado local, o Presidente Municipal en el año inmediato anterior al día de su nombramiento.                  ...                  ...</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO OCTAVO                  DEL PODER JUDICIAL                  CAPÍTULO II                  Del Supremo Tribunal de Justicia</b></p> <p><b>ARTÍCULO 99.-</b> Para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia se requiere:  <b>I a V ...</b>  <b>VI.</b> No haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho o su equivalente, <b>Fiscal General del Estado</b>, Diputado local, o Presidente Municipal en el año inmediato anterior al día de su nombramiento.                  ...                  ...</p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO DÉCIMO                  DEL MUNICIPIO LIBRE                  CAPÍTULO I                  De los Municipios del Estado</b></p> <p><b>ARTÍCULO 114.</b> El Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado y</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO DÉCIMO                  DEL MUNICIPIO LIBRE                  CAPÍTULO I                  De los Municipios del Estado</b></p> <p><b>ARTÍCULO 114.</b> El Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado y</p>

<p>tendrá a su cargo la administración y gobierno de los intereses municipales, conforme a las bases siguientes:  <b>I.</b> Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. La competencia del gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva, y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Los ayuntamientos se compondrán por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine, electos popularmente por votación directa, quienes podrán reelegirse por un período adicional por el mismo cargo. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Las personas que, por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñen la función propia de sus cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, podrán ser reelectas para el período inmediato siguiente.                  En el caso de los funcionarios suplentes, podrán ser electos para el período inmediato siguiente sin ser considerado como reelección, siempre que no hayan ejercido funciones u ostentado el carácter de propietarios en el Ayuntamiento respectivo.  <b>II a XI ...</b></p>	<p>tendrá a su cargo la administración y gobierno de los intereses municipales, conforme a las bases siguientes:  <b>I.</b> Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. La competencia del gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva, y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Los ayuntamientos se compondrán por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine, electos popularmente por votación directa, quienes podrán reelegirse por un período adicional por el mismo cargo. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. <b>Cuando se trate de Presidentes Municipales y los integrantes de la planilla electos como candidatos independientes, sólo podrán ser reelectos con esta misma calidad. Las personas que, por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñen la función propia de sus cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, podrán ser reelectas para el período inmediato siguiente.</b>  <b>II a XI ...</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO II</b>  <b>De los Requisitos para ser Miembro del Ayuntamiento, Concejo Municipal o Delegado</b></p> <p><b>ARTÍCULO 117.</b> Para ser miembro del Ayuntamiento, Concejo o Delegado Municipal, se requiere:  <b>I a II ...</b>  <b>III.</b> No tener una multa firme pendiente de pago, o que encontrándose sub júdice no esté garantizada en los términos de las disposiciones legales aplicables, que haya sido impuesta por responsabilidad con motivo de los cargos públicos que hubiere desempeñado en la administración federal, estatal o municipal; y no haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos dolosos que hayan ameritado pena de prisión.                  Los Síndicos reunirán además los requisitos previstos en la ley orgánica <u>respectiva</u>.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO II</b>  <b>De los Requisitos para ser Miembro del Ayuntamiento, Concejo Municipal o Delegado</b></p> <p><b>ARTÍCULO 117.</b> Para ser miembro del Ayuntamiento, Concejo o Delegado Municipal, se requiere:  <b>I a II ...</b>  <b>III.</b> No tener una multa firme pendiente de pago, o que encontrándose sub júdice no esté garantizada en los términos de las disposiciones legales aplicables, que haya sido impuesta por responsabilidad con motivo de los cargos públicos que hubiere desempeñado en la administración federal, estatal o municipal; y no haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos dolosos que hayan ameritado pena de prisión.                  Los Síndicos reunirán además los requisitos previstos en la ley orgánica respectiva, <b>y</b>  <b>IV. Cuando se trate de Presidentes Municipales y los integrantes de la</b></p>

	<p>planilla electos como candidatos independientes, sólo podrán ser reelectos con esta misma calidad. Las personas que, por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñen la función propia de sus cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, podrán ser reelectas para el período inmediato siguiente.</p>
<p><b>ARTÍCULO 118.-</b> Están impedidos para ser miembros propietarios o suplentes de los ayuntamientos:</p> <p><b>I ...</b></p> <p><b>II.</b> Los secretarios, subsecretarios o Procurador General del Estado; los titulares de organismos descentralizados o desconcentrados de la administración; o a los que esta Constitución otorga autonomía;</p> <p><b>III a V ...</b></p> <p><b>VI.</b> Los Magistrados y Jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.</p> <p>Estarán impedidos los ciudadanos a que se refieren las fracciones, II, y III, de este artículo, a menos que se separen de sus funciones noventa días antes del día de la elección. Los ministros de culto deberán hacerlo con la anticipación y en la forma establecida en la Ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Federal.</p> <p>Los síndicos reunirán además los requisitos previstos en la ley orgánica respectiva.</p>	<p><b>ARTÍCULO 118.</b> Están impedidos para ser miembros propietarios o suplentes de los ayuntamientos:</p> <p><b>I ...</b></p> <p><b>II.</b> Los secretarios, subsecretarios o <b>el Fiscal General del Estado</b>; los titulares de organismos descentralizados o desconcentrados de la administración; o a los que esta Constitución otorga autonomía;</p> <p><b>III a V ...</b></p> <p><b>VI.</b> Los Magistrados y Jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.</p> <p><b>VII.</b> No ser titular de alguno de los organismos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga autonomía, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal;</p> <p><b>VIII.</b> No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado o juez federal, ni Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral del Consejo General, local o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo tres años antes del día de la elección;</p> <p><b>IX.</b> No ser servidor público de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en el ámbito federal, con atribuciones de mando, y en ejercicio de autoridad;</p> <p><b>X.</b> No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate, y</p> <p><b>XI.</b> No ser Senador, Diputado Federal o Diputado Local.</p> <p>Estarán impedidos los ciudadanos a que se refieren las fracciones, I, II, III, VII, IX, y XI de este artículo, a menos que se separen de sus funciones noventa días antes del día de la elección. Los ministros de culto deberán hacerlo con la anticipación y en la forma establecida en la</p>

	<p>Ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Federal. Los síndicos reunirán además los requisitos previstos en la ley orgánica respectiva.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA JUSTICIA PENAL CAPÍTULO ÚNICO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 122 BIS.</b> En San Luis Potosí todas las personas tienen derecho a la justicia penal, y el Estado deberá garantizar el acceso efectivo a ella.</p> <p>El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado, como órgano público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; así como de autonomía presupuestal, técnica y de gestión.</p> <p>La Fiscalía General del Estado estará a cargo del Fiscal General del Estado, que durará en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y deberá cumplir los mismos requisitos que esta Constitución exige para ser Magistrado.</p> <p>Corresponde al Gobernador del Estado proponer al Congreso, al triple de personas para ocupar el cargo del Fiscal General del Estado, dentro de los cuales la Legislatura hará la elección en el término de treinta días y por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente. Si vencido ese plazo no se hubiera hecho la elección, el titular del Ejecutivo procederá a hacer el nombramiento de entre las propuestas.</p> <p>En caso de que el Congreso rechace la propuesta, el Gobernador del Estado presentará una nueva terna en los términos del párrafo anterior; si esta segunda propuesta fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de la misma, designe el Gobernador del Estado.</p> <p>El Fiscal General sólo podrá ser removido por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, por las causas graves que establezca la ley, la remoción podrá ser objetada por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado, dentro de un plazo de diez días hábiles posteriores a que el Ejecutivo haga de su conocimiento la remoción, en cuyo caso, el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso del Estado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción y podrá el Ejecutivo iniciar el procedimiento de la elección del nuevo titular de la Fiscalía en términos de los párrafos anteriores.</p> <p>Para efecto de lo dispuesto en los párrafos anteriores de este artículo,</p>

	<p>si el Congreso del Estado se encontrare en receso, la Diputación Permanente lo convocará de inmediato a periodo extraordinario.                  Las ausencias temporales del Fiscal General se suplirán en los términos que determine la ley.</p>
	<p><b>ARTÍCULO 122 TER.</b> Corresponde al Ministerio Público la investigación y la persecución ante los tribunales, de todos los delitos del fuero común; para ello contará con facultades para solicitar las medidas cautelares contra los imputados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.</p> <p>La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en delitos relacionados con hechos de corrupción, y en materia de delitos electorales; los titulares de las mismas serán electos y removidos en los mismos términos que para el caso del Fiscal General del Estado; los titulares de las demás fiscalías, así como los servidores públicos de esa institución, serán designados y removidos por el Fiscal General en los términos que la ley determine.</p> <p>La ley establecerá un servicio profesional de carrera que reglamente las bases para el ingreso, permanencia, ascensos, formación, profesionalización, y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, regido por los principios de, legalidad, objetividad, eficiencia, mérito, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos</p> <p>El Fiscal General presentará anualmente a los poderes, Legislativo; y Ejecutivo, un informe escrito de sus actividades y, en su caso, comparecerá personalmente al Congreso del Estado a informar sobre su gestión.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO DECIMO PRIMERO                  DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA                  CAPÍTULO ÚNICO</b>                  Del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa  <b>ARTÍCULO 123. ...</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO DECIMO SEGUNDO                  DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA</b>                  Del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa  <b>ARTÍCULO 123. ...</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO DECIMOSEGUNDO                  DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS                  Y                  PATRIMONIAL DEL ESTADO, Y DEL JUICIO POLITICO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO DECIMOTERCERO                  DE LAS RESPONSABILIDADES, JUICIO POLITICO, Y                  SISTEMA ANTICORRUPCION                  CAPÍTULO ÚNICO</b></p>



<b>CAPÍTULO ÚNICO</b>	
<p><b>ARTÍCULO 124. ...</b>                  El Gobernador del Estado, mientras permanezca en el desempeño de su encargo, sólo podrá ser acusado por violaciones graves a la Constitución Política del Estado; por oponerse a la libertad electoral; por la comisión de delitos graves del orden común y por el manejo indebido de fondos y recursos públicos.</p> <p>...</p>	<p><b>ARTÍCULO 124. ...</b>                  El Gobernador del Estado, mientras permanezca en el desempeño de su encargo, podrá ser acusado por actos u omisiones que perjudiquen el buen despacho, o los intereses públicos fundamentales, ello mediante juicio político, e imponérsele las sanciones previstas por esta Constitución.</p> <p>...</p>
<p><b>ARTÍCULO 126.</b> Podrán ser sujetos de Juicio Político en el Estado, los diputados, magistrados, consejeros de la Judicatura, jueces de Primera Instancia, secretarios de Despacho, Procurador General de Justicia, subsecretarios, directores generales o sus equivalentes de las dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales, titulares de los organismos constitucionales autónomos, así como los presidentes municipales, regidores y síndicos.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p><b>ARTÍCULO 126.</b> Podrán ser sujetos de Juicio Político en el Estado, los diputados, magistrados, consejeros de la Judicatura, jueces de Primera Instancia, secretarios de Despacho, <b>Fiscal General del Estado, fiscales especializados, en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, y en delitos electorales,</b> subsecretarios, directores generales o sus equivalentes de las dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales, titulares de los organismos constitucionales autónomos, así como los presidentes municipales, regidores y síndicos.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p><b>ARTÍCULO 127.</b> Para proceder penalmente contra los secretarios de despacho, Procurador General de Justicia, diputados, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, presidentes municipales, Auditor Superior del Estado, y titulares de los organismos constitucionales autónomos, por la presunta comisión de delitos durante el tiempo y sólo en el ejercicio de su encargo, el Congreso del Estado declarará, por el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus miembros, si ha o no lugar a proceder contra el presunto responsable; si la resolución del Congreso fuese negativa, se suspenderá todo tramite ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga sobre los fundamentos de la imputación.</p> <p>Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.</p> <p>En los casos a que se refiere el artículo 111, párrafo quinto, de la</p>	<p><b>ARTÍCULO 127.</b> En los casos a que se refiere el artículo 111, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibidas las constancias por el Congreso del Estado, y previa la integración de cualquier otro elemento pertinente, se remitirán a las autoridades federales competentes para que actúen conforme a la ley. <b>Tratándose del Gobernador del Estado, se procederá en los términos del artículo 128 de esta Constitución.</b></p> <p><b>Si la sentencia fuese absolutoria, será rehabilitado en los términos que dispone la ley.</b></p>

<p>Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibidas las constancias por el Congreso y previa la integración de cualquier otro elemento pertinente, se remitirán a las autoridades federales competentes para que actúen conforme a la ley. Tratándose del Gobernador del Estado, se procederá en los términos del artículo 128 de esta Constitución.</p> <p>Las declaraciones y resoluciones del Congreso no son recurribles. El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado, será separarlo de su encargo. Si la sentencia fuese absolutoria, será rehabilitado en los términos que disponga la ley. En las demandas del orden civil no se requerirá declaración de procedencia.</p>	
<p><b>ARTÍCULO 128.</b> Por lo que se refiere al Gobernador del Estado, en los supuestos de los artículos 110, párrafo segundo y 111, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibidas las constancias por el Congreso, <u>procederá como sigue:</u></p> <p>I. En el primer caso, se impondrán las sanciones correspondientes aprobadas por el voto de cuando menos las dos terceras partes del Congreso del Estado, aplicando para ello las disposiciones conducentes de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y</p> <p>II. En el segundo caso, por el voto de cuando menos las dos terceras partes del total de los integrantes del Congreso del Estado, se determinará si ha lugar o no a formación de causa; en caso negativo, se suspenderá todo trámite ulterior, sin que ello sea obstáculo para que la acusación siga su curso al concluir el ejercicio del encargo. En caso positivo, será separado de su encargo y puesto a disposición de las autoridades competentes.</p>	<p><b>ARTÍCULO 128.</b> Por lo que se refiere al Gobernador del Estado, en los supuestos de los artículos 110, párrafo segundo y 111, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibidas las constancias por el Congreso <b>Local, procederá a imponer las sanciones correspondientes aprobadas por el voto de cuando menos las dos terceras partes del Congreso del Estado, aplicando las disposiciones conducentes de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</b></p> <p><b>I. (DEROGADA, P.O. 30 DE OCTUBRE DE 2017)</b></p> <p><b>II. (DEROGADA, P.O. 30 DE OCTUBRE DE 2017)</b></p> <p><b>(DEROGADO, P.O. 30 DE OCTUBRE DE 2017)</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO DECIMO TERCERO                  PREVENCIÓNES GENERALES                  CAPÍTULO ÚNICO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 131. ...</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO DECIMO CUARTO                  PREVENCIÓNES GENERALES                  CAPÍTULO ÚNICO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 131. ...</b></p>

<p><b>TÍTULO DECIMO CUARTO</b>  <b>DE LAS REFORMAS E INVOLABILIDAD A LA CONSTITUCION</b>  <b>CAPÍTULO I</b>  <b>De las Reformas</b></p> <p><b>ARTÍCULO 137. ...</b></p>	<p><b>TÍTULO DECIMO QUINTO</b>  <b>DE LAS REFORMAS E INVOLABILIDAD A LA CONSTITUCION</b>  <b>CAPÍTULO I</b>  <b>De las Reformas</b></p> <p><b>ARTÍCULO 137. ...</b></p>
---	---

COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE SINALOA	
TEXTO ANTERIOR	TEXTO VIGENTE
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO I</b>  <b>DISPOSICIONES PRELIMINARES</b></p> <p><b>Art. 3º</b> El Estado de Sinaloa es libre y soberano en su régimen interior, sin más limitaciones que las expresamente establecidas por el Pacto Federal. Sus tareas fundamentales son promover el bienestar individual y colectivo de los sinaloenses, el desarrollo económico sustentable, la seguridad y la paz social, la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social y la equidad en las relaciones sociales.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO I</b>  <b>DISPOSICIONES PRELIMINARES</b></p> <p><b>Art. 3º</b> El Estado de Sinaloa es libre y soberano en su régimen interior, sin más limitaciones que las expresamente establecidas por el Pacto Federal. Sus tareas fundamentales son promover el bienestar individual y colectivo de los sinaloenses, el desarrollo económico sustentable <b>considerando la mejora regulatoria como una estrategia para alcanzar dicho propósito, también el procurar la seguridad y la paz social, la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, y la equidad en las relaciones sociales.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO I Bis</b>  <b>DE LOS DERECHOS HUMANOS</b></p> <p><b>Art. 4º Bis B.</b> El Estado tomará las medidas correspondientes a efecto de dar cumplimiento a los siguientes derechos y deberes:  <b>I a IX. ...</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO I Bis</b>  <b>DE LOS DERECHOS HUMANOS</b></p> <p><b>Art. 4º Bis B.</b> El Estado tomará las medidas correspondientes a efecto de dar cumplimiento a los siguientes derechos y deberes:  <b>I a IX. ...</b>  <b>X.</b> Todas las personas tienen derecho al libre acceso al internet y a las tecnologías de la información y comunicación.                      El Estado y los Municipios deberán garantizar el acceso a internet gratuito inalámbrico de banda ancha, en los edificios e instalaciones de los diversos poderes del Estado y de las dependencias y entidades de su administración, así como en los lugares públicos que para el efecto se determinen.  <b>XI.</b> Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.</p>



<p>como la información de los resultados, ejerciendo funciones en las materias siguientes:</p> <p><b>I. a XII. ...</b>          ...          ...          ...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p><b>cargo la preparación, desarrollo, vigilancia de los procesos electorales y, en su caso, la calificación de los mismos, así como la información de los resultados, ejerciendo funciones en las materias siguientes:</b></p> <p><b>I. a XII. ...</b>          ...          ...          ...</p> <p>Contará con un órgano interno de control, con autonomía técnica y de gestión, que tendrá a su cargo la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto.</p> <p>El titular del órgano interno de control del Instituto será designado por el pleno del Congreso del Estado con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas de educación superior, en la forma y términos que determine la Ley. Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la Presidencia del Instituto y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior del Estado.</p> <p>La Ley establecerá los requisitos que deberá reunir el titular del órgano interno de control del Instituto.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO IV          CAPÍTULO II          DEL PODER LEGISLATIVO          SECCIÓN I          DE LA ELECCIÓN E INSTALACIÓN DEL CONGRESO</b></p> <p><b>Art. 24.</b> El Congreso del Estado se integrará con 40 Diputados, 24 de ellos electos por el sistema de mayoría relativa en distritos electorales uninominales y 16 Diputados electos de acuerdo con el principio de representación proporcional, mediante el sistema de lista de candidatos votada en circunscripción plurinominal.</p> <p>La demarcación territorial de los distritos electorales uninominales</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO IV          CAPÍTULO II          DEL PODER LEGISLATIVO          SECCIÓN I          DE LA ELECCIÓN E INSTALACIÓN DEL CONGRESO</b></p> <p><b>Art. 24.</b> El Congreso del Estado se integrará con <b>30 Diputados, 18 de ellos electos por el sistema de mayoría relativa en distritos electorales uninominales y 12 Diputados electos de acuerdo con el principio de representación proporcional</b>, mediante el sistema de lista de candidatos votada en circunscripción plurinominal.</p> <p>La demarcación territorial de los distritos electorales uninominales</p>

<p>locales será realizada por el Instituto Nacional Electoral con base en el último censo general de población y los criterios generales determinados por su Consejo General.</p> <p>Para la elección de los <u>16 Diputados</u> según el principio de representación proporcional y el sistema de listas de candidatos, el territorio del Estado se podrá dividir de una a tres circunscripciones plurinominales. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial <u>de estas circunscripciones</u>.</p> <p>Para que un partido político obtenga el registro de sus listas para la elección de diputados de representación proporcional, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados de mayoría relativa en por lo menos <u>diez distritos uninominales, de ellos, en su caso, mínimamente tres deberán estar en cada circunscripción plurinominal</u>.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>En ningún caso un partido político podrá contar con más de <u>24 diputados por ambos principios</u>.</p> <p>...</p>	<p>locales será realizada por el Instituto Nacional Electoral con base en el último censo general de población y los criterios generales determinados por su Consejo General.</p> <p>Para la elección de los <b>12 Diputados</b> según el principio de representación proporcional y el sistema de listas de candidatos, el territorio del Estado se conformará en una circunscripción plurinominal. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial <b>de esta circunscripción</b>.</p> <p>Para que un partido político obtenga el registro de sus listas para la elección de diputados de representación proporcional, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados de mayoría relativa en por lo menos <b>10 distritos uninominales</b>.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>En ningún caso un partido político podrá contar con más de <b>18 diputados</b> por ambos principios.</p> <p>...</p>
<p><b>Art. 25.</b> Para ser Diputado se requiere:</p> <p><b>I.</b> Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el Estado, en este último caso, no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección y en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos.</p> <p><b>II.</b> Ser nativo del Distrito Electoral en el que se elija o vecindado con residencia efectiva en él cuando menos seis meses antes de la fecha de la elección.</p> <p>Para poder figurar como candidato en la lista de la circunscripción electoral plurinominal, se requerirá, en su caso, ser originario de alguno de los municipios que comprenda la circunscripción en la cual se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre.</p> <p><b>III.</b> Sea (sic ¿ser?) mayor de 21 años en la fecha de la elección;</p> <p><b>IV.</b> No podrán ser electos Diputados Propietarios o Suplentes: El</p>	<p><b>Art. 25.</b> Para ser Diputado se requiere:</p> <p><b>I.</b> Ser sinaloense por nacimiento o por vecindad, en términos del artículo 8º de esta Constitución, y en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos.</p> <p><b>II.</b> Para contender por el sistema de mayoría relativa, es necesario contar con una residencia efectiva en el distrito electoral por el que se postule, de más de seis meses anterior a la fecha de la celebración de la jornada electoral.          Cuando un municipio sea cabecera de dos o más distritos electorales, para ser elegible en cualquiera de ellos, la residencia a que se refiere el párrafo anterior bastará con que se tenga en el municipio de que se trate.</p> <p>Para poder figurar como candidato en la lista de circunscripción electoral plurinominal, se requerirá <b>ser sinaloense por nacimiento, o por vecindad con una residencia efectiva en el Estado de más de dos años anterior a la fecha de la celebración de la jornada electoral</b>.</p> <p><b>III.</b> Ser mayor de 21 años en la fecha de la elección.</p> <p><b>IV.</b> No podrán ser electos diputados propietarios o suplentes: el</p>

<p>Gobernador del Estado, los Secretarios y Subsecretarios y Titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública Estatal o Paraestatal (sic ¿,?) <u>los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y el Procurador General de Justicia; los Jueces de Primera Instancia, los Recaudadores de Rentas y los Presidentes Municipales, en los Distritos Electorales en donde ejerzan sus funciones; los diputados y senadores al Congreso de la Unión, que se encontraren en ejercicio; las personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios y los Ministros de cualquier culto. Los ciudadanos antes referidos, con excepción de los Ministros de los cultos, podrán ser electos, siempre que se separen de sus cargos cuando menos 90 días antes de la elección.</u></p>	<p>Gobernador del Estado; los secretarios y subsecretarios y titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública Estatal o Paraestatal; <b>los titulares de los órganos constitucionales autónomos; los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; los jueces de Primera Instancia; los recaudadores de rentas y los presidentes municipales, en los distritos electorales en donde ejerzan sus funciones; los diputados y senadores al Congreso de la Unión que se encontraren en ejercicio; las personas que tengan o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, Estado o municipios y los ministros de cualquier culto. Los ciudadanos antes referidos, con excepción de los ministros de cultos, podrán ser electos, siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa días antes de la elección.</b></p>
<p><b>Art. 37. ...</b>          ...          Asimismo, en este período revisará y aprobará en su caso, el primer semestre de la cuenta pública de los municipios que presenten los Ayuntamientos, correspondientes a los meses de enero a junio.          En el segundo período ordinario de sesiones revisará y aprobará en su caso, el segundo semestre de la cuenta pública del Gobierno del Estado, correspondiente a los meses de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año inmediato anterior, que deberá ser presentada al Congreso, a más tardar quince días antes de su apertura.</p> <p><u>También en este período, revisará y aprobará en su caso, el segundo semestre de la cuenta pública de los municipios, que presenten los Ayuntamientos, correspondiente a los meses de julio a diciembre, del ejercicio fiscal del año inmediato anterior.</u>  <u>El Congreso del Estado revisará, aprobará, hará observaciones o suspenderá y, de proceder, expedirá el finiquito respectivo, por cada semestre del ejercicio fiscal en los casos de las cuentas públicas del estado y de los Municipios.</u>  <u>Cuando se decrete la suspensión de la aprobación de una cuenta pública, ésta deberá ser nuevamente discutida en el siguiente período ordinario de sesiones, previa a la revisión y aprobación en su caso, de la que corresponda al mismo.</u>          En caso de que en la revisión de una cuenta pública o de la información</p>	<p><b>Art. 37. ...</b>          ...  <b>Derogado.</b></p> <p>En el segundo período ordinario de sesiones <b>recibirá la cuenta pública del Gobierno del Estado y la de los Municipios, mismas que deberán de ser enviadas a la legislatura del Estado, a más tardar el 30 de abril, sólo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del Gobernador, suficientemente justificada a juicio de la Legislatura, conforme a lo establecido en la fracción XXII del artículo 43 de esta Constitución.</b>  <b>Derogado.</b></p> <p><b>Derogado.</b></p> <p>En caso de que en la revisión de una cuenta pública o de la</p>

<p>sobre aplicación de recursos de cualquier ente fiscalizable, se encuentren irregularidades o hechos que hagan presumir la existencia de delitos o que impliquen responsabilidades de cualquier tipo, la Auditoría Superior del Estado presentará las denuncias o querellas que correspondan ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, o ante los órganos de control interno de los Poderes del Estado o de los municipios, según el caso.</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>información sobre aplicación de recursos de cualquier ente fiscalizable, se encuentren irregularidades o hechos que hagan presumir la existencia de delitos o que impliquen responsabilidades de cualquier tipo, la Auditoría Superior del Estado deberá presentar las denuncias o querellas que correspondan ante la <b>Fiscalía General del Estado</b>. De igual forma las presentará ante los órganos de control interno de los Poderes del Estado, de los municipios o de los órganos constitucionales autónomos, según el caso.</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p><b>Art. 40.</b> El quince de noviembre de cada año, el Ejecutivo del Estado enviará al Congreso del Estado un informe por escrito sobre la situación que guarda la Administración Pública.                  El Congreso del Estado realizará el análisis del informe y podrá solicitar al titular del Ejecutivo del Estado ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios, <u>al Procurador General del Estado, a los directores de las entidades paraestatales quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley Orgánica del Congreso regulará el ejercicio de esta facultad.</u></p>	<p><b>Art. 40.</b> El quince de noviembre de cada año, el Ejecutivo del Estado enviará al Congreso del Estado un informe por escrito sobre la situación que guarda la Administración Pública.                  El Congreso del Estado realizará el análisis del informe y podrá solicitar al titular del Ejecutivo del Estado ampliar la información mediante preguntas por escrito y citar a los secretarios <b>de Despacho y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley Orgánica del Congreso regulará el ejercicio de esta facultad.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN II</b>  <b>DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO</b></p> <p><b>Art. 43.</b> Son facultades exclusivas del Congreso del Estado, las siguientes:  <b>I a XIII.</b> ...  <b>XIV.</b> Elegir a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mediante los procedimientos que esta Constitución y las leyes respectivas señalen;  <b>XV a XVII</b> ...  <b>XVIII.</b> Recibir protesta constitucional a los Diputados (sic ¿,?) al Gobernador y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y a los servidores públicos de su nombramiento que conforme a las leyes no deban otorgar la protesta de otro modo.  <b>XIX.</b> Conceder licencia y admitir las renunciaciones a los Diputados y demás servidores públicos de su propia dependencia, al Gobernador y a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN II</b>  <b>DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO</b></p> <p><b>Art. 43.</b> Son facultades exclusivas del Congreso del Estado, las siguientes:  <b>I a XIII.</b> ...  <b>XIV.</b> Elegir a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, mediante los procedimientos que esta Constitución y las leyes respectivas señalen.  <b>XV a XVII</b> ...  <b>XVIII.</b> Recibir protesta constitucional a los Diputados, al Gobernador, a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, así como a los servidores públicos que esta Constitución y sus propias leyes lo determinen.  <b>XIX.</b> Conceder licencia y admitir las renunciaciones a los Diputados y demás servidores públicos de su propia dependencia, al Gobernador y a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, así como a los</p>



<p><b>XIX Bis. ...</b></p> <p><b>XX. y XXI ...</b></p> <p><b>XXII.</b> Revisar y fiscalizar, por medio de la Auditoría Superior del Estado, las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Municipios y la aplicación de los recursos públicos estatales o municipales, asignados a los organismos descentralizados de participación estatal o municipal, en los términos previstos por las leyes, y verificar los resultados de su</p>	<p>servidores públicos que esta Constitución y sus propias leyes lo determinen.</p> <p><b>XIX Bis. ...</b></p> <p><b>XIX Bis A.</b> Conocer y resolver sobre las solicitudes de destitución de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa así como de los servidores públicos que esta Constitución y sus propias leyes lo determinen.</p> <p><b>XX. y XXI ...</b></p> <p><b>XXI Bis.</b> En materia de contratos de colaboración público privada:</p> <p><b>a).</b> Establecer, mediante la expedición de una ley, las bases conforme a las cuales el Estado, los organismos descentralizados estatales, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos que formen parte de la Administración Pública Paraestatal; así como los Municipios, los organismos descentralizados municipales, las empresas de participación municipal mayoritaria y los fideicomisos públicos que formen parte de la Administración Pública Paramunicipal, podrán celebrar contratos de colaboración público privada; y,</p> <p><b>b).</b> Autorizar al Estado, a los Municipios, a los organismos descentralizados estatales o municipales, a las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria y a los fideicomisos públicos que formen parte de la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal; conforme a las bases que se establezcan en la ley y en los casos que impliquen obligaciones que constituyan deuda pública, mediante el voto de la mayoría de sus miembros, la celebración de contratos de colaboración público privada, la afectación como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, de los ingresos que les correspondan o, en su caso, de los derechos al cobro de los mismos, respecto al cumplimiento de todo tipo de obligaciones que deriven de dichos contratos o de cualesquier otros actos jurídicos relacionados con los mismos; y para la celebración de las demás modalidades y actos jurídicos que, en términos de lo previsto por la misma, la requieran;</p> <p><b>XXII.</b> Revisar y fiscalizar la Cuenta Pública del año anterior, discutiendo, aprobando o rechazando, en su caso, un dictamen del Informe General del Resultado, así como de los Informes Individuales de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales, elaborados por la Auditoría Superior del Estado, con el objeto de someterlo a votación del Pleno,</p>
--	--

<p>gestión financiera, la utilización del crédito y el cumplimiento de las metas fijadas en los programas y proyectos de presupuestos de egresos.</p> <p>La revisión y fiscalización no se limitará a precisar en la documentación comprobatoria de sus movimientos contables, que sus ingresos y egresos sean los autorizados, sino que se extenderá a la formulación de las observaciones que procedan y a expedir los finiquitos o, en su caso, a dictar las medidas tendientes a fincar las responsabilidades a quienes les sean imputables, y a efectuarles visitas de inspección cuando menos una vez al año.</p> <p>Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas, o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos, o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. El mismo procedimiento se seguirá cuando se revisen las cuentas públicas de organismos autónomos, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal y municipal; así como las demás personas de derecho público de carácter estatal y municipal;</p>	<p>evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de los Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.</p> <p>La revisión de la Cuenta Pública se realizará a través de la Auditoría Superior del Estado. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.</p> <p>La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada al Congreso del Estado a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del Gobernador, suficientemente justificada a juicio de la Legislatura, la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la Auditoría Superior del Estado contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.</p> <p>El Congreso del Estado concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior, a que se refiere la Sección V, del Capítulo II, del Título IV de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicha Sección.</p> <p>El Congreso del Estado evaluará el desempeño de la Auditoría Superior del Estado y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización.</p> <p><b>XXII Bis.</b> Revisar, discutir, aprobar o rechazar, en su caso, un</p>
--	--

<p><b>XXII Bis.</b> Revisar y fiscalizar el informe que rinda la Auditoría Superior del Estado sobre la aplicación de los recursos públicos estatales o municipales, asignados a los organismos descentralizados o de participación estatal o municipal, en los términos previstos en las leyes;</p> <p><b>XXII Bis A. y XXII Bis B ...</b> <b>XXIII.</b> Autorizar al Estado, a los Municipios, a los organismos descentralizados, a las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria y a los fideicomisos públicos que formen parte de la Administración Pública Paraestatal o Paramunicipal, para la obtención de empréstitos o créditos, el otorgamiento de garantías o avales y demás modalidades y actos jurídicos que correspondan conforme a lo establecido por el artículo 84 de esta Constitución. Asimismo, autorizar por mayoría calificada al Ejecutivo Estatal y a los Ayuntamientos para constituirse en avalista de organismos sociales legalmente instituidos que tengan por objeto obtener créditos para la realización de obras de interés social, cuando existan garantías de la recuperación del financiamiento.</p> <p><b>XXIV a XXXIV ...</b> <b>XXXV.</b> Todas las demás facultades que las leyes le otorguen.</p>	<p>dictamen del informe que rinda la Auditoría Superior del Estado sobre la aplicación de los recursos públicos estatales o municipales, asignados a los organismos descentralizados o de participación estatal o municipal, en los términos previstos en las leyes. La aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley;</p> <p><b>XXII Bis A. y XXII Bis B ...</b> <b>XXIII.</b> Autorizar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes los montos máximos para en las mejores condiciones del mercado contratar empréstitos y obligaciones por parte del Estado, organismos autónomos, los Municipios así como los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, empresas de participación estatal o municipal, y fideicomisos públicos estatales y municipales, previo análisis de su destino, capacidad de pago y en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago, de conformidad con las bases de las leyes establecidas de la materia.</p> <p><b>XXIII Bis.</b> Ejercer las acciones necesarias para el debido cumplimiento de las disposiciones en materia de disciplina financiera, equilibrio presupuestario y responsabilidad hacendaria, en términos de la legislación aplicable.</p> <p><b>XXIII Bis A.</b> Autorizar al Ejecutivo del Estado la celebración de convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para adherirse al mecanismo de contratación de deuda estatal garantizada.</p> <p><b>XXIV a XXXIV ...</b> <b>XXXV.</b> Elegir al Fiscal General del Estado y objetar su remoción, en los términos que precisa esta Constitución, así como tomarle la protesta de ley.</p> <p><b>XXXVI.</b> Ratificar el nombramiento del Secretario encargado del control interno que haya nombrado el Ejecutivo del Estado.</p> <p><b>XXXVII.</b> Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos públicos.</p> <p><b>XXXVIII.</b> Expedir la Ley que instituya el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.</p> <p><b>XXXIX.</b> Expedir la Ley que establece la estructura orgánica del</p>
--	---

	<p>Tribunal de Justicia Administrativa, y las formalidades que establecen sus facultades, procedimientos, formalidades jurisdiccionales y los medios de impugnación contra sus resoluciones, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones.</p> <p><b>XL.</b> Expedir la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación.</p> <p><b>XLI.</b> Las demás que las leyes le otorguen.</p>
<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN V</b> <b>DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO</b></p> <p><b>Art. 54.</b> La Auditoría Superior del Estado hará la revisión y fiscalización de todas las cuentas públicas que el Gobierno del Estado y los Municipios presenten a la Cámara; establecerá normas, procedimientos, métodos y sistemas de información uniformes y obligatorios para la presentación de las cuentas públicas y resolverá todas las consultas, en el área de su competencia, que le hagan a la misma. Una ley especial reglamentará su organización y funciones.</p> <p>En el cumplimiento de sus funciones, fiscalizará en forma simultánea y posterior los ingresos y los egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y los recursos de los poderes del Estado y municipios y sus entes públicos paraestatales y paramunicipales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas gubernamentales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.</p> <p>Sin perjuicio de los informes a que se refiere el párrafo anterior, en situaciones que determine la ley, podrá requerir a los sujetos de fiscalización la presentación de la documentación e informes relativos al ingreso, manejo y aplicación de los recursos públicos a su cargo.</p> <p>Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la ley, se podrá dar lugar al fincamiento de la responsabilidad que corresponda.</p> <p>Así mismo entregará el informe final del resultado de la revisión de las cuentas públicas al Congreso del Estado, en los términos previstos en esta Constitución. Dentro de dicho informe se incluirán los dictámenes de su revisión y el apartado correspondiente a la fiscalización y</p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN V</b> <b>DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO</b></p> <p><b>Art. 54.</b> El Congreso del Estado designará al titular de la Auditoría Superior del Estado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su encargo siete años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título VI de esta Constitución.</p> <p>Para ser titular de la Auditoría Superior del Estado se requiere ser mexicano por nacimiento, estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener treinta y cinco años de edad y menos de setenta al día de la designación, o bien no cumplir setenta años durante el ejercicio de sus funciones; gozar de buena reputación personal, haber residido efectivamente en el Estado durante los últimos dos años y no haber sido condenado por delito doloso; no haberse desempeñado durante los dos años anteriores con cargos de nivel de Secretario u homólogos en el Poder Ejecutivo con excepción del encargado de control interno; asimismo no haberse desempeñado como Presidente Municipal, Síndico Procurador o Secretario en los Gobiernos Municipales, Diputado, Secretario General del Congreso o haber sido designado por el Congreso como titular de algún organismo autónomo y, cumplir los requisitos establecidos en la ley.</p> <p>Durante su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo cargo o comisión, salvo los docentes y los no remunerados en asociaciones científicas, artísticas o de beneficencia</p>

<p>verificación del cumplimiento de los programas, que comprenderá los comentarios y observaciones de los auditados. Dicho informe final tendrá carácter público.</p> <p>La Auditoría Superior del Estado, deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo. La ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.</p> <p>También investigará los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos públicos y efectuará visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, base de datos, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas en la ley.</p> <p>Igualmente determinará los daños y perjuicios que afecten a las haciendas públicas estatal y municipal, al patrimonio de las entidades descentralizadas y al de los organismos autónomos del Estado y fincará directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes. Así mismo, promoverá ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades, promoverá las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título VI de esta Constitución, y podrá formular denuncias, querellas o hacer las promociones que las leyes determinen, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señala la ley.</p> <p>El Titular de la Auditoría Superior del Estado, será nombrado por el Pleno del Congreso, en la forma prevista por la ley. Durará en su encargo siete años y podrá ser nombrado nuevamente para un periodo más, por una sola vez. Podrá ser removido por el Pleno, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título VI de esta Constitución.</p> <p>Para ser titular de la Auditoría Superior del Estado se requiere ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; tener al menos treinta y cinco años de edad; haber residido en el Estado de Sinaloa durante los últimos cinco años; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; y cumplir los requisitos establecidos en la ley. Durante su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los docentes y los no remunerados en asociaciones científicas,</p>	<p>pública o privada.</p>
--	---------------------------

<p>artísticas o de beneficencia.                  Los Poderes del Estado, los Municipios y los sujetos de fiscalización facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones.                  El Poder Ejecutivo del Estado o el Ayuntamiento en su caso, aplicarán el procedimiento administrativo de ejecución, para el cobro de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que se establezcan por la Auditoría Superior del Estado en los términos de la ley.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO III                  DEL PODER EJECUTIVO</b></p> <p><b>Art. 56.</b> Para ser Gobernador del Estado se requiere:  <b>I a IV ...</b>  <b>V.</b> No haber sido Secretario, Subsecretario o titular de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública Estatal o Paraestatal; Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia; Juez de Primera Instancia, Recaudador de Rentas o Presidente Municipal, Diputado y Senador al Congreso de la Unión, que se encontrare en ejercicio; haber tenido mando de fuerza de la Federación, Estado o Municipios o ser Ministro de cualquier culto. Los ciudadanos antes referidos, con excepción de los Ministros de los cultos, podrán ser electos, siempre que se separen de sus cargos cuando menos 90 días antes de la elección.  <b>VI y VII ...</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO III                  DEL PODER EJECUTIVO</b></p> <p><b>Art. 56.</b> Para ser Gobernador del Estado se requiere:  <b>I a IV ...</b>  <b>V.</b> No haber sido Secretario, Subsecretario o titular de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública Estatal o Paraestatal; <b>los titulares de los órganos constitucionales autónomos; Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia,</b> Juez de Primera Instancia, Recaudador de Rentas o Presidente Municipal, Diputado y Senador al Congreso de la Unión, que se encontrare en ejercicio; haber tenido mando de fuerza de la Federación, Estado o Municipios o ser Ministro de cualquier culto. Los ciudadanos antes referidos, con excepción de los Ministros de los cultos, podrán ser electos, siempre que se separen de sus cargos cuando menos 90 días antes de la elección.  <b>VI y VII ...</b></p>
<p><b>Art. 65.</b> Son facultades y obligaciones del Gobernador Constitucional del Estado, las siguientes:  <b>I a XX. ...</b>  <b>XXI.</b> Previa autorización del Congreso del Estado, celebrar empréstitos, otorgar garantías o avales, y formalizar las demás modalidades y actos jurídicos que correspondan conforme a lo previsto en el artículo 84 de esta Constitución. Asimismo, bajo las mismas condiciones señaladas anteriormente, el Ejecutivo podrá constituirse en avalista de organismos sociales legalmente instituidos, que tengan por objeto obtener créditos para la realización de obras de interés social, cuando existan garantías de la recuperación del financiamiento.  <b>XXI Bis. ...</b>  <b>XXI Bis A.</b> Previa autorización del Congreso del Estado, otorgar garantías y avales, afectar como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del Estado o, en su caso, los</p>	<p><b>Art. 65.</b> Son facultades y obligaciones del Gobernador Constitucional del Estado, las siguientes:  <b>I a XX. ...</b>  <b>XXI.</b> Previa autorización por el Congreso del Estado <b>de los montos máximos, contratar empréstitos y obligaciones en las mejores condiciones del mercado, previo análisis de su destino, capacidad de pago y en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de esta Constitución, y las bases de las leyes establecidas de la materia;</b>  <b>XXI Bis. ...</b>  <b>XXI Bis A.</b> Previa autorización del Congreso del Estado <b>en términos de lo dispuesto por el artículo 84 de esta Constitución, otorgar garantías y avales, afectar como fuente o garantía de pago, o en</b></p>

<p>derechos al cobro derivados de los mismos, respecto del cumplimiento de todo tipo de obligaciones o empréstitos, contratos de colaboración público privada o de cualesquier otros actos jurídicos relacionados con los mismos;</p> <p><b>XXI Bis B y XXI Bis C. ...</b>  <b>XXII.</b> Designar, con la ratificación del Congreso del Estado o de su Diputación Permanente, al Procurador General de Justicia, ratificación sin la cual no surtirá efecto la designación.</p> <p><b>XXIII. a XXIII. BIS. ...</b>  <b>XXIV.</b> Los demás que le confieren la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución y las derivadas de ellas que no estén expresamente atribuidas o reservadas a los Poderes de la Federación o a los otros Poderes del Estado.</p>	<p>cualquier otra forma, los ingresos del Estado o, en su caso, los derechos al cobro derivados de los mismos, respecto del cumplimiento de todo tipo de obligaciones o empréstitos, contratos de colaboración público privada o de cualesquier otros actos jurídicos relacionados con los mismos;</p> <p><b>XXI Bis B y XXI Bis C. ...</b>  <b>XXII.</b> Participar en el proceso de elección y remoción del Fiscal General del Estado en términos de lo previsto por esta Constitución.  <b>XXII Bis.</b> Proponer una terna de aspirantes por cada Magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa, ante el Congreso del Estado, a fin de que éste realice la designación correspondiente con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.  <b>XXIII. a XXIII. BIS. ...</b>  <b>XXIV.</b> Previa Autorización del Congreso del Estado celebrar convenio correspondiente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para adherirse al mecanismo de contratación de deuda estatal garantizada.  <b>XXV.</b> Las demás que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las derivadas de ellas que no estén expresamente atribuidas o reservadas a los Poderes de la Federación o a los otros Poderes del Estado.</p>
<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN I</b>  <b>DEL DESPACHO DEL PODER EJECUTIVO</b></p> <p><b>Art. 70.</b> Los Secretarios de la Administración Pública Estatal, al inicio de cada Período Ordinario de Sesiones, enviarán al Congreso del Estado un informe por escrito sobre la situación que guarda la Secretaría a su cargo.          El Congreso del Estado podrá convocar a los Secretarios de Estado, al <u>Procurador General de Justicia del Estado</u>, a los Directores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, unidades administrativas, organismos descentralizados y desconcentrados o de carácter estatal para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.          ...</p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN I</b>  <b>DEL DESPACHO DEL PODER EJECUTIVO</b></p> <p><b>Art. 70.</b> Los Secretarios de la Administración Pública Estatal, al inicio de cada Período Ordinario de Sesiones, enviarán al Congreso del Estado un informe por escrito sobre la situación que guarda la Secretaría a su cargo.          El Congreso del Estado podrá convocar a los Secretarios de Despacho, a los directores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos constitucionales autónomos, unidades administrativas, organismos descentralizados y desconcentrados o de carácter estatal para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, o para que respondan a interpelaciones o preguntas.          ...</p>
<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN II</b>  <b>DE LA SEGURIDAD PÚBLICA</b></p> <p><b>Art. 76.</b> El Ministerio Público es una institución de buena fe,</p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN II</b>  <b>DE LA SEGURIDAD PÚBLICA</b></p> <p><b>Art. 76.</b> El Ministerio Público, como representante de la sociedad en</p>

<p>dependiente del Poder Ejecutivo, con autonomía técnica para realizar las funciones de su competencia.</p> <p>Dicha institución tendrá como misión velar por la legalidad como principio rector de la convivencia social, investigar y perseguir los delitos del orden común en los términos que señale la Ley; participar en los procedimientos que afecten a personas a quienes las leyes otorguen especial protección, así como las facultades y obligaciones establecidas en su Ley Orgánica y otros ordenamientos legales.</p> <p>El Ministerio Público estará presidido por un Procurador General de Justicia, quien se auxiliará con los Agentes y demás personal que determine la Ley Orgánica de la institución, misma que fijará sus respectivas atribuciones y determinará su organización.</p> <p>Para la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes, el Ministerio Público se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato.</p>	<p>Sinaloa, se organiza en una Fiscalía General del Estado.</p> <p>Como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica, de patrimonio propio y capacidad para decidir para el ejercicio de su presupuesto, promotor, respetuoso, protector y garante de los derechos humanos, se regirá en su actuación por los principios de constitucionalidad, debido proceso, buena fe, autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de la dignidad humana.</p> <p>Las bases de la Fiscalía General del Estado, son:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a). Cumplir en el ámbito de su competencia, con las disposiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fundamenta en la actuación del Ministerio Público.</li><li>b). La investigación como la persecución ante los tribunales locales de los delitos del orden común cometidos en el territorio del Estado, corresponden al Ministerio Público y a los elementos policiacos del sistema de seguridad pública, los cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.</li><li>c). La Fiscalía General del Estado para el ejercicio de sus funciones contará con los vicesfiscales general, especializados y/o regionales, policías de investigación y demás personal que estará bajo su autoridad en los términos que establezca la ley.</li><li>d). El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público.</li></ul> <p>La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>e). El Ministerio Público procurará que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita, pedir la aplicación de las penas y la reparación del daño e intervenir en todos los negocios que la ley determine.</li><li>f). La ley establecerá los medios de impugnación a través de los cuales las víctimas u ofendidos del delito podrán recurrir, por la vía jurisdiccional, las omisiones de la Fiscalía General en la investigación de los delitos, así como las resoluciones sobre la reserva de las investigaciones preliminares, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.</li></ul>
--	---



	<p><b>g).</b> Contará con un Consejo Consultivo el cual será presidido por el Fiscal General quien será el único consejero que sea servidor público. El Consejo Consultivo estará integrado además por personas ciudadanas de la sociedad sinaloense de reconocido prestigio y cuya función la desempeñarán de forma honorífica. La Ley fijará las características y funciones del Consejo Consultivo, así como la elección de sus miembros honoríficos.</p>
	<p><b>Art. 76 Bis.</b> Al mando de la Fiscalía General del Estado estará un Fiscal General que durará en su encargo siete años y no podrá ser reelecto, el cual será designado y, en su caso, removido conforme a lo siguiente:</p> <p><b>I.</b> La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, previa Convocatoria Pública seleccionará cinco personas para ser propuestas al Gobernador del Estado a fin de que proponga al Congreso del Estado a tres personas que considere idóneas para ocupar el cargo de Fiscal General, quienes deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad previstos en esta Constitución.</p> <p><b>II.</b> El Congreso del Estado, previa comparecencia de aspirantes, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes dentro del plazo de diez días hábiles. Si el Congreso del Estado no hace la designación en el plazo establecido, el Poder Ejecutivo en un término no mayor a cinco días naturales, designará al Fiscal General del Estado de entre la propuesta referida en la fracción I.</p> <p><b>III.</b> El Fiscal General podrá ser removido por el Gobernador por las causas previstas en la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en el Congreso dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.</p> <p><b>IV.</b> En los recesos del Congreso, la Diputación Permanente lo convocará de inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la remoción del Fiscal General. En este caso, los plazos de diez días hábiles previstos en las fracciones II y III anteriores, se computarán a partir de la convocatoria a sesiones extraordinarias.</p> <p><b>V.</b> Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la ley.</p>

	<p>El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado un informe de actividades.                  Comparecerá ante cualquiera de ellos cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.                  El Fiscal General del Estado, los vicefiscales general, especializados y/o regionales, policías de investigación o demás personal bajo su autoridad, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.                  Durante el ejercicio de su cargo, el Fiscal General no podrá desempeñar actividades profesionales que impliquen el ejercicio libre y/o remunerado de su profesión, salvo las actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o beneficencia.</p>
	<p><b>Art. 76 Bis A.</b> Se crea la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual tendrá nivel de Vicefiscal General; el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción será designado y removido por el Fiscal General del Estado. El nombramiento y remoción podrán ser objetados por el Congreso del Estado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, en el plazo que fije la Ley, si el Congreso del Estado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción.</p>
<p><b>Art. 77.</b> El Procurador General de Justicia será designado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, con ratificación del Congreso del Estado o de su Diputación Permanente, según corresponda. El Procurador podrá ser removido por causa justificada por el Ejecutivo. El Subprocurador General y los Subprocuradores Regionales serán nombrados y removidos por el Procurador General de Justicia, previo acuerdo con el Gobernador del Estado. Los Agentes del Ministerio Público y demás servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia serán nombrados y removidos libremente por el Procurador General de Justicia.                  Para ser Procurador General de Justicia se requiere:  <b>I. Ser</b> ciudadano sinaloense en pleno goce de sus derechos;  <b>II. Ser</b> licenciado en derecho con título legalmente expedido;  <b>III. Tener</b> más de treinta años de edad;  <b>IV. Acreditar</b> ejercicio profesional de diez años, por lo menos;  <b>V. Ser de honradez</b> y probidad notorias; y,  <b>VI. No haber sido</b> condenado por delitos dolosos.                  El Procurador General de Justicia no podrá desempeñar otro cargo,</p>	<p><b>Art. 77.</b> Para ser Fiscal General del Estado se requiere:  <b>I. Ser</b> ciudadano mexicano por nacimiento.  <b>II. Tener</b>, cuando menos, treinta y cinco años cumplidos al día de su designación.  <b>III. Contar</b>, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho.  <b>IV. Gozar</b> de buena reputación.  <b>V. No haber sido</b> condenado por delito doloso.                  De igual forma percibirá las mismas prestaciones y emolumentos legales o normativos internos, salariales y/o de cualquier especie del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.</p>

<p>empleo o comisión por el que se perciban emolumentos, excepto de enseñanza, ni litigar más que en asuntos propios. En caso de incumplimiento a esta disposición, será destituido.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN II BIS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS</b></p> <p><b>Art. 77 Bis.</b> Para conocer de las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorias de los derechos humanos, provenientes de cualquier autoridad o servidor público del estado o los municipios, <u>con excepción de los del Poder Judicial del Estado</u>, se establece un organismo denominado Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con carácter autónomo, personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto la defensa, protección, observación, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos en nuestro orden jurídico vigente.</p> <p>Este organismo formulará recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas y no será competente tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que emita la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar, motivar, y hacer pública su negativa; además, el Congreso del Estado, a solicitud del Presidente de ese organismo y previo Dictamen de procedencia emitido por las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y la relativa al cargo que desempeñen dichos servidores, aprobado por el Pleno, podrá llamar, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichas Comisiones Permanentes a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.</p> <p>La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez Consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, mediante un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la Ley. Cada dos años serán sustituidos los dos consejeros con mayor antigüedad en</p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN II BIS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS</b></p> <p><b>Art. 77 Bis.</b> Para conocer de las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorias de los derechos humanos, provenientes de cualquier autoridad o servidor público del estado o los municipios, <u>con excepción de los del Poder Judicial del Estado</u>, se establece un organismo denominado Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con carácter autónomo, personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto la defensa, protección, observación, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos en nuestro orden jurídico vigente. <b>NOTA: EL TEXTO CON NEGRITAS SE DEJA SIN EFECTO SEGÚN LO ESTABLECE EL TERCER RESOLUTIVO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2013, PUBLICADA EN EL P.O. No. 116 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b></p> <p>Este organismo formulará recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas y no será competente tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que emita la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar, motivar, y hacer pública su negativa; además, el Congreso del Estado, a solicitud del Presidente de ese organismo y previo Dictamen de procedencia emitido por las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y la relativa al cargo que desempeñen dichos servidores, aprobado por el Pleno, podrá llamar, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichas Comisiones Permanentes a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.</p> <p>La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez Consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, mediante un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la Ley. Cada dos años serán sustituidos los dos consejeros con mayor</p>

<p>el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.</p> <p>El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cuatro años, podrá ser reelecto por una sola vez y solo podrá ser removido de sus funciones, en los términos del Título Sexto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.</p> <p>El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, presentará anualmente a los poderes Ejecutivo y Legislativo Estatal, un informe de actividades, en los términos que la ley disponga.</p>	<p>antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.</p> <p>El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cuatro años, podrá ser reelecto por una sola vez y solo podrá ser removido de sus funciones, en los términos del Título Sexto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.</p> <p>El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, presentará anualmente a los poderes Ejecutivo y Legislativo Estatal, un informe de actividades, en los términos que la ley disponga.</p>
<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN IV DE LA HACIENDA PÚBLICA</b></p> <p><b>Art. 84.</b> Sólo podrán contraerse obligaciones o empréstitos por el Estado o sus Municipios, u obligaciones o créditos por sus organismos descentralizados, empresas de participación estatal o municipal mayoritaria y fideicomisos públicos que formen parte de la Administración Pública Paraestatal o paramunicipal, cuando se destinen a inversiones públicas productivas, conforme a las bases que establezca en una ley el Congreso del Esetado, quien mediante el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, deberá autorizar previamente la obtención de los financiamientos respectivos, el otorgamiento de garantías o avales, y las demás modalidades y actos jurídicos que así lo requieran de acuerdo a lo previsto por la Ley</p> <p>El Estado únicamente podrá constituirse en garante o avalista de los Municipios o de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal, en los casos en que la magnitud o el impacto social del proyecto que se pretenda financiar así lo amerite, o cuando existan circunstancias extraordinarias, plenamente justificadas que así lo requieran y que pongan en grave riesgo la solvencia y el crédito público de los Municipios, tales como la ocurrencia de desastres naturales, o, en su caso, la viabilidad financiera de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal.</p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN IV DE LA HACIENDA PÚBLICA</b></p> <p><b>Art. 84.</b> El Estado, los organismos autónomos, los Municipios, así como los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, empresas de participación estatal o municipal, y fideicomisos públicos estatales y municipales no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado y, en el caso del Estado, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezca la Ley correspondiente, en el marco de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que el Congreso del Estado apruebe. El Ejecutivo del Estado informará de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso se podrá destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.</p> <p>El Congreso del Estado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberá autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, el Estado y los Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la Ley de Disciplina</p>

	<p style="color: red;">Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Las obligaciones a corto plazo deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses.</p>
<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN V DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA</b></p> <p><b>Art. 91.</b> Toda la educación que imparta el Estado será gratuita, a fin de que todos los individuos tengan acceso a ella, incluyendo la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior o bachillerato, normal, especial, la destinada a obreros o campesinos o la de cualquier otro tipo y modalidad que se imparta de acuerdo con las necesidades educativas de la población del Estado y las características particulares de los grupos que la integran. La educación preescolar, primaria, secundaria y media superior serán además obligatorias.</p> <p>En los contenidos de los planes y programas de estudio de los niveles de educación a que se refiere este artículo, se incluirán temas regionales relacionados con los derechos humanos, seguridad pública y la preservación del medio ambiente.</p> <p>Para apoyar la disciplina del estudio y los hábitos de lectura en los educandos, el Estado conforme a su disponibilidad presupuestal promoverá la creación de bibliotecas en los centros docentes de todos los niveles escolares.</p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN V DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA</b></p> <p><b>Art. 91.</b> Toda la educación que imparta el Estado será gratuita, a fin de que todos los individuos tengan acceso a ella, incluyendo la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior o bachillerato, normal, especial, la destinada a obreros o campesinos o la de cualquier otro tipo y modalidad que se imparta de acuerdo con las necesidades educativas de la población del Estado y las características particulares de los grupos que la integran. La educación preescolar, primaria, secundaria y media superior serán además obligatorias.</p> <p>En los contenidos de los planes y programas de estudio de los niveles de educación a que se refiere este artículo, se incluirán temas regionales relacionados con los derechos humanos, seguridad pública y la preservación del medio ambiente.</p> <p>Para apoyar la disciplina del estudio y los hábitos de lectura en los educandos, el Estado conforme a su disponibilidad presupuestal promoverá la creación de bibliotecas en los centros docentes de todos los niveles escolares.</p> <p style="color: red;">En los mismos términos, el Estado garantizará que las escuelas públicas a su cargo cuenten con instalaciones y equipos para el acceso de los educandos a internet y a las tecnologías de la información y de la comunicación.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO IV PODER JUDICIAL SECCIÓN II DE LAS SALAS DE CIRCUITO</b></p> <p><b>Art. 105 Bis. ...</b> ... <b>I. a V. ...</b> ...</p> <p>Las Salas del Supremo Tribunal de Justicia de oficio, o a petición fundada de las Salas de Circuito o del Procurador General de Justicia podrán conocer de los asuntos de competencia de las Salas de Circuito cuando por sus características especiales, su trascendencia o</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO IV PODER JUDICIAL SECCIÓN II DE LAS SALAS DE CIRCUITO</b></p> <p><b>Art. 105 Bis. ...</b> ... <b>I. a V. ...</b> ...</p> <p>Las Salas del Supremo Tribunal de Justicia de oficio, o a petición fundada de las Salas de Circuito o <b>del Fiscal General del Estado</b> podrán conocer de los asuntos de competencia de las Salas de Circuito cuando por sus características especiales, su trascendencia o</p>

<p>importancia así lo ameriten.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO V DE LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA</b></p> <p><b>Art. 109 Bis.</b> Se instituye la Jurisdicción Administrativa para conocer de las controversias que se susciten en relación con la legalidad, y, en su caso, la interpretación, cumplimiento y efectos de los actos, procedimientos y disposiciones de naturaleza administrativa emitidos por autoridades del Estado o de los Municipios para lo cual podrán crearse Tribunales Administrativos, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos estableciéndose las normas de su organización, funcionamiento, competencia, procedimiento y recursos contra sus resoluciones.</p> <p>Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo serán elegidos por el Congreso del Estado, de una terna formada mediante el procedimiento que establezca la ley.</p>	<p>importancia así lo ameriten.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO V DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA</b></p> <p><b>Art. 109 Bis.</b> Se instituye el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, como órgano constitucional autónomo encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública Estatal y municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales.</p> <p>El Tribunal de Justicia Administrativa se integrará por una Sala Superior conformada por tres Magistraturas y por las Salas Regionales Unitarias que determine la ley.</p> <p>Para ser titular de una Magistratura se requiere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>I.</b> Contar con la ciudadanía mexicana y encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos.</li> <li><b>II.</b> Poseer título profesional de Licenciatura en Derecho, con una experiencia mínima de cinco años, en materia administrativa o en impartición de justicia.</li> <li><b>III.</b> Tener más de treinta años de edad y menos de sesenta y cinco el día de su nombramiento.</li> <li><b>IV.</b> Ser de notoria buena conducta.</li> <li><b>V.</b> Haber residido efectivamente en el Estado durante los últimos dos años.</li> <li><b>VI.</b> No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional que hubiere merecido pena corporal.</li> </ol> <p>Las personas titulares de las Magistraturas de la Sala Superior y de las Salas Regionales Unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa serán electas, de entre una terna propuesta por el Ejecutivo del Estado, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso.</p> <p>Su nombramiento será por siete años, prorrogables por otro periodo igual y durante su encargo, sólo podrán ser removidas por causas graves que señale la ley.</p>
---	--

	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO VIII DE LA REFORMA REGULATORIA</b></p> <p><b>Art. 109 Bis C.</b> La Reforma Regulatoria es una Política Pública de desarrollo obligatorio de manera permanente, continua y coordinada para todas las autoridades del Estado y los Municipios en sus respectivos ámbitos de competencia, que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicio y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.</p> <p>El Congreso del Estado mediante una ley creará el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria en términos de la Ley General de la materia, así como los instrumentos necesarios para que las leyes emitidas por dicho Congreso y las normas de carácter general que emita cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo gubernamental, así como órganos autónomos de ámbito estatal y municipal garanticen beneficios superiores a sus costos y el máximo bienestar para la sociedad, incorporando para ello el uso de las tecnologías de la información.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO IX DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN</b></p> <p><b>Art. 109 Bis D.</b> Se instituye el Sistema Estatal Anticorrupción como instancia de coordinación entre las autoridades competentes del Gobierno Estatal y Municipal en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.</p> <p>Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:</p> <p>I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; el presidente de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública; así como por un representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana.</p>

	<p><b>II.</b> El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley.</p> <p><b>III.</b> Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la ley:</p> <p><b>a).</b> El establecimiento de mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción.</p> <p><b>b).</b> El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan.</p> <p><b>c).</b> La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes del Gobierno Estatal y Municipal.</p> <p><b>d).</b> El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades del Gobierno Estatal y Municipal en materia de fiscalización y control de los recursos públicos.</p> <p><b>e).</b> La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.</p> <p>Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.</p> <p>Para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, se deberá cuando menos cumplir con los siguientes requisitos:</p> <p><b>I.</b> Deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes que las leyes otorgan al Sistema Nacional.</p> <p><b>II.</b> Tendrán acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor desempeño de sus funciones.</p> <p><b>III.</b> Las recomendaciones, políticas públicas e informes que emita, deberán tener respuesta de los sujetos públicos a quienes se dirija.</p> <p><b>IV.</b> Deberán contar con las atribuciones y procedimientos adecuados</p>
--	--



	<p>para dar seguimiento a las recomendaciones, informes y políticas que emitan.</p> <p><b>V.</b> Rendirán un informe público a los titulares de los poderes en el que den cuenta de las acciones anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus recomendaciones. Para este efecto deberán seguir las metodologías que emita el Sistema Nacional.</p> <p><b>VI.</b> La presidencia de la instancia de coordinación del Sistema Local deberá corresponder al Consejo de Participación Ciudadana.</p> <p><b>VII.</b> Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana deberán reunir como mínimo los requisitos previstos en esta Constitución y ser designados mediante un procedimiento análogo al previsto para el Comité de Participación Ciudadana.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO V DEL MUNICIPIO LIBRE</b></p> <p><b>Art. 112. ...</b> ...</p> <p>Los Municipios, cualquiera que sea su número de habitantes, integrarán sus Ayuntamientos de conformidad con lo siguiente:</p> <p><b>I.</b> Los de Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán, con un Presidente Municipal, un Síndico Procurador, once Regidores de Mayoría Relativa y siete Regidores de Representación Proporcional.</p> <p><b>II.</b> Los de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Rosario y Escuinapa, con un Presidente Municipal, un Síndico Procurador, ocho Regidores de Mayoría Relativa y cinco Regidores de Representación Proporcional.</p> <p><b>III.</b> Los Municipios de Choix, Angostura, Badiraguato, Cosalá, Elota, San Ignacio y Concordia, con un Presidente Municipal, un Síndico Procurador, seis Regidores de Mayoría Relativa y cuatro Regidores de Representación Proporcional.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO V DEL MUNICIPIO LIBRE</b></p> <p><b>Art. 112. ...</b> ...</p> <p>Los Municipios, cualquiera que sea su número de habitantes, integrarán sus Ayuntamientos de conformidad con lo siguiente:</p> <p><b>I.</b> Los de Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán, con un Presidente Municipal, un Síndico Procurador, once Regidores de Mayoría Relativa y <b>cinco Regidores</b> de Representación Proporcional.</p> <p><b>II.</b> Los de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Rosario y Escuinapa, con un Presidente Municipal, un Síndico Procurador, ocho Regidores de Mayoría Relativa y <b>cuatro Regidores</b> de Representación Proporcional.</p> <p><b>III.</b> Los Municipios de Choix, Angostura, Badiraguato, Cosalá, Elota, San Ignacio y Concordia, con un Presidente Municipal, un Síndico Procurador, <b>tres Regidores</b> de Mayoría Relativa y cuatro Regidores de Representación Proporcional.</p>
<p><b>Art. 125.</b> Son facultades de los Ayuntamientos: <b>I. a X. ...</b> <b>XI.</b> Previa autorización del Congreso del Estado, celebrar empréstitos, siempre que los recursos correspondientes se destinen a inversiones públicas productivas conforme a las bases que, en términos de lo dispuesto por el artículo 84 de esta Constitución, establezca el Congreso del Estado en la ley respectiva;</p>	<p><b>Art. 125.</b> Son facultades de los Ayuntamientos: <b>I. a X. ...</b> <b>XI.</b> Previa autorización por el Congreso del Estado <b>de los montos máximos, contratar empréstitos y obligaciones en las mejores condiciones del mercado, previo análisis de su destino, capacidad de pago y en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de esta Constitución, y las bases de las leyes establecidas de la</b></p>

<p><b>XII.</b> Previa autorización del Congreso del Estado, otorgar garantías y avales, afectar como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del Municipio o, en su caso, los derechos al cobro derivados de los mismos, respecto del cumplimiento de todo tipo de obligaciones o empréstitos; contratos de colaboración público privada que, en términos de la legislación aplicable, impliquen obligaciones que constituyan deuda pública, o de cualesquier otros actos jurídicos relacionados con los mismos; y,</p> <p><b>XIII.</b> ...</p>	<p>materia;</p> <p><b>XII.</b> Previa autorización del Congreso del Estado en términos de lo dispuesto por el artículo 84 de esta Constitución, otorgar garantías y avales, afectar como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del Municipio o, en su caso, los derechos al cobro derivados de los mismos, respecto del cumplimiento de todo tipo de obligaciones o empréstitos; contratos de colaboración público privada que, en términos de la legislación aplicable, impliquen obligaciones que constituyan deuda pública, o de cualesquier otros actos jurídicos relacionados con los mismos; y,</p> <p><b>XIII.</b> ...</p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO VI</b>  <b><u>DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS</u></b>  <b><u>Y PATRIMONIAL DEL ESTADO</u></b>  <b>CAPÍTULO I</b>  <b>DISPOSICIONES GENERALES</b></p> <p><b>Art. 130.</b> Para los efectos de las responsabilidades contenidas en este Título, se entiende por servidor público toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en alguno de los tres poderes del Gobierno del Estado, en organismos autónomos previstos en esta Constitución y leyes locales, en los Ayuntamientos, así como en los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos del Estado y Municipios en los Ayuntamientos y organismos e instituciones municipales.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO VI</b>  <b>DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS,</b>  <b>PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS</b>  <b>GRAVES O HECHOS DE CORRUPCIÓN, Y PATRIMONIAL DEL</b>  <b>ESTADO</b>  <b>CAPÍTULO I</b>  <b>DISPOSICIONES GENERALES</b></p> <p><b>Art. 130.</b> Para los efectos de las responsabilidades contenidas en este Título, se entiende por servidor público a los representantes de elección popular, los funcionarios, empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, organismos descentralizados o desconcentrados, administración pública municipal y paramunicipal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, asimismo, dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y de deuda pública.</p> <p>Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial, de intereses y fiscal ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<b>CAPÍTULO II</b>	<b>CAPÍTULO II</b>

<p style="text-align: center;"><b>DEL JUICIO POLÍTICO</b></p> <p><b>Art. 132.</b> Podrán ser sujetos de juicio político, para sancionar su responsabilidad, el Gobernador, los Diputados Locales, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los Magistrados de las Salas de Circuito del Poder Judicial del Estado, los Secretarios del Despacho del Poder Ejecutivo, el Procurador General de Justicia y los Jueces de Primera Instancia, así como los Titulares y Directores, o sus equivalentes, de las entidades, instituciones u organismos que integren la administración pública paraestatal conforme al primer párrafo del artículo 130, así como los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos Procuradores de los Ayuntamientos y comisionados del organismo garante a que se refiere el artículo 109 Bis B de la presente Constitución.</p>	<p style="text-align: center;"><b>DEL JUICIO POLÍTICO</b></p> <p><b>Art. 132.</b> Podrán ser sujetos de juicio político, para sancionar su responsabilidad, el Gobernador, los <b>diputados locales</b>, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los magistrados de las Salas de Circuito del Poder Judicial del Estado, <b>los secretarios de Despacho del Poder Ejecutivo, los jueces de Primera Instancia, así como los titulares y directores, o sus equivalentes, de las entidades, instituciones u organismos que integren, la Administración Pública Paraestatal, conforme al primer párrafo del artículo 130, así como los titulares de los órganos constitucionales autónomos, presidentes municipales, regidores y síndicos procuradores de los ayuntamientos.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO III DE LA DECLARATORIA DE PROCEDENCIA POR LA COMISIÓN DE DELITOS</b></p> <p><b>Art. 135. ...</b> Se requiere declaratoria previa del Congreso del Estado, erigido en Jurado de Acusación, por mayoría absoluta de los Diputados presentes, de que ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado, tratándose de delitos atribuidos a Diputados de la Legislatura Local, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Secretarios del Despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de Justicia, Presidentes Municipales y Comisionados del organismo garante a que se refiere el artículo 109 Bis B de la presente Constitución, quienes serán juzgados por la autoridad competente. ...</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO III DE LA DECLARATORIA DE PROCEDENCIA POR LA COMISIÓN DE DELITOS</b></p> <p><b>Art. 135. ...</b> Se requiere declaratoria previa del Congreso del Estado, erigido en Jurado de Acusación por mayoría absoluta de los <b>diputados</b> presentes, de que ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado, tratándose de delitos atribuidos a <b>diputados</b> de la Legislatura Local, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, jueces de primera instancia, <b>secretarios</b> de Despacho del Poder Ejecutivo, <b>presidentes municipales y titulares de órganos constitucionales autónomos, quienes serán juzgados por la autoridad competente.</b> ...</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO IV DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS</b></p> <p><b>Art. 138.</b> La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado establecerá las obligaciones de éstos, para que en ejercicio de sus funciones, empleos, cargos y comisiones garanticen la honradez, lealtad, legalidad, imparcialidad y eficiencia; señalará las sanciones que procedan por los actos u omisiones en que incurran y determinará los procedimientos y autoridades competentes para aplicarlas.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO IV DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS</b></p> <p><b>Art. 138.</b> <b>Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:</b>  <b>I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el Capítulo II del Título VI de esta Constitución a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.</b></p>

	<p>No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.</p> <p><b>II.</b> La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.</p> <p><b>III.</b> Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.</p> <p>Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.</p> <p>Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en el artículo 97 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.</p> <p>La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.</p> <p>Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir,</p>
--	--

	<p>corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución.</p> <p><b>IV.</b> El Tribunal de Justicia Administrativa impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, estatales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la persona moral obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos en que se advierta que su utilización de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.</p> <p>Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.</p> <p>Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos a prueba, podrá formular denuncia respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.</p> <p>En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y</p>
--	---

	<p>hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información. La Auditoría Superior del Estado y la Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción VII, y 104, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO V DE LA PRESCRIPCIÓN</b></p> <p><b>Art. 140. ...</b> ... Tratándose de responsabilidades administrativas, la Ley de la materia fijará la prescripción de las sanciones, tomando en cuenta el tipo de actos u omisiones de que se trata y sus consecuencias; pero en caso de actos u omisiones graves, el término de prescripción no será menos de tres años.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO V DE LA PRESCRIPCIÓN</b></p> <p><b>Art. 140. ...</b> ... Tratándose de responsabilidades administrativas, la Ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 138. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO VII CAPÍTULO I DISPOSICIONES DIVERSAS</b></p> <p><b>Art. 144.</b> Los servidores públicos del Estado, Municipios y de la Administración Pública Paraestatal, antes de tomar posesión de sus cargos, otorgarán la protesta de Ley, sin cuyo requisito no habrá formación de causa ninguna. Las condiciones para protestar, serán las siguientes: I. ... II. La protesta se pide y se da por interpelación entre los siguientes servidores públicos: <b>1 y 2 ...</b> 3. A los titulares de las Entidades de la Administración Pública Estatal y Paraestatal, al Procurador General de Justicia y el Recaudador de Rentas con residencia en la Capital del Estado, les tomará la protesta el Ciudadano Gobernador y ellos a su vez, a los demás servidores públicos de sus dependencias que residen en la capital. En cuanto a los</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO VII CAPÍTULO I DISPOSICIONES DIVERSAS</b></p> <p><b>Art. 144.</b> Los servidores públicos del Estado, Municipios y de la Administración Pública Paraestatal, antes de tomar posesión de sus cargos, otorgarán la protesta de Ley, sin cuyo requisito no habrá formación de causa ninguna. Las condiciones para protestar, serán las siguientes: I. ... II. La protesta se pide y se da por interpelación entre los siguientes servidores públicos: <b>1 y 2 ...</b> 3. A los titulares de las entidades de la Administración Pública Estatal y Paraestatal, al Recaudador de Rentas con residencia en la capital del Estado, les tomará la protesta el ciudadano Gobernador y ellos, a su vez, a los demás servidores públicos de sus dependencias que residan en la capital. En cuanto a los subalternos foráneos de las</p>

subalternos foráneos de las diversas dependencias administrativas del Ejecutivo, les tomará la protesta el Presidente Municipal en cuya circunscripción territorial ejerzan sus cargos. <b>4 a 7. ...</b> <b>III a VII ...</b>	diversas dependencias administrativas del Ejecutivo, les tomará la protesta el Presidente Municipal en cuya circunscripción territorial ejerzan sus cargos. <b>4 a 7. ...</b> <b>III a VII ...</b>
--	--

COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE SONORA	
TEXTO ANTERIOR	TEXTO VIGENTE
<b>TITULO SEGUNDO</b> <b>HABITANTES DEL ESTADO</b>	<b>TITULO SEGUNDO</b> <b>HABITANTES DEL ESTADO</b>
<b>ARTICULO 8o.</b> Los habitantes del Estado, por su condición política, se consideran como sonorenses, ciudadanos y extranjeros.	<b>ARTICULO 8o.</b> Los habitantes del Estado, por su condición política, se consideran como sonorenses, ciudadanos y extranjeros. En el Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.
<b>ARTICULO 19.</b> Tienen suspensos los derechos o prerrogativas de ciudadanos del Estado. <b>I. a II. ...</b> <b>III.</b> Los procesados desde que se dicte el auto <u>de formal prisión</u> hasta que cause ejecutoria la sentencia que los absuelva. <b>IV. a VI. ...</b>	<b>ARTICULO 19.</b> Tienen suspensos los derechos o prerrogativas de ciudadanos del Estado. <b>I. a II. ...</b> <b>III.</b> Los procesados desde que se dicte el auto <b>de vinculación a proceso</b> hasta que cause ejecutoria la sentencia que los absuelva. <b>IV. a VI. ...</b>
<b>TITULO TERCERO</b> <b>SOBERANÍA DEL ESTADO Y FORMA DE GOBIERNO</b> <b>CAPITULO I</b> <b>SOBERANÍA</b>	<b>TITULO TERCERO</b> <b>SOBERANÍA DEL ESTADO Y FORMA DE GOBIERNO</b> <b>CAPITULO I</b> <b>SOBERANÍA</b>
<b>ARTÍCULO 22. ...</b> La elección a gobernador del Estado, de los diputados al Congreso del Estado y de los integrantes de los ayuntamientos, deberá realizarse mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, a través de elecciones libres, auténticas y periódicas. La jornada comicial tendrá lugar el primer <u>domingo de junio del año en que corresponda.</u>	<b>ARTÍCULO 22. ...</b> La elección a gobernador del Estado, de los diputados al Congreso del Estado y de los integrantes de los ayuntamientos, deberá realizarse mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, a través de elecciones libres, auténticas y periódicas. La jornada comicial tendrá lugar el primer domingo de junio del año en que

<p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>El Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones del Instituto solo con derecho a voz. Las sesiones de los organismos electorales serán públicas. <u>Cada partido político contará con un representante propietario y su suplente en cada organismo electoral.</u></p> <p>El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana podrá convenir con el Instituto Nacional Electoral para que se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>corresponda y procurará realizarse de manera concurrente con los procesos electorales federales.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>El Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones del Instituto solo con derecho a voz. Las sesiones de los organismos electorales serán públicas y <b>deberán difundirse por medios electrónicos en tiempo real.</b> Cada partido político contará con un representante propietario y su suplente en cada organismo electoral.</p> <p>El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana podrá convenir con el Instituto Nacional Electoral para que se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables.</p> <p><b>En los procesos electorales, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana observará, con la debida diligencia, la prevención y sanción administrativa de aquellas conductas o hechos presumiblemente constitutivos de violencia política por razones de género. El Consejo General de dicho Instituto tendrá a su cargo el análisis de forma particular para definir si se trata o no de violencia de género y adoptará las acciones dentro del ámbito de su competencia para salvaguardar los derechos políticos electorales que resulten afectados.</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Las candidaturas comunes se registrarán bajo lo que dispongan las leyes de la materia aplicable, siempre y cuando establezca como mínimo que el convenio de las candidaturas comunes deberá contener el nombre de los partidos políticos que la conforman y el</p>
--	--



<p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p><u>El Tribunal Estatal Electoral tendrá plena autonomía operativa y de decisión, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. Será la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y de procesos de participación ciudadana, funcionará de manera permanente y tendrá a su cargo la sustanciación y resolución, en única instancia, de los medios de impugnación que establezcan las leyes aplicables.</u></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>tipo de elección de que se trate; así como el emblema común de los partidos políticos que la conforman y el color o colores con que se participa, la forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos que postulan la candidatura común para los efectos de conservación del registro y el otorgamiento de financiamiento público.</p> <p>Los votos se computarán a favor del candidato común y la distribución del porcentaje de votación será conforme al convenio de candidatura común registrada ante la autoridad electoral.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>El Tribunal Estatal Electoral tendrá plena autonomía operativa y de decisión, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. Será la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y de procesos de participación ciudadana, funcionará de manera permanente y tendrá a su cargo la sustanciación y resolución, en única instancia, de los medios de impugnación que establezcan las leyes aplicables, así como la resolución de los procedimientos sancionadores ordinarios y juicios orales sancionadores en materia electoral en los términos que establezca la ley.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO III</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ECONOMÍA PÚBLICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO</b></p> <p><b>ARTICULO 25-D.</b> Habrá un Plan Estatal de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Estatal y en igual forma existirá un Plan de Desarrollo por cada Municipio de la Entidad, al que se sujetarán <u>los programas de los Gobiernos Municipales.</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO III</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ECONOMÍA PÚBLICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO</b></p> <p><b>ARTICULO 25-D.</b> Habrá un Plan Estatal de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Estatal y en igual forma existirá un Plan de Desarrollo por cada Municipio de la Entidad, al que se sujetarán los programas de los Gobiernos Municipales. <b>Los Planes de Desarrollo deberán expedirse dentro de los primeros cuatro meses del inicio de la</b></p>

...	administración correspondiente. ...
<p style="text-align: center;"><b>TITULO CUARTO                  DIVISIÓN DE PODERES                  CAPITULO II                  PODER LEGISLATIVO                  SECCIÓN II                  ELECCIÓN DE DIPUTADOS</b></p> <p><b>ARTICULO 33.</b> Para ser Diputado Propietario o Suplente al Congreso del Estado se requiere:  <b>I. a II. ...</b>  <b>III.</b> Tener vecindad y residencia efectiva dentro del Distrito Electoral correspondiente, de cuando menos dos años inmediatamente anteriores al día en que se haga la elección, tratándose de los nativos del Estado; y cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, en caso de no serlo.   <b>IV. ...</b>  <b>V.</b> No haber sido Magistrado del Supremo Tribunal, Fiscal General de Justicia, Fiscal Especial, Secretario o Subsecretario, Presidente Municipal ni ejercido mando militar alguno en el distrito electoral de la elección dentro de los noventa días inmediatamente anteriores al día de la elección.   <b>VI. a X. ...</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO CUARTO                  DIVISIÓN DE PODERES                  CAPITULO II                  PODER LEGISLATIVO                  SECCIÓN II                  ELECCIÓN DE DIPUTADOS</b></p> <p><b>ARTICULO 33.</b> Para ser Diputado Propietario o Suplente al Congreso del Estado se requiere:  <b>I. a II. ...</b>  <b>III.</b> Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, <b>excepto en el caso de municipios que abarquen dos o mas distritos electorales en su demarcación, caso en el cual bastará con acreditar la vecindad y residencia en dicho municipio para contender por el cargo de diputado en cualquiera de los distritos que lo integran. La vecindad y residencia a que se refiere esta fracción deberá de ser, cuando menos, de dos años inmediatamente anteriores al día de la elección.</b>   <b>IV. ...</b>  <b>V.</b> No tener el carácter de servidor público, dentro de los noventa días inmediatamente anteriores al día de la elección, salvo que se trate de reelección del cargo o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal.   <b>VI. a X. ...</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN III                  INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO</b></p> <p><b>ARTICULO 46.</b> El día 13 del mes de octubre de cada año, <u>el Gobernador presentará al Congreso del Estado, un informe sobre el estado que guarde la Administración Pública en sus diversos ramos.</u>                   El último año de su ejercicio constitucional, el Gobernador presentará el informe a que este precepto se refiere, el día 26 de agosto.</p> <p><b>ARTICULO 50.</b> Los Diputados en funciones, durante el periodo de su</p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN III                  INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO</b></p> <p><b>ARTICULO 46.</b> El día 13 del mes de octubre de cada año, <b>el Titular del Poder Ejecutivo, por sí o de manera extraordinaria y, previo acuerdo, por conducto del Secretario de Gobierno o de quien aquél designe,</b> presentará al Congreso del Estado, un informe sobre el estado que guarde la Administración Pública en sus diversos ramos. El último año de su ejercicio constitucional, el Gobernador presentará el informe a que este precepto se refiere, el día 26 de agosto.</p> <p><b>ARTICULO 50.</b> Los Diputados en funciones, durante el periodo de</p>

<p>encargo, no podrán desempeñar comisión o empleo alguno de la Federación, de los otros Poderes del Estado o del Municipio, <u>disfrutando sueldo o remuneración, a no ser que tengan licencia</u> del Congreso; pero concedida que fuere esta licencia, cesarán en sus funciones legislativas mientras desempeñan el empleo o comisión. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de Diputado.</p>	<p>su encargo, no podrán desempeñar comisión o empleo alguno de la Federación, de los otros Poderes del Estado o del Municipio, <b>o cualquier otra responsabilidad pública</b>, disfrutando sueldo o remuneración, a no ser que tengan licencia del Congreso; pero concedida que fuere esta licencia, cesarán en sus funciones legislativas mientras desempeñan el empleo o comisión. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de Diputado.</p>
<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN IV</b> <b>INICIATIVA Y FORMACIÓN DE LAS LEYES</b></p> <p><b>ARTICULO 61.</b> El Ejecutivo no podrá hacer observaciones a las resoluciones del Congreso cuando éste funja como Colegio Electoral o como Jurado. Tampoco podrá hacer observaciones <u>a los decretos que convoquen a elecciones.</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN IV</b> <b>INICIATIVA Y FORMACIÓN DE LAS LEYES</b></p> <p><b>ARTICULO 61.</b> El Ejecutivo no podrá hacer observaciones a las resoluciones del Congreso cuando éste funja como Colegio Electoral o como Jurado. Tampoco podrá hacer observaciones a los decretos que convoquen a elecciones <b>ni a aquéllos que reformen esta Constitución y la Ley Orgánica del Congreso del Estado.</b></p>
<p><b>ARTICULO 62.</b> Todo proyecto de Ley o de Decreto que fuere desechado por el Congreso, no podrá ser presentado de nuevo <u>en el mismo período de sesiones.</u></p>	<p><b>ARTICULO 62.</b> Todo proyecto de Ley o de Decreto que fuere desechado por el Congreso, no podrá ser presentado de nuevo en el mismo período de sesiones, <b>salvo que así lo determinen las dos terceras partes de los integrantes del Congreso.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN V</b> <b>FACULTADES DEL CONGRESO</b></p> <p><b>ARTICULO 64.</b> El Congreso tendrá facultades:</p> <p><b>I. a VII. ...</b></p> <p><b>VIII.</b> Para dictar leyes encaminadas a combatir el <u>alcoholismo en el Estado.</u></p> <p><b>IX. ...</b></p> <p><b>X.</b> Para expedir las Leyes en materia municipal conforme a las cuales los Ayuntamientos aprobarán sus bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, en sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, asegurando la participación ciudadana y vecinal.</p> <p>El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer</p> <p><b>a). al e). ...</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN V</b> <b>FACULTADES DEL CONGRESO</b></p> <p><b>ARTICULO 64.</b> El Congreso tendrá facultades:</p> <p><b>I. a VII. ...</b></p> <p><b>VIII.</b> Para dictar leyes encaminadas a combatir el alcoholismo, <b>la drogadicción y la ludopatía en el Estado.</b></p> <p><b>IX. ...</b></p> <p><b>X.</b> Para expedir las Leyes en materia municipal conforme a las cuales los Ayuntamientos aprobarán sus bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, en sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, asegurando la participación ciudadana y vecinal.</p> <p>El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:</p> <p><b>a). al e). ...</b></p> <p><b>f). Las bases generales para que los órganos de control de los Municipios, previa aprobación de las dos terceras partes de los</b></p>

<p><b>XI. a XVIII. ...</b> <b>XIX.</b> Para aceptar a dichos funcionarios la renuncia de sus respectivos cargos y concederles licencia hasta por dos meses con goce de sueldo y por más de ese tiempo sin goce de él. <b>XIX BIS.</b> Para ratificar o rechazar el nombramiento del Fiscal General de Justicia, así como de los Fiscales Especializados en materia de delitos electorales y anticorrupción, que haga el Ejecutivo del Estado, la cual será por votación de la mayoría simple de los diputados presentes en la sesión;</p> <p><b>XX. a XXI-B. ...</b> <b>XXII.</b> Para discutir, modificar, aprobar o reprobar el Presupuesto de Ingresos, así como el Presupuesto de Egresos del Estado, en vista de <u>los datos que le presente el Ejecutivo.</u></p> <p>... ... ...</p> <p>Tratándose de la aprobación de recursos referidos en el párrafo segundo de la presente fracción que pretendan aplicarse durante ejercicios fiscales que trasciendan el periodo constitucional de la administración en la que se pretendan aprobar, no podrán comprometerse más del treinta por ciento de los recursos aprobados para el capítulo de inversiones en infraestructura para el desarrollo del ejercicio fiscal en que se tome la decisión. La disposición contenida en el párrafo anterior no aplica cuando se trate de afectar recursos para dos o más ejercicios fiscales dentro de un mismo periodo constitucional de gobierno.</p> <p><b>XXIII. a XXIV. ...</b> <b>XXIV-BIS.</b> Para legislar sobre la organización del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y, en general, expedir las leyes que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes del Estado, de los organismos</p>	<p>integrantes del Ayuntamiento, celebren convenios con el órgano de control del Gobierno Estatal y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en materia de responsabilidades administrativas.</p> <p><b>XI. a XVIII. ...</b> <b>XIX.</b> Para aceptar a dichos funcionarios la renuncia de sus respectivos cargos y concederles licencia.</p> <p><b>XIX BIS.</b> Para ratificar o rechazar el nombramiento del Fiscal General de Justicia que haga el Ejecutivo del Estado, así como para objetar el nombramiento de los Fiscales Especializados en materia de delitos electorales y anticorrupción que haga el Fiscal General, las cuales serán por votación de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión;</p> <p><b>XX. a XXI-B. ...</b> <b>XXII.</b> Para discutir, modificar, aprobar o reprobar el Presupuesto de Ingresos, así como el Presupuesto de Egresos del Estado, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo, <b>en forma física y en formatos electrónicos de fácil manejo, incluyendo los anexos y tomos del proyecto del Presupuesto de Egresos.</b></p> <p>... ... ...</p> <p>Tratándose de la aprobación de recursos referidos en el párrafo segundo de la presente fracción que pretendan aplicarse durante ejercicios fiscales que trasciendan el periodo constitucional de la administración en la que se pretendan aprobar, no podrán comprometerse más del treinta por ciento de los recursos aprobados para el capítulo de inversiones en infraestructura para el desarrollo del ejercicio fiscal en que se tome la decisión; <b>siempre y cuando dicho porcentaje no afecte el Balance Presupuestario en términos de la Ley de la materia.</b> Tratándose de la afectación de recursos para dos o más ejercicios fiscales dentro de un mismo periodo constitucional de gobierno, no aplicará el porcentaje previsto en el párrafo anterior, debiendo en todo momento vigilar que no se afecte el Balance Presupuestario.</p> <p><b>XXIII. a XXIV. ...</b> <b>XXIV-BIS.</b> Para legislar en materia de fiscalización superior y, en general, expedir las leyes que normen la gestión, control y</p>
---	--

<p>constitucionalmente autónomos, de los Ayuntamientos y de los entes públicos estatales y municipales, <b>XXIV-BIS A.</b> ... <b>XXV.</b> Para revisar anualmente las Cuentas Públicas del Estado del año anterior que deberá presentar el Ejecutivo y revisar y fiscalizar las de los Municipios que deberán presentar los Ayuntamientos. La revisión de las Cuentas Públicas tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en los presupuestos aprobados en los programas, a cuya ejecución se hayan asignado los recursos presupuestados. Si de la glosa aparecieren discrepancias entre las cantidades ejercidas, las partidas aprobadas y las metas alcanzadas, o no existiere exactitud y justificación de gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.</p> <p><b>XXVI. a XXX.</b> ... <b>XXXI.</b> Para expedir la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos, así como los reglamentos de la misma. La ley y los reglamentos a que se refieren los párrafos anteriores no podrán ser vetados ni necesitarán la promulgación del Ejecutivo para tener vigencia.</p> <p><b>XXXII.</b> Para nombrar y remover, conforme a esta Constitución y a las leyes, a sus funcionarios y empleados, excluidos los del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización que serán nombrados por el titular de esta oficina. <b>XXXII BIS.</b> Para coordinar, vigilar y evaluar el desempeño de las funciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión que deberá ser reconocida y respetada por todas las leyes secundarias, por medio de una Comisión en su seno en los términos que se establezcan en la legislación de la materia. <b>XXXIII. a XXXV.</b> ...</p>	<p><b>evaluación de los Poderes del Estado, de los organismos constitucionalmente autónomos, de los ayuntamientos y de los entes públicos estatales y municipales;</b> <b>XXIV-BIS A.</b> ... <b>XXV.</b> Para revisar anualmente las Cuentas Públicas del Estado del año anterior que deberá presentar el Ejecutivo y revisar y fiscalizar las de los Municipios que deberán presentar los Ayuntamientos. La revisión de las Cuentas Públicas tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en los presupuestos aprobados en los programas, a cuya ejecución se hayan asignado los recursos presupuestados. Si de la glosa aparecieren discrepancias entre las cantidades ejercidas, las partidas aprobadas y las metas alcanzadas, o no existiere exactitud y justificación de gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. <b>El Congreso realizará su labor con base en el informe de resultados que le presente el órgano a que se refiere el artículo 67 de esta Constitución.</b> <b>XXVI. a XXX.</b> ... <b>XXXI.</b> Para expedir la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos, así como los reglamentos de la misma. <b>El titular del Órgano de Control Interno y personal administrativo de nivel subdirector y superiores del Congreso del Estado, serán designados y removidos por al menos las dos terceras partes de sus integrantes.</b> La ley y los reglamentos a que se refieren los párrafos anteriores no podrán ser vetados ni necesitarán la promulgación del Ejecutivo para tener vigencia. <b>XXXII.</b> Para nombrar y remover, conforme a esta Constitución y a las leyes, a sus funcionarios y empleado.</p> <p><b>XXXII BIS. Derogada.</b></p>
---	---

**XXXV BIS.** Para legislar y fomentar la participación ciudadana en el Estado y sus Municipios, regulando las figuras que se estimen convenientes, entre las cuales deberá considerar el referéndum, plebiscito, iniciativa popular y consulta vecinal, como instituciones básicas de participación.

**XXXVI. a XLIII. ...**

**XLIII BIS.** Para instituir Tribunales de lo Contencioso Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública y los particulares, estableciendo las normas para su organización, funcionamiento, procedimiento y los requisitos que deban reunir el o los Magistrados.

Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública del Estado o de los Municipios.

También podrá instituir tribunales de conciliación y arbitraje que conozcan de las controversias que surjan de la aplicación de las leyes que regulen las relaciones entre los trabajadores del servicio civil y los titulares de las entidades y dependencias públicas en que presten sus servicios.

**XLIII BIS-A.** Para designar a los Comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

**XXXIII. a XXXV. ...**

**XXXV BIS.** Para legislar y fomentar la participación ciudadana en el Estado y sus Municipios, regulando las figuras que se estimen convenientes, entre las cuales deberá considerar el referéndum, plebiscito, iniciativa popular y consulta vecinal, como instituciones básicas de participación.

Para efectos de garantizar que la consulta vecinal, la iniciativa popular y la consulta popular puedan llevarse a cabo en los términos y plazos que establece la ley en la materia, los ayuntamientos garantizarán en su presupuesto anual una partida con los recursos suficientes para la operatividad, logística y difusión de la misma.

En tal virtud y para garantizar que las decisiones de la población sobre las prioridades producto de la consulta de dicho presupuesto participativo, tanto el Gobierno del Estado como los Ayuntamientos, deberán establecer al menos el 20% del total del presupuesto para obra en el año fiscal que se programe y cumplir así con la voluntad democrática de los ciudadanos que participen en las consultas y debates que prevé la ley.

**XXXVI. a XLIII. ...**

**XLIII BIS.** Para expedir la ley que regule las atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa, en los términos previstos en esta Constitución; asimismo, para instituir tribunales de conciliación y arbitraje que conozcan de las controversias que surjan de la aplicación de las leyes que regulen las relaciones entre los trabajadores del servicio civil y los titulares de las entidades y dependencias públicas en que presten sus servicios.

**XLIII BIS-A.** Para designar, mediante votación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, a los Comisionados del

<p>Personales, los miembros del consejo consultivo del mismo, legislar en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección a datos personales en Sonora, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación general en la materia y esta Constitución, y promover y difundir en el Estado la cultura de la apertura informativa y del ejercicio de esos derechos, así como establecer criterios generales para la catalogación y conservación de documentos.</p> <p><b>XLIV. ...</b></p>	<p>Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, los miembros del consejo consultivo del mismo, legislar en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección a datos personales en Sonora, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación general en la materia y esta Constitución, y promover y difundir en el Estado la cultura de la apertura informativa y del ejercicio de esos derechos, así como establecer criterios generales para la catalogación y conservación de documentos.</p> <p><b>XLIV. ...</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>SECCION VII</b>  <b><u>DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN</u></b></p> <p><b>ARTICULO 67.</b> El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización se constituye como un órgano del Congreso del Estado dotado de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. Estará encargado de la revisión y fiscalización de los estados financieros y cuentas públicas estatal y municipales. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.</p> <p>Para el señalado efecto, serán atribuciones específicas del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización:</p> <p><b>A). al D).</b> ...</p> <p><b>E).</b> Entregar al pleno del Congreso, por conducto de la Comisión referida en la fracción XXXII BIS del artículo 64 de esta Constitución, los resultados de la revisión de las cuentas públicas a mas tardar el 30 de agosto del año de su presentación, incluyéndose en dicha entrega los dictámenes de la revisión, un apartado correspondiente a la verificación del cumplimiento de los objetivos de los programas y demás información que determinen las leyes secundarias.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO II BIS</b>  <b>DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS</b>  <b>SECCIÓN I</b>  <b>DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN</b></p> <p><b>ARTICULO 67.</b> Los poderes del Estado, los ayuntamientos y demás entidades públicas, independientemente de su naturaleza, son sujetos de fiscalización y estarán obligados, en los términos de esta Constitución y la ley, a rendir cuentas del ejercicio presupuestal que les corresponda.</p> <p>El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización se constituye como un organismo público autónomo, encargado de la revisión y fiscalización de los estados financieros y cuentas públicas estatal y municipales, en los términos establecidos en esta Constitución y la ley de la materia, también implementará acciones de prevención en materia de corrupción. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.</p> <p>Para el señalado efecto, serán atribuciones específicas del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización:</p> <p><b>A). al D).</b> ...</p> <p><b>E).</b> Entregar al pleno del Congreso, el informe de resultados de la revisión de las cuentas públicas, a más tardar el 30 de agosto del año de su presentación, incluyéndose en dicha entrega los dictámenes de la revisión, un apartado correspondiente a la verificación del cumplimiento de los objetivos de los programas y demás información que determinen las leyes secundarias.</p> <p><b>Para coordinar la entrega del informe de resultados y demás</b></p>

<p><b>F).</b> ...</p> <p><b>G).</b> Determinar y ejecutar las medidas conducentes a la recuperación de los daños y perjuicios que afecten al erario por el uso indebido o equivocado de recursos públicos, fincando directamente a los responsables las indemnizaciones correspondientes y, en su caso, denunciar ante las autoridades competentes las responsabilidades administrativas y el o los delitos que presumiblemente aparezcan cometidos; de todo lo cual informará al pleno del Congreso por conducto de la Comisión referida en la fracción XXXII BIS del artículo 64 de esta Constitución.</p> <p><b>H).</b> Ejercer las atribuciones referidas a los apartados D, F y G con respecto a los ejercicios presupuestales de los organismos constitucionalmente autónomos solamente en los casos en que, a propuesta de la Comisión referida en la fracción XXXII BIS del artículo 64 de esta Constitución, lo determine el pleno del Congreso por votación calificada de dos tercios de los diputados presentes en la sesión.</p> <p>El Auditor Mayor y los auditores adjuntos del Instituto Superior de</p>	<p>información que deba remitir el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización al Congreso del Estado, éste deberá integrar una Comisión en su seno, en los términos que se establezca en la legislación de la materia.</p> <p><b>F).</b> ...</p> <p><b>G).</b> Determinar y ejecutar las medidas conducentes a la recuperación de los daños y perjuicios que afecten al erario por el uso indebido o equivocado de recursos públicos, fincando directamente a los responsables las indemnizaciones correspondientes, cuando sea detectada esta situación en el ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras, sin perjuicio de promover las responsabilidades administrativas que resulten ante el órgano de control interno competente. Asimismo, derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en los términos de esta Constitución y la ley.</p> <p><b>H).</b> Ejercer las atribuciones referidas a los apartados D, F y G con respecto a los ejercicios presupuestales de los organismos constitucionalmente autónomos.</p> <p>El Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización será designado por las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente, y los Auditores Adjuntos por más de la mitad de los diputados presentes en la sesión correspondiente, a propuesta del Auditor Mayor.</p> <p>El Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo integrará una propuesta de al menos cinco candidatos al cargo de Auditor Mayor y la remitirá al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien integrará una terna que enviará al Congreso del Estado para su designación.</p> <p>Si el Titular del Poder Ejecutivo no recibe la lista en el plazo de treinta días a partir de la ausencia definitiva del Auditor Mayor, enviará libremente al Congreso del Estado una terna y designará provisionalmente al Auditor Mayor quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el Auditor Mayor designado podrá formar parte de la terna.</p> <p>El Auditor Mayor y los auditores adjuntos durarán en su encargo</p>
---	---



<p>Auditoría y Fiscalización, durarán en su encargo siete años y podrán ser nombrados, nuevamente, por una sola vez. Dichos funcionarios solo podrán ser removidos por el Congreso por las causas graves que al efecto se determinen en la ley y por la misma mayoría que cada uno requiere para su nombramiento.</p> <p>La ley definirá formas alternativas de designación del Auditor Mayor <u>del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización</u> para la hipótesis de que, en un plazo breve, no se reúna la votación cameral requerida para dicho nombramiento. La falta de votos para el nombramiento referido nunca podrá ocasionar la permanencia en el encargo de quien haya ejercido la función en el periodo que concluye.</p> <p>Derogado.</p> <p>La ley especificará los requisitos que deberán reunir para su nombramiento el Auditor Mayor y los auditores adjuntos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, así como las atribuciones que les correspondan.</p> <p>Ni el Auditor Mayor ni los auditores adjuntos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización podrán formar parte, durante el ejercicio de sus encargos, de partido o asociación política algunos, ni desempeñar empleo, cargo o comisión distintos, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.</p> <p>Tanto las oficinas públicas estatales y municipales como los particulares que ejerzan o hayan ejercido recursos públicos, deberán coadyuvar en lo que resulte legalmente necesario para el buen ejercicio de las funciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.</p>	<p><b>siete años y podrán ser nombrados, nuevamente, por una sola vez.</b> Dichos funcionarios solo podrán ser removidos por el Congreso por las causas graves que al efecto se determinen en la ley y por la misma mayoría que cada uno requiere para su nombramiento.</p> <p>La ley definirá formas alternativas de designación del Auditor Mayor <b>y de los auditores adjuntos</b> del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización para la hipótesis de que, en un plazo breve, no se reúna la votación cameral requerida para dicho nombramiento. La falta de votos para el nombramiento referido nunca podrá ocasionar la permanencia en el encargo de quien haya ejercido la función en el periodo que concluye.</p> <p><b>El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización contará con un Órgano de Control Interno cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión del pleno del Congreso del Estado correspondiente, a propuesta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, por un término de 4 años, pudiendo ser ratificado para un periodo adicional. Si al concluir el primer periodo, el Congreso del Estado no ha realizado un nuevo nombramiento, se entenderá ratificado de manera tácita.</b></p> <p><b>El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización asignará a su Órgano de Control Interno el 3% de su presupuesto anual para la operación y funcionamiento de su estructura, entre ellas las áreas de auditoría interna, investigación y substanciación, cuyos titulares serán designados por el Titular del Órgano de Control.</b></p> <p><b>El Titular del Órgano de Control del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización presentará a la Comisión de Fiscalización, en la primera quincena del mes de septiembre de cada año, un informe que contenga los resultados del ejercicio de su encargo.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO III                  PODER EJECUTIVO                  SECCIÓN I                  ELECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO</b></p> <p><b>ARTICULO 70.</b> Para ser Gobernador del Estado se requiere:  <b>I. a IV. ...</b>  <b>V.</b> No haber sido Magistrado del Supremo Tribunal o del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Fiscal General de Justicia del Estado, Fiscal Especializado, Secretario o Subsecretario, ni militar en servicio activo ni</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO III                  PODER EJECUTIVO                  SECCIÓN I                  ELECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO</b></p> <p><b>ARTICULO 70.</b> Para ser Gobernador del Estado se requiere:  <b>I. a IV. ...</b>  <b>V.</b> <b>No tener el carácter de servidor público en los seis meses inmediatamente anteriores al día de la elección, salvo que se trate de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o de</b></p>

<p>haber tenido mando de fuerzas dentro del Estado, en los seis meses inmediatamente anteriores al día de la elección.</p> <p><b>VI.</b> ...</p> <p><b>VII.</b> No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, aún cuando se haya cumplido la condena o extinguido la pena.</p> <p><b>VIII.</b> ...</p>	<p><b>servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal.</b></p> <p><b>VI.</b> ...</p> <p><b>VII.</b> No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, <b>salvo que el antecedente penal hubiere prescrito.</b></p> <p><b>VIII.</b> ...</p>
<p><b>ARTICULO 79.</b> Son facultades y obligaciones del Gobernador:  <b>I. a VII.</b> ...</p> <p><b>VIII.</b> Asistir a rendir ante el Congreso, el informe a que se refiere el Artículo 46 de esta Constitución.</p> <p><b>IX. a XXIII.</b> ...</p> <p><b>XXIV.</b> Nombrar y remover libremente a los Secretarios y Subsecretarios, cuando no opte por un gobierno de coalición. <u>Así como nombrar al Fiscal General de Justicia y fiscales especializados, sometiéndolo a la ratificación del Congreso del Estado.</u></p> <p><b>XXV. a XLI.</b> ...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p><b>ARTICULO 79.</b> Son facultades y obligaciones del Gobernador:  <b>I. a VII.</b> ...</p> <p><b>VIII.</b> Asistir a rendir ante el Congreso, por sí o de manera extraordinaria y, previo acuerdo, por conducto del Secretario de Gobierno o de quien designe para tal efecto, el informe a que se refiere el Artículo 46 de esta Constitución.</p> <p><b>IX. a XXIII.</b> ...</p> <p><b>XXIV.</b> Nombrar y remover libremente a los Secretarios y Subsecretarios, cuando no opte por un gobierno de coalición. <b>Integrar y remitir al Congreso del Estado la terna a que se refiere el artículo 98 de esta Constitución.</b></p> <p><b>XXV. a XLI.</b> ...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN II  HACIENDA DEL ESTADO</b></p> <p><b>ARTICULO 88.</b> Los funcionarios y empleados de Hacienda, que tengan manejo de caudales públicos, <u>otorgarán previamente, ante el Ejecutivo, fianza suficiente para garantizarlo, de acuerdo con la Ley respectiva.</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN II  HACIENDA DEL ESTADO</b></p> <p><b>ARTICULO 88.</b> Los funcionarios y empleados de Hacienda, que tengan manejo de caudales públicos, <b>serán responsables directos de su uso, de acuerdo con la Ley respectiva.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN III  INSTRUCCIÓN PUBLICA</b></p> <p><b>ARTICULO 89.</b> La educación pública, quedará bajo la dirección del Ejecutivo del Estado <u>y sujeta a las leyes y reglamentos correspondientes.</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN III  INSTRUCCIÓN PUBLICA</b></p> <p><b>ARTICULO 89.</b> La educación pública, quedará bajo la dirección del Ejecutivo del Estado, <b>por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura,</b> y sujeta a las leyes y reglamentos correspondientes.</p>
<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN IV  MINISTERIO PUBLICO</b></p> <p><b>ARTICULO 96.</b> El Ministerio Público, como Institución de buena fe y en su carácter de representante de los intereses de la sociedad, tendrá las siguientes atribuciones:</p> <p><b>I. a VII.</b> ...</p> <p><b>VIII.</b> Informar al Supremo Tribunal sobre los defectos que encontrara en</p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN IV  MINISTERIO PUBLICO</b></p> <p><b>ARTICULO 96.</b> El Ministerio Público, como Institución de buena fe y en su carácter de representante de los intereses de la sociedad, tendrá las siguientes atribuciones:</p> <p><b>I. a VII.</b> ...</p> <p><b>VIII. Se deroga</b></p>

<p>las leyes, así como de las irregularidades o deficiencias que observara en las autoridades encargadas de aplicarlas.  <b>IX. a X. ...</b></p>	<p><b>IX. a X. ...</b></p>
<p><b>Artículo 97. ...</b>          ...          ...          ...          ...</p> <p>El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Congreso del Estado por el voto de la mayoría simple de los miembros presentes en la sesión, en el plazo que fije la ley; si el Congreso del Estado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción.</p>	<p><b>Artículo 97. ...</b>          ...          ...          ...          ...</p> <p>El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley y su respectiva reglamentación. La aplicación de los criterios de oportunidad deberá ser autorizada por el Fiscal General o por el servidor público en quien se delegue esta facultad.</p> <p>El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos <b>realizados por el Fiscal General de Justicia del Estado</b>, podrán ser objetados por el Congreso del Estado por el voto <b>de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión</b>, en el plazo que fije la ley; si el Congreso no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción.</p>
<p><b>Artículo 98.</b> El Fiscal General de Justicia del Estado será nombrado por el Gobernador del Estado dentro de los primeros treinta días del inicio de su administración o, en su caso, dentro de los primeros treinta días contados a partir de la salida, por cualquier circunstancia, de quien desempeñe dicho cargo. En todo caso, el nombramiento del Fiscal deberá ser ratificado por el Congreso del Estado por votación de la mayoría simple de los diputados.</p> <p>Si por cualquier motivo no se ratifica o es rechazado por el Congreso el nombramiento que formule el Ejecutivo, o no se presenta el ratificado al desempeño de su cargo en un plazo de cinco días hábiles, el Gobernador nombrará uno provisional que no podrá ser la misma persona cuyo nombramiento haya rechazado o denegado el Congreso. El Fiscal General de Justicia del Estado Provisional durará en su cargo hasta seis meses, plazo durante el cual el Ejecutivo podrá presentar las propuestas que sean necesarias para que el Congreso decida en definitiva.</p> <p>A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General de Justicia del Estado, el Ejecutivo del Estado integrará una propuesta de cinco personas. En la integración de la propuesta, podrá tomar en cuenta las propuestas del Consejo Estatal de Seguridad Pública. El Congreso del Estado por</p>	<p><b>Artículo 98.</b> El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo siguiente:</p> <p><b>I. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General de Justicia del Estado, el Congreso del Estado contará con veinte días para integrar una lista de al menos cinco candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.</b></p> <p><b>El Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, una vez recibida la lista referida en el párrafo anterior, contará con diez días para validar la lista de candidatos o en su caso, remitir sus observaciones al Congreso del Estado para que éste proceda a formular una nueva propuesta dentro del mismo plazo referido en el párrafo anterior, respecto de los candidatos que no hayan sido validados.</b></p> <p><b>Una vez que el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado valide la lista propuesta por el Congreso del Estado, la remitirá al titular del Poder Ejecutivo.</b></p> <p><b>Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo de treinta días a partir de la ausencia definitiva del Fiscal General de Justicia del Estado,</b></p>

mayoría simple nombrará de entre las propuestas al Fiscal General de Justicia del Estado.

El Ejecutivo designará provisionalmente al Fiscal General de Justicia del Estado, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el Fiscal General de Justicia del Estado designado podrá formar parte de la terna.

El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo del Estado cuando no se atienda al interés social o por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General de Justicia del Estado será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso del Estado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.

En los recesos del Congreso del Estado, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la remoción del Fiscal General de Justicia del Estado.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

El Fiscal General de Justicia del Estado presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado un informe de actividades. Comparecerá ante el Congreso del Estado cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.

El Fiscal General de Justicia del Estado y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.

El Fiscal General de Justicia del Estado durará en su encargo 7 años y los fiscales especializados durarán hasta 5 años.

enviará libremente al Congreso del Estado una terna y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el Fiscal General designado podrá formar parte de la terna.

**II.** Una vez que el Ejecutivo reciba la lista validada por el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Congreso del Estado.

**III.** El Congreso del Estado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General de Justicia del Estado con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días.

En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Congreso del Estado tendrá diez días para designar al Fiscal General de entre los candidatos validados por el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de la lista que señala la fracción I.

Si el Congreso del Estado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará al Fiscal General de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva.

**IV.** El Fiscal General de Justicia del Estado podrá ser removido por el Ejecutivo Estatal por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría simple de los miembros presentes del Congreso del Estado dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso del Estado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.

**V.** En los recesos del Congreso del Estado, la Diputación Permanente lo convocará de inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la remoción del Fiscal General de Justicia del Estado.

**VI.** Las ausencias del Fiscal General de Justicia del Estado serán suplidas en los términos que determine la ley.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la

	<p>carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.</p> <p>El Fiscal General de Justicia del Estado presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado un informe de actividades. Comparecerá ante el Congreso del Estado cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.</p> <p>El Fiscal General de Justicia del Estado y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.</p>
<p><b>Artículo 100.</b> El Fiscal General de Justicia del Estado y los fiscales especializados rendirán la protesta de ley ante el Presidente del Congreso y el Titular del Poder Ejecutivo.</p>	<p><b>Artículo 100.</b> El Fiscal General de Justicia del Estado rendirá la protesta de ley ante el Presidente del Congreso y el Titular del Poder Ejecutivo.</p>
<p><b>ARTICULO 101.</b> La Policía Estatal Investigadora, como auxiliar directo del Ministerio Público y conforme a las instrucciones que se le dicten, desarrollará las diligencias que deban practicarse durante la averiguación previa y ejecutará las órdenes de aprehensión, los cateos y otros mandamientos que emita la autoridad judicial.</p>	<p><b>ARTICULO 101.</b> La Policía Estatal Investigadora, como auxiliar directo del Ministerio Público, en coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad pública conforme a las instrucciones que se le dicten, desarrollará las diligencias que deban practicarse durante la investigación y ejecutará las órdenes de aprehensión, los cateos y otros mandamientos que emita la autoridad judicial con respeto irrestricto a los derechos humanos.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO IV PODER JUDICIAL</b></p> <p><b>ARTÍCULO 120.</b> El Consejo del Poder Judicial del Estado de Sonora funcionará en Pleno y se integrará hasta por los siguientes siete Consejeros:</p> <p><b>I. a V. ...</b></p> <p><b>VI.</b> Dos Consejeros designados por el Congreso del Estado mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.</p> <p>Los consejeros a que se refieren las fracciones III y VI de este artículo deberán ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos, contar con título de Licenciado en Derecho expedido legalmente mínimo siete años previos a la designación, asimismo contar con un mínimo de tres años de ejercicio profesional, gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito intencional <u>con sanción privativa de libertad mayor de un año, y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades.</u> En el caso del Consejero designado por el Supremo Tribunal de Justicia, deberá además gozar de reconocimiento en</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO IV PODER JUDICIAL</b></p> <p><b>ARTÍCULO 120.</b> El Consejo del Poder Judicial del Estado de Sonora funcionará en Pleno y se integrará hasta por los siguientes siete Consejeros:</p> <p><b>I. a V. ...</b></p> <p><b>VI.</b> Dos Consejeros designados por el Congreso del Estado mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.</p> <p>Los consejeros a que se refieren las fracciones III y VI de este artículo deberán ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos, contar con título de Licenciado en Derecho expedido legalmente mínimo siete años previos a la designación, asimismo contar con un mínimo de tres años de ejercicio profesional, gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito intencional <u>y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades.</u> En el caso del Consejero designado por el Supremo Tribunal de Justicia, deberá además gozar de</p>

<p>el ámbito judicial y tener en el desempeño de su cargo por lo menos dos años con anterioridad a la designación.                  En los casos de las fracciones III y VI de este precepto, no podrán ser designados consejeros quienes hayan ejercido el cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia                  Para entrar al ejercicio del cargo, los consejeros del Poder Judicial rendirán protesta de ley ante el Supremo Tribunal de Justicia.                  El Presidente del Consejo y el diverso Magistrado de dicho órgano <u>conservarán su calidad de consejeros</u> mientras se encuentren en el ejercicio de sus cargos, los demás integrantes del Consejo serán designados por un período de seis años y no podrán ser reelectos.                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...</p>	<p>reconocimiento en el ámbito judicial y tener en el desempeño de su cargo por lo menos dos años con anterioridad a la designación.                  En los casos de las fracciones III y VI de este precepto, no podrán ser designados consejeros quienes hayan ejercido el cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia                  Para entrar al ejercicio del cargo, los consejeros del Poder Judicial rendirán protesta de ley ante el Supremo Tribunal de Justicia.                  El Presidente del Consejo, el diverso Magistrado de dicho órgano <b>y el Fiscal General de Justicia del Estado</b> conservarán su calidad de consejeros mientras se encuentren en el ejercicio de sus cargos, los demás integrantes del Consejo serán designados por un período de seis años y no podrán ser reelectos.                  ...                  ...                  ...                  ...                  ...</p>
	<p><b>Artículo 127 BIS.</b> La Comisión Estatal de Derechos Humanos será un organismo público, de carácter autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos establecidos por el orden jurídico mexicano, los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que nuestro país haya suscrito, así como combatir toda forma de discriminación y exclusión, consecuencia de un acto de autoridad a cualquier persona o grupo social.                  La Comisión tiene por objeto:  <b>I.</b> Estudiar, promover, divulgar y proteger, con base en los principios que rigen su actuación, los Derechos Humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio del Estado;  <b>II.</b> Contribuir al fortalecimiento de las convicciones humanistas, sociales y democráticas del estado constitucional de derecho; y  <b>III.</b> Coadyuvar al establecimiento de las garantías necesarias para asegurar que los Derechos Humanos de las personas que se encuentren en el territorio del Estado de Sonora, sean reales, equitativos y efectivos.                  La Comisión se integrará por un Presidente, una Secretaría Ejecutiva, Visitadores Generales, así como Visitadores Adjuntos y el</p>

	<p>personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.                  La Comisión, para el mejor desempeño de sus responsabilidades, contará con un Consejo Consultivo, el cual será electo en los términos de la Ley reglamentaria que para sus alcances y efectos legales el Congreso apruebe.                  El Congreso del Estado, aprobará una Ley complementaria en materia de Derechos Humanos, que regule el funcionamiento y actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el Estado de Sonora.                  El Presidente de la Comisión deberá reunir para su designación los siguientes requisitos:  <b>A).</b> Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  <b>B).</b> No haber sido sentenciado por la comisión de delitos dolosos;  <b>C).</b> Poseer en la fecha de su nombramiento con antigüedad mínima de cinco años, título profesional legalmente expedido que lo acredite como licenciado en derecho o demostrada capacidad y experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos;  <b>D).</b> No haber sido Titular del Poder Ejecutivo, Secretario, Diputado Local, Presidente Municipal, Fiscal General de Del Estado, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, un año previo a su designación;  <b>E).</b> Gozar de reconocido prestigio profesional, personal en la entidad; y  <b>F).</b> No haber participado como candidato a puesto de elección popular, ser o haber sido presidente de algún partido político.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITULO QUINTO                  MUNICIPIO LIBRE                  CAPITULO I                  INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS</b></p> <p><b>ARTICULO 132.</b> Para ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor de un Ayuntamiento, se requiere:  <b>I. a V. ...</b>  <b>VI.</b> No haber sido magistrado o suplente común del Tribunal Estatal Electoral, ni consejero electoral propietario o suplente común de ningún organismo electoral, a menos que no haya ejercido o se separe del cargo dentro del plazo que establezca la ley.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO QUINTO                  MUNICIPIO LIBRE                  CAPITULO I                  INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS</b></p> <p><b>ARTICULO 132.</b> Para ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor de un Ayuntamiento, se requiere:  <b>I. a V. ...</b>  <b>VI.</b> No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido o se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se trate de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier</p>

	<p>naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal.</p>
<p><b>TITULO SEXTO</b>  <b>RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS</b></p>	<p><b>TITULO SEXTO</b>  <b>RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS</b></p>
<p><b>Artículo 143.</b> Se reputará como servidor público para los efectos de este título y será responsable por los actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal o municipal, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, así como los servidores del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Consejeros Distritales Electorales, Consejeros Municipales Electorales, del Tribunal Estatal Electoral y los del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora.</p> <p>En los términos y condiciones que establezca la Ley respectiva los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.</p>	<p><b>Artículo 143.</b> Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título Sexto se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo o en la Administración Pública Estatal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.</p> <p>En los términos y condiciones que establezca la Ley respectiva los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.</p>
<p><b>Artículo 143 A.</b> El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:</p> <p><b>I.</b> El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización; de la Fiscalía Especializada Anticorrupción; de la Secretaría del Ejecutivo del Estado responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Contencioso Administrativo; el presidente del organismo garante que establece el artículo 2, Apartado A de esta Constitución; <u>tres diputados del Congreso del Estado; así como por un representante del Consejo del Poder Judicial del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana;</u></p> <p><b>II. a III. ...</b></p>	<p><b>Artículo 143 A.</b> El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:</p> <p><b>I.</b> El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización; de la Fiscalía Especializada Anticorrupción; de la Secretaría del Ejecutivo del Estado responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Contencioso Administrativo; el presidente del organismo garante que establece el artículo 2, Apartado A de esta Constitución; <b>así como por un representante del Consejo del Poder Judicial del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana;</b></p> <p><b>II. a III. ...</b></p>
<p><b>Artículo 143 B.</b> Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo</p>	<p><b>Artículo 143 B.</b> Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a</p>



<p>siguiente:  <b>I. a III. ...</b>  <b>IV.</b> El Tribunal de lo Contencioso Administrativo impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, estatales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública <u>o a los entes públicos, federales, locales o municipales</u>, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. La ley establecerá los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>lo siguiente:  <b>I. a III. ...</b>  <b>IV.</b> El Tribunal de lo Contencioso Administrativo impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, estatales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes <b>públicos estatales o municipales</b>, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. La ley establecerá los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p><b>ARTICULO 144.</b> El Congreso expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos mencionados en el presente Título y las normas para determinar y sancionar sus actos u omisiones que generen alguno de los siguientes tipos de responsabilidad:</p> <p><b>I.</b> Responsabilidad Política, determinada mediante Juicio Político, cuando el servidor público, en el ejercicio de sus funciones, incurra en actos u omisiones graves que redunden en perjuicio de los intereses públicos</p>	<p><b>ARTICULO 144.</b> El Congreso expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos mencionados en el presente Título <b>así como las leyes en materia de auditoría, fiscalización y combate a la corrupción que establezcan</b> las normas precisas para determinar y sancionar sus actos u omisiones que generen alguno de los siguientes tipos de responsabilidad:</p> <p><b>I.</b> Responsabilidad Política, determinada mediante Juicio Político, cuando el servidor público, en el ejercicio de sus funciones, incurra en actos u omisiones graves que redunden en perjuicio de los</p>

<p>fundamentales o de su buen despacho. No procede el Juicio Político por la mera expresión de ideas.                  Solo podrán ser sujetos a juicio político, los diputados al Congreso del Estado, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los magistrados de cualquier órgano jurisdiccional o administrativo, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Fiscal General de Justicia y los Fiscales, los secretarios y subsecretarios, los jueces de primera instancia, los agentes del ministerio público, presidente de la Juntas Local de Conciliación y Arbitraje y presidentes de las juntas especiales, los consejeros estatales electorales, el secretario del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los magistrados y secretario general del Tribunal Estatal Electoral, los comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, presidentes municipales, síndicos, regidores, secretarios y tesoreros de los Ayuntamientos, así como los directores generales y sus equivalentes de las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas, fideicomisos públicos y organismos descentralizados del Estado y de los municipios.                  Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y, en su caso, la inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.</p> <p>II. ...</p> <p>III. Responsabilidad Administrativa, exigible a los servidores públicos cuando éstos incurran en actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.</p> <p>...</p>	<p>intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el Juicio Político por la mera expresión de ideas.                  Solo podrán ser sujetos a juicio político, los diputados al Congreso del Estado, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los magistrados de cualquier órgano jurisdiccional o administrativo, <b>el Fiscal General de Justicia y los Fiscales Especializados</b>, los secretarios y subsecretarios, los jueces de primera instancia, los agentes del ministerio público, quienes presidan los tribunales de Conciliación y Arbitraje, <b>los consejeros estatales electorales</b>, el secretario del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los magistrados y secretario general del Tribunal Estatal Electoral, los comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, presidentes municipales, síndicos, regidores, secretarios y tesoreros de los Ayuntamientos, así como los directores generales y sus equivalentes de las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas, fideicomisos públicos y organismos descentralizados del Estado y de los municipios.                  Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y, en su caso, la inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.</p> <p>II. ...</p> <p>III. Responsabilidad Administrativa, exigible a los servidores públicos cuando éstos incurran en actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, <b>incluyendo sin limitar, el manejo indebido de recursos públicos y de la deuda pública.</b></p> <p>...</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITULO SÉPTIMO                  PREVENCIÓNES GENERALES</b></p> <p><b>ARTICULO 150-A.</b> En el Estado, las mujeres tienen los mismos derechos civiles y políticos que los hombres; podrán ser electas y tendrán derecho a voto en cualquier elección, siempre que reúnan los requisitos que señalan esta Constitución y las leyes aplicables.                  Los partidos políticos que participen en los procesos electorales locales para integración del Congreso del Estado, deberán garantizar la paridad</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO SÉPTIMO                  PREVENCIÓNES GENERALES</b></p> <p><b>ARTICULO 150-A.</b> En el Estado, las mujeres <b>y los hombres</b> tienen los mismos derechos civiles y políticos; de manera igualitaria podrán ser electas y electos y tendrán derecho a voto en cualquier elección, siempre que reúnan los requisitos que señalan esta Constitución y las leyes aplicables.                  Los partidos políticos <b>o coaliciones deberán garantizar en la</b></p>

<p>entre los géneros en la totalidad de sus candidaturas, debiendo sus fórmulas estar compuestas por candidatos del mismo género.</p> <p>En los procesos electorales municipales que se rigen por el principio de mayoría relativa, los partidos políticos promoverán, en términos de equidad, que se postule una proporción paritaria de candidatos de ambos géneros. Se exceptúa de lo anterior, el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean resultado de un proceso de elección interna de democracia directa. Las planillas deberán integrarse por candidatos propietarios y suplentes del mismo género.</p> <p><u>Las listas de representación proporcional a cargos de elección popular a nivel estatal y municipal de propietarios y suplentes, se conformarán y asignarán en fórmulas y planillas, bajo el principio de alternancia de ambos géneros, hasta agotar el derecho de cada partido político.</u></p>	<p>postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayoría relativa, la paridad entre los géneros en la totalidad de sus candidaturas, debiendo sus fórmulas de propietario y suplente estar compuestas por candidatos del mismo género en la elección que se trate. En las listas de fórmulas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional deberá observarse la paridad entre los géneros y se integrarán por fórmulas de género distintos en forma alternada en la elección correspondiente.</p> <p>En los procesos electorales municipales que se rigen por el principio de mayoría relativa se observará la paridad horizontal y vertical para ambos géneros. Las planillas deberán integrarse por candidatos propietarios y suplentes del mismo género.</p> <p>Se entenderá por paridad de género vertical en la postulación de los candidatos de planillas de ayuntamientos, la obligación de los partidos políticos o coaliciones, de salvaguardar en todo momento la paridad y la igualdad entre los géneros. En las candidaturas que integren cada planilla de Ayuntamiento deberá alternarse el género en la elección respectiva.</p> <p>Se entenderá por paridad de género horizontal la obligación de los partidos políticos y coaliciones para salvaguardar la postulación de 50% de candidatas y 50% de candidatos, respeto de la totalidad de candidaturas a presidentes municipales en el proceso electoral correspondiente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITULO OCTAVO</b>  <b>REFORMA E INVOLABILIDAD DE ESTA CONSTITUCIÓN</b></p> <p><b>ARTICULO 163.</b> Esta Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que hayan sido acordadas por las dos terceras partes de los miembros de un Congreso y aprobadas por la mayoría del número total de los Ayuntamientos del Estado.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO OCTAVO</b>  <b>REFORMA E INVOLABILIDAD DE ESTA CONSTITUCIÓN</b></p> <p><b>ARTICULO 163.</b> Esta Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que hayan sido acordadas por las dos terceras partes de los miembros de un Congreso y aprobadas por la mayoría del número total de los Ayuntamientos del Estado.</p> <p>Los ayuntamientos deberán pronunciarse a favor o en contra de las adiciones o reformas a la Constitución dentro del término de 60 días a partir de que el Congreso se las notifique.</p>

<b>COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE TABASCO</b>	
<b>TEXTO ANTERIOR</b>	<b>TEXTO VIGENTE</b>
<b>TITULO II</b> <b>DE LA SOBERANÍA Y DE LA FORMA DE GOBIERNO</b> <b>CAPITULO I</b> <b>DE LA SOBERANÍA DEL ESTADO</b>	<b>TITULO II</b> <b>DE LA SOBERANÍA Y DE LA FORMA DE GOBIERNO</b> <b>CAPITULO I</b> <b>DE LA SOBERANÍA DEL ESTADO</b>
<b>ARTÍCULO 9. ...</b> ... La Renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los gobiernos municipales, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, a través del sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, cuyo ejercicio está garantizado por esta Constitución. Dicha renovación se sujetará a las siguientes bases: <b>APARTADO A.</b> De los Partidos Políticos. <b>I. a VII. ...</b> <b>VIII.</b> El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro y alcancen el tres por ciento de la votación en la elección para Gobernador o de Diputados por el principio de mayoría relativa inmediata anterior, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico, el que se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: <b>a).</b> El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del estado por el sesenta y cinco por ciento <u>del salario mínimo diario vigente para el estado</u> . El 30% de la cantidad total que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante se distribuirá entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de Diputados inmediata anterior; <b>b). al c). ...</b>	<b>ARTÍCULO 9. ...</b> ... La Renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los gobiernos municipales, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, a través del sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, cuyo ejercicio está garantizado por esta Constitución. Dicha renovación se sujetará a las siguientes bases: <b>APARTADO A.</b> De los Partidos Políticos. <b>I. a VII. ...</b> <b>VIII.</b> El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro y alcancen el tres por ciento de la votación en la elección para Gobernador o de Diputados por el principio de mayoría relativa inmediata anterior, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico, el que se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: <b>a).</b> El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del estado por el sesenta y cinco por ciento <b>del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización</b> . El 30% de la cantidad total que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante se distribuirá entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de Diputados inmediata anterior; <b>b). al c). ...</b> <b>VIII-Bis. a X. ...</b> <b>APARTADO B. al APARTADO D. ...</b>

<p>VIII-Bis. a X. ...  <b>APARTADO B. al APARTADO D. ...</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>TITULO III                  DEL PODER LEGISLATIVO                  CAPITULO II                  DE LA ELECCIÓN</b></p> <p><b>Artículo 15.</b> Para ser Diputado se requiere:  <b>I. a II. ...</b>  <b>III.</b> No estar en servicio activo en el Ejército ni tener mando de algún cuerpo policial en el distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días naturales antes de la fecha de la elección;                  No ser titular de alguna dependencia de la Administración Pública Estatal, ni Fiscal General del Estado de Tabasco; ni Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, <u>del Tribunal de lo Contencioso Administrativo</u>, o del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; ni Presidente Municipal, regidor, secretario de ayuntamiento o titular de alguna dirección en las administraciones municipales, ni servidor público federal con rango de Director General o superior, a menos que permanezca separado definitivamente de sus funciones desde noventa días naturales antes de la fecha de la elección;                  El Gobernador del Estado no podrá ser electo, durante el periodo de su encargo, aún cuando se separe del puesto.  <b>IV. a V. ...</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO III                  DEL PODER LEGISLATIVO                  CAPITULO II                  DE LA ELECCIÓN</b></p> <p><b>Artículo 15.</b> Para ser Diputado se requiere:  <b>I. a II. ...</b>  <b>III.</b> No estar en servicio activo en el Ejército ni tener mando de algún cuerpo policial en el distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días naturales antes de la fecha de la elección; No ser titular de alguna dependencia de la Administración Pública Estatal, ni Fiscal General del Estado de Tabasco; ni Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, <b>del Tribunal de Justicia Administrativa</b> o del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; ni Presidente Municipal, regidor, concejal, secretario de ayuntamiento o titular de alguna dirección en las administraciones municipales, ni servidor público federal con rango de Director General o superior, a menos que permanezca separado definitivamente de sus funciones desde noventa días naturales antes de la fecha de la elección;                  El Gobernador del Estado no podrá ser electo, durante el periodo de su encargo, aún cuando se separe del puesto.  <b>IV. a V. ...</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO III                  INSTALACIÓN Y PERIODO DE SESIONES DEL CONGRESO</b></p> <p><b>Artículo 26.</b> El Congreso declarará al examinar y calificar la cuenta pública, si las cantidades percibidas y gastadas están de acuerdo con las partidas presupuestales respectivas, <u>si los gastos están justificados o ha lugar a exigir responsabilidades.</u>                  Para tales efectos, el Congreso tiene facultades para practicar las investigaciones que considere procedentes.                  La resolución que emita el Congreso al calificar la cuenta pública, es inatacable.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO III                  INSTALACIÓN Y PERIODO DE SESIONES DEL CONGRESO</b></p> <p><b>Artículo 26.</b> El Congreso declarará al examinar y calificar la cuenta pública, si las cantidades percibidas y gastadas están de acuerdo con las partidas presupuestales respectivas; <b>y si los gastos están justificados.</b>                  Para tales efectos, el Congreso tiene facultades para practicar las investigaciones que considere procedentes, <b>por conducto del Órgano Superior de Fiscalización.</b>                  La resolución que emita el Congreso al calificar la cuenta pública, es inatacable.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO V                  FACULTADES DEL CONGRESO</b></p> <p><b>Artículo 36.</b> Son facultades del Congreso:  <b>I. a XI. ...</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO V                  FACULTADES DEL CONGRESO</b></p> <p><b>Artículo 36.</b> Son facultades del Congreso:  <b>I. a XI. ...</b></p>

**XII.** Dar bases conforme a las cuales el Ejecutivo y los Ayuntamientos puedan celebrar financiamientos a nombre del Estado y de los Municipios, respectivamente; aprobar esos mismos financiamientos, cuyo plazo sea superior a un año y reconocer e instruir el pago de la deuda del Estado y de los Municipios contraída. Dichas bases, se fijarán conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Ejecutivo y los Municipios podrán contratar financiamiento cuya vigencia no sea mayor a un año, sin requerir autorización expresa del Congreso. Invariablemente deberán sujetarse a las siguientes bases:

**a).** DEROGADA

**b).** El límite máximo de este tipo de financiamientos que podrá contratar el Gobierno del Estado y los Municipios será de 15% de sus ingresos ordinarios determinados en sus leyes de ingresos vigentes.

Se entenderá por Ingresos Ordinarios: la suma de los Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos así como las Participaciones Federales y cualquier otro ingreso de carácter federal que no tenga un uso o fin específico.

**c).** No se afectará en garantía o en pago el derecho a recibir participaciones derivadas de la coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o derecho.

**d).** El financiamiento así contratado podrá ser refinanciado o reestructurado a efecto de mejorar las condiciones del empréstito, en los términos y bajo los límites que la Ley determine.

**e).** El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos deberán informar al Congreso de Estado la contratación, liquidación y conclusión del financiamiento en un plazo que no exceda de 30 días naturales siguientes de cada uno de los actos correspondientes.

**f).** El incumplimiento de las disposiciones anteriores dará lugar a la aplicación de responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público.

Adicionalmente el Ejecutivo y los Municipios se sujetaran a las bases que al efecto se establezcan en las Leyes secundarias.

No se entenderá como deuda pública las obligaciones económicas o financieras plurianuales derivadas del ejercicio de la facultad consagrada en la fracción XLIV de este mismo artículo.

**XIII.** Supervisar, coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, al Órgano Superior de Fiscalización del Estado y

**XII.** Establecer en la ley las bases conforme a las cuales el Ejecutivo y los Ayuntamientos puedan contraer obligaciones o empréstitos a nombre del Estado y de los Municipios, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos, siempre y cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, bajo las mejores condiciones del mercado. De igual modo se establecerán las bases para el otorgamiento de garantías que otorgue el Estado respecto del endeudamiento de los municipios. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.

Las bases referidas en el párrafo anterior se fijarán conforme a lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes generales aplicables.

El Congreso del Estado, por el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberá autorizar los montos máximos para contratar empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago. Las operaciones de Refinanciamiento o Reestructura no requerirán autorización del Congreso, siempre y cuando se cumplan los requisitos que señala la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

El Ejecutivo y los Municipios podrán contratar obligaciones a corto plazo, sin requerir autorización expresa del Congreso, conforme a las bases, montos, porcentajes y condiciones que se establecen en la Ley general citada en el párrafo anterior;

**XIII.** Supervisar, coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, al Órgano Superior de Fiscalización del Estado. Expedir la Ley que regule su organización y atribuciones, así como los ordenamientos que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes del Estado, los municipios y demás entes públicos estatales y municipales;

**XIV. a XV. ...**

<p><u>expedir la Ley que regule su organización y atribuciones. Designar y remover al titular de dicho Órgano, en los términos que señalen las leyes aplicables;</u></p> <p><b>XIV. a XV. ...</b></p> <p><b>XVI.</b> Legislar de acuerdo con las facultades concedidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;</p> <p><b>XVII. a XVIII. ...</b></p> <p><b>XIX.</b> Designar al Fiscal General del Estado y al Contralor General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que realice el Gobernador; y nombrar al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de una terna propuesta por el mismo Gobernador. Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como a los Consejeros del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los términos de ley;</p> <p><b>XX. a XXIX. ...</b></p> <p><b>XXX.</b> Recibir la protesta constitucional a los diputados, <u>al gobernador, a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo;</u> al titular de la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; al Fiscal General del Estado, al Contralor General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco; a los consejeros del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje;</p> <p><b>XXXI. a XXXIX. ...</b></p> <p><b>XL.</b> Legislar en materia de Justicia Administrativa, determinando la organización, competencia, funcionamiento y procedimientos para la defensa de los derechos de los Gobernados frente a los actos de las Autoridades Estatales, Municipales o de sus Organismos Descentralizados;</p>	<p><b>XVI.</b> Expedir la Ley que establezca el Sistema Estatal Anticorrupción, de conformidad con lo señalado en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás ordenamientos en la materia;</p> <p><b>XVII. a XVIII. ...</b></p> <p><b>XIX.</b> Designar al Fiscal General del Estado, <b>al titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como a los Consejeros del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Contralor General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, y a los titulares de los órganos de control interno de los órganos constitucionales autónomos. Ratificar, en su caso, la designación de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que haga el Gobernador del Estado; y nombrar al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de una terna propuesta por el Gobernador. En cada caso, de conformidad con esta Constitución y las leyes aplicables;</b></p> <p><b>XX. a XXIX. ...</b></p> <p><b>XXX.</b> Recibir la protesta constitucional a los diputados, <b>al Gobernador, a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa;</b> al titular de la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; al Fiscal General del Estado, al Titular del Órgano Superior de Fiscalización, al Contralor General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco; a los consejeros del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje;</p> <p><b>XXXI. a XXXIX. ...</b></p> <p><b>XL.</b> Expedir la Ley que instituya al Tribunal de Justicia Administrativa, <b>le dote de plena autonomía y establezca su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, los recursos contra sus resoluciones, de conformidad con lo señalado en el artículo 116 de la Constitución General de la República y en esta Constitución;</b></p> <p><b>XLI.</b> Revisar, fiscalizar y calificar las cuentas públicas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los demás entes fiscalizables, por períodos anuales, sin perjuicio de las evaluaciones trimestrales, a más tardar en el período de sesiones ordinario siguiente al de la entrega del informe de resultados, con base en los reportes técnicos, financieros y los demás soportes documentales suficientes,</p>
---	---

<p><b>XLI.</b> Revisar, fiscalizar y calificar las cuentas públicas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los demás entes fiscalizables, por períodos anuales, sin perjuicio de las evaluaciones trimestrales, a más tardar en el período de sesiones ordinario siguiente al de la entrega del informe de resultados, con base en los reportes técnicos, financieros y los demás soportes documentales suficientes, que en términos de Ley presente el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. Cuando el Congreso se encuentre en receso, la calificación podrá realizarse dentro de un período extraordinario, o bien, dentro de los primeros treinta días del siguiente período ordinario de sesiones;</p>	<p>que en términos de Ley presente el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. Cuando el Congreso se encuentre en receso, la calificación podrá realizarse dentro de un período extraordinario, o bien, dentro de los primeros treinta días del siguiente período ordinario de sesiones.  <b>La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través del Órgano Superior de Fiscalización. Si de dicha revisión aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, el Órgano Superior de Fiscalización sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley. En la evaluación del desempeño del Órgano Superior de Fiscalización que realice la Cámara de Diputados, le podrá requerir informes sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización;</b>  <b>XLII. a XLVII. ...</b></p>
<p><b>XLII. a XLVII. ...</b></p> <p><b>Artículo 37.</b> Corresponde al Congreso con asistencia de no menos de las dos terceras partes del total de Diputados, resolver acerca de la solicitud de Licencia temporal o permanente que de su cargo haga el Gobernador del Estado.</p> <p>Solo podrá aceptarse la licencia permanente, cuando a juicio del Congreso hubiere causa grave y suficiente, libre de toda coacción o violencia. En tal caso, se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de esta Constitución.</p>	<p><b>Artículo 37.</b> Corresponde al Congreso, con la asistencia de cuando menos las dos terceras partes del total de Diputados, resolver acerca de la <b>renuncia</b> que de su cargo haga el Gobernador del Estado. <b>En su caso, las licencias temporales que solicite el Gobernador serán aprobadas con la asistencia de cuando menos la mayoría de los integrantes del Congreso.</b></p> <p>Solo podrá aceptarse la renuncia del Gobernador, cuando a juicio del Congreso hubiere causa grave y suficiente, libre de toda coacción o violencia. En tal caso, se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de esta Constitución.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO VII</b>  <b>DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO</b></p> <p><b>Artículo 40.</b> El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dependerá del Congreso, y sin excepción revisará y fiscalizará las cuentas del erario estatal y de los Municipios. Será un órgano técnico auxiliar de naturaleza desconcentrada, que tendrá autonomía funcional y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO VII</b>  <b>DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO</b></p> <p><b>Artículo 40.</b> El Órgano Superior de Fiscalización del Estado dependerá del Congreso y, sin excepción, revisará y fiscalizará las cuentas del erario estatal, de los municipios y de los organismos autónomos. Será un órgano <b>con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. La función de fiscalización a cargo de dicha entidad se desarrollará</b></p>



<p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, tendrá las siguientes facultades:</p> <p><b>I.</b> Revisar y fiscalizar <u>los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes del Estado y de los entes públicos locales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas estatales, a través de los informes técnicos y financieros, que se rendirán en los términos que disponga la ley:</u></p> <p><b>II.</b> Fiscalizará los recursos que como aportaciones del erario federal a la Hacienda estatal o municipal, administren y ejerzan las entidades del Gobierno del Estado, los municipios, y en su caso, los particulares, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes que de ella emanen;</p>	<p>conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.</p> <p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil siguiente de la fecha de vencimiento de la entrega del Informe de Autoevaluación, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública.</p> <p>El Órgano Superior de Fiscalización podrá requerir y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenezca la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas. Las observaciones y recomendaciones que emita el Órgano Superior de Fiscalización, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.</p> <p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, tendrá las siguientes facultades:</p> <p><b>I.</b> Revisar y fiscalizar las acciones de los Poderes del Estado, los Municipios y demás entes públicos locales, en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de la entidad estatal de fiscalización tendrán carácter público;</p> <p><b>II.</b> Fiscalizar, los recursos que como aportaciones participaciones, convenios, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas del erario federal a la Hacienda estatal o municipal, reciban, administren y ejerzan los entes públicos del Estado y los municipios, incluidos los recursos que se obtengan en contraprestación a los servicios que brinden o bienes que comercialicen y demás ingresos propios; y, en su caso, los particulares, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen;</p> <p><b>III.</b> Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos públicos; y efectuar visitas domiciliarias,</p>
--	--

<p>III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos públicos, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, documentos o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos;</p> <p>IV. Entregar, sin perjuicio de las evaluaciones que por períodos trimestrales establece esta Constitución respecto al gasto público ejercido, el informe final técnico y financiero de la revisión de la Cuenta Pública que corresponda, a la Cámara de Diputados a más tardar el 1° de agosto del año siguiente al de su presentación. Dentro de dicho informe se incluirán los dictámenes de su revisión y el apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, que comprenderá los comentarios y observaciones de los auditados, mismo que, después de su calificación, tendrá carácter público;</p> <p>V. Determinar las responsabilidades administrativas, así como los daños o perjuicios que afecten la Hacienda Pública del Estado, de los Municipios o el patrimonio de los entes públicos locales, derivados de la fiscalización realizada y, sin detrimento de otras medidas disciplinarias o punitivas del órgano o autoridad competente, podrá fincar a los servidores públicos y demás sujetos obligados, mediante el pliego respectivo, las responsabilidades, indemnizaciones y sanciones pecuniarias procedentes, mismas que, para estos fines, las dos últimas se harán efectivas por conducto de la autoridad Hacendaria del Estado, en términos del Código Fiscal Local, reintegrándose las cantidades correspondientes a la entidad que haya sufrido directamente el perjuicio patrimonial; las demás sanciones, pasarán a favor del erario de que se trate.</p> <p>El Poder Ejecutivo a través de su dependencia competente, y en específico, para estos fines, como autoridad hacendaria para ambos casos del erario estatal y municipal, aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la fracción V del presente</p>	<p>únicamente para exigir la exhibición de libros, documentos o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos;</p> <p>IV. Entregar a la Cámara de Diputados, sin perjuicio de las evaluaciones que por períodos trimestrales establece esta Constitución respecto al gasto público ejercido, a más tardar el 31 de agosto del año de la presentación de la Cuenta Pública, el informe final técnico y financiero de la revisión correspondiente. Dentro de dicho informe se incluirán los dictámenes de su revisión y el apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, que comprenderá los comentarios y observaciones de los auditados, mismo que tendrá carácter público;</p> <p>V. Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como faltas administrativas y, en su caso, calificarlas como graves o no graves; así como precisar los daños o perjuicios que afecten la Hacienda Pública del Estado, de los Municipios o el patrimonio de los entes públicos locales, derivados de la fiscalización realizada.</p> <p>Derivado de lo anterior, substanciará el procedimiento por las faltas administrativas graves; y dará cuenta a los órganos internos de control, según corresponda, cuando en el desarrollo de sus funciones detecte posibles faltas administrativas no graves, para que continúen la investigación respectiva y promuevan las acciones que procedan. En los casos en que, derivado de sus investigaciones, se presuma la comisión de delitos o faltas graves, presentará las denuncias correspondientes ante el fiscal del ministerio público competente o el Tribunal de Justicia Administrativa.</p> <p>Las sanciones económicas impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa constituirán créditos fiscales a favor de la Hacienda Pública estatal o municipal, o del patrimonio de los entes públicos, según corresponda. Dichos créditos fiscales se harán efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución, por la Dependencia competente del Poder Ejecutivo del Estado, a la cual será notificada la resolución emitida por dicho Tribunal, conforme a la normatividad correspondiente;</p> <p>VI. Sin perjuicio de lo previsto en las fracciones anteriores, en las situaciones que determine la Ley, derivado de denuncias, el Órgano</p>
--	---



<p><b>g).</b> ...                  ...                  ...</p> <p><b>Artículo 41.</b> <u>Los tres Poderes del Estado, los órganos autónomos constitucionales y los Municipios, deberán entregar sus cuentas públicas al Congreso del Estado a través del Órgano Superior de Fiscalización, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente, para su examen y calificación.</u> La Cuenta Pública deberá contener los estados y la información financiera con los criterios que rigen la contabilidad pública debidamente armonizada, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.</p> <p>...</p> <p>Así mismo, el Órgano deberá concluir la fiscalización y entregar el informe de resultados, al Congreso del Estado, <u>a más tardar el primero de agosto del año siguiente de que se trate.</u> El incumplimiento de este precepto imputable a los servidores públicos del citado órgano, es causa de responsabilidad en los términos de las leyes aplicables.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p><b>Artículo 41.</b> Los entes públicos deberán entregar sus cuentas públicas al Congreso del Estado a través del Órgano Superior de Fiscalización, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente, para su examen y calificación. La cuenta pública deberá contener los estados y la información financiera con los criterios que rigen la contabilidad pública debidamente armonizada, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.</p> <p>...</p> <p>Así mismo, el Órgano deberá concluir la fiscalización y entregar el informe de resultados, al Congreso del Estado, a más tardar el <b>31 de agosto del año</b> siguiente de que se trate. El incumplimiento de este precepto imputable a los servidores públicos del citado Órgano, es causa de responsabilidad en los términos de las leyes aplicables. Los informes de resultados que presente el Órgano tendrán carácter público.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p><b>TITULO IV</b>  <b>PODER EJECUTIVO</b>  <b>CAPITULO I</b>  <b>DEL GOBERNADOR DEL ESTADO</b></p> <p><b>Artículo 44.</b> Para ser Gobernador del Estado se requiere:  <b>I. a III.</b> ...  <b>IV.</b> No ser titular de alguna dependencia de la Administración Pública del Estado, ni Fiscal General del Estado de Tabasco; o titular de Organismos Autónomos; ni Presidente Municipal, regidor, secretario de ayuntamiento o titular de alguna dirección en las administraciones municipales; ni Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, <u>del Tribunal de lo Contencioso Administrativo</u> o del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; ni diputado al Congreso del Estado; ni ser miembro de las</p>	<p><b>TITULO IV</b>  <b>PODER EJECUTIVO</b>  <b>CAPITULO I</b>  <b>DEL GOBERNADOR DEL ESTADO</b></p> <p><b>Artículo 44.</b> Para ser Gobernador del Estado se requiere:  <b>I. a III.</b> ...  <b>IV.</b> No ser titular de alguna dependencia de la Administración Pública del Estado, ni Fiscal General del Estado de Tabasco; o titular de Organismos Autónomos; ni Presidente Municipal, regidor, secretario de ayuntamiento o titular de alguna dirección en las administraciones municipales; ni Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, <b>del Tribunal de Justicia Administrativa</b> o del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; ni diputado al Congreso del Estado; ni ser miembro de las</p>

<p>fuerzas armadas, ni haber tenido mando de fuerza pública o policial alguna, ni legislador o servidor público federal con rango de Director General o superior, a menos que permanezca separado definitivamente de sus funciones desde ciento veinte días naturales antes de la fecha de la elección;</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>V. ....</p>	<p>fuerzas armadas, ni haber tenido mando de fuerza pública o policial alguna, ni legislador o servidor público federal con rango de Director General o superior, a menos que permanezca separado definitivamente de sus funciones desde ciento veinte días naturales antes de la fecha de la elección.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>V. ....</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL GOBERNADOR</b></p> <p><b>Artículo 51.</b> Son facultades y obligaciones del Gobernador:</p> <p><b>I. a VI. ...</b></p> <p><b>VII.</b> Remitir al H. Congreso del Estado, a través del Órgano Superior de Fiscalización, dentro del mes siguiente respectivo, los informes que contengan el avance financiero y presupuestal; así como entregar a dicho órgano, a más tardar <u>el 31 de marzo del ejercicio fiscal siguiente</u>, la cuenta pública, en los términos del artículo 41 de esta Constitución. La cuenta pública deberá contener de manera homogénea, la información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, debidamente registrada conforme al sistema de contabilidad gubernamental y las disposiciones que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional.</p> <p><b>VIII. a XXI. ...</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL GOBERNADOR</b></p> <p><b>Artículo 51.</b> Son facultades y obligaciones del Gobernador:</p> <p><b>I. a VI. ...</b></p> <p><b>VII.</b> Remitir al H. Congreso del Estado, a través del Órgano Superior de Fiscalización, dentro del mes siguiente respectivo, los informes que contengan el avance financiero y presupuestal; así como entregar a dicho órgano, a más tardar <b>el 30 de abril</b> del ejercicio fiscal siguiente, la cuenta pública, en los términos del artículo 41 de esta Constitución. La cuenta pública deberá contener de manera homogénea, la información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, debidamente registrada conforme al sistema de contabilidad gubernamental y las disposiciones que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional.</p> <p><b>VIII. a XXI. ...</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO IV BIS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO ÚNICO</b></p> <p><b>Artículo 54 Ter. ...</b></p> <p>...</p> <p>El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo siguiente:</p> <p><b>I. a IV. ...</b></p> <p><b>V. ...</b></p> <p>...</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO IV BIS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO ÚNICO</b></p> <p><b>Artículo 54 Ter. ...</b></p> <p>...</p> <p>El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo siguiente:</p> <p><b>I. a IV. ...</b></p> <p><b>V. ...</b></p> <p>...</p> <p><b>La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General del Estado. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados</b></p>

<p>La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>antes referidos podrán ser objetados por el Congreso del Estado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Congreso no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción. La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO V PODER JUDICIAL CAPITULO ÚNICO</b></p> <p><b>Artículo 55 TER.</b> El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, habrá de elaborar y presentar oportunamente a la consideración de los Plenos, el presupuesto del Poder Judicial, el cual una vez, respectivamente autorizado, en su proyección conjunta, será remitido al titular del Poder Ejecutivo para su inclusión en el proyecto de presupuesto general de egresos del Estado, que será sometido a la aprobación del Congreso. La ley determinará lo concerniente a la correcta administración y ejercicio de los recursos asignados a los órganos que conforman el Poder Judicial de la Entidad. <u>El Poder Judicial administrará con autonomía su presupuesto y destinará, en renglones separados, los recursos para el Tribunal Superior de Justicia, Consejo de la Judicatura, Juzgados y demás órganos que lo integran, debiendo su Magistrado Presidente rendir informe anual ante el Congreso del Estado, acerca de su ejercicio.</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO V PODER JUDICIAL CAPITULO ÚNICO</b></p> <p><b>Artículo 55 TER.</b> El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, habrá de elaborar y presentar oportunamente a la consideración de los Plenos, el presupuesto del Poder Judicial, el cual una vez, respectivamente autorizado, en su proyección conjunta, será remitido al titular del Poder Ejecutivo para su inclusión en el proyecto de presupuesto general de egresos del Estado, que será sometido a la aprobación del Congreso. La ley determinará lo concerniente a la correcta administración y ejercicio de los recursos asignados a los órganos que conforman el Poder Judicial de la Entidad.</p> <p>Sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización competentes respecto del manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, el Poder Judicial administrará con autonomía su presupuesto y destinará, en renglones separados, los recursos para el Tribunal Superior de Justicia, Consejo de la Judicatura, Juzgados y demás órganos que lo integran, debiendo su Magistrado Presidente rendir informe anual ante el Congreso del Estado, acerca de su ejercicio.</p>
<p><b>Artículo 56. ...</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>En la elección, designación o nombramiento de magistrados del</p>	<p><b>Artículo 56. ...</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>En la elección, designación o nombramiento de magistrados del</p>

<p>Tribunal Superior de Justicia, de los miembros del Consejo de la Judicatura, de los Jueces del Poder Judicial, se procurará impulsar la <u>equidad de género</u>.</p> <p>Los jueces que en los términos de esta Constitución y de la ley en la materia fueren designados, protestarán el cargo, en su orden, ante los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.</p>	<p>Tribunal Superior de Justicia, de los miembros del Consejo de la Judicatura, de los Jueces del Poder Judicial, se procurará impulsar la <b>igualdad de género</b>.</p> <p>Los jueces que en los términos de esta Constitución y de la ley en la materia fueren designados, protestarán el cargo, en su orden, ante los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.</p>
<p><b>Artículo 57.</b> Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se requiere:</p> <p><b>I. a V. ...</b></p> <p><b>VI.</b> No haber sido en la entidad, Secretario o equivalente de la Administración Pública, Fiscal General del Estado de Tabasco, <u>Magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje o Diputado local, durante el año previo al día de su nombramiento.</u></p> <p>...</p>	<p><b>Artículo 57.</b> Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se requiere:</p> <p><b>I. a V. ...</b></p> <p><b>VI.</b> No haber sido en la entidad, Secretario o equivalente de la Administración Pública, Fiscal General del Estado de Tabasco, <b>Senador, Diputado federal o Diputado local, durante el año previo al día de su elección.</b></p> <p>...</p>
	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO V BIS</b>  <b>Del Tribunal de Justicia Administrativa</b>  <b>CAPÍTULO ÚNICO</b></p> <p><b>Artículo 63 Ter.</b> El Tribunal de Justicia Administrativa Estado de Tabasco es el órgano jurisdiccional, dotado de plena autonomía, encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública, del Estado o de los municipios, y los particulares. La ley establecerá su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso.</p> <p>Como parte integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, será también competencia del Tribunal de Justicia Administrativa imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos del Estado y de los municipios por faltas administrativas graves y, en su caso, a los particulares que incurran en actos vinculados con este tipo de faltas; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.</p>

	<p>Las sentencias definitivas que emita el Tribunal de Justicia Administrativa podrán ser impugnadas por las partes en las controversias a que se refiere el párrafo primero de este artículo; o, en los procedimientos señalados en el párrafo segundo, por el Órgano Superior de Fiscalización, por la Secretaría de Contraloría o los órganos internos de control correspondientes, así como por los servidores públicos o particulares involucrados, en los términos que prevea la ley aplicable.</p>
	<p><b>Artículo 63 Quater.</b> El Tribunal de Justicia Administrativa se compone de una Sala Superior integrada por tres magistrados; y cinco salas unitarias. Funcionará en Pleno o en Salas. De las salas unitarias, una fungirá como sala Especializada en la resolución de los procedimientos a que se refiere el párrafo segundo del Artículo anterior.</p> <p>Son requisitos para ser Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, los señalados en el artículo 57 de esta Constitución para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado. Para ser Magistrado de las salas unitarias, se requiere tener 30 años de edad al día de la designación; contar con título profesional de licenciado en derecho con cinco años de antigüedad; además de los requisitos indicados en el párrafo primero, fracciones I, IV, V y VI, y segundo párrafo del mencionado artículo 57.</p> <p>Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Gobernador y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo siete años, pudiendo ser designados para un solo periodo más.</p> <p>Los Magistrados de Sala Unitaria serán designados por el Gobernador del Estado y ratificados por la mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo siete años, pudiendo ser designados para un solo periodo más.</p> <p>La ratificación de los Magistrados de la Sala Superior y las unitarias se hará dentro de un plazo improrrogable de veinte días naturales a partir de la fecha de la comunicación al Congreso. Si el Congreso no resolviere dentro de ese plazo, se entenderá como ratificada y ocupará el cargo de Magistrado la persona que haya designado el Gobernador del Estado.</p> <p>Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las</p>



<p><b>TITULO SEXTO                  MUNICIPIO LIBRE                  CAPITULO ÚNICO</b></p> <p><b>Artículo 64.</b> El Estado tiene como base de su división territorial y de su organización política administrativa el Municipio Libre; conforme a las siguientes bases:</p> <p><b>I. a III. ...</b>  <b>V. ...</b></p> <p>Quienes hayan sido registrados como candidatos independientes podrán ser reelectos para un período inmediato, cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley; igualmente, podrán ser postulados por un partido o coalición para ser reelectos, siempre y cuando se hayan afiliado al partido que les postule o a un partido de los que integren la coalición, en su caso, antes de la mitad de su mandato.</p> <p>...</p> <p><b>V. a X. ...</b>  <b>XI.</b> Para ser regidor se requiere:</p> <p><b>a). al e). ...</b>  <b>f).</b> No ser titular en alguna de las dependencias de la Administración Pública Estatal, Fiscal General del Estado de Tabasco; o titular de Organismos Autónomos, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, <u>del Tribunal de lo Contencioso Administrativo</u>, ni del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; Secretario de Ayuntamiento o titular de alguna de las direcciones de la propia administración municipal; ni servidor público federal con rango de Director General o superior, a menos que permanezca separado definitivamente de sus funciones desde noventa días naturales antes de la fecha de la elección; No ser titular de alguna de las entidades u organismos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Estatal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones noventa días naturales antes de la fecha de la elección; No ser Magistrado, Juez Instructor, ni Secretario del Tribunal Electoral, ni Consejero Presidente o Consejero Electoral en</p>	<p><b>causas graves que señale la ley.</b></p> <p><b>TITULO SEXTO                  MUNICIPIO LIBRE                  CAPITULO ÚNICO</b></p> <p><b>Artículo 64.</b> El Estado tiene como base de su división territorial y de su organización política administrativa el Municipio Libre; conforme a las siguientes bases:</p> <p><b>I. a III. ...</b>  <b>IV. ...</b></p> <p>Quienes hayan sido registrados como candidatos independientes podrán ser reelectos para un período inmediato, cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley; igualmente, podrán ser postulados por un partido o coalición para ser reelectos, siempre y cuando se hayan afiliado al partido que les postule o a un partido de los que integren la coalición, en su caso, antes de la mitad de su mandato.</p> <p><b>Quienes sean postulados para ser reelectos deberán separarse del cargo en el plazo establecido en el inciso f), fracción XI, de este artículo y satisfacer, en lo conducente, los requisitos establecidos en el mismo y en la Ley. Dicha separación deberá mantenerse hasta que concluya el proceso electoral correspondiente.</b></p> <p>...</p> <p><b>V. a X. ...</b>  <b>XI.</b> Para ser regidor se requiere:</p> <p><b>a). al e). ...</b>  <b>f).</b> No ser titular en alguna de las dependencias de la Administración Pública Estatal, Fiscal General del Estado de Tabasco; o titular de Organismos Autónomos, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, <b>del Tribunal de Justicia Administrativa</b>, ni del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; Presidente Municipal, Sindico o Regidor; Secretario de Ayuntamiento o titular de alguna de las dependencias, entidades o direcciones de la propia administración municipal; ni servidor público federal con rango de Director General o superior, a menos que permanezca separado definitivamente de sus funciones desde noventa días naturales antes de la fecha de la elección; No ser titular de alguna de las entidades u organismos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Estatal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones noventa días naturales antes de la fecha de la elección; No ser Magistrado, Juez Instructor, ni Secretario</p>
---	--

<p>los Consejos Estatal, Distritales o Municipales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ni Secretario Ejecutivo, Contralor General, Director o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubieren separado de su encargo, de manera definitiva, dos años antes del día de la elección; y</p> <p><b>g).</b> ...  <b>XII.</b> ...          ...</p>	<p>del Tribunal Electoral, ni Consejero Presidente o Consejero Electoral en los Consejos Estatal, Distritales o Municipales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ni Secretario Ejecutivo, Contralor General, Director o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubieren separado de su encargo, de manera definitiva, dos años antes del día de la elección; y</p> <p><b>g).</b> ...  <b>XII.</b> ...          ...</p>
<p><b>Artículo 65.</b> El Municipio Libre tiene personalidad jurídica para todos los efectos legales y los Ayuntamientos tendrán las siguientes facultades:</p> <p><b>I. a V.</b> ...  <b>VI.</b> ...          ...</p> <p>Para la aprobación de la Ley de Ingresos de los Ayuntamientos, éstos enviarán sus proyectos conforme a las disposiciones legales aplicables a la Legislatura Local, directamente o por conducto del Ejecutivo, a más tardar en el mes de octubre de cada año.</p> <p>Cada Ayuntamiento deberá prever las partidas presupuestales necesarias para solventar las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores y pagaderas en dicho ejercicio, que constituyan deuda pública del Ayuntamiento o de las entidades paramunicipales y que cuenten con la garantía del Ayuntamiento o del Estado, <u>conforme a lo autorizado por las leyes y los decretos correspondientes, así como aquellas que se requieran para cubrir los compromisos derivados de contratos de proyectos para prestación de servicios aprobados por el Ayuntamiento conforme a las leyes aplicables.</u></p> <p>La cuenta pública de los ayuntamientos o concejos municipales, se analizará, fiscalizará y calificará anualmente por el Congreso del Estado, para tal efecto, aquellos entregarán a éste mensualmente a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dentro del mes siguiente respectivo, los informes que contengan el avance financiero y presupuestal. Asimismo, para su examen y calificación, entregarán la cuenta pública <u>a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal</u> que corresponda, en los términos del artículo 41 de esta Constitución. La cuenta pública deberá contener de manera</p>	<p><b>Artículo 65.</b> El Municipio Libre tiene personalidad jurídica para todos los efectos legales y los Ayuntamientos tendrán las siguientes facultades:</p> <p><b>I. a V.</b> ...  <b>VI.</b> ...          ...</p> <p>Para la aprobación de la Ley de Ingresos de los Ayuntamientos, éstos enviarán sus proyectos conforme a las disposiciones legales aplicables a la Legislatura Local, directamente o por conducto del Ejecutivo, a más tardar en el mes de octubre de cada año.</p> <p>Cada Ayuntamiento deberá prever las partidas presupuestales necesarias para solventar las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores y pagaderas en dicho ejercicio, que constituyan deuda pública del Ayuntamiento o de las entidades paramunicipales y que cuenten con la garantía del Ayuntamiento o del Estado, <b>conforme a lo previsto por las leyes y los decretos correspondientes.</b></p> <p>La cuenta pública de los ayuntamientos o concejos municipales, se analizará, fiscalizará y calificará anualmente por el Congreso del Estado, para tal efecto, aquellos entregarán a éste mensualmente a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dentro del mes siguiente respectivo, los informes que contengan el avance financiero y presupuestal. Asimismo, para su examen y calificación, entregarán la cuenta pública <b>a más tardar el 30 de abril del año siguiente al ejercicio fiscal</b> que corresponda, en los términos del artículo 41 de esta Constitución. La cuenta pública deberá contener de manera homogénea, la información financiera, de ingresos y egresos, así como</p>

<p>homogénea, la información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, debidamente registrada conforme al sistema de contabilidad gubernamental y disposiciones que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Tratándose de empréstitos que excedan del plazo de un año, se deberá contar con la autorización del Congreso Local en los términos que señale la Ley en la materia.</p> <p><b>VII. a IX. ...</b></p>	<p>patrimonial, debidamente registrada conforme al sistema de contabilidad gubernamental y disposiciones que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Tratándose de empréstitos que excedan del plazo de un año, se deberá contar con la autorización del Congreso Local en los términos que señale la Ley en la materia.</p> <p><b>Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses.</b></p> <p><b>VII. a IX. ...</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>TITULO SÉPTIMO                  RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS                  Y PATRIMONIAL DEL ESTADO</b></p> <p><b>Artículo 66.</b> Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se considerarán como servidores públicos a todo aquel que desempeñe un cargo de elección popular, un empleo o una comisión en cualquiera de los tres poderes del Estado, en los ayuntamientos y en los órganos desconcentrados, organismos descentralizados, órganos autónomos en los términos de esta Constitución, entidades paraestatales y paramunicipales, empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos, órganos jurisdiccionales y en general toda persona física que perciba una retribución con cargo al erario, quienes serán responsables por actos u omisiones en que incurran en el desempeño de su respectivas funciones.</p> <p><u>El Gobernador del Estado, para los efectos de este Título, sólo será responsable en los términos del Artículo 110, segundo párrafo de la Constitución Federal.</u></p> <p><u>Los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del Poder Judicial del Estado, los Titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, los presidentes municipales de los Ayuntamientos y los titulares de los órganos autónomos, serán responsables por violaciones que cometan en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de esta Constitución, de las leyes federales y</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO SÉPTIMO                  RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS                  Y PATRIMONIAL DEL ESTADO</b></p> <p><b>Artículo 66.</b> Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se considerarán como servidores públicos a todo aquel que desempeñe un cargo de elección popular, un empleo o una comisión en cualquiera de los tres poderes del Estado, en los ayuntamientos y en los órganos desconcentrados, organismos descentralizados, órganos autónomos en los términos de esta Constitución, entidades paraestatales y paramunicipales, empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos, órganos jurisdiccionales y en general toda persona física que perciba una retribución con cargo al erario, quienes serán responsables por actos u omisiones en que incurran en el desempeño de su respectivas funciones.</p> <p><b>Todo servidor público del Estado o de los municipios y los entes públicos en ambos órdenes de gobierno, cualquiera que sea su naturaleza jurídica; así como cualquier entidad, persona física o moral, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales o estatales, deberán proporcionar la información y documentación que soliciten la Auditoría Superior de la Federación o el Órgano Superior de Fiscalización, según corresponda, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes. En caso de no proporcionar la información, los responsables</b></p>

<p><u>locales que de ellas emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos del Estado y de los Municipios.</u></p>	<p>serán sancionados en los términos que establezca la Ley.                  Todos los servidores públicos, conforme a sus respectivas facultades y obligaciones, serán responsables por violaciones que cometan en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de esta Constitución, de las leyes federales y locales que de ellas emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos públicos y la deuda pública del Estado y de los Municipios. Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley. Asimismo deberán presentar su declaración fiscal anual, conforme lo disponga la legislación de la materia.</p>
<p><b>Artículo 67.</b> La Legislatura del Estado, expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad de acuerdo con las siguientes prevenciones:</p> <p><b>I.</b> Se impondrán, mediante Juicio Político, las sanciones indicadas en esta Constitución a los Servidores Públicos en ella señalados, cuando en el Ejercicio de sus Funciones incurran en Actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses Públicos fundamentales o de su Buen Despacho.</p> <p>No procede el Juicio Político por la mera expresión de ideas;</p> <p><b>II.</b> La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la Legislación Penal; y Es competencia de la Primera Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, fungir como tribunal de enjuiciamiento; y del tribunal compuesto por los tres magistrados presidentes de las salas Segunda, Tercera y Cuarta de la misma materia, conocer en alzada en los juicios penales en los que se impute la responsabilidad de los servidores públicos señalados en el artículo 69 de esta Constitución, una vez emitida la respectiva declaración de procedencia. Dichos tribunales serán igualmente competentes para conocer de juicios en los que se impute la comisión de cualquiera de los delitos establecidos en el Título Segundo del Código Penal para el Estado de Tabasco, denominado Delitos contra el Erario y el Servicio Públicos; en ambos supuestos el juez de control de mayor antigüedad con sede en la capital del Estado será competente para sustanciar la etapa inicial del proceso; y</p> <p><b>III.</b> Se aplicarán sanciones Administrativas a los servidores públicos por</p>	<p><b>Artículo 67.</b> La Legislatura del Estado, expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad de acuerdo con las siguientes prevenciones:</p> <p><b>I.</b> Se impondrán, mediante Juicio Político, las sanciones indicadas en esta Constitución a los servidores públicos en ella señalados, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.</p> <p>No procede el Juicio Político por la mera expresión de ideas; y</p> <p><b>II.</b> La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la Legislación Penal; y Es competencia de la Primera Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, fungir como tribunal de enjuiciamiento; y del tribunal compuesto por los tres magistrados presidentes de las salas Segunda, Tercera y Cuarta de la misma materia, conocer en alzada en los juicios penales en los que se impute la responsabilidad de los servidores públicos señalados en el artículo 69 de esta Constitución, una vez emitida la respectiva declaración de procedencia. Dichos tribunales serán igualmente competentes para conocer de juicios en los que se impute la comisión de cualquiera de los delitos establecidos en el Título Segundo del Código Penal para el Estado de Tabasco, denominado Delitos contra el Erario y el Servicio Públicos; en ambos supuestos el juez de control de mayor antigüedad con sede en la capital del Estado será competente para sustanciar la etapa inicial del proceso.</p> <p><b>De conformidad con la Ley General de Responsabilidades</b></p>

<p>aquellos actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.</p> <p>Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán automáticamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.</p> <p>Las Leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causas de enriquecimiento ilícito a los servidores Públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivo del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, y cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las Leyes Penales Sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes; además de las otras penas que corresponden.</p> <p>Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de pruebas, podrán formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Estado, respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.</p>	<p>Administrativas y los ordenamientos estatales aplicables, se aplicarán sanciones Administrativas a los servidores públicos cuyos actos u omisiones afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. De igual modo, conforme a lo señalado en el Artículo 109, fracción IV, de la Constitución General de la República, se sancionará a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves.</p> <p>Tratándose de las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, serán competentes para investigar e imponer las sanciones que correspondan, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, según corresponda. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones del Órgano Superior de Fiscalización, en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.</p> <p>Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control, dotados de las facultades que determine la ley, para prevenir, investigar y corregir actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquellas distintas de las que son facultad del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos de que disponen; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito, ante las autoridades que corresponda.</p> <p>Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en este artículo se desarrollarán en forma autónoma. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.</p> <p>Las Leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causas de enriquecimiento ilícito a los servidores Públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivo del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, y cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes respectivas sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes o la extinción de dominio; además de las otras penas que corresponden.</p> <p>Cualquier persona, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la</p>
---	--

	<p>presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Estado, respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.</p> <p>En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios.</p> <p>El Órgano Superior de Fiscalización, la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado y los órganos internos de control de los entes públicos, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en la normatividad correspondiente.</p>
<p><b>Artículo 68.</b> Podrán ser sujetos de Juicio Político <u>los Diputados</u> a la Legislatura Local, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los integrantes del Consejo de la Judicatura, <u>el Consejero Presidente</u>, los consejeros electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, los magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco, los integrantes de los demás órganos constitucionales autónomos, <u>los titulares de las Secretarías</u>, los directores de la Administración Pública Estatal, el Fiscal General del Estado y los servidores públicos de mando superior de la Fiscalía hasta el nivel de director, los agentes del Ministerio Público, los presidentes municipales, los concejales, los síndicos de Hacienda, los directores generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p><b>Artículo 68.</b> Podrán ser sujetos de Juicio Político <u>el Gobernador del Estado</u>, los Diputados a la Legislatura Local, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los integrantes del Consejo de la Judicatura, <u>los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el Titular del Órgano Superior de Fiscalización</u>, el Consejero Presidente, los consejeros electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, los magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco, los integrantes de los demás órganos constitucionales autónomos, <u>los titulares de las Dependencias</u>, los directores de la Administración Pública Estatal, el Fiscal General del Estado y los servidores públicos de mando superior de la Fiscalía hasta el nivel de director, los agentes del Ministerio Público, los presidentes municipales, los concejales, los síndicos de Hacienda, los directores generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p><b>Artículo 69.</b> Para proceder penalmente <u>contra los diputados al Congreso del Estado</u>, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco, <u>magistrados del</u></p>	<p><b>Artículo 69.</b> Para proceder penalmente contra <u>el Gobernador del Estado</u>, los diputados al Congreso del Estado, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados del Tribunal Electoral de</p>

<p>Tribunal de lo Contencioso Administrativo, consejeros de la Judicatura, titulares de las Secretarías, Fiscal General del Estado de Tabasco, presidentes municipales, los concejales, los síndicos de Hacienda, así como el Consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, así como los miembros de los demás órganos constitucionales autónomos, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará, por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el imputado.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la Legislación Penal.</p> <p>...</p> <p>Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.</p>	<p>Tabasco, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el Titular del Órgano Superior de Fiscalización, los consejeros de la Judicatura, los titulares de las Dependencias, el Fiscal General del Estado de Tabasco, los presidentes municipales, los concejales, los síndicos de Hacienda, así como el Consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, así como los miembros de los demás órganos constitucionales autónomos, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará, por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha lugar o no a proceder contra el imputado.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.</p> <p>Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.</p>
<p><b>Artículo 71.</b> <u>Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalan las Leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable, y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del Artículo 67, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.</u></p> <p>La responsabilidad de los poderes del Estado, la de los ayuntamientos</p>	<p><b>Artículo 71.</b> Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las directrices establecidas por la ley, en el marco de los sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción.</p> <p>La responsabilidad de los poderes del Estado, la de los ayuntamientos</p>

<p>y la de los organismos autónomos, por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular causen en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes secundarias. El poder público de que se trate, estará facultado para ejercitar, con las formalidades del caso, en la vía o acción que se prevea en la ley de la materia; <u>en contra del servidor público responsable, la resarción al patrimonio hacendario, del monto que por este motivo hubiere erogado.</u></p>	<p>y la de los organismos autónomos, por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular causen en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes secundarias. El poder público de que se trate, estará facultado para ejercitar, con las formalidades del caso, en la vía o acción que se prevea en la ley de la materia, <b>en contra del servidor público responsable del daño causado, la restitución a la Hacienda Pública del monto que se hubiere erogado con motivo de la responsabilidad referida en este párrafo. Lo anterior, independientemente de las responsabilidades de orden administrativo o penal a que hubiere lugar, en caso de acreditarse dolo o negligencia inexcusable por parte del servidor público responsable.</b></p>
<p><b>Artículo 72.</b> El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después.          Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.          La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley Penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que se hace referencia en el Artículo 69.          La Ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que <u>hace referencia la fracción III del Artículo 67.</u> Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción <u>no serán inferiores a tres años.</u></p>	<p><b>Artículo 72.</b> El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después.          Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.          La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley Penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que se hace referencia en el Artículo 69.          La Ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia el párrafo segundo del <b>Artículo 67 de esta Constitución.</b> Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción <b>no serán inferiores a siete años.</b></p>
	<p><b>Artículo 73 Bis.</b> El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de los órdenes de gobierno local y municipal en el Estado de Tabasco, competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos.          Como parte integrante del Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Estatal deberá coadyuvar al cumplimiento de los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos de coordinación que se</p>



	establezcan en el marco del Sistema Nacional y la Ley General de la materia.
	<p><b>Artículo 73 Ter.</b> El Sistema Estatal Anticorrupción se integra por:</p> <p><b>I.</b> Los Integrantes del Comité Coordinador; y</p> <p><b>II.</b> El Comité de Participación Ciudadana. El Comité Coordinador se formará con:</p> <p><b>I.</b> Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá;</p> <p><b>II.</b> El titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado;</p> <p><b>III.</b> El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado;</p> <p><b>IV.</b> El titular de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado;</p> <p><b>V.</b> El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;</p> <p><b>VI.</b> El Presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y</p> <p><b>VII.</b> Un representante del Consejo de la Judicatura del Estado.</p> <p>El Comité de Participación Ciudadana del Sistema tiene como objetivo coadyuvar, en términos de la ley, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador y del Sistema Estatal. Estará formado por cinco ciudadanos tabasqueños que se hayan distinguido por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, quienes serán designados conforme a lo que establezca la ley.</p> <p>El Sistema Estatal Anticorrupción contará con una Secretaría Ejecutiva que se organizará y funcionará como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, con autonomía técnica y de gestión.</p> <p>La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción determinará la integración y atribuciones, así como la estructura orgánica y operativa necesaria para el adecuado cumplimiento de sus objetivos y fines, de conformidad con las bases que ordena la Ley General de la materia.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITULO OCTAVO                  PREVENCIÓNES GENERALES                  CAPITULO ÚNICO</b></p> <p><b>Artículo 75.</b> El Gobernador del Estado, los diputados, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia; del Tribunal Electoral de Tabasco; del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, <u>y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo</u>, los integrantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, del Instituto Tabasqueño de Transparencia y</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO OCTAVO                  PREVENCIÓNES GENERALES                  CAPITULO ÚNICO</b></p> <p><b>Artículo 75.</b> El Gobernador del Estado, los diputados, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia; del Tribunal Electoral de Tabasco; del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; <del>del Tribunal de Justicia Administrativa</del>, los integrantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, del Instituto Tabasqueño de Transparencia y</p>

<p>Acceso a la Información Pública, los regidores de los Ayuntamientos y los demás servidores públicos del Estado y de los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones, órganos y organismos autónomos y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será proporcional a sus responsabilidades.</p> <p>Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, los Ayuntamientos, así como los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución o por la Ley, deberán incluir en sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos.</p> <p>Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:  <b>I. a VI. ...</b></p>	<p>Acceso a la Información Pública, los regidores de los Ayuntamientos y los demás servidores públicos del Estado y de los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones, órganos y organismos autónomos y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será proporcional a sus responsabilidades.</p> <p>Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, los Ayuntamientos, así como los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución o por la Ley, deberán incluir en sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:  <b>I. a VI. ...</b></p>
---	--

<b>COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE TAMAULIPAS</b>	
<b>TEXTO ANTERIOR</b>	<b>TEXTO VIGENTE</b>
<p><b>TÍTULO I                  DEL ESTADO Y SUS HABITANTES                  CAPÍTULO V                  DE LOS HABITANTES</b></p> <p><b>ARTÍCULO 17.</b> El Estado reconoce a sus habitantes:  <b>I. a IX. ...</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO I                  DEL ESTADO Y SUS HABITANTES                  CAPÍTULO V                  DE LOS HABITANTES</b></p> <p><b>ARTÍCULO 17.</b> El Estado reconoce a sus habitantes:  <b>I. a IX. ...</b></p> <p><b>X.</b> El derecho de acceso a la cultura y el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa.</p> <p>La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.</p> <p><b>ARTÍCULO 17 Bis.</b> En el caso de extinción de dominio se establecerá</p>

	<p>un procedimiento que será jurisdiccional y autónomo del de materia penal, y procederá en los casos de secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito. La ley ordinaria de la materia reglamentará estas bases constitucionales.</p>
<p><b>ARTÍCULO 19. ...</b>          ...          ...          ...          Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.          Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor <u>del importe de su jornal o salario de un día.</u>          ...          ...</p>	<p><b>ARTÍCULO 19. ...</b>          ...          ...          ...          Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.          Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor <b>a una vez el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.</b>          ...          ...</p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO II          DE LA SOBERANÍA DEL ESTADO Y LA FUNCIÓN ELECTORAL          CAPÍTULO ÚNICO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 20. ...</b>          Las elecciones de Gobernador, de los Diputados y de los integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales aplicables y las siguientes bases:  <b>I. De las características de los comicios.-</b> Las elecciones serán libres, auténticas y periódicas; mediante sufragio directo, universal, libre y secreto.          Las elecciones se llevarán a cabo el primer domingo de junio del año que corresponda.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO II          DE LA SOBERANÍA DEL ESTADO Y LA FUNCIÓN ELECTORAL          CAPÍTULO ÚNICO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 20. ...</b>          Las elecciones de Gobernador, de los Diputados y de los integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales aplicables y las siguientes bases:  <b>I. De las características de los comicios.-</b> Las elecciones serán libres, auténticas y periódicas; mediante sufragio directo, universal, libre y secreto.          Las elecciones se llevarán a cabo el primer domingo de junio del año que corresponda.  <b>La elección de Diputados e integrantes de los Ayuntamientos deberán tener verificativo en la misma fecha en que tenga lugar la elección federal.</b></p>

<p>II. ...  <b>III.</b> De la Autoridad Administrativa Electoral.- La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, integrado por ciudadanos y partidos políticos según lo disponga la ley y de conformidad con lo siguiente:  <b>1. a 20.</b> ...</p> <p>IV. a V. ...</p>	<p>II. ...  <b>III.</b> De la Autoridad Administrativa Electoral.- La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, integrado por ciudadanos y partidos políticos según lo disponga la ley y de conformidad con lo siguiente:  <b>1. a 20.</b> ...  <b>21.</b> La ley establecerá los mecanismos para hacer efectivo el derecho de voto de los Tamaulipecos en el extranjero, con el fin de que puedan elegir al Gobernador.</p> <p>IV. a V. ...</p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO IV                  DEL PODER LEGISLATIVO                  CAPÍTULO I                  DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 30.</b> No pueden ser electos Diputados:  <b>I.</b> El Gobernador, el Secretario General de Gobierno, los Magistrados del Poder Judicial del Estado, los Consejeros de la Judicatura, el Procurador General de Justicia, <u>el Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado</u>, los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Magistrados, jueces y servidores públicos de la Federación en el Estado, a menos que se separen 120 días antes de la elección;</p> <p>II. a VII. ...</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO IV                  DEL PODER LEGISLATIVO                  CAPÍTULO I                  DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 30.</b> No pueden ser electos Diputados:  <b>I.</b> El Gobernador, el Secretario General de Gobierno, los Magistrados del Poder Judicial del Estado, los Consejeros de la Judicatura, el Procurador General de Justicia, <b>los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado</b>, los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Magistrados, jueces y servidores públicos de la Federación en el Estado, a menos que se separen 90 días antes de la elección;</p> <p>II. a VII. ...</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO III                  DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 58.</b> Son facultades del Congreso:  <b>I. a V.</b> ...  <b>VI.</b> Revisar la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas así como la Cuenta Pública de cada uno de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado. La revisión de la cuenta pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en la Ley de Ingresos en su caso y en el Presupuesto de Egresos, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.</p> <p>Para la revisión de las cuentas públicas, el Congreso cuenta con la Auditoría Superior del Estado, como órgano técnico de fiscalización superior. Tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO III                  DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 58.</b> Son facultades del Congreso:  <b>I. a V.</b> ...  <b>VI.</b> Revisar la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas así como la Cuenta Pública de cada uno de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado. La revisión de la cuenta pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en la Ley de Ingresos en su caso y en el Presupuesto de Egresos, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.</p> <p>Para la revisión de las cuentas públicas, el Congreso cuenta con la Auditoría Superior del Estado, como órgano técnico de fiscalización superior. Tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna,</p>

<p>atribuciones y para decidir sobre su organización interna, <u>funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan las leyes.</u></p> <p>La coordinación y evaluación del desempeño de dicho órgano <u>estará a cargo del Congreso de conformidad con lo que establezca la ley;</u></p> <p>...</p> <p>...</p> <p><b>VII. a XX. ...</b></p> <p><b>XXI.</b> Elegir y remover a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y a los Consejeros de la Judicatura, en los términos que establece la presente Constitución. Asimismo, <u>elegir y remover al Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado; y ratificar al Procurador General de Justicia, con base en la designación que realice el Gobernador del Estado;</u></p>	<p>funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan las leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberá fiscalizar las acciones del Estado y municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría que emita la Auditoría Superior del Estado tendrán carácter público. La coordinación y evaluación del desempeño de dicho órgano estará a cargo del Congreso, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, de conformidad con lo que establezca la ley; <b>y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización.</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p><b>VII. a XX. ...</b></p> <p><b>XXI.</b> Elegir y remover a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y a los Consejeros de la Judicatura, en los términos que establece la presente Constitución. Asimismo, <b>aprobar por el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes en la sesión correspondiente del Congreso del Estado, en los periodos ordinarios, o en sesión extraordinaria en los periodos de receso, el nombramiento de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa a propuesta del Gobernador del Estado;</b> y ratificar al Procurador General de Justicia, con base en la designación que realice el Gobernador del Estado. <b>Instituir la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado, como un órgano público con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos de corrupción que la ley considera como delitos, y tendrá las atribuciones que señalen las leyes de la materia. En la ley orgánica respectiva se establecerán los requisitos para ocupar dicho cargo. Su titular será nombrado por el término de ocho años, mediante convocatoria pública que emitirá la Legislatura. El Pleno del Congreso elegirá al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por las dos terceras partes de los Diputados presentes, en los periodos ordinarios, o en sesión extraordinaria en los periodos de receso;</b></p> <p><b>XXII. a XXXVI. ...</b></p> <p><b>XXXVII.</b> Recibir la protesta constitucional a los Diputados, al Gobernador y a quienes, en su caso, deban ejercer esta función; a los</p>
---	--

<p><b>XXII. a XXXVI. ...</b> <b>XXXVII.</b> Recibir la protesta constitucional a los Diputados, al Gobernador y a quienes, en su caso, deban ejercer esta función; a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; <u>al Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado</u>; a los Consejeros de la Judicatura, con excepción de su Presidente; al titular de la Presidencia y del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas; a los Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, y a los servidores públicos que nombre y que conforme a las leyes deban rendirla;</p> <p><b>XXXVIII. a LV. ...</b> <b>LVI.</b> Para expedir leyes en materia de impartición de justicia administrativa, <u>mediante órganos dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a</u> su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre los particulares y las autoridades del Estado, de los ayuntamientos y de las entidades estatales y municipales, estableciéndose las normas para su organización, funcionamiento, procedimientos y recursos contra sus resoluciones; así como aprobar el nombramiento de quien tenga a su cargo esa función en el Gobierno del Estado en términos de ley, y recibir la protesta del titular;</p>	<p>Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; a los <b>Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado</b>; a los Consejeros de la Judicatura, con excepción de su Presidente; al titular de la Presidencia y del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas; a los Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, y a los servidores públicos que nombre y que conforme a las leyes deban rendirla;</p> <p><b>XXXVIII. a LV. ...</b> <b>LVI.</b> Para expedir leyes en materia de impartición de justicia administrativa, <b>así como instituir el Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y establecer su organización, funcionamiento, procedimiento y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. El Tribunal tendrá a su cargo dirimir controversias que se susciten entre la administración pública estatal o municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales, por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.</b> <b>El Tribunal se integrará por tres salas unitarias de competencia mixta para conocer de las materias fiscal, contencioso-administrativa y para sancionar las faltas graves en que incurran los servidores públicos estatales y municipales por hechos de corrupción en los términos que dispongan las leyes. Cada sala se integrará por un magistrado. Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa durarán en su encargo ocho años improrrogables.</b> <b>Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la Ley;</b></p> <p><b>LVII. a LIX. ...</b> <b>LX.</b> Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los órganos constitucionalmente autónomos, reconocidos en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado; y,</p>
--	---

<p><b>LVII. a LIX. ...</b>  <b>LX.</b> Expedir las leyes necesarias para hacer efectivas todas las anteriores facultades y las concedidas a los otros Poderes por esta Constitución, así como las que no estén expresamente reservadas a los Poderes de la Unión y correspondan al régimen interior del Estado, y ejercer las demás facultades que le señale la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes que emanen de ambas.</p>	<p><b>LXI.</b> Expedir las leyes necesarias para hacer efectivas todas las anteriores facultades y las concedidas a los otros Poderes por esta Constitución, así como las que no estén expresamente reservadas a los Poderes de la Unión y correspondan al régimen interior del Estado, y ejercer las demás facultades que le señale la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes que emanen de ambas.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO V</b>  <b>DEL PROCESO LEGISLATIVO, DEL PROCESO PRESUPUESTARIO</b>  <b>Y DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR</b>  <b>Sección Cuarta</b>  <b>De la fiscalización superior</b></p> <p><b>ARTÍCULO 76.</b> El Congreso del Estado contará con una entidad de fiscalización denominada Auditoría Superior del Estado, la cual será un órgano con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga su ley.</p> <p>La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de <b>posterioridad, anualidad</b>, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberá fiscalizar las acciones del Estado y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. <u>Los informes de auditoría que emita la Auditoría Superior del Estado tendrán carácter público.</u></p> <p><b>I.</b> Fiscalizar en forma posterior, los ingresos y <u>egresos públicos</u>; el manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado, de los Ayuntamientos, de los órganos con autonomía de los</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO V</b>  <b>DEL PROCESO LEGISLATIVO, DEL PROCESO PRESUPUESTARIO</b>  <b>Y DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR</b>  <b>Sección Cuarta</b>  <b>De la fiscalización superior</b></p> <p><b>ARTÍCULO 76.</b> El Congreso del Estado contará con una entidad de fiscalización denominada Auditoría Superior del Estado, la cual será un órgano con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga su ley. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de <b>legalidad, imparcialidad y confiabilidad</b>. Asimismo, deberá fiscalizar las acciones del Estado y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública y <b>celebrar convenios de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación para la fiscalización de las participaciones federales</b>. Los informes de auditoría que emita la Auditoría Superior del Estado tendrán carácter público.</p> <p><b>La Auditoría Superior del Estado, podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública.</b></p> <p><b>Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría Superior del Estado podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos.</b></p> <p><b>La Auditoría Superior del Estado tendrá a su cargo:</b></p> <p><b>I.</b> Fiscalizar en forma posterior, los ingresos, egresos y <b>deuda pública</b>; el manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado, de los Ayuntamientos, de los órganos con autonomía de los poderes y de las entidades estatales y municipales, así como realizar</p>

poderes y de las entidades estatales y municipales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas respectivos, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley. En tratándose de la recaudación, analizar si fueron percibidos los recursos estimados en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

También fiscalizará directamente los recursos estatales o municipales que se destinen y ejerzan por cualquier persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

...

La Auditoría Superior del Estado, sin perjuicio del principio de anualidad, podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, sin que por este motivo se entienda abierta nuevamente, para todos los efectos legales, la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales, o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas estatales o municipales. Las observaciones o recomendaciones que, en su caso, emita la Auditoría Superior, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la cuenta pública en revisión.

Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la ley y derivado de alguna denuncia, podrá requerir a la entidad sujeta de fiscalización que proceda a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rinda un informe. Si los requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados en la ley, se impondrán las

auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas respectivos, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley. En tratándose de la recaudación, analizar si fueron percibidos los recursos estimados en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

**En el caso del Estado y municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía del Estado, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado el gobierno local y los municipios.**

**Asimismo, fiscalizará directamente los recursos estatales o municipales que se destinen y se ejerzan por cualquier persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.**

...

La Auditoría Superior del Estado, podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, **para todos los efectos legales**, abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales, o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas estatales o municipales. Las observaciones o recomendaciones que, en su caso, emita la Auditoría Superior, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la cuenta pública en revisión.

**Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la ley derivado de alguna denuncia, la Auditoría Superior del Estado, previa autorización de su titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la Ley, y en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior rendirá un informe específico al Congreso del Estado y, en su caso, promoverá las**



sanciones previstas en ésta. La Auditoría Superior rendirá un informe específico al Congreso del Estado y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante la autoridad competente;

II. Entregar al Congreso del Estado el informe de resultados de la revisión de cada una de las cuentas públicas que reciba, dentro de los plazos que señale la ley. Dichos informes contemplarán los resultados de la revisión efectuada y la referencia a la fiscalización del cumplimiento de los programas....

En forma previa a la presentación del informe de resultados, la Auditoría Superior dará a conocer a las entidades sujetas de fiscalización el resultado preliminar de la revisión practicada, a fin de que los mismos presenten las justificaciones y aclaraciones correspondientes, las cuales serán valoradas por la Auditoría Superior para la elaboración final del informe de resultados de la revisión de la cuenta pública.

El Auditor Superior del Estado enviará a las entidades sujetas de fiscalización, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores de su entrega al Congreso del Estado, tanto el informe de resultados como las recomendaciones que correspondan, para que en un plazo no mayor a 30 días hábiles presenten la información necesaria y realicen las consideraciones que estimen pertinentes, comunicándoles en caso de que no lo hagan serán acreedores a las sanciones previstas en la ley. Lo anterior no aplicará a los pliegos de observaciones y al fincamiento de responsabilidades, los cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que prevea la ley.

...

Tratándose de las recomendaciones sobre el desempeño de las entidades sujetas de fiscalización, estos deberán precisar a la Auditoría Superior las mejoras realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia.

La Auditoría Superior del Estado entregará al Congreso sendos informes sobre la situación que guardan las observaciones,

acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o a la autoridad competente;

II. Entregar al Congreso del Estado el informe general y los informes individuales de la revisión de cada una de las cuentas públicas que reciba, dentro de los plazos que señale la ley. Dichos informes contemplarán los resultados de la revisión efectuada y la referencia a la fiscalización del cumplimiento de los programas. ...

En forma previa a la presentación del informe general y de los informes individuales, la Auditoría Superior dará a conocer a las entidades sujetas de fiscalización el resultado preliminar de la revisión practicada, a fin de que los mismos presenten las justificaciones y aclaraciones correspondientes, las cuales serán valoradas por la Auditoría Superior para la elaboración final de los informes.

El Auditor Superior del Estado enviará a las entidades sujetas de fiscalización, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores de su entrega al Congreso del Estado, los informes individuales de auditoría, así como las recomendaciones que correspondan en su caso, para que en un plazo no mayor a 30 días hábiles presenten la información necesaria y realicen las consideraciones que estimen pertinentes, comunicándoles en caso de que no lo hagan serán acreedores a las sanciones previstas en la ley. Lo anterior, no aplicará a las promociones de responsabilidades ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que prevea la ley.

...

Tratándose de las recomendaciones sobre el desempeño de las entidades sujetas de fiscalización, estos deberán precisar a la Auditoría Superior las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia.

La Auditoría Superior del Estado deberá entregar al Congreso, el primer día hábil de los meses de mayo y de noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los informes de auditoría que haya presentado en los términos de esta fracción. En dicho informe, el cual tendrá carácter público, la Auditoría incluirá los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Estatal y Municipal o al patrimonio de los entes públicos

<p><u>recomendaciones y acciones promovidas el primer día hábil de mayo y de noviembre de cada año.</u></p> <p>La Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y de sus observaciones hasta que rinda el informe del resultado del análisis de la cuenta pública de que se trate al Congreso del Estado. La ley establecerá las sanciones que correspondan a quienes infrinjan esta disposición;</p> <p>...</p> <p>III. ...</p> <p><u>IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a las haciendas públicas estatal o municipales o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales, y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título XI de esta Constitución, y presentar las denuncias y querrelas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley.</u></p> <p><u>Las sanciones y demás resoluciones de la Auditoría Superior del Estado podrán impugnarse por las entidades sujetas de fiscalización y, en su caso, por los servidores públicos afectados adscritos a las mismas, ante dicho órgano técnico de fiscalización superior o ante los tribunales a que se refiere la fracción LVI del artículo 58 de esta Constitución, en los términos que dispongan las leyes.</u></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Para el cobro de las indemnizaciones y sanciones <u>impuestas por la Auditoría Superior</u>, se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución en el ámbito del Ejecutivo del Estado.</p>	<p><b>estatales o municipales, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa.</b></p> <p>La Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y de sus observaciones hasta que rinda el informe del resultado del análisis de la cuenta pública de que se trate al Congreso del Estado. La ley establecerá las sanciones que correspondan a quienes infrinjan esta disposición;</p> <p>...</p> <p>III. ...</p> <p><b>IV. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos estatales o municipales y a los particulares.</b></p> <p><b>Se deroga.</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Para el cobro de las indemnizaciones y sanciones <b>pecuniarias a que se refiere la fracción IV del presente artículo</b>, se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución en el ámbito del Ejecutivo del Estado.</p>
TÍTULO V	TÍTULO V

<p><b>DEL PODER EJECUTIVO CAPÍTULO I DEL EJECUTIVO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 91.</b> Las facultades y obligaciones del Gobernador son las siguientes:  <b>I. a XIII.</b> ...  <b>XIV.</b> Proponer al Congreso del Estado para su estudio y aprobación, en su caso, el nombramiento de Magistrados del Poder Judicial del Estado, así como la propuesta de designación <u>del Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado;</u>  <b>XV. a XLVIII.</b> ...</p>	<p><b>DEL PODER EJECUTIVO CAPÍTULO I DEL EJECUTIVO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 91.</b> Las facultades y obligaciones del Gobernador son las siguientes:  <b>I. a XIII.</b> ...  <b>XIV.</b> Proponer al Congreso del Estado para su estudio y aprobación, en su caso, el nombramiento de Magistrados del Poder Judicial del Estado, así como la propuesta de designación <b>de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa;</b>  <b>XV. a XLVIII.</b> ...</p>
<p><b>TÍTULO IX DE LOS MUNICIPIOS CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES</b></p> <p><b>ARTÍCULO 134.</b> Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:  <b>I. a IX.</b> ...  <b>X.</b> ...                  ...                  Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de este Estado y otro u otros Estados formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas participantes y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.</p>	<p><b>TÍTULO IX DE LOS MUNICIPIOS CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES</b></p> <p><b>ARTÍCULO 134.</b> Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:  <b>I. a IX.</b> ...  <b>X.</b> ...                  ...                  Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de este Estado y otro u otros Estados formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas participantes y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.  <b>No estará permitido en el Estado expedir autorizaciones, permisos o licencias sobre uso de suelo o construcción para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego o similares, cualquiera que sea su denominación, así como para centros donde se presenten espectáculos con personas que realicen actos de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales. Los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano municipal deberán establecer esta prohibición en su contenido.</b></p>
	<p><b>TÍTULO X SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL CAPÍTULO I DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA</b></p>

	<p><b>ARTÍCULO 143 Bis.</b> La Universidad Autónoma de Tamaulipas es un órgano autónomo reconocido por esta Constitución, se considera la máxima institución de educación superior y de posgrado del Estado, la cual realizará sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo a los principios constitucionales en materia de educación, respetando la libertad de cátedra e investigación, así como de libre examen y discusión de las ideas. Gozará de independencia para gobernarse, expedir su normatividad interna y nombrar a sus autoridades, personal docente, administrativo y contralor.</p> <p>Se le asignará una partida del Presupuesto de Egresos del Estado para su funcionamiento. Los recursos estatales que le sean otorgados, serán fiscalizados por la Auditoría Superior del Estado, sin perjuicio de que los recursos públicos federales que reciba sean fiscalizados por las instancias competentes de la Federación, de conformidad con la legislación aplicable.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO XI                  CAPÍTULO ÚNICO  <u>DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS                  Y PATRIMONIAL DEL ESTADO</u></b></p> <p><b>ARTÍCULO 149.</b> Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere este Título, se reputarán como Servidores Públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Público del Estado y de los Municipios, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO XI                  CAPÍTULO ÚNICO                  DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  <b>Y PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS                  GRAVES O HECHOS DE CORRUPCIÓN, Y PATRIMONIAL DEL                  ESTADO</b></b></p> <p><b>ARTÍCULO 149.</b> Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere este Título, se reputarán como Servidores Públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Público del Estado y de los Municipios, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial, de conflicto de intereses y declaración fiscal ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.</p>
<p><b>ARTÍCULO 150.</b> El Congreso del Estado expedirá Leyes sobre responsabilidades de servidores públicos, de conformidad con las siguientes prevenciones:</p>	<p><b>ARTÍCULO 150.</b> El Congreso del Estado expedirá Leyes sobre responsabilidades de servidores públicos, de conformidad con las siguientes prevenciones:</p>

<p>I. ...</p> <p>II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público <u>será perseguida y sancionada en los términos de la Legislación Penal;</u></p> <p>III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.</p> <p>Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrá imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.</p> <p>Las Leyes determinarán los casos y circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito o inexplicable a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo por sí o por interpósita persona, aumenten sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita o inexplicable no pudiesen justificar. Las Leyes Penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.</p>	<p>I. ...</p> <p>II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público <b>o particulares que incurran en hechos de corrupción,</b> será sancionada en los términos de la legislación penal <b>aplicable.</b></p> <p>Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito o inexplicable a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita o inexplicable no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan;</p> <p>III. Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control, de conformidad con lo que establece la ley general aplicable y en lo conducente la ley estatal en materia de responsabilidades administrativas.</p> <p>Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en el artículo 100 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.</p> <p>Los entes públicos estatales y municipales contarán con órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar, actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para investigar, substanciar y sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales, municipales y demás de su competencia; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución; y,</p>
---	---

	<p><b>IV.</b> El Tribunal de Justicia Administrativa impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos, estatales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.</p> <p>Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrá imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.</p> <p>En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información.</p> <p>La Auditoría Superior del Estado y la Contraloría Gubernamental, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y demás disposiciones legales aplicables.</p>
--	--

<p>...</p>	<p>La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.</p> <p>...</p>
<p><b>ARTÍCULO 154.</b> Las Leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las Leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del Artículo 150, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.</p> <p>La responsabilidad del Estado por daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.</p>	<p><b>ARTÍCULO 154.</b> El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:</p> <p><b>I.</b> El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y de la Contraloría Gubernamental; por los Presidentes del Tribunal de Justicia Administrativa y del organismo autónomo garante previsto por el artículo 17 fracción V, último párrafo, de esta Constitución; por un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana Local, quien lo presidirá.</p> <p><b>II.</b> El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción; y serán designados en los términos establecidos por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y en la ley estatal en la materia. En la conformación del citado Comité se procurará que prevalezca la equidad de género.</p> <p><b>III.</b> Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:</p> <p><b>a)</b> El establecimiento de mecanismos de coordinación con las autoridades que correspondan;</p> <p><b>b)</b> El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial</p>

	<p>sobre las causas que los generan;</p> <p><b>c)</b> La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno;</p> <p><b>d)</b> El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; y</p> <p><b>e)</b> La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.</p> <p>Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.</p> <p><b>IV.</b> El Sistema Estatal tendrá acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor desempeño de sus funciones.</p> <p><b>V.</b> Las recomendaciones, políticas públicas e informes que emita el Sistema Estatal, deberá tener respuesta de los sujetos o entes públicos a quienes se dirija y establecer los procedimientos para darles seguimiento.</p> <p><b>VI.</b> El Sistema Estatal rendirá un informe público a los titulares de los poderes del Estado, en el que den cuenta de las acciones anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus recomendaciones. Para tal efecto, deberá seguir las metodologías del Sistema Nacional Anticorrupción.</p>
--	---

COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE VERACRUZ	
TEXTO ANTERIOR	TEXTO VIGENTE
<p><b>TÍTULO PRIMERO</b>  <b>CAPÍTULO II</b>  <b>DE LOS DERECHOS HUMANOS</b></p>	<p><b>TÍTULO PRIMERO</b>  <b>CAPÍTULO II</b>  <b>DE LOS DERECHOS HUMANOS</b></p>



<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN PRIMERA DE LA EDUCACIÓN</b></p> <p><b>Artículo 10. ...</b>                  ...                  ...                  ...</p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN PRIMERA DE LA EDUCACIÓN</b></p> <p><b>Artículo 10. ...</b>                  ...                  ...                  ...                  La Universidad Veracruzana es una institución autónoma de educación superior. Conforme a la ley, tendrá la facultad de autogobernarse, expedir su reglamentación y nombrar a sus autoridades; realizará sus fines de conservar, crear y transmitir la cultura y la ciencia, a través de las funciones de docencia, investigación, difusión y extensión, respetando las libertades de cátedra, de investigación, de libre examen y discusión de las ideas; determinará sus planes y programas; fijará los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; contará con autonomía presupuestaria y administrará libremente su patrimonio, que se integrará con las aportaciones federales y estatales, la transmisión de bienes y derechos de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los recursos generados por los servicios que preste, así como por los demás que señale su ley. El presupuesto asignado a la Universidad Veracruzana no podrá ser menor al cuatro por ciento del total del presupuesto general del Estado, previsto para el ejercicio anual respectivo, el cual deberá ministrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca la legislación aplicable y, en ningún caso, el monto del presupuesto asignado será inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITULO SEGUNDO CAPÍTULO II DEL PODER LEGISLATIVO SECCIÓN SEGUNDA DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO</b></p> <p><b>Artículo 33.</b> Son atribuciones del Congreso:  <b>I. a III. ...</b>  <b>IV.</b> Legislar en materia de educación; de cultura y deporte; profesiones; bienes, aguas y vías de comunicación de jurisdicción local; de salud y asistencia social; combate al alcoholismo, tabaquismo y drogadicción; de</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO SEGUNDO CAPÍTULO II DEL PODER LEGISLATIVO SECCIÓN SEGUNDA DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO</b></p> <p><b>Artículo 33.</b> Son atribuciones del Congreso:  <b>I. a III. ...</b>  <b>IV.</b> Legislar en materia de educación; de cultura y deporte; profesiones; bienes, aguas y vías de comunicación de jurisdicción local; de salud y asistencia social; combate al alcoholismo,</p>

prostitución; de desarrollo social y comunitario; de protección al ambiente y de restauración del equilibrio ecológico; de turismo; de desarrollo regional y urbano; de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero; de comunicación social; de municipio libre; de relaciones de trabajo del Gobierno del Estado o los ayuntamientos y sus trabajadores; de promoción al acceso universal a internet y otras tecnologías de la información y las comunicaciones emergentes; de acceso a la información y protección de datos personales que generen o posean los sujetos obligados; de responsabilidades de los servidores públicos; de planeación para reglamentar la formulación, instrumentación, control, evaluación y actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo, cuidando que la planeación del desarrollo económico y social sea democrática y obligatoria para el poder público; así como expedir las leyes, decretos o acuerdos necesarios al régimen interior y al bienestar del Estado; sin perjuicio de legislar en los demás asuntos de su competencia.

**V. a XVIII. ...**

**XIX.** Nombrar, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a los magistrados del Poder Judicial y al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a los consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

**XX. a XXVIII. ...**

**XXIX.** Revisar las cuentas públicas con el apoyo del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, que le sean presentadas por el Poder Público; los ayuntamientos; entidades paraestatales y paramunicipales; los organismos autónomos del Estado y, en general, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica y cualquier persona física o moral, pública o privada, que recaude, administre, ministre, maneje o ejerza recursos públicos; y cualquier ente o institución pública a los que esta Constitución o las leyes del Estado les den el carácter de ente fiscalizable, a fin de conocer los resultados de su gestión financiera y comprobar si cumplieron con los objetivos de sus planes y programas, así como con

tabaquismo y drogadicción; de prostitución; de desarrollo social y comunitario; de protección al ambiente y de restauración del equilibrio ecológico; de turismo; de desarrollo regional y urbano; de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero; de comunicación social; de municipio libre; de relaciones de trabajo del Gobierno del Estado o los ayuntamientos y sus trabajadores; de promoción al acceso universal a internet y otras tecnologías de la información y las comunicaciones emergentes; de acceso a la información y protección de datos personales que generen o posean los sujetos obligados; de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, **sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación;** de planeación para reglamentar la formulación, instrumentación, control, evaluación y actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo, cuidando que la planeación del desarrollo económico y social sea democrática y obligatoria para el poder público; así como expedir las leyes, decretos o acuerdos necesarios al régimen interior y al bienestar del Estado; sin perjuicio de legislar en los demás asuntos de su competencia;

**V. a XVIII. ...**

**XIX.** Nombrar, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a los magistrados del Poder Judicial, **a los magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa,** al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y **a los Comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;**

**XX. a XXVIII. ...**

**XXIX.** Revisar las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

**La revisión de las cuentas públicas la realizará el Congreso, con el apoyo del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, de conformidad con lo establecido en las leyes aplicables. Si del examen que éste realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los**

<p>los criterios señalados en sus respectivos presupuestos. A tal efecto, las cuentas públicas de los entes fiscalizables municipales serán presentadas al Congreso del Estado durante el mes de enero, a excepción del último año de su administración, en el que podrán ser entregadas el 31 de diciembre, o bien, hasta el último día del mes de enero; y hasta el último día del mes de marzo, los demás entes fiscalizables, en ambos casos del año siguiente al que correspondan;</p> <p><b>XXX.</b> Dictaminar y, en su caso, aprobar y establecer la incoación de la fase de determinación de responsabilidades y fincamiento de las indemnizaciones y sanciones a los servidores públicos o personas responsables, del informe del resultado de las cuentas que, en términos de ley, sean presentadas a los entes fiscalizables señalados en la fracción anterior, hasta el último día del mes de octubre del año siguiente al que correspondan. Para la dictaminación y aprobación de las cuentas públicas correspondientes, la Diputación Permanente podrá citar al Congreso a las sesiones extraordinarias a las que haya lugar;</p> <p><b>XXXI.</b> Dar las bases para reconocer y mandar pagar los adeudos contraídos por el Poder Ejecutivo, con cargo al crédito del Estado, así como señalar los fondos con que deberán pagarse;</p> <p><b>XXXII.</b> ... <b>XXXIII.</b> Revisar y fiscalizar las cuentas y demás documentos que presenten o se soliciten a los organismos autónomos de Estado;</p>	<p>conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de éstos, en los términos de la ley. Los entes fiscalizables deberán presentar las Cuentas Públicas del año anterior al Congreso del Estado, a más tardar el día treinta de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, hasta por treinta días naturales, mediante solicitud del Gobernador y con autorización del Congreso, pudiendo, en su caso, comparecer el Secretario de Despacho correspondiente;</p> <p><b>XXX.</b> Aprobar las Cuentas Públicas, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe del Resultado, entregado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado en términos de lo establecido por esta Constitución y la legislación aplicable, a más tardar, el último día del mes de octubre del año que corresponda, sin menoscabo que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por dicho órgano seguirá su curso en términos de lo dispuesto en las leyes respectivas. Para la aprobación de las Cuentas Públicas correspondientes, la Diputación Permanente podrá citar al Congreso a las sesiones extraordinarias a las que haya lugar;</p> <p><b>XXXI.</b> Establecer las bases conforme a las cuales el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos podrán contraer obligaciones o empréstitos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aprobar dichas obligaciones y empréstitos, así como reconocer y mandar a pagar la deuda del Estado;</p> <p><b>XXXI Bis.</b> Autorizar al Poder Ejecutivo y a los ayuntamientos a contratar deuda pública y afectar como garantía, fuente de pago o de cualquier otra forma, los ingresos que les correspondan, en los términos establecidos en las leyes correspondientes.</p> <p><b>XXXII.</b> ... <b>XXXIII.</b> Revisar y fiscalizar las cuentas y demás documentos que presenten o se soliciten a los organismos autónomos de Estado; y recibir la comparecencia de sus titulares con motivo del informe anual</p>
--	--

<p><b>XXXIV. a XLI. ...</b></p> <p><b>XLII.</b> Con la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros, a propuesta del titular del Poder Ejecutivo, designar al titular de la Contraloría General del Estado, en los términos que señalen esta Constitución y la ley. En caso de que la persona propuesta para ocupar el cargo de Contralor General no obtenga el voto aprobatorio requerido para ser designado, el titular del Poder Ejecutivo podrá enviar tantas propuestas como sean necesarias hasta lograrse la mayoría de votos requeridos. El Contralor General en funciones continuará en el desempeño de su cargo hasta que esto suceda.</p> <p><b>XLIII.</b> Expedir la legislación en materia local anticorrupción, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales en la materia, con el objeto de coordinarse para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.</p> <p>Al efecto, deberá instalarse de manera permanente un Comité Coordinador Anticorrupción, que tenga como objetivo instaurar el Sistema Local Anticorrupción y coordinarse con el Federal, y que estará integrado por los titulares en el Estado del Órgano de Fiscalización Superior, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Contraloría General, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, un miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, así como un representante ciudadano destacado por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción, en términos de la legislación que para dichos fines se emita.</p> <p><b>XLIV.</b> Las demás que le confiere la Constitución Federal, esta Constitución y las que sean necesarias para hacer efectivas sus atribuciones.</p> <p><b>Nota: La Suprema Corte de Justicia de la Nación</b> declaró, mediante</p>	<p>de actividades, sobre el estado que guarda su gestión, conforme al formato que establezca la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su respectivo Reglamento;</p> <p><b>XXXIV. a XLI. ...</b></p> <p><b>XLI Bis.</b> Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los Organismos Autónomos del Estado que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos, previa convocatoria que se emita;</p> <p><b>XLII.</b> Expedir las leyes que instituyan el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz y que regulen su organización, funcionamiento, procedimientos y recursos contra sus resoluciones;</p> <p><b>XLIII.</b> Las demás que le confiere la Constitución Federal, esta Constitución y las que sean necesarias para hacer efectivas sus atribuciones.</p>
---	--

<p>sentencia de fecha 5 de septiembre de 2016, la invalidez del Decreto número 880, que contiene la adición de dos fracciones XLII y XLIII, y se recorre la fracción XLII para convertirse en la fracción XLIV de este artículo. El texto anterior a dicho decreto es el siguiente: <b>Nota:</b> La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró, mediante sentencia de fecha 5 de septiembre de 2016, la invalidez del Decreto número 880, que contiene la adición de dos fracciones XLII y XLIII, y se recorre la fracción XLII para convertirse en la fracción XLIV de este artículo. El texto anterior a dicho decreto es el siguiente:</p> <p><b>Artículo 33.</b> Son atribuciones del Congreso:</p> <p><b>I a XLI...</b></p> <p><b>XLII.</b> Las demás que le confieren la Constitución Federal, esta Constitución y las que sean necesarias para hacer efectivas sus atribuciones.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO IV DEL PODER JUDICIAL</b></p> <p><b>Artículo 55.</b> El Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, en un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en un Tribunal de Conciliación y Arbitraje y en los juzgados que señale la Ley Orgánica de la materia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO IV DEL PODER JUDICIAL</b></p> <p><b>Artículo 55.</b> El Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, en un Tribunal de Conciliación y Arbitraje y en los juzgados que señale la Ley Orgánica de la materia.</p>
<p><b>Artículo 56.</b> El Poder Judicial del Estado tendrá las siguientes atribuciones:</p> <p><b>I. a V. ...</b></p> <p><b>VI.</b> Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal o municipal, y los particulares;</p> <p><b>VII. a XV. ...</b></p>	<p><b>Artículo 56.</b> El Poder Judicial del Estado tendrá las siguientes atribuciones:</p> <p><b>I. a V. ...</b></p> <p><b>VI. DEROGADA</b></p> <p><b>VII. a XV. ...</b></p>
<p><b>Artículo 62.</b> El Consejo de la Judicatura será el órgano encargado de conducir la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, y estará integrado por los seis miembros siguientes: El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá; tres magistrados nombrados por el pleno del Tribunal Superior de Justicia conforme a la ley, mediante votación secreta; un consejero propuesto por el Gobernador, y ratificado por el Congreso; y un consejero designado por el Congreso, quienes deberán satisfacer los siguientes requisitos:</p> <p><b>I. a VI. ...</b></p> <p>...</p>	<p><b>Artículo 62.</b> El Consejo de la Judicatura será el órgano encargado de conducir la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, y estará integrado por los seis miembros siguientes: El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá; un magistrado nombrado por el pleno del Tribunal Superior de Justicia, un magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ambos en términos de la ley de la materia y mediante votación secreta; un consejero propuesto por el Gobernador, y ratificado por el Congreso; y un consejero designado por el Congreso, quienes deberán satisfacer los siguientes requisitos:</p> <p><b>I. a VI. ...</b></p> <p>...</p>

<p>...</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO VI</b> <b>DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO</b></p> <p><b>Artículo 67.</b> Conforme a esta Constitución y la ley, los Organismos Autónomos del Estado contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios, tendrán autonomía técnica, presupuestal, de gestión y para emitir las reglas conforme a las cuales sistematizarán la información bajo su resguardo, y sólo podrán ser fiscalizados por el Congreso del Estado.</p> <p>Estos organismos desarrollarán las actividades Estatales siguientes:</p> <p><b>I.</b> ...</p> <p>...</p> <p>La función de procurar justicia encomendada a la Fiscalía General, se regirá por los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos, de acuerdo con las siguientes bases:</p> <p><b>a). al d).</b> ...</p> <p><b>e).</b> El Fiscal General presentará anualmente un informe de actividades ante los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado <u>y deberá comparecer ante el Congreso cuando éste así lo requiera, para informar sobre un asunto de su competencia. En este caso, la comparecencia se efectuará ante una Comisión del Congreso y la sesión no será pública, debiendo los asistentes guardar reserva sobre cualquier asunto abordado en relación con una investigación o proceso.</u></p> <p><b>f). al h).</b> ...</p> <p>La Fiscalía General contará con una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuyo titular deberá reunir todos los requisitos señalados para ser Fiscal General.</p> <p>Dicho Fiscal Especial será nombrado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, previa convocatoria pública que éste emita para tal efecto.</p> <p>Una vez concluido el proceso establecido en la convocatoria pública</p>	<p>...</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO VI</b> <b>DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO</b></p> <p><b>Artículo 67.</b> Conforme a esta Constitución y la ley, los Organismos Autónomos del Estado contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios, tendrán autonomía técnica, presupuestal, de gestión y para emitir las reglas conforme a las cuales sistematizarán la información bajo su resguardo, y sólo podrán ser fiscalizados por el Congreso del Estado.</p> <p>Para efectos de que los Organismos Autónomos del Estado rindan cuentas sobre el estado que guarda su gestión, deberán presentar anualmente un informe de actividades al Congreso del Estado, conforme al formato que establezca la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su respectivo Reglamento. Estos organismos desarrollarán las actividades Estatales siguientes:</p> <p><b>I.</b> ...</p> <p>...</p> <p>La función de procurar justicia encomendada a la Fiscalía General, se regirá por los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos, de acuerdo con las siguientes bases:</p> <p><b>a). al d).</b> ...</p> <p><b>e).</b> El Fiscal General presentará anualmente un informe de actividades ante los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado <b>en términos del segundo párrafo del presente artículo</b>, y deberá comparecer ante el Congreso cuando éste así lo requiera para informar sobre un asunto de su competencia. En este <b>último</b> caso, la comparecencia se efectuará ante una Comisión del Congreso y la sesión no será pública, debiendo los asistentes guardar reserva sobre cualquier asunto abordado en relación con una investigación o proceso.</p> <p><b>f). al h).</b> ...</p> <p><b>La Fiscalía General contará con una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuyo titular deberá reunir todos los requisitos señalados para ser Fiscal General.</b></p> <p><b>No podrá ser Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción la persona que haya ocupado el cargo de Secretario de Despacho o su equivalente, Fiscal General del Estado, Senador, Diputado Local o Federal o Presidente Municipal, durante el año previo al día de su</b></p>
--	---

<p>emitida, la propuesta será presentada al Pleno del Congreso del Estado para su votación. En caso de no obtener el voto aprobatorio a que hace referencia el párrafo anterior, el Congreso del Estado realizará una segunda convocatoria pública, y así sucesivamente hasta que se alcance la mayoría requerida. El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción durará en su encargo cinco años, sin perjuicio de que pueda ser removido libremente por el Fiscal General del Estado, siempre y cuando se actualice alguna de las causales que se establezcan en la ley para tal efecto.</p> <p>El nombramiento del Fiscal Especializado antes referido podrá ser objetado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso se procederá a un nuevo nombramiento en los términos anteriormente señalados. De no pronunciarse en ese plazo, se entenderá que no tiene objeción para ello y se tendrá por ratificado.</p> <p>La remoción realizada por el Fiscal General del Estado, respecto al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, podrá ser objetada por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la Fiscalía Especializada antes referida será restituido en el ejercicio de sus funciones.</p> <p><b>Nota:</b> La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró, mediante sentencia de fecha 5 de septiembre de 2016, la invalidez del Decreto número 881, que contiene la adición de los últimos cuatro párrafos de esta fracción.</p> <p>II. ...</p> <p>III. el Órgano de Fiscalización superior del Estado efectuará la revisión de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, en un periodo no mayor de un año, de conformidad con las bases y atribuciones siguientes:</p>	<p><b>nombramiento.</b></p> <p>El Fiscal Especial será nombrado por las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, previa convocatoria pública que éste emita para tal efecto.</p> <p>Una vez concluido el proceso establecido en la convocatoria pública emitida, la propuesta será presentada al Pleno del Congreso del Estado para su votación. En caso de no obtener el voto aprobatorio a que hace referencia el párrafo anterior, se observará el procedimiento establecido en dicha convocatoria.</p> <p>El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción durará en su encargo cinco años, sin perjuicio de que pueda ser removido a solicitud del Fiscal General o por el propio Congreso, por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, cuando se actualice alguna de las causales que se establezcan en la ley para tal efecto.</p> <p>II. ...</p> <p>III. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado <b>realizará la revisión de las Cuentas Públicas, en un periodo no mayor de un año, conforme al procedimiento de fiscalización superior, bajo los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.</b></p> <p>El Órgano de Fiscalización Superior del Estado podrá iniciar el procedimiento de fiscalización a partir del primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso, realice se refieran a la información definitiva presentada en las Cuentas Públicas.</p> <p>Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos</p>
---	--

<p>1. La fiscalización se hará en forma posterior a la presentación de las Cuentas Públicas respecto de la gestión financiera de los entes fiscalizables, entendida ésta como la actividad relacionada directamente con el ejercicio presupuestal de los ingresos, egresos y deuda pública, la administración, manejo, custodia y aplicación de los recursos financieros y bienes públicos, y la ejecución de obra pública que realizan el Poder Público, los organismos autónomos del Estado, la Universidad Veracruzana, los ayuntamientos, entidades paraestatales, entidades paramunicipales y cualquier ente o institución pública a la que esta Constitución o las leyes del Estado les den el carácter de ente fiscalizable.</p> <p>2. Sin perjuicio del principio de anualidad, el Órgano de Fiscalización Superior, así como el Congreso del Estado, en sus respectivos ámbitos de competencia, podrán solicitar, revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenecen la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto en revisión abarque, para su ejecución y pago, diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas estatales o municipales. Las observaciones y</p>	<p>concluidos.</p> <p>En los términos que establezca la ley, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado mantendrá coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, para fiscalizar las participaciones federales. Los informes de auditoría que emita tendrán carácter público. Sin perjuicio de lo anterior, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado tendrá a su cargo:</p> <p>1. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda pública; el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y recursos públicos estatales y municipales, la ejecución de obra pública, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas estatales y municipales, a través del Informe del Resultado que se rendirá en los términos que disponga la ley.</p> <p>En el caso de que el Estado y sus municipios celebren empréstitos y obligaciones de pago, con independencia del origen de los recursos afectados como garantía, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado podrá fiscalizar el destino y ejercicio de los recursos correspondientes. Asimismo, fiscalizará los recursos estatales y municipales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, entidad o institución a la que esta Constitución o las leyes del Estado les den el carácter de ente fiscalizable, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.</p> <p>2. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de las Cuentas Públicas en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abiertas nuevamente las cuentas públicas del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto en revisión abarque, para su ejecución y pago, diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas estatales y municipales. Las observaciones y recomendaciones que emita el Órgano de Fiscalización Superior sólo</p>
--	--



recomendaciones que el Órgano de Fiscalización Superior o el Congreso del Estado emitan, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública.

**3.** El Congreso del Estado podrá ordenar al Órgano de Fiscalización Superior que, durante el ejercicio fiscal en curso, requiera información y vigile la realización de obras y acciones respecto de la aplicación de recursos públicos que hagan los entes fiscalizables, aplicando en lo conducente las disposiciones de la ley de la materia y le informe debidamente de los resultados obtenidos.

**4.** Sin perjuicio de posterioridad, cuando el Congreso del Estado así lo determine o en las situaciones derivadas de denuncias por posibles irregularidades o ilícitos en la gestión financiera de los entes fiscalizables o que pudieran ser constitutivas de delitos contra el servicio público, el Órgano de Fiscalización Superior podrá requerir a los entes fiscalizables que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y, dentro del plazo previsto en el Artículo 7 de esta Constitución, le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos, se impondrán las sanciones previstas en la ley. El Órgano de Fiscalización Superior rendirá un informe específico al Congreso del Estado y, fincará las responsabilidades resarcitorias que correspondan o promoverá otras ante las autoridades competentes.

**5.** Son atribuciones del Órgano de Fiscalización Superior:

**a)** Iniciar y sustanciar el procedimiento de fiscalización de las Cuentas Públicas, para comprobar, inspeccionar, investigar y determinar, en términos de ley, los actos u omisiones que pudieran configurar alguna irregularidad, incumplimiento de disposiciones legales o conducta ilícita en la gestión financiera de los entes fiscalizables;

**b)** Ordenar y efectuar revisiones de gabinete y visitas domiciliarias o de campo, en los términos previstos por la ley, para comprobar la gestión financiera de los entes fiscalizables;

**c)** Determinar los daños y perjuicios que afecten a las haciendas públicas de los entes fiscalizables y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, las que tendrán el carácter de créditos fiscales; al efecto, el Poder Ejecutivo del Estado aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para su cobro, en términos de ley;

podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.

**3.** El Congreso del Estado podrá ordenar al Órgano de Fiscalización Superior del Estado que, durante el ejercicio fiscal en curso, requiera información y vigile la realización de obras y acciones respecto de la aplicación de recursos públicos que hagan los entes fiscalizables, aplicando en lo conducente las disposiciones de la ley de la materia y le informe debidamente de los resultados obtenidos.

**4.** Sin perjuicio de lo previsto anteriormente, en las situaciones y conforme lo determine la ley, derivado de denuncias, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a los entes fiscalizables, así como respecto de ejercicios anteriores. Los entes fiscalizables deberán proporcionar la información y documentación que se solicite para la revisión, dentro de los plazos y en los términos señalados en ley y, en caso de incumplimiento, les serán aplicables las sanciones previstas en la misma. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado deberá rendir un informe específico al Congreso y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado, o a las autoridades que resulten competentes.

**5.** Entregar al Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, a más tardar el primer día del mes de octubre del año de la presentación de las Cuentas Públicas correspondientes, el Informe del Resultado, el cual contendrá las conclusiones técnicas de la fiscalización y se someterá a la consideración del Pleno, para su aprobación.

El Informe del Resultado será de carácter público y tendrá el contenido que determine la ley.

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado deberá guardar reserva de las actuaciones, observaciones y recomendaciones contenidas en el Informe del Resultado, hasta en tanto se entregue a la Comisión Permanente de Vigilancia. La ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.

En el caso de las recomendaciones, los entes fiscalizables deberán precisar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar

<p><b>d)</b> Promover ante las autoridades competentes, con motivo del procedimiento de fiscalización, el fincamiento de otras responsabilidades de orden administrativo, penal o civil que correspondan.</p> <p><b>6.</b> El Congreso designará al titular del Órgano de Fiscalización Superior, por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, de conformidad con el procedimiento que determine la ley. El titular del Órgano durará en su encargo siete años, podrá ser reelegido en el cargo por una sola vez y sólo se le podrá remover por las causas graves que la ley señale, co la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Quinto de este Constitución.</p> <p><b>7.</b> Para ser titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado se requiere cumplir, además de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV y V del Artículo 58 de esta Constitución, los que señale a ley. Durante el ejercicio de su cargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.</p> <p><b>8.</b> Los entes fiscalizables y demás autoridades del Estado, facilitarán los auxilios que requiera el Órgano de Fiscalización del Estado para el ejercicio de sus funciones.</p>	<p>su improcedencia.</p> <p><b>6.</b> Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos estatales y municipales, y efectuar visitas domiciliarias, para solicitar la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos.</p> <p><b>7.</b> Promover, derivado de sus investigaciones, las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa o ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado, o a las autoridades que resulten competentes, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos y a los particulares.</p> <p><b>8.</b> Los entes fiscalizables y demás autoridades del Estado facilitarán los auxilios que requiera el Órgano de Fiscalización Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones.</p> <p>Los servidores públicos estatales y municipales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica o institución a la que esta Constitución o las leyes del Estado les den el carácter de ente fiscalizable, que reciban o ejerzan recursos públicos estatales o municipales deberán proporcionar la información, documentación y auxilios que solicite el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos que establezca la ley.</p> <p>El Órgano de Fiscalización entregará al Congreso el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas y los informes individuales, los cuales se someterán a la consideración del Pleno. El Informe General Ejecutivo y los informes individuales serán de carácter público y tendrán el contenido que</p>
--	---

determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico con las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, los entes fiscalizables hayan presentado sobre las mismas.

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del Informe General Ejecutivo y de los informes individuales de auditoría, se dará a conocer a los entes fiscalizables la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstos presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por el Órgano de Fiscalización Superior para la elaboración de los informes individuales de auditoría.

El Órgano de Fiscalización deberá entregar al Congreso, los primeros cinco días de marzo y septiembre de cada año, un informe de seguimiento sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los informes individuales de auditoría que haya presentado en los términos de este numeral.

En dicho informe, el cual tendrá carácter público, el Órgano incluirá los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos de cualquier otra índole.

El Órgano de Fiscalización deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes individuales de auditoría y el Informe General Ejecutivo al Congreso a que se refiere este numeral; la ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.

El Congreso designará al titular del Órgano de Fiscalización Superior, por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, de conformidad con el procedimiento que determine la ley. El titular del Órgano durará en su encargo siete años, no podrá ser reelegido y sólo se le podrá remover por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Quinto de esta Constitución.

Para ser titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado se requiere cumplir, además de los requisitos establecidos en las

<p>IV. a V. ...</p>	<p>fracciones I, II, IV y V del artículo 58 de esta Constitución, los que señale la ley. Durante el ejercicio de su cargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.</p> <p>IV. a V. ...</p>
	<p><b>Artículo 67 Bis.</b> El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos y mantendrá una adecuada coordinación con el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; asimismo, participará, colaborará y asistirá en sus funciones al Sistema Nacional Anticorrupción, en los términos previstos por la ley.</p> <p>Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:</p> <p>El Sistema contará con un Comité Coordinador, que estará integrado por los titulares del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; y de la Contraloría General;</p> <p><b>I.</b> por el Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; el Presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana;</p> <p><b>II.</b> El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley;</p> <p><b>III.</b> Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la ley:</p> <p><b>a).</b> El establecimiento de mecanismos de coordinación entre el Estado y los municipios y entre éstos con la Federación;</p> <p><b>b).</b> El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en</p>

	<p>especial sobre las causas que los generan;  <b>c).</b> La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes del Estado y sus municipios;  <b>d).</b> El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades estatales y municipales en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; y  <b>e).</b> La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.                  Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a éstas, en los términos previstos en la ley.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITULO CUARTO</b>  <b>CAPÍTULO I</b>  <b>DE LA HACIENDA Y CREDITO DEL ESTADO</b></p> <p><b>Artículo 73.</b> Las contribuciones serán decretadas en cantidad suficiente para solventar los gastos públicos, tanto los ordinarios como los extraordinarios.                  El Gobierno del Estado podrá recurrir al endeudamiento directo como fuente de recursos, con autorización del Congreso del Estado y para casos excepcionales; dicho endeudamiento sólo podrá utilizarse para inversiones públicas productivas. Para cubrir un déficit imprevisto en la Hacienda, podrá hacerse uso del crédito del Estado, en los términos que dispongan esta Constitución y las leyes respectivas.</p> <p>...</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO CUARTO</b>  <b>CAPÍTULO I</b>  <b>DE LA HACIENDA Y CREDITO DEL ESTADO</b></p> <p><b>Artículo 73.</b> Las contribuciones serán decretadas en cantidad suficiente para solventar los gastos públicos, tanto los ordinarios como los extraordinarios.                  El Gobierno del Estado <b>y los municipios únicamente podrán contraer obligaciones o empréstitos cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan empresas públicas y fideicomisos y, en el caso del Estado, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezca el Congreso del Estado, en el marco de lo previsto en la Constitución Federal, y por los conceptos y hasta por los montos que el mismo apruebe. El Ejecutivo informará de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.</b></p> <p>...</p>
<b>CAPÍTULO II</b>	<b>CAPÍTULO II</b>

<p style="text-align: center;"><b>DEL DESARROLLO ECONÓMICO, DEL FOMENTO AL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO</b></p> <p><b>Artículo 74. ...</b>                  ...                  ...                  ...</p>	<p style="text-align: center;"><b>DEL DESARROLLO ECONÓMICO, DEL FOMENTO AL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO</b></p> <p><b>Artículo 74. ...</b>                  ...                  ...                  ...</p> <p>Asimismo, corresponde a las autoridades del Estado velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales deberán observar dicho principio.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITULO QUINTO                  CAPÍTULO I  <u>DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS</u></b></p> <p><b>Artículo 76.</b> Los servidores públicos serán responsables por las faltas o delitos en que incurran durante el desempeño de sus funciones.                  DEROGADO, SEGUNDO PÁRRAFO:                  Derogado.</p> <p><b>Nota:</b> La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró, mediante sentencia de fecha 5 de septiembre de 2016, la invalidez del Decreto 882 que contiene la derogación de este párrafo. El texto anterior a dicho decreto es el siguiente:                  El Gobernador, durante el ejercicio de su cargo, sólo podrá ser acusado ante el Congreso por la comisión de delitos graves del orden común. Por los demás delitos y faltas podrá ser acusado, conforme a las leyes respectivas, al concluir su mandato.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITULO QUINTO                  CAPÍTULO I                  DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE CORRUPCIÓN, Y PATRIMONIAL DEL ESTADO.</b></p> <p><b>Artículo 76.</b> Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputará como servidor público a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial del Estado, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso del Estado o en la Administración Pública Estatal o Municipal, Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal, Fideicomisos Públicos, Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstos; Fideicomisos; así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y de la deuda pública.</p> <p>Los servidores públicos a que se refiere este artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley. Todo servidor público será responsable por la comisión de delitos en el ejercicio de su encargo.</p> <p><b>Artículo 76 Bis.</b> Se aplicarán sanciones administrativas a los</p>

servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestaciones, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y los órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en esta Constitución y en las leyes que correspondan, sin perjuicio de las atribuciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones; cuando éstos fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años.

Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado.

	<p>Los procedimientos para la aplicación de las sanciones en materia de responsabilidades se desarrollarán autónomamente. No se podrá sancionar dos veces por una sola conducta de la misma naturaleza. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado, respecto de las conductas a las que se refiere este artículo.</p> <p>En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información.</p>
<p><b>Artículo 79. ...</b>                  ...                  ...                  ...                  ...                  La legislación determinará las obligaciones de los servidores públicos, los procedimientos, las sanciones y las autoridades encargadas de aplicarlas. <u>La responsabilidad administrativa, prescribirá a los tres años siguientes al término del cargo.</u></p>	<p><b>Artículo 79. ...</b>                  ...                  ...                  ...                  ...                  La legislación determinará las obligaciones de los servidores públicos, los procedimientos, las sanciones y las autoridades encargadas de aplicarlas, <b>tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones. En la responsabilidad administrativa, cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años.</b></p>

<b>COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE YUCATÁN</b>	
<b>TEXTO ANTERIOR</b>	<b>TEXTO VIGENTE</b>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO PRELIMINAR                      DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS</b></p> <p><b>Artículo 1. ...</b>                      ...                      ...                      ...                      ...</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO PRELIMINAR                      DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS</b></p> <p><b>Artículo 1. ...</b>                      ...                      ...                      ...                      ...</p>



<p>...</p>	<p>Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.</p>
<p><b>Artículo 2. ...</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p><u>La conciencia de la identidad maya de Yucatán</u> es el criterio fundamental para determinar que a una persona le son aplicables las disposiciones sobre el pueblo maya yucateco y sus comunidades.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p><b>Artículo 2. ...</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>El derecho a la identidad constituye uno de los cimientos del desarrollo de la cultura maya, por lo que la conciencia de esta identidad es el criterio fundamental para determinar que a una persona le son aplicables las disposiciones sobre el pueblo maya yucateco y sus comunidades.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO PRIMERO DE LOS YUCATECOS CAPÍTULO II DE LOS CIUDADANOS YUCATECOS</b></p> <p><b>Artículo 7 Bis.</b> Se reconoce el derecho a la libre determinación del pueblo maya, bajo un marco autonómico en armonía con la unidad Estatal, conforme a las siguientes prerrogativas y atribuciones:</p> <p><b>I. a III. ...</b></p> <p><b>IV.</b> Elegir a sus autoridades y demás representantes que integran su forma de gobierno interno, con arreglo a los procedimientos y prácticas tradicionales; procurando en todo caso, la participación efectiva de las mujeres en igualdad de condiciones respecto a los varones.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO PRIMERO DE LOS YUCATECOS CAPÍTULO II DE LOS CIUDADANOS YUCATECOS</b></p> <p><b>Artículo 7 Bis.</b> Se reconoce el derecho a la libre determinación del pueblo maya, bajo un marco autonómico en armonía con la unidad Estatal, conforme a las siguientes prerrogativas y atribuciones:</p> <p><b>I. a III. ...</b></p> <p><b>IV.</b> Elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los ciudadanos en la elección de sus autoridades municipales.</p>

<p>V. ...</p> <p style="text-align: center;"><b>TÍTULO TERCERO                  DEL PODER PÚBLICO DEL ESTADO                  CAPÍTULO ÚNICO                  DE LA DIVISIÓN DE PODERES</b></p> <p><b>Artículo 16. ...</b>                  Las elecciones del Gobernador, de los diputados y de los integrantes de los ayuntamientos se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, conforme a las siguientes disposiciones:  <b>Apartado A. De los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.</b>                  Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su participación en el proceso electoral, los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden, así como las reglas para garantizar la paridad de género en la asignación de candidaturas <u>a diputados</u>.                  Son fines esenciales de los partidos políticos: promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política estatal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público; de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p><b>Apartado B. ...</b>  <b>Apartado C. Del Financiamiento, acceso a medios de comunicación y propaganda.</b>                  ...</p> <p><b>I. Financiamiento:</b>                  El financiamiento público de los partidos políticos se compondrá de los montos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y</p>	<p>V. ...</p> <p style="text-align: center;"><b>TÍTULO TERCERO                  DEL PODER PÚBLICO DEL ESTADO                  CAPÍTULO ÚNICO                  DE LA DIVISIÓN DE PODERES</b></p> <p><b>Artículo 16. ...</b>                  Las elecciones del Gobernador, de los diputados y de los integrantes de los ayuntamientos se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, conforme a las siguientes disposiciones:  <b>Apartado A. De los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.</b>                  Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su participación en el proceso electoral, los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden, así como las reglas para garantizar la paridad de género en la asignación de candidaturas a diputados <b>y de candidaturas para ayuntamientos, en sus dimensiones horizontal y vertical.</b> Son fines esenciales de los partidos políticos: promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política estatal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público; de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p><b>Apartado B. ...</b>  <b>Apartado C. Del Financiamiento, acceso a medios de comunicación y propaganda.</b>                  ...</p> <p><b>I. Financiamiento:</b>                  El financiamiento público de los partidos políticos se compondrá de los montos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los</p>
---	--

<p>las de carácter específico, se otorgará conforme a lo que disponga la ley y a lo siguiente:</p> <p><b>a).</b> Para actividades ordinarias permanentes, los montos se fijarán anualmente. <u>El 35 % de la cantidad total que resulte se distribuirá entre los partidos políticos en partes iguales y el 65 % restante se distribuirá de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa;</u></p> <p><b>b).</b> ...</p> <p><b>c).</b> Para actividades específicas equivaldrá al 7 % del monto total que corresponda cada año por actividades ordinarias. El <b>40 %</b> de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente se distribuirá entre los partidos políticos de forma igualitaria y el <b>60 %</b> restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Los partidos políticos deberán destinar el 25 % del monto que les corresponda de las actividades específicas para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.</p> <p>La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. El monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes no podrá exceder anualmente para cada partido del <b>10 %</b> del tope de gastos establecido en la última campaña estatal para <b>Gobernador</b>; asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.</p> <p><b>II. a III. ...</b>  <b>Apartado D. al Apartado F. ...</b></p>	<p>procesos electorales y las de carácter específico, se otorgará conforme a lo que disponga la ley y a lo siguiente:</p> <p><b>a).</b> Para actividades ordinarias permanentes, los montos se fijarán anualmente, <b>multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral estatal por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización.</b></p> <p><b>En los meses y años en los que no se desarrolle proceso electoral, dicho financiamiento público se otorgará en un 50% del resultado de la operación señalada en el párrafo anterior.</b></p> <p><b>En ambos casos, el 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en partes iguales y el 70% restante se distribuirá de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección inmediata anterior de diputados por el principio de mayoría relativa;</b></p> <p><b>b).</b> ...</p> <p><b>c)</b> Para actividades específicas equivaldrá al 7% del monto total que corresponda cada año por actividades ordinarias. El <b>30%</b> de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente se distribuirá entre los partidos políticos de forma igualitaria y el <b>70%</b> restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Los partidos políticos deberán destinar el 25% del monto que les corresponda de las actividades específicas para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.</p> <p>La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. El monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes no podrá exceder anualmente para cada partido del <b>8%</b> del tope de gastos establecido en la última campaña electoral para <b>Presidente de la República, siempre que dicho monto no rebase el financiamiento público;</b> asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.</p> <p><b>II. a III. ...</b>  <b>Apartado D. al Apartado F. ...</b></p>
<p><b>TÍTULO CUARTO                  DEL PODER LEGISLATIVO</b></p>	<p><b>TÍTULO CUARTO                  DEL PODER LEGISLATIVO</b></p>

<p><b>CAPÍTULO I</b>  <b>DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO</b></p> <p><b>Artículo 19. ...</b>                  El Presidente del Congreso en los términos de las Leyes, velará por el respeto a la inmunidad de sus integrantes y garantizará la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.</p>	<p><b>CAPÍTULO I</b>  <b>DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO</b></p> <p><b>Artículo 19. ...</b>                  El Presidente del Congreso en los términos de las leyes garantizará la inviolabilidad del recinto donde los diputados se reúnan a sesionar.</p>
<p><b>CAPÍTULO II</b>  <b>DE LA ELECCIÓN E INSTALACIÓN DEL CONGRESO</b></p> <p><b>Artículo 24.</b> <u>El Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán</u>, declarará la validez de las elecciones de Gobernador, Diputados, Regidores y Síndicos; efectuará la asignación de diputados y regidores según el principio de representación proporcional y expedirá las constancias respectivas a los candidatos electos.                  ...</p>	<p><b>CAPÍTULO II</b>  <b>DE LA ELECCIÓN E INSTALACIÓN DEL CONGRESO</b></p> <p><b>Artículo 24.</b> El <u>Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán</u> declarará la validez de las elecciones de Gobernador, Diputados, Regidores y Síndicos; efectuará la asignación de diputados y regidores según el principio de representación proporcional y expedirá las constancias respectivas a los candidatos electos.                  ...</p>
<p><b>TÍTULO SÉPTIMO</b>  <b>DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS</b>  <b>CAPÍTULO VI</b></p> <p><b>Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán</b>  <b>Artículo 75 Quater. ...</b>                  El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán estará integrado por tres magistrados, designados por el Gobernador y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes del Congreso <u>o, en sus recesos, por la Diputación Permanente.</u> Durarán en su encargo cinco años pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos, hasta para dos períodos más, y sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley.                  ...</p>	<p><b>TÍTULO SÉPTIMO</b>  <b>DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS</b>  <b>CAPÍTULO VI</b></p> <p><b>Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán</b>  <b>Artículo 75 Quater. ...</b>                  El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán estará integrado por tres magistrados, designados por el Gobernador y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes del Congreso. Durarán en su encargo cinco años pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos, hasta para dos períodos más, y sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley.                  ...</p>
<p><b>TÍTULO DÉCIMO</b>  <b>DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y</b>  <b>LOS PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS</b>  <b>ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE CORRUPCIÓN</b></p> <p><b>Artículo 97. ...</b>                  ...                  ...                  ...                  ...</p>	<p><b>TÍTULO DÉCIMO</b>  <b>DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>  <b>Y LOS PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS</b>  <b>ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE CORRUPCIÓN</b></p> <p><b>Artículo 97. ...</b>                  ...                  ...                  ...                  ...</p>

<p>...</p> <p>...</p> <p>Para proceder penalmente en contra <u>del Gobernador del estado; los diputados locales en funciones; los magistrados y los consejeros de la judicatura del Poder Judicial del estado; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; los comisionados del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; el consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán; los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán; los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán; los titulares de las dependencias de la Administración Pública estatal; y los presidentes municipales, es necesario la declaración de <u>procedencia que emita el Congreso del estado.</u></u></p>	<p>...</p> <p>...</p> <p>Para proceder penalmente en contra <b>de los magistrados y consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se requerirá la declaración de procedencia que emita el Congreso del estado, únicamente por la comisión de delitos cometidos contra la administración de justicia y otros ramos del poder público, particularmente en las resoluciones o sentencias que pronuncien, establecidos en el Código Penal del Estado de Yucatán.</b></p>
<p><b>Artículo 100.</b> El Congreso del estado, mediante el voto de las dos terceras partes del total de sus integrantes, resolverá lo conducente, para proceder penalmente <u>contra los diputados locales; los magistrados y los consejeros de la judicatura del Poder Judicial del estado;</u> el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; los comisionados del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; el consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán; los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán; los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán; los titulares de las dependencias de la Administración Pública centralizada y los directores generales o sus equivalentes de la Administración Pública paraestatal; y los presidentes municipales, por la comisión de delitos durante su encargo.                  El Gobernador del Estado, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por delitos graves del orden común.</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p><b>Artículo 100.</b> El Congreso del estado, mediante el voto de las dos terceras partes del total de sus integrantes, resolverá lo conducente, para proceder penalmente <b>en contra de los magistrados y consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del estado, únicamente por la comisión de delitos cometidos contra la administración de justicia y otros ramos del poder público, particularmente en las resoluciones o sentencias que pronuncien, establecidos en el Código Penal del Estado de Yucatán, efectuados durante su encargo.</b>  <b>Los diputados locales; los magistrados y los consejeros de la judicatura del Poder Judicial del estado; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; los comisionados del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; el consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán; los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán; los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán; los titulares de las dependencias de la Administración Pública centralizada y los directores generales o sus equivalentes de la Administración Pública paraestatal; y los presidentes municipales, que fueran objeto de proceso penal, permanecerán en su cargo, hasta en tanto se dicte sentencia condenatoria definitiva.</b></p> <p>...</p> <p>...</p>

...	...
...	...
...	...
...	...

COMPARATIVO TEXTO ANTERIOR Y TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE ZACATECAS	
TEXTO ANTERIOR	TEXTO VIGENTE
<b>CAPÍTULO SÉPTIMO DE LOS EXTRANJEROS</b>	<b>CAPÍTULO SÉPTIMO DE LOS EXTRANJEROS</b> <b>TÍTULO II</b> <b>DE LOS DERECHOS HUMANOS</b> <b>CAPÍTULO ÚNICO</b> <b>DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS</b>
<p><b>Artículo 20.</b> Son personas extranjeras en el Estado quienes no posean las calidades determinadas en el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quienes gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución.</p>	<p><b>Artículo 20.</b> Son personas extranjeras en el Estado quienes no posean las calidades determinadas en el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quienes gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución.</p>
<u><b>TÍTULO II</b></u> <u><b>DE LOS DERECHOS HUMANOS</b></u> <u><b>CAPÍTULO ÚNICO</b></u> <u><b>DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS</b></u>	<p><b>Artículo 21. ...</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p><b>Artículo 21. ...</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p><b>Artículo 21. ...</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p><b>Artículo 23</b> En el Estado de Zacatecas funcionará una Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, como organismo descentralizado de la Administración Pública, de carácter autónomo, con personalidad jurídica, autonomía presupuestaria y de gestión, cuyos servicios serán gratuitos, encargado de la defensa y promoción de los derechos humanos.</p>	<p><b>Artículo 23.</b> En el Estado de Zacatecas funcionará una Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, como organismo descentralizado de la Administración Pública, de carácter autónomo, con personalidad jurídica, autonomía presupuestaria y de gestión, cuyos servicios serán gratuitos, encargado de la defensa y promoción de los derechos humanos, <b>además, contará con un órgano interno de control que tendrá autonomía técnica y de gestión en la vigilancia de los ingresos y egresos de la Comisión, mismo que será designado por la votación (sic) las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del Estado.</b></p>

<p>La Legislatura del Estado propondrá y designará a su Presidente y Consejeros, ajustándose a un procedimiento de consulta pública, el cual deberá ser transparente e informado, en los términos y condiciones que determine la ley; asimismo expedirá el ordenamiento que regule sus funciones, en concordancia con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>La Legislatura del Estado propondrá y designará a su Presidente y Consejeros, ajustándose a un procedimiento de consulta pública, el cual deberá ser transparente e informado, en los términos y condiciones que determine la ley; asimismo expedirá el ordenamiento que regule sus funciones, en concordancia con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos <b>y las leyes aplicables.</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p><b>Artículo 29.</b> La autoridad ante la cual se haya ejercido el derecho de petición en los términos del artículo 8º (sic) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendrá la obligación de comunicar su acuerdo al peticionario dentro de los treinta días hábiles siguientes a la presentación del escrito, salvo lo dispuesto por la ley para casos especiales.</p> <p>Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, el Estado y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:</p> <p><b>I. a VII. ...</b></p> <p><b>VIII. ...</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se integrará por tres Comisionados, de acuerdo al procedimiento que establezca <u>la Ley en la materia</u>. Los comisionados del Instituto, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de actividades en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p><b>Artículo 29.</b> La autoridad ante la cual se haya ejercido el derecho de petición en los términos del artículo 8º (sic) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendrá la obligación de comunicar su acuerdo al peticionario dentro de los treinta días hábiles siguientes a la presentación del escrito, salvo lo dispuesto por la ley para casos especiales.</p> <p>Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, el Estado y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:</p> <p><b>I. a VII. ...</b></p> <p><b>VIII. ...</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se integrará por tres Comisionados, de acuerdo al procedimiento que establezca la <b>ley de la materia</b>. Los comisionados del Instituto, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de actividades en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.</p> <p><b>Además, contará con un órgano interno de control que tendrá autonomía técnica y de gestión en la vigilancia de los ingresos y egresos del instituto, mismo que será designado por la votación las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del Estado.</b></p> <p>...</p> <p>...</p>

<p><b>TÍTULO III                  DEL SISTEMA ELECTORAL                  CAPÍTULO PRIMERO                  DE LOS PROCESOS ELECTORALES</b></p> <p><b>Artículo 38.</b> El Estado garantizará la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad de la función electoral y de consulta popular ciudadana. La organización, preparación y realización de los procesos electorales y de consulta popular, se sujetará a las reglas siguientes:</p> <p><b>I. ...</b>                  El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, es autoridad en la materia, profesional en el desempeño de sus actividades e independiente en sus decisiones. Contará con los órganos directivos, ejecutivos, técnicos y de vigilancia que le sean indispensables para el desempeño de su función.</p> <p>El Servicio Profesional Electoral Nacional determinará las bases para la incorporación del personal del Instituto al mismo. Podrá de acuerdo con la ley, introducir las modalidades y los avances tecnológicos para el ejercicio del sufragio popular, preservando su calidad de universal, libre, secreto y directo;</p> <p>...                  ...</p> <p><b>II. a XIV. ...</b></p>	<p><b>TÍTULO III                  DEL SISTEMA ELECTORAL                  CAPÍTULO PRIMERO                  DE LOS PROCESOS ELECTORALES</b></p> <p><b>Artículo 38.</b> El Estado garantizará la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad de la función electoral y de consulta popular ciudadana. La organización, preparación y realización de los procesos electorales y de consulta popular, se sujetará a las reglas siguientes:</p> <p><b>I. ...</b>                  El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, es autoridad en la materia, profesional en el desempeño de sus actividades e independiente en sus decisiones. Contará con los órganos directivos, ejecutivos, técnicos y de vigilancia que le sean indispensables para el desempeño de su función, <b>así como con un órgano interno de control que tendrá autonomía técnica y de gestión en la vigilancia de los ingresos y egresos del Instituto, mismo que será designado por la Legislatura del Estado.</b> El Servicio Profesional Electoral Nacional determinará las bases para la incorporación del personal del Instituto al mismo. Podrá de acuerdo con la ley, introducir las modalidades y los avances tecnológicos para el ejercicio del sufragio popular, preservando su calidad de universal, libre, secreto y directo;</p> <p>...                  ...</p> <p><b>II. a XIV. ...</b></p>
<p><b>CAPÍTULO SEGUNDO                  DE LA JUSTICIA ELECTORAL</b></p> <p><b>Artículo 42.</b> Se establecerá un sistema de medios de impugnación contra actos o resoluciones electorales, para garantizar los principios de legalidad y definitividad de los procesos; en ningún caso la interposición de los medios de impugnación producirá efectos suspensivos respecto del acto, resolución o resultados que se hubiesen impugnado. La ley establecerá los requisitos y normas a que deban sujetarse la interposición y tramitación de los medios de impugnación en los procesos electorales y de consulta popular. Será competente para conocer de los recursos que se interpongan, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.</p>	<p><b>CAPÍTULO SEGUNDO                  DE LA JUSTICIA ELECTORAL</b></p> <p><b>Artículo 42.</b> Se establecerá un sistema de medios de impugnación contra actos o resoluciones electorales, para garantizar los principios de legalidad y definitividad de los procesos; en ningún caso la interposición de los medios de impugnación producirá efectos suspensivos respecto del acto, resolución o resultados que se hubiesen impugnado. La ley establecerá los requisitos y normas a que deban sujetarse la interposición y tramitación de los medios de impugnación en los procesos electorales y de consulta popular. Será competente para conocer de los recursos que se interpongan, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.</p>



<p><b>A.</b> ...  <b>B.</b> El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, en el ámbito de su competencia le corresponderá en los términos de esta Constitución y la Ley, resolver sobre:  <b>I. a VIII.</b> ...  <b>C.</b> El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.</p> <p>Elaborará su anteproyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo, a fin de que lo envíe a la Legislatura del Estado, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación; la Legislatura, será quien realice la revisión y fiscalización de los recursos asignados en términos de la Ley aplicable.</p> <p>...</p> <p><b>D.</b> ...</p>	<p><b>A.</b> ...  <b>B.</b> El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, en el ámbito de su competencia le corresponderá en los términos de esta Constitución y la Ley, resolver sobre:  <b>I. a VIII.</b> ...  <b>C.</b> El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento, <b>así como con un órgano interno de control, que tendrá autonomía técnica y de gestión en la vigilancia de los ingresos y egresos del Tribunal, mismo que será designado por la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del Estado.</b></p> <p>Elaborará su anteproyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo, a fin de que lo envíe a la Legislatura del Estado, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación; la Legislatura, será quien realice la revisión y fiscalización de los recursos asignados en términos de la Ley aplicable.</p> <p>...</p> <p><b>D.</b> ...</p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO IV                  DE LOS PODERES DEL ESTADO                  CAPÍTULO PRIMERO                  DEL PODER LEGISLATIVO                  SECCIÓN PRIMERA                  DE LA INSTALACIÓN DE LA LEGISLATURA Y PERIODOS                  ORDINARIOS DE SESIONES</b></p> <p><b>Artículo 59.</b> En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio de la Legislatura, el Gobernador o Gobernadora del Estado presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la Administración Pública Estatal.</p> <p>Los diputados realizarán el análisis del informe y podrán solicitar al Gobernador o Gobernadora del Estado, ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los titulares de las Dependencias y Entidades Paraestatales, <u>así como al Procurador General de Justicia del Estado</u>, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento General regularán el ejercicio de esta facultad.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO IV                  DE LOS PODERES DEL ESTADO                  CAPÍTULO PRIMERO                  DEL PODER LEGISLATIVO                  SECCIÓN PRIMERA                  DE LA INSTALACIÓN DE LA LEGISLATURA Y PERIODOS                  ORDINARIOS DE SESIONES</b></p> <p><b>Artículo 59.</b> En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio de la Legislatura, el Gobernador o Gobernadora del Estado presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la Administración Pública Estatal.</p> <p>Los diputados realizarán el análisis del informe y podrán solicitar al Gobernador o Gobernadora del Estado, ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los titulares de las Dependencias y Entidades Paraestatales, <b>así como al Fiscal General de Justicia del Estado</b>, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento General regularán el ejercicio de esta facultad.</p>

<p>El informe correspondiente al sexto año de ejercicio gubernamental será presentado, a más tardar, el último día del mes de julio del año que corresponda. La Comisión Permanente lo recibirá y convocará al Pleno de la Legislatura a periodo extraordinario de sesiones, el que se realizará dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción, para el sólo efecto de recibir a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, <u>así como al Procurador General de Justicia del Estado</u>, quienes comparecerán a dar contestación a los cuestionamientos que los Diputados les formulen. Dentro del término referido, la Legislatura podrá solicitar al Titular del Poder Ejecutivo amplíe la información, mediante pregunta por escrito.</p>	<p>El informe correspondiente al sexto año de ejercicio gubernamental será presentado, a más tardar, el último día del mes de julio del año que corresponda. La Comisión Permanente lo recibirá y convocará al Pleno de la Legislatura a periodo extraordinario de sesiones, el que se realizará dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción, para el sólo efecto de recibir a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, <b>así como al Fiscal General de Justicia del Estado</b>, quienes comparecerán a dar contestación a los cuestionamientos que los Diputados les formulen. Dentro del término referido, la Legislatura podrá solicitar al Titular del Poder Ejecutivo amplíe la información, mediante pregunta por escrito.</p>
<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN TERCERA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA LEGISLATURA</b></p> <p><b>Artículo 65.</b> Son facultades y obligaciones de la Legislatura:</p> <p><b>I. a XIV. ...</b></p> <p><b>XV.</b> Expedir la Ley que regule la organización de la Entidad de Fiscalización Superior del Estado y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes del Estado, Municipios y sus respectivos entes públicos.</p> <p>Evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la Entidad de Fiscalización Superior del Estado, en los términos que disponga la ley. Al efecto, podrá requerirle informes sobre la evolución de los trabajos de fiscalización;</p> <p><b>XVI. a XXX. ...</b></p> <p><b>XXXI.</b> Revisar y resolver dentro de los siete meses siguientes a la recepción de los Informes complementarios, sobre las cuentas públicas del Gobierno Estatal, de los Municipios y de sus entes públicos paraestatales y paramunicipales, correspondientes al año anterior y verificar los resultados de su gestión financiera y la utilización del crédito. Para el cumplimiento de las metas fijadas en los programas y proyectos de los presupuestos de egresos, podrá realizar auditorías sobre el desempeño.</p> <p>Para la revisión de las Cuentas Públicas la Legislatura se apoyará en la Entidad de Fiscalización Superior del Estado. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes</p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN TERCERA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA LEGISLATURA</b></p> <p><b>Artículo 65.</b> Son facultades y obligaciones de la Legislatura:</p> <p><b>I. a XIV. ...</b></p> <p><b>XV.</b> Expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior del Estado y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes del Estado, Municipios y sus respectivos entes públicos, <b>así como expedir la ley sobre el Sistema Estatal Anticorrupción, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la presente Constitución y demás leyes aplicables;</b></p> <p>Evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior del Estado, en los términos que disponga la ley. Al efecto, podrá requerirle informes sobre la evolución de los trabajos de fiscalización;</p> <p><b>XVI. a XXX. ...</b></p> <p><b>XXXI.</b> Revisar y resolver dentro de los siete meses siguientes <b>a la recepción del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas del Gobierno Estatal, de los Municipios y de sus entes públicos paraestatales y paramunicipales, correspondientes al año anterior.</b></p> <p>Para el cumplimiento de las metas fijadas en los programas y proyectos de los presupuestos de egresos, podrá realizar auditorías sobre el desempeño.</p> <p>Para la revisión de las Cuentas Públicas la Legislatura se apoyará en la Auditoría Superior del Estado. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los</p>

<p>a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas, o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos, o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. Respecto de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha entidad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la ley;  <b>XXXII. a XXXIII.</b> ...  <b>XXXIV.</b> Nombrar o ratificar Magistrados y Consejeros en los términos de las leyes respectivas;</p> <p><b>XXXV. a XLV.</b> ...  <b>XLVI.</b> Solicitar al titular del Ejecutivo la comparecencia de los Secretarios de Despacho, <u>del Procurador General de Justicia del Estado</u>, de los directores de corporaciones de seguridad pública, así como de los directores de la administración pública estatal. Podrá asimismo citar a los integrantes de los Ayuntamientos, así como a los directores de las administraciones públicas paraestatal y paramunicipal. Todo lo anterior, a fin de que tales servidores públicos informen sobre el desempeño de su cargo;  <b>XLVII. a L.</b> ...</p>	<p>ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas, o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos, o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. Respecto de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha entidad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la ley;  <b>XXXII. a XXXIII.</b> ...  <b>XXXIV.</b> Nombrar o ratificar Magistrados y Consejeros en los términos de las leyes respectivas; <b>aprobar, con la mayoría de los miembros presentes de la Legislatura, la designación que sobre el titular del órgano interno de control del Poder Ejecutivo realice el Gobernador del Estado y, designar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la presente Constitución;</b>  <b>XXXV. a XLV.</b> ...  <b>XLVI.</b> Solicitar al titular del Ejecutivo la comparecencia de los Secretarios de Despacho, <b>del Fiscal General de Justicia del Estado</b>, de los directores de corporaciones de seguridad pública, así como de los directores de la administración pública estatal. Podrá asimismo citar a los integrantes de los Ayuntamientos, así como a los directores de las administraciones públicas paraestatal y paramunicipal. Todo lo anterior, a fin de que tales servidores públicos informen sobre el desempeño de su cargo;  <b>XLVII. a L.</b> ...</p>
<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN SÉPTIMA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO Y MUNICIPIOS</b></p> <p><b>Artículo 71.</b> Para dar cumplimiento a las facultades de la Legislatura en materia de revisión de cuentas públicas se apoyará en la <u>Entidad de Fiscalización Superior del Estado</u>, la cual tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.          La Legislatura del Estado designará al titular <u>de la Entidad de Fiscalización</u> por las dos terceras partes de sus miembros presentes. La Ley determinará el procedimiento para su designación. <u>Dicho titular</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>SECCIÓN SÉPTIMA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO Y MUNICIPIOS</b></p> <p><b>Artículo 71.</b> Para dar cumplimiento a las facultades de la Legislatura en materia de revisión de cuentas públicas se apoyará en la <b>Auditoría Superior del Estado</b>, la cual tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.          La Legislatura del Estado designará al titular de la <b>Auditoría Superior del Estado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes</b>. La Ley determinará el procedimiento para su designación.</p>

durará en su encargo no menos de siete años. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Séptimo de esta Constitución. Para ser titular de la Entidad de Fiscalización Superior del Estado se requiere contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades, cumplir además de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, y VI del artículo 97 de esta Constitución, los que señale la Ley. Durante su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.

Los Poderes del Estado, los Municipios, los entes señalados en la fracción V de este artículo y los demás sujetos de fiscalización facilitarán los auxilios que requiera la Entidad de Fiscalización Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la ley. Asimismo, los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la Entidad de Fiscalización Superior del Estado, de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos que señale la ley.

El Poder Ejecutivo del Estado aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la fracción IV del presente artículo.

**Dicho titular durará en su encargo siete años.** Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Séptimo de esta Constitución.

Para ser titular de la **Auditoría Superior del Estado** se requiere contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades, cumplir además de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, y VI del artículo 97 de esta Constitución y los que señale la Ley. Durante su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.

Los Poderes del Estado, los Municipios, los entes señalados en la fracción V de este artículo y los demás sujetos de fiscalización facilitarán los auxilios que requiera **la Auditoría Superior del Estado** para el ejercicio de sus funciones, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la ley. Asimismo, los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos, deberán proporcionar la información y documentación que solicite **la Auditoría Superior del Estado**, de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos que señale la ley.

El Poder Ejecutivo del Estado aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere **esta fracción**.

**La Auditoría Superior del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública. Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría Superior del Estado podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos.**

<p><b>Entidad de Fiscalización Superior del Estado tendrá a su cargo:</b></p> <p><b>I.</b> Fiscalizar los ingresos y los egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y los recursos de los Poderes del Estado y Municipios y sus entes públicos paramunicipales y paraestatales, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos, establecidos conforme a las bases señaladas en el artículo 160 de esta Constitución, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas gubernamentales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.</p> <p>Sin perjuicio de los informes a que se refiere el párrafo anterior, en situaciones que determine la Ley, podrá requerir a los sujetos de fiscalización la presentación de la documentación e informes relativos al ingreso, manejo y aplicación de los recursos públicos a su cargo. <u>Asimismo, sin perjuicio del principio de anualidad, la Entidad de Fiscalización Superior del Estado</u> podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas. Las observaciones y acciones a promover que, respectivamente, <u>la Entidad de Fiscalización Superior del Estado</u> emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.</p> <p>También, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la ley, derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. La Entidad de Fiscalización Superior del Estado rendirá un informe específico a la Legislatura y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes.</p>	<p><b>La Auditoría Superior del Estado tendrá a su cargo:</b></p> <p><b>I.</b> Fiscalizar los ingresos y los egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y los recursos de los Poderes del Estado y Municipios y sus entes públicos paramunicipales y paraestatales, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos, establecidos conforme a las bases señaladas en el artículo 160 de esta Constitución, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas gubernamentales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.</p> <p>Sin perjuicio de los informes a que se refiere el párrafo anterior, en situaciones que determine la Ley, podrá requerir a los sujetos de fiscalización la presentación de la documentación e informes relativos al ingreso, manejo y aplicación de los recursos públicos a su cargo. <b>La Auditoría Superior del Estado</b> podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas. Las observaciones, recomendaciones y acciones a promover que, respectivamente, <b>la Auditoría Superior del Estado</b> emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.</p> <p>También, sin perjuicio <b>de lo previsto en el párrafo anterior</b>, en las situaciones que determine la ley, <b>derivado de denuncias, la Auditoría Superior del Estado, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior del Estado rendirá un informe específico a la Legislatura y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades</b></p>
---	--

II. Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Legislatura, dentro de los seis meses posteriores a su presentación. Dentro de dicho informe se incluirán las auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión y el apartado correspondiente a la fiscalización del manejo de los recursos y la verificación del desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas, así como un apartado específico con las observaciones de la Entidad de Fiscalización Superior que incluya las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, los entes fiscalizados hayan presentado. Este informe del resultado será sometido a la consideración del pleno de la Legislatura y tendrá carácter público.

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del informe del resultado, se darán a conocer a los entes fiscalizados la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la Entidad de Fiscalización Superior del Estado para la elaboración del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública.

La Entidad de Fiscalización Superior del Estado enviará a los entes fiscalizados, a más tardar dentro de los 10 días hábiles posteriores a que sea entregado a la Legislatura el informe del resultado, las observaciones y acciones promovidas que correspondan para que, en un plazo de hasta 20 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en ley. Lo anterior, no aplicará a las denuncias penales y a las promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que señale la ley.

La Entidad de Fiscalización Superior del Estado deberá pronunciarse en un plazo de 90 días hábiles sobre las respuestas emitidas por los entes fiscalizados, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las observaciones y acciones promovidas.

En el caso de las recomendaciones al desempeño los entes fiscalizados deberán precisar ante la Entidad de Fiscalización Superior del Estado, las mejoras realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia.

La Entidad de Fiscalización Superior del Estado, deberá entregar a la Legislatura en los plazos que establezca la ley, un informe sobre la

competentes;

II. Entregar a la Legislatura, dentro de los seis meses posteriores a su presentación, el informe individual de cada Cuenta Pública, así como el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del Pleno de la Legislatura. El Informe General Ejecutivo será de carácter público y tendrá el contenido que determine la ley; éste último incluirá como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico con las observaciones de la Auditoría Superior del Estado, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, los entes fiscalizados hayan presentado.

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del Informe General Ejecutivo y de los informes individuales de auditoría, se darán a conocer a los entes fiscalizados la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la Auditoría Superior del Estado para la elaboración de los referidos informes.

La Auditoría Superior del Estado enviará a los entes fiscalizados, los informes individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar dentro de los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe individual de auditoría respectivo a la Legislatura, mismos que contendrán las recomendaciones y acciones promovidas que correspondan para que, en un plazo de hasta 20 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones establecidas en la ley. Lo anterior, no aplicará a las promociones de responsabilidades ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que señale la ley. La Auditoría Superior del Estado deberá pronunciarse mediante el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, en un plazo de 90 días hábiles sobre las respuestas emitidas por los entes fiscalizados, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas. En el caso de las recomendaciones, los entes fiscalizados deberán precisar ante la Auditoría Superior del Estado, las mejoras realizadas, las acciones

situación que guardan las observaciones y acciones promovidas. La entidad de Fiscalización Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo. La Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.

Los estados y demás información presupuestaria, programática y contable que forman parte de la Cuenta Pública a que se refiere esta fracción, deberán elaborarse y presentarse con apego a la normatividad y técnicas establecidas en la legislación en materia de contabilidad gubernamental.

III. ...

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública del Estado o Municipios o al patrimonio de los entes públicos paraestatales y paramunicipales, y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Séptimo de esta Constitución, y presentar las denuncias y querrelas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la Ley.

V. También fiscalizará los recursos que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

emprendidas o, (sic) su caso, justificar su improcedencia. La Auditoría Superior del Estado deberá entregar a la Legislatura dentro de los primeros tres días de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los informes individuales de auditoría que haya presentado en los términos de esta fracción. En dicho informe, el cual tendrá carácter público, la Auditoría incluirá los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. La Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a que se refiere este artículo. La ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición. Los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que forman parte de la Cuenta Pública a que se refiere esta fracción, deberán elaborarse y presentarse con apego a la normatividad y técnicas establecidas en la legislación en materia de contabilidad gubernamental.

III. ...

IV. Derivado de sus investigaciones y una vez que cuente con las correspondientes conclusiones, la Auditoría Superior del Estado promoverá las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos estatales y municipales, y a los particulares vinculados con faltas administrativas graves;

V. También fiscalizará los recursos que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

<p>Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior, deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la ley.  La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de <b>posterioridad, anualidad</b>, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, y (sic)  <b>VI. a VIII. ...</b>  <b>IX. Presentar a la Legislatura el Proyecto Anual de Fiscalización.</b></p>	<p>Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior, deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la ley.  La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de <b>legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.</b>  <b>VI. a VIII. ...</b>  <b>IX. Informar a la Legislatura del Estado el Proyecto Anual de Fiscalización.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO SEGUNDO  DEL PODER EJECUTIVO  SECCIÓN SEGUNDA  DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL GOBERNADOR</b></p> <p><b>Artículo 82.</b> Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado:  <b>I. a X. ...</b>  <b>XI.</b> Nombrar y remover libremente a los servidores de la Administración Pública estatal, en los términos de las leyes reglamentarias;</p> <p><b>XII a XVI. ...</b>  <b>XVII.</b> Cuidar de la recaudación y administración de los ingresos del Estado, presentando anualmente a la Legislatura, a más tardar <b>el 15 de febrero</b>, la cuenta pública estatal correspondiente al año anterior; asegurar el manejo honesto, limpio y transparente de los recursos públicos; informar a la población cada tres meses sobre la situación que guardan las finanzas del Estado;  <b>XVIII. a XXXV. ...</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO SEGUNDO  DEL PODER EJECUTIVO  SECCIÓN SEGUNDA  DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL GOBERNADOR</b></p> <p><b>Artículo 82.</b> Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado:  <b>I. a X. ...</b>  <b>XI.</b> Nombrar y remover libremente a los servidores de la Administración Pública estatal, en los términos de las leyes reglamentarias, <b>con excepción del nombramiento del titular del órgano interno de control del Poder Ejecutivo del Estado, cuya designación será aprobada por la Legislatura;</b>  <b>XII a XVI. ...</b>  <b>XVII.</b> Cuidar de la recaudación y administración de los ingresos del Estado, presentando anualmente a la Legislatura, a más tardar <b>el 30 de abril</b>, la cuenta pública estatal correspondiente al año anterior; asegurar el manejo honesto, limpio y transparente de los recursos públicos; informar a la población cada tres meses sobre la situación que guardan las finanzas del Estado;  <b>XVIII. a XXXV. ...</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>SECCIÓN CUARTA  DEL MINISTERIO PÚBLICO</u></b></p> <p><b>Artículo 87.</b> La ley organizará al Ministerio Público del Estado, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público estará presidido por un Procurador General de Justicia, quien deberá llenar los requisitos exigidos para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Será designado por el Gobernador, con la ratificación de la mayoría de los miembros de la</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO SEGUNDO BIS  DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE  ZACATECAS Y EL MINISTERIO PÚBLICO</b></p> <p><b>Artículo 87.</b> El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de Justicia del Estado, que tendrá el carácter de organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y contará en su estructura con un órgano interno de control, que tendrá autonomía técnica y de gestión en la vigilancia de los ingresos y egresos de la Fiscalía y será designado por la votación de las dos</p>



<p>Legislatura del Estado y podrá ser removido libremente por él. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, contará con una Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, el Estado garantizará que cuente con los recursos humanos, financieros y materiales que requiera, para su efectiva operación. Su titular será designado por el Gobernador con la ratificación de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura del Estado y podrá ser removido por aquél.</p>	<p>terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del Estado. La ley organizará a la Fiscalía General de Justicia del Estado, cuyos servidores públicos serán nombrados y removidos de acuerdo con la presente Constitución y la ley respectiva. Estará presidida por un Fiscal General de Justicia, quien durará en su encargo siete años y deberá llenar los requisitos exigidos para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Será designado y removido conforme al procedimiento siguiente: A los 30 días antes de concluir el período para el cual fue designado el Fiscal General, o en su caso, a partir de su ausencia definitiva, la Legislatura del Estado contará con veinte días para integrar una lista de, al menos, cinco candidatos al cargo, aprobada por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Gobernador. Si el Gobernador no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente a la Legislatura una terna y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el Fiscal General designado podrá formar parte de la terna. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el Gobernador formulará una terna y la enviará a la consideración de la Legislatura. La Legislatura, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días. En caso de que el Gobernador no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, la Legislatura tendrá diez días para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que señala la fracción I. Si la Legislatura no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará al Fiscal General de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva. El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Legislatura dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General de</p>
--	--

	<p>Justicia será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si la Legislatura no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.</p> <p>En los recesos de la Legislatura, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a periodo extraordinario para la designación o formulación de objeción a la remoción del Fiscal General.</p> <p>Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la ley.</p> <p>El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo un informe de actividades. Comparecerá ante la Legislatura del Estado, cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.</p> <p>El Fiscal General de Justicia, los Fiscales especializados y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.</p> <p>La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, contará, al menos, con las Fiscalías Especializadas, en Atención de Delitos Electorales, de Combate a la Corrupción y de Derechos Humanos, el Estado garantizará que cuenten con los recursos humanos, financieros y materiales que requieran, para su efectiva operación, cuyos titulares serán nombrados por el Fiscal General de Justicia. El nombramiento y remoción de los fiscales antes referidos podrán ser objetados por la Legislatura del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si la Legislatura no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción.</p>
--	---

<p><b>Artículo 88.</b> Son funciones del Ministerio Público: la persecución de los delitos del orden común ante los tribunales; <u>solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; allegarse y requerir las pruebas que acrediten su responsabilidad</u>; procurar que los procesos se sigan con toda regularidad para que la justicia sea eficaz, imparcial, pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas y la reparación de los daños causados a las víctimas del delito, e intervenir en todos los demás asuntos que las leyes determinen.</p> <p>Para la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes, el Ministerio Público se auxiliará de la Policía Ministerial, la cual estará bajo el mando <u>y la autoridad del Procurador</u>.</p> <p>...</p>	<p><b>Artículo 88.</b> Son funciones del Ministerio Público: la persecución de los delitos del orden común ante los tribunales <b>y juzgados; solicitar las medidas cautelares contra los imputados y órdenes de aprehensión contra los inculpados; allegarse, requerir y presentar las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito</b>; procurar que los procesos se sigan con toda regularidad para que la justicia sea eficaz, imparcial, pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas y la reparación de los daños causados a las víctimas del delito, e intervenir en todos los demás asuntos que las leyes determinen.</p> <p><b>La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.</b></p> <p>Para la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes, el Ministerio Público se auxiliará de la Policía Ministerial, la cual estará bajo el mando <b>y la autoridad del Fiscal General de Justicia</b>.</p> <p>...</p>
<p><b>Artículo 89.</b> El Procurador General de Justicia será el representante legal del Gobierno e intervendrá personalmente en los negocios en que el Estado sea parte, y en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando se vea afectado el interés del Estado o de alguno de los Municipios; y por sí, o por conducto de sus agentes, cuando se perjudique el interés público o lo determinen las leyes.</p> <p>Será además el consejero jurídico del Gobierno del Estado.</p> <p>El Procurador y sus agentes se someterán estrictamente a las disposiciones de la ley y serán responsables de toda falta, omisión o violación en que incurran con motivo de sus funciones.</p>	<p><b>Artículo 89. Derogado</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO TERCERO                  DEL PODER JUDICIAL                  SECCIÓN PRIMERA                  DE LAS DISPOSICIONES GENERALES</b></p> <p><b>Artículo 90.</b> El ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, en un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en un Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes, Juzgados de primera instancia <u>y municipales</u>.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO TERCERO                  DEL PODER JUDICIAL                  SECCIÓN PRIMERA                  DE LAS DISPOSICIONES GENERALES</b></p> <p><b>Artículo 90.</b> El ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, en un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en un Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes, Juzgados de primera instancia, <b>de control y tribunales de</b></p>

<p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>enjuiciamiento.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p><b>Artículo 93.</b> La competencia del Tribunal Superior de Justicia, el funcionamiento del Pleno y de las Salas, las atribuciones de Magistrados y Jueces, el número y competencia de los Juzgados de primera <u>instancia y municipales,</u> y las responsabilidades en que incurran los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial del Estado, se regirán por lo que dispongan las leyes y los reglamentos respectivos conforme a esta Constitución.</p>	<p><b>Artículo 93.</b> La competencia del Tribunal Superior de Justicia, el funcionamiento del Pleno y de las Salas, las atribuciones de Magistrados y Jueces, el número y competencia de los Juzgados de primera, <b>de control y tribunales de enjuiciamiento</b> y las responsabilidades en que incurran los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial del Estado, se regirán por lo que dispongan las leyes y los reglamentos respectivos conforme a esta Constitución.</p>
<p><b>SECCIÓN SEGUNDA</b>  <b>DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA</b></p>	<p><b>SECCIÓN SEGUNDA</b>  <b>DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA</b></p>
<p><b>Artículo 97.</b> Para ser Magistrado se requiere:</p> <p><b>I. a IV. ...</b></p> <p><b>V.</b> No tener parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado con los demás Magistrados del Tribunal Superior <u>ni con el Procurador General de Justicia;</u> y</p> <p><b>VI. ...</b></p>	<p><b>Artículo 97.</b> Para ser Magistrado se requiere:</p> <p><b>I. a IV. ...</b></p> <p><b>V.</b> No tener parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado con los demás Magistrados del Tribunal Superior <b>ni con el Fiscal General de Justicia;</b> y</p> <p><b>VI. ...</b></p>
<p><b>Artículo 100.</b> Son facultades y obligaciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia:</p> <p><b>I. a VII. ...</b></p> <p><b>VIII.</b> Supervisar el estado de la Administración de Justicia en los juzgados de primera instancia y <u>municipales.</u></p> <p><b>IX. ...</b></p> <p><b>X.</b> Formular y aplicar los exámenes de oposición a los aspirantes a Jueces de primera instancia;</p> <p><b>XI. a XV. ...</b></p>	<p><b>Artículo 100.</b> Son facultades y obligaciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia:</p> <p><b>I. a VII. ...</b></p> <p><b>VIII.</b> Supervisar el estado de la Administración de Justicia en los Juzgados de primera instancia, <b>de control y tribunales de enjuiciamiento;</b></p> <p><b>IX. ...</b></p> <p><b>X.</b> Formular y aplicar los exámenes de oposición a los aspirantes a Jueces de primera instancia, <b>de control y de tribunales de enjuiciamiento;</b></p> <p><b>XI. a XV. ...</b></p>
<p><b>SECCIÓN CUARTA</b>  <b>DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA Y MUNICIPALES</b></p>	<p><b>SECCIÓN CUARTA</b>  <b>DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA Y MUNICIPALES</b></p>
<p><b>Artículo 104.</b> Los Jueces de primera instancia <u>serán nombrados</u> por el pleno del Tribunal Superior de Justicia mediante concurso de oposición.</p> <p><b>Artículo 106</b> Habrá en el Estado el número de Jueces <u>de primera instancia</u> que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la jurisdicción, atribuciones y deberes que la misma les señale.</p>	<p><b>Artículo 104.</b> Los Jueces de primera instancia, <b>de control y de tribunales de enjuiciamiento</b> serán nombrados por el pleno del Tribunal Superior de Justicia mediante concurso de oposición.</p> <p><b>Artículo 106</b> Habrá en el Estado el número de Jueces de primera instancia, <b>de control y tribunales de enjuiciamiento</b> que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la jurisdicción, atribuciones y deberes</p>

	que la misma les señale.
<p><b>Artículo 107.</b> Para ser Juez de primera instancia se requiere:  <b>I. a III. ...</b>  <b>IV.</b> No tener parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado con los Magistrados del Tribunal Superior <u>ni con el Procurador General de Justicia del Estado</u>; y  <b>V. ....</b></p>	<p><b>Artículo 107.</b> Para ser Juez de primera instancia se requiere:  <b>I. a III. ...</b>  <b>IV.</b> No tener parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado con los Magistrados del Tribunal Superior ni con el <b>Fiscal General de Justicia del Estado</b>; y  <b>V. ....</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO CUARTO                  DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA                  SECCIÓN PRIMERA                  DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO</b></p> <p><b>Artículo 112.</b> El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, forma parte del Poder Judicial del Estado. Conocerá y resolverá las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública estatal o municipal e intermunicipal y los particulares, dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar y ejecutar sus resoluciones, así como de las sanciones y demás resoluciones de la Entidad de Fiscalización Superior del Estado.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO CUARTO                  DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA                  SECCIÓN PRIMERA                  DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO</b></p> <p><b>Artículo 112.</b> El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, es un organismo jurisdiccional con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Conocerá y resolverá las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública estatal o municipal e intermunicipal y los particulares; asimismo impondrá, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la presente Constitución, la ley de responsabilidades del Estado y demás leyes aplicables, las sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa grave; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales e impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otras responsabilidades, las sanciones económicas, la inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a los entes o la hacienda pública.</p> <p>Contará con un órgano interno de control, que tendrá autonomía técnica y de gestión en la vigilancia de los ingresos y egresos del Tribunal y será designado por la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del Estado.</p>
<p><b>Artículo 113.</b> El Tribunal se integra por un Magistrado propietario y los</p>	<p><b>Artículo 113.</b> El Tribunal se integra por <b>tres Magistrados, los cuales</b></p>

<p>supernumerarios que se requieran, los cuales serán designados por la Legislatura del Estado y deberán satisfacer los mismos requisitos que se exigen para los Magistrados del Poder Judicial.</p>	<p>serán designados por la Legislatura del Estado, durarán en su encargo siete años y deberán satisfacer los mismos requisitos que se exigen para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.                  El procedimiento de designación de los Magistrados, deberá comenzar treinta días previos a la conclusión del periodo por el que fueron nombrados.                  La Legislatura del Estado, contará con veinte días para integrar una lista de ocho candidatos, la cual deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes y será enviada al Gobernador. Si el Gobernador no recibe la lista en el plazo señalado, enviará libremente a la Legislatura una lista de cinco personas y designará provisionalmente a los tres Magistrados, quienes ejercerán sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, los Magistrados designados podrán formar parte de la lista.                  De ser enviada por la Legislatura la lista en el plazo señalado en el párrafo anterior, dentro de los diez días siguientes el Gobernador formulará una lista de cinco personas y la enviará a la consideración de la Legislatura.                  Con base en la lista, la Legislatura previa comparecencia de las personas propuestas, designará a los tres Magistrados que integrarán el Tribunal por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días.                  En caso de que el Gobernador no envíe la lista a que se refiere el párrafo anterior, la Legislatura tendrá diez días para designar a los Magistrados de entre los candidatos de la lista que en un principio envió al Gobernador.                  Si la Legislatura no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará a los Magistrados de entre los candidatos que integren la lista a que se refiere el párrafo anterior o, en su caso, de la lista de cinco personas que puso a consideración de la Legislatura.                  Los Magistrados solo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO V                  DEL MUNICIPIO LIBRE                  CAPÍTULO PRIMERO                  DE LA ESTRUCTURA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO V                  DEL MUNICIPIO LIBRE                  CAPÍTULO PRIMERO                  DE LA ESTRUCTURA</b></p>

<p><b>Artículo 118.</b> El Estado tiene al Municipio Libre como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, conforme a las siguientes bases:</p> <p>I. ... II. ... ...</p> <p>El Ayuntamiento es depositario de la función pública municipal y constituye la primera instancia de gobierno, con el propósito de recoger y atender las necesidades colectivas y sociales, así como para articular y promover el desarrollo integral y sustentable del Municipio.</p> <p>Los Ayuntamientos crearán las dependencias y entidades de la administración pública municipal necesarias para cumplir con las atribuciones de su competencia.</p> <p>La competencia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución otorgan al gobierno municipal, será ejercida exclusivamente por el Ayuntamiento y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.</p> <p><b>III. a IX. ...</b></p>	<p><b>Artículo 118.</b> El Estado tiene al Municipio Libre como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, conforme a las siguientes bases:</p> <p>I. ... II. ... ...</p> <p>El Ayuntamiento es depositario de la función pública municipal y constituye la primera instancia de gobierno, con el propósito de recoger y atender las necesidades colectivas y sociales, así como para articular y promover el desarrollo integral y sustentable del Municipio.</p> <p>Los Ayuntamientos crearán las dependencias y entidades de la administración pública municipal necesarias para cumplir con las atribuciones de su competencia; <b>contarán con órganos internos de control designados en los términos de las leyes de la materia.</b></p> <p>La competencia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución otorgan al gobierno municipal, será ejercida exclusivamente por el Ayuntamiento y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.</p> <p><b>III. a IX. ...</b></p>
<p><b>Artículo 121.</b> Los Ayuntamientos someterán a la consideración de la Legislatura la aprobación de sus leyes de ingresos y tendrán facultades para aprobar los respectivos presupuestos de egresos con base en la disponibilidad de sus ingresos, tomando en cuenta las prioridades que fijen los planes de desarrollo y los programas operativos anuales del año que corresponda, debiendo observar las normas que expida el Poder Legislativo en cuanto a manejo presupuestal y cuenta pública, como las relativas a las remuneraciones que por el desempeño de su función, empleo, cargo, comisión o responsabilidad, contengan los tabuladores de remuneraciones previstos en sus respectivos presupuestos de egresos para sus servidores públicos.</p> <p><u>A más tardar el 15 de febrero del año siguiente a la conclusión del año fiscal,</u> el Ayuntamiento enviará a la Legislatura la cuenta pública, junto con los informes y documentos que justifiquen la aplicación de los ingresos y egresos, el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Municipal y en los programas operativos anuales, así como el manejo del crédito y la situación de la deuda pública; lo anterior, sin perjuicio del informe trimestral que rendirá a la Legislatura.</p>	<p><b>Artículo 121.</b> Los Ayuntamientos someterán a la consideración de la Legislatura la aprobación de sus leyes de ingresos y tendrán facultades para aprobar los respectivos presupuestos de egresos con base en la disponibilidad de sus ingresos, tomando en cuenta las prioridades que fijen los planes de desarrollo y los programas operativos anuales del año que corresponda, debiendo observar las normas que expida el Poder Legislativo en cuanto a manejo presupuestal y cuenta pública, como las relativas a las remuneraciones que por el desempeño de su función, empleo, cargo, comisión o responsabilidad, contengan los tabuladores de remuneraciones previstos en sus respectivos presupuestos de egresos para sus servidores públicos.</p> <p><b>A más tardar el 30 de abril del año siguiente a la conclusión del año fiscal,</b> el Ayuntamiento enviará a la Legislatura la cuenta pública, junto con los informes y documentos que justifiquen la aplicación de los ingresos y egresos, el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Municipal y en los programas operativos anuales, así como el manejo del crédito y la situación de la deuda pública; lo anterior, sin perjuicio del informe trimestral que rendirá a la Legislatura.</p>

<p><b>Artículo 122.</b> Los miembros del Ayuntamiento, el Presidente Municipal y los servidores públicos de la administración municipal, son personalmente responsables de los actos que en el ejercicio de sus funciones ejecuten en contravención de las leyes. <u>Los Ayuntamientos y la Legislatura, en el ámbito de sus competencias, conocerán y sancionarán estos actos en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas; cuando las acciones constituyan delito, conocerán las autoridades competentes.</u></p>	<p><b>Artículo 122.</b> Los miembros del Ayuntamiento, el Presidente Municipal y los servidores públicos de la administración municipal, son personalmente responsables de los actos que en el ejercicio de sus funciones ejecuten en contravención de las leyes. <b>Los órganos internos de control de los ayuntamientos,</b> en el ámbito de sus competencias, conocerán y sancionarán estos actos en los términos <b>de las leyes de responsabilidades administrativas; cuando las acciones constituyan delito,</b> conocerán las autoridades competentes.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO VI                  DEL SISTEMA ECONÓMICO DEL ESTADO                  CAPÍTULO PRIMERO                  DE LA ESTRUCTURA</b></p> <p><b>Artículo 129. ...</b>                  ...                  ...</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO VI                  DEL SISTEMA ECONÓMICO DEL ESTADO Y DEL SISTEMA                  ESTATAL ANTICORRUPCIÓN                  CAPÍTULO PRIMERO                  DE LA ESTRUCTURA</b></p> <p><b>Artículo 129. ...</b>                  ...                  ...</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO TERCERO                  DEL PATRIMONIO Y LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO</b></p> <p><b>Artículo 137. ...</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO TERCERO                  DEL PATRIMONIO, LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO Y EL                  SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN</b></p> <p><b>Artículo 137. ...</b></p>
<p><b>Artículo 138.</b> La hacienda pública será administrada por el Ejecutivo en la forma que prevengan las leyes. Los caudales de la hacienda pública estatal se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez y no podrán ser empleados, por ningún concepto, en beneficio exclusivo de alguno de los Municipios del Estado.</p>	<p><b>Artículo 138.</b> La hacienda pública será administrada por el Ejecutivo en la forma que prevengan las leyes. Los caudales de la hacienda pública estatal se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez y no podrán ser empleados, por ningún concepto, en beneficio exclusivo de alguno de los Municipios del Estado.</p> <p><b>Se crea el Sistema Estatal Anticorrupción que será la instancia de coordinación entre las autoridades, órganos, organismos y tribunales competentes para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. La ley establecerá las bases para el cumplimiento de su objeto, la cual se sujetará a las siguientes bases mínimas:</b></p> <p><b>I.</b> El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el titular del órgano interno de control del Poder Ejecutivo del Estado, por el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas y del titular</p>



	<p>del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; así como por un representante del Tribunal Superior de Justicia y otro del Comité de Participación Ciudadana;</p> <p><b>II.</b> El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley; <b>III.</b> Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la ley:</p> <p><b>a)</b> El establecimiento de mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción, acorde a los emitidos por dicho Sistema;</p> <p><b>b)</b> El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;</p> <p><b>c)</b> La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones estatales y municipales competentes;</p> <p><b>d)</b> El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades estatales y municipales en materia de fiscalización y control de los recursos públicos;</p> <p><b>e)</b> La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.</p> <p>Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno.</p> <p>Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas. Para este efecto deberán observar las metodologías que emita el Sistema Nacional Anticorrupción.</p>
<p><b>Artículo 144. ...</b>                  Cuando las licitaciones a que se hace referencia en el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes</p>	<p><b>Artículo 144. ...</b>                  Cuando las licitaciones a que se hace referencia en el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes</p>

<p>establecerán los procedimientos, requisitos, bases, reglas y demás elementos para garantizar la economía, eficiencia, imparcialidad y honradez.  <u>Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título VII de esta Constitución.</u></p>	<p>establecerán los procedimientos, requisitos, bases, reglas y demás elementos para garantizar la economía, eficiencia, imparcialidad y honradez.          Los servidores públicos y los particulares serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos <b>de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esta Constitución y demás disposiciones aplicables.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO VII</b>  <b><u>DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS</u></b>  <b>CAPÍTULO PRIMERO</b>  <b><u>DE LAS RESPONSABILIDADES OFICIALES</u></b></p> <p><b>Artículo 147.</b> Para los efectos de las responsabilidades a <u>que se refiere este Título</u>, se reputará como servidores públicos a los representantes de elección popular estatales y municipales; a los miembros del Poder Judicial del Estado; a los funcionarios y empleados de los Poderes Legislativo y Ejecutivo; <u>a los Magistrados de otros tribunales, a los integrantes del Instituto Estatal Electoral y</u>, en general, a toda persona que desempeñe algún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza al servicio de la Administración Pública centralizada y paraestatal, municipal y paramunicipal, así como de los organismos públicos autónomos, quienes serán responsables de los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones.</p> <p>Son inatacables las declaraciones y resoluciones que de conformidad con lo dispuesto en este Título, expidan la Legislatura o el Tribunal Superior de Justicia del Estado.</p> <p><b>Artículo 150.</b> La Legislatura del Estado expedirá la Ley de</p>	<p style="text-align: center;"><b>TÍTULO VII</b>  <b><u>DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE CORRUPCIÓN Y PATRIMONIAL DEL ESTADO</u></b>  <b>CAPÍTULO PRIMERO</b>  <b><u>DE LAS RESPONSABILIDADES</u></b></p> <p><b>Artículo 147.</b> Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere <b>esta Constitución</b>, se reputará como servidores públicos a los representantes de elección popular estatales y municipales; a los miembros del Poder Judicial del Estado; a los funcionarios y empleados de los Poderes Legislativo y Ejecutivo; <b>a los integrantes, del Instituto Electoral del Estado, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, a los Magistrados de otros tribunales y</b>, en general, a toda persona que desempeñe algún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza al servicio de la Administración Pública centralizada y paraestatal, municipal, paramunicipal e intermunicipal, quienes serán responsables de los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones. <b>Los servidores públicos a los que se refiere este artículo, estarán obligados a presentar anualmente, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes, de conformidad con lo que determinen las leyes aplicables.</b> Son inatacables las declaraciones y resoluciones que de conformidad con lo dispuesto en este Título, expidan la Legislatura o el Tribunal Superior de Justicia del Estado.</p> <p><b>Artículo 150.</b> La Legislatura del Estado, <b>de acuerdo con la Constitución</b></p>

<p>Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y las demás normas tendientes a sancionar a quienes teniendo este carácter incurran en responsabilidades, de conformidad con las siguientes prevenciones:</p> <p><b>I. a II. ...</b></p> <p><b>III.</b> Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.</p> <p>Se oirá en defensa al inculpado, y los procedimientos para la aplicación de las sanciones se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces sanciones de la misma naturaleza por una sola conducta.</p> <p>...</p> <p>Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Legislatura respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.</p>	<p>Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, expedirá la Ley que establezca las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas administrativas, de conformidad a las siguientes prevenciones:</p> <p><b>I. a II. ...</b></p> <p><b>III.</b> Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces sanciones de la misma naturaleza por una sola conducta.</p> <p>...</p> <p>Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Legislatura respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.</p> <p>Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control. La ley, establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control. Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control, con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas que son distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así como presentar denuncias por</p>
--	---

	<p>hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La Auditoría Superior del Estado y el órgano interno de control del Poder Ejecutivo del Estado, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO SEGUNDO                  DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO</b></p> <p><b>Artículo 151.</b> Podrán ser sujetos de juicio político, los Diputados a la Legislatura del Estado; los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Electoral del Estado, <u>del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; el Procurador General de Justicia del Estado;</u> el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas; los Jueces del fuero común; los miembros de los Ayuntamientos; los Secretarios de despacho del Ejecutivo; los miembros de los organismos a los que esta Constitución les otorgue autonomía y los directores generales, o sus equivalentes, de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones similares a éstas y fideicomisos públicos.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO SEGUNDO                  DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO</b></p> <p><b>Artículo 151.</b> Podrán ser sujetos de juicio político, los Diputados a la Legislatura del Estado; los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Electoral del Estado, <u>del Tribunal de Justicia Administrativa; el Fiscal General de Justicia del Estado;</u> el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas; los Jueces del fuero común; los miembros de los Ayuntamientos; los Secretarios de despacho del Ejecutivo; los miembros de los organismos a los que esta Constitución les otorgue autonomía y los directores generales, o sus equivalentes, de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones similares a éstas y fideicomisos públicos.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO CUARTO                  DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS</b></p> <p><b>Artículo 154.</b> <u>Tratándose de responsabilidades administrativas de los servidores públicos,</u> la ley de la materia determinará sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, podrán consistir en suspensión, destitución o inhabilitación, así como en sanciones económicas que deberán establecerse de acuerdo con los beneficios obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO CUARTO                  DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS</b></p> <p><b>Artículo 154.</b> <u>Tratándose de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de particulares vinculados con faltas administrativas,</u> la ley de la materia determinará sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, podrán consistir en suspensión, destitución o inhabilitación, así como en sanciones económicas que deberán establecerse de acuerdo con los beneficios</p>

causados por sus actos u omisiones, pero no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.	obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones.
<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO QUINTO DE LA PRESCRIPCIÓN</b></p> <p><b>Artículo 155. ...</b>                  ...                  La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencias de los actos u omisiones <u>a que hace referencia la fracción III del artículo 150.</u> <u>Quando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años.</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO QUINTO DE LA PRESCRIPCIÓN</b></p> <p><b>Artículo 155. ...</b>                  ...                  La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencias de los actos u omisiones. <b>Quando dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años.</b></p>

### 3.- MATERIAS RELEVANTES ABORDADAS EN LAS REFORMAS DE LAS CONSTITUCIONES LOCALES.

En los siguientes cuadros se presentan algunas de las materias más relevantes y recurrentes, abordadas en las reformas de las Constituciones locales durante el periodo aproximado de un año, de noviembre de 2016 a noviembre de 2017:

#### 3.1 Temas más recurrentes abordados por las Reformas constitucionales a nivel local.

<b>EQUIDAD DE GENERO</b>	Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán.
<b>DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>	Morelos, Estado de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas.
<b>RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>	Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
<b>SISTEMA ANTICORRUPCIÓN</b>	Morelos, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
<b>JUSTICIA ADMINISTRATIVA</b>	Morelos, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
<b>DECLARACIÓN PATRIMONIAL, FISCAL Y DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>	Estado de México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.

#### 3.2 Temas destacados abordados por algunas Constituciones locales.

De manera particular en las Constituciones de los Estados de se incorporaron preceptos Constitucionales, que destacan por su contenido, los cuales se refieren a los diversos temas siguientes:

<b>CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN</b>
Derecho de toda persona a la movilidad y a gozar de ciudades sustentables que garanticen una adecuada calidad de vida y acceder a un transporte público de calidad, digno y eficiente. El Estado proveerá lo necesario para garantizar dicho acceso. (Art. 3)
<b>CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA</b>
Determinación de integrar una Regiduría de Derechos Humanos en cada

Ayuntamiento encargada de la protección, defensa, promoción, estudio, divulgación y vigilancia de los derechos humanos. (Artículo 113 fracción IX)

**CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE PUEBLA**

Prohibición de la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas. (Art.123)

**CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA**

Deber del Estado y de los Municipios de garantizar el acceso a internet gratuito inalámbrico de banda ancha, en los edificios e instalaciones de los diversos poderes del Estado y de las dependencias y entidades de su administración, así como en los lugares públicos que para el efecto se determinen. (Art. 4 Bis, frac. X)

Deber del Estado de garantizar que las escuelas públicas a su cargo cuenten con instalaciones y equipos para el acceso de los educandos a internet y a las tecnologías de la información y de la comunicación. (Art.91)

Conceptualización de la paridad de género horizontal como la obligación de partidos políticos o coaliciones, en las candidaturas a presidente municipales, de salvaguardar la postulación de 50% de candidatas y 50% de candidatos. Artículo 150 – A)

## FUENTES DE INFORMACIÓN

Página de internet del Congreso del Estado de Morelos:  
<http://marcojuridico.morelos.gob.mx/>

Página de internet del Congreso del Estado de México:  
<http://www.cddiputados.gob.mx/>

Página de internet del Congreso del Estado de Nayarit:  
<http://www.congresonayarit.mx/>

Página de internet del Congreso del Estado de Nuevo León:  
<http://www.hcnl.gob.mx/>

Página de internet del Congreso del Estado de Oaxaca:  
<http://www.congresooaxaca.gob.mx/>

Página de internet del Congreso del Estado de Puebla:  
<http://www.congresopuebla.gob.mx/>

Página de internet del Congreso del Estado de Querétaro:  
<http://legislaturaqueretaro.gob.mx/>

Página de internet del Congreso del Estado de Quintana Roo:  
<http://www.congresoqroo.gob.mx/>

Página de internet del Congreso del Estado de San Luis Potosí:  
<http://congresosanluis.gob.mx/>

Página de internet del Congreso del Estado de Sinaloa:  
<http://www.congresosinaloa.gob.mx/>

Página de internet del Congreso del Estado de Sonora:  
<http://www.congresoson.gob.mx/>

Página de internet del Congreso del Estado de Tabasco:  
<http://www.congresotabasco.gob.mx/>

Página de internet del Congreso del Estado de Tamaulipas:  
<http://www.congresotamaulipas.gob.mx/>

Página de internet del Congreso del Estado de Veracruz:  
<http://www.legisver.gob.mx/>

Página de internet del Congreso del Estado de Zacatecas:  
<http://www.congresozac.gob.mx/>





CÁMARA DE DIPUTADOS  
LXIII LEGISLATURA

